

NOTICIA DE GUIPÚZCOA.



NOTICIA
DE LAS
Cosas memorables
DE
GUIPÚZCOA
Ó

*Descripción de la provincia y de sus habitantes:
exposición de las instituciones, fueros, privilegios, orde-
nanzas y leyes: reseña del Gobierno civil,
eclesiástico y militar: idea de la admi-
nistración de justicia, etc.*

POR
D. Pablo de Gorosábel.

TOMO V.

TOLOSA:
Imprenta, Librería y Encuadernación de E. López,

SOLANA 8 Y CORREO 7.—1900.

ES PROPIEDAD.



R. 148953



LIBRO VIII.

De las cosas de guerra y marina.



CAPÍTULO I.

DEL ESTADO MILITAR EN GUIPÚZCOA.

Sección I.

Del Capitán general.



No se tiene noticia de la existencia de autoridad alguna militar en Guipúzcoa hasta el advenimiento de los Reyes Católicos; y así, su creación debe considerarse de época posterior. El historiador Esteban de Garibay, hablando de la entrada del ejército francés en esta provincia el año de 1476, da á entender que no había entonces semejante funcionario militar; en cuya confirmación añade que la reina envió por Capitán general de la misma á D. Diego López de Sarmiento, conde de Salinas, y su merino mayor. Pero como los dos gobiernos castellano y francés quedaron indispuestos á causa de estos mismos sucesos, lo natural es

que se conservara en esta frontera un jefe militar que la vigilara, á lo menos en las ocasiones de más peligro. Así es que el propio historiador, refiriendo las cosas del año de 1496, dice «que D. Juan de »Gamboa, Capitán general de Guipúzcoa en las fronteras de Francia y Navarra, y Alcalde de la villa de »Fuenterrabía, habíase recogido en su vejez á aquella »provincia, patria suya.» Dice enseguida que fué enterrado en el cementerio de la villa de Irún, en cuya sepultura de piedra se le puso un letrero que expresaba las mismas circunstancias. También se lee en Garibay que en 1512 era Capitán general de esta provincia y Alcaide de Fuenterrabía Diego López de Ayala, Señor de Cebolla, el que hizo el cabo de su nombre y apellido á la parte de Francia. Su título original, que se conserva en el archivo de mi cargo, dice así: «El rey.—Concejos, Juntas y procuradores »de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa. »Por la necesidad que hay á la guarda y conservación de esa provincia y frontera de un Capitán y »persona que entienda en las cosas de la guerra y »defensa de esa dicha provincia; y conociendo la habilidad y pericia de Diego López de Ayala, nuestro »aposentador mayor, yo le he mandado que resida y »esté en esa dicha provincia por nuestro Capitán. Por »ende, yo vos mando que le hagáis y tengáis por »nuestro Capitán de esa dicha provincia y frontera, y »hagáis y cumpláis en lo tocante á la dicha Capitania todo lo que de mi parte vos dijere y mandare, »como si yo mismo vos lo mandare, é para ello y »para todas las otras cosas el dicho cargo de Capitán »anexas y dependientes le doy poder cumplido: é los »unos, nin los otros non fagades ende al. Fecha en »Logroño á 5 de Noviembre de 1512 años.» Este título se presentó á las Juntas generales de Rentería del mismo año, las cuales acordaron obedecer y cumplir su contenido, según se había hecho antes.

La existencia de los Capitanes generales de esta provincia y su frontera aparece desde esta época en adelante de una manera permanente. Así es que de la copia de la acta de la Junta general de Guetaria de Noviembre de 1517 aparece que á la sazón tenía dicho mando militar D. Sancho Martínez de Leiva, y en 1522 D. Beltrán de la Cueva. Igualmente se descubre que en 1542 lo obtenía D. Sancho de Leiva; que D. Diego de Carvajal fué electo para su desempeño en 1551, y que á consecuencia de su fallecimiento le reemplazó en el cargo en 1563 D. Juan de Acuña. La residencia habitual de estos jefes era en la entonces villa de Puenteerrabía, como plaza de armas fronteriza, y reputada por de más importancia entre las de la provincia, en cuyo concepto había siempre en ella alguna tropa de guarnición, aunque poco numerosa, y los demás dependientes necesarios para el servicio militar. El cargo de Capitán general de Guipúzcoa había sido en tiempo de los mismos jefes independiente ó de por sí. Pero D. Vespasiano Gonzaga Colona, duque de Trayeto, virrey de Navarra, obtuvo en 1572 además el título de Capitán general de Guipúzcoa, y otro tanto sucedió respecto de D. Sancho de Leiva en 1575; por consiguiente, en tiempo de estos dos jefes la Capitanía general de esta provincia dependió del virreynato de aquel reino: D. García de Arce fué electo para solo aquel cargo en 1579; D. Hernando Hurtado de Mendoza en 1598; D. Juan Velázquez en 1590. Estos tres generales desempeñaron por consiguiente la Capitanía general de esta provincia con total independencia del virrey de Navarra, como lo había sido en el origen de su creación, teniendo su residencia habitual en la entonces villa de San Sebastián.

Velázquez solicitó en 1598 al Rey le exonerase de la continuación en el servicio de la Capitanía general de la provincia. Tuvo esta noticia de ello,

como también de que Su Majestad trataba de agregar esta autoridad al virreynato de Navarra, quedando en Fuenterrabía un teniente de Capitán general, en cuyo concepto se iba á expedir el correspondiente despacho á favor de D. Juan de Cardona. A su consecuencia, se reunió Junta particular en 26 de Mayo del mismo año en el sobrado contiguo á la Iglesia parroquial de San Bartolomé de la tierra de Vidania. Tratóse allí de este asunto, cuya resolución se calificó generalmente de importancia; pero á causa de la diversidad de pareceres sobre el acuerdo que debía tomarse, no se llegó á adoptar resolución alguna. Cardona, que ya de antes era virrey de Navarra, reunió por fin el título de Capitán general de Guipúzcoa en el mes de Julio del mismo año, con recomendación de que residiese en esta provincia todo el tiempo que pudiese excusar su permanencia en aquel reino. Las Juntas celebradas en la villa de Azpeitia por el mes de Noviembre del año siguiente, noticiosas de que dicho general había pretendido su traslación á otro punto, acordaron representar de nuevo al Rey los inconvenientes que resultaban al país de la reunión de aquellos dos cargos en una persona. No se halla, sin embargo, que la provincia hubiese conseguido sus deseos, y sí, al contrario, que la Capitanía general de ella continuó en los años inmediatos agregada al virreynato de Navarra. Consta también que en 1618, á consecuencia de haber sido promovido D. Alonso de Idiáquez, duque de Ciudad-Real, que obtenía ambos conceptos, al mando de los estados de Milán, la provincia insistió en su pretensión de que se nombrase Capitán general separado para esta provincia. A su consecuencia, en 17 de Junio del mismo contestó el Rey á la provincia que tenía proveídos aquellos cargos en el conde de Aguilar, y no podía tener lugar dicha solicitud; pero que en otra ocasión mandaría se tuviese cuenta de lo que

había representado. Se halla, en efecto, que otro duque de Ciudad-Real, con motivo de la guerra con Francia, fué nombrado en 1635 Capitán general de esta provincia independiente del virrey de Navarra. En la misma forma lo fueron el marqués de San Damián en 1636, D. Juan Chacón Ponce de León en 1637, el marqués de los Vélez en 1639, etc. Pero volvieron á reunirse ambos cargos en 1644 en el conde de Oropesa, que los desempeñó por tiempo de dos años, siendo entonces elegido para solo lo de Guipúzcoa D. Juan de Garibay. Este general se estableció en San Sebastián por su conveniencia, como lo hicieron sus sucesores, cuyos nombres omito por evitar la prolijidad, y no considerar necesario.

Tal es el estado en que se conservó la Capitanía general de esta provincia durante los tres siglos últimos. Según se ve de una comunicación de quien la desempeñaba de 7 de Enero de 1800, el Rey tuvo por conveniente suprimir este empleo, sustituyéndolo con el de Comandante general con residencia en la plaza de San Sebastián, no se expresa si con dependencia ó no del virreinato del reino de Navarra. Así se siguió hasta la época de la guerra de la Independencia, durante la cual los generales franceses dominaron el país con su gobierno militar propio de aquellas circunstancias. Expulsado este enemigo por los ejércitos aliados en 1813, Su Majestad se sirvió conferir el siguiente año á D. Juan Carlos de Areizaga el cargo de Capitán general de esta provincia, al mismo tiempo que el mando en jefe del ejército de observación estacionado en esta provincia. Su residencia permanente ó habitual fué en la villa de Tolosa, aun después de disuelto dicho ejército, teuiendo bajo sus órdenes un Gobernador militar en la plaza de San Sebastián. Habiendo fallecido Areizaga en aquella villa por el mes de Marzo de 1820, no tardó en sustituirle en el mando de la Capitanía general el

Teniente general de los ejércitos D. Gabriel de Mendizábal, quien se estableció en aquella ciudad. Las Cortes decretaron después en 27 de Enero de 1822 la división del territorio español en distritos militares, y siendo el 5.^o compuesto de Navarra y las tres provincias vascongadas, su capital fué Vitoria, donde el Capitán general fijó la residencia.

Abolió el régimen constitucional en 1823 á consecuencia de la invasión francesa, la regencia provisional del reino confirió al Mariscal de Campo D. Vicente de Quesada el título y empleo de Capitán general de las tres provincias vascongadas. Otro tanto sucedió respecto del brigadier D. Manuel Llauder, que le reemplazó en el mismo año por su salida al ejército. Alava y Vizcaya se opusieron á este último jefe semejante dictado, cuyo uso consideraban era una violación de sus respectivos fueros, buenos usos y costumbres, que no admitían en sus territorios autoridad alguna superior militar, ni había en ellos plaza de armas. Representaron por lo mismo á aquella regencia contra semejante medida, sin que por eso hubiesen conseguido dejarla sin efecto, por no ver en ella ningún contrafuero. Sin embargo, aparece que el mismo general D. José San Juan, que en concepto de Ministro de la Guerra había firmado esta resolución denegatoria, vino á principios de 1824 con el título de Capitán general de Guipúzcoa. Así ocurrió también con D. Pedro de Grimarest, D. Vicente de Quesada y D. Blas Tournas, que sucedieron en la Capitanía general de la misma provincia. Las circunstancias políticas ocurridas en el vecino reino, agravadas con la invasión que hicieron los emigrados de 1830 en territorio español, fueron motivos para que la Capitanía general de Guipúzcoa se declarase dependiente del virreinato de Navarra con el fin de centralizar el mando de las fuerzas. Así se conservó hasta el año de 1833, en que habiéndose separado ambos car-

gos, se restableció la antigua Capitanía general peculiar de esta provincia. Durante la guerra civil el mando superior de las tropas militares en estas provincias y Navarra perteneció á los generales en jefe del ejército; y suspendida aquella Capitanía general, solamente se conservó en la plaza de San Sebastián un Comandante general. Pasadas estas circunstancias, por Real orden de 4 de Noviembre de 1840 se restableció la antigua autoridad militar de Guipúzcoa con extensión del mando de Alava y Vizcaya, y por otra de 10 de Diciembre del mismo año se revolió que en adelante se denominase Capitanía general de las provincias vascongadas. Conforme á estas disposiciones, este jefe militar residió en la ciudad de San Sebastián, de donde se trasladó en 1843 á la de Vitoria, capital del XII distrito militar nuevamente creado. Ya se sabe por último que en virtud del Real decreto de 2 de Julio de 1866 los territorios de las Capitanías generales de Navarra y las provincias vascongadas forman en el día un solo distrito militar, que es el último estado de cosas.

Es constante que la autoridad del Capitán general de esta provincia, conforme á los fines de su institución, era puramente militar, reducida al cuidado de las plazas fuertes y al mando de la tropa de la guarnición de las mismas. Ninguna intervención tenían, por consiguiente, estos jefes militares en el gobierno provincial ni municipal, así como tampoco en particular respecto de las personas de los naturales. Por eso declara una Real cédula de 31 de Diciembre de 1648 que para los militares había en esta provincia un Capitán general nombrado por Su Majestad, «quien gobernaba á la gente de los presidios »y lo tocante á ellos, sin que se les hubiese dado más »mano, ni permitido otra disposición.» Como se verá más adelante, ellos ni en tiempo de guerra tenían autoridad alguna de mando sobre los guipuzcoanos

armados para la defensa interior del país y su frontera. En confirmación de este límite, puesto al ejercicio de sus funciones, se hallan diferentes Reales cédulas y provisiones comunicadas á la provincia, cuya indicación no estará de más para la futura memoria de las cosas y hechos. Por una de 29 de Septiembre de 1544 se mandó el expresado jefe militar que no se embarazase al Alcalde de Sacas la exacción de los derechos acostumbrados de su oficio; pero todavía con más generalidad se le prescribió por otra de 19 de Julio de 1553 que no se entrometiese en cosa alguna tocante á dicha alcaldía. Consta también que por otras dos Reales cédulas de 10 de Junio de 1558 y 4 de Marzo de 1559 se le mandó no impidiese al Alcalde de Sacas tener su gabarra en el paso de Beobia, sea en tiempo de paz ó de guerra. Se halla igualmente que en 1560 el Capitán general empezó á proceder contra uno de los Alcaldes de San Sebastián, á quien llevó preso á Fuenterrabía; pero que por Real provisión y sobrecarta librada por el Consejo en 19 de Septiembre del mismo año, se le obligó á sobreseer en la causa poniendo á aquel en libertad. Por otra de 9 de Julio de 1581 se le mandó que no impidiese á los merinos del Corregidor el cumplimiento de los despachos que se le cometiesen en la administración de Justicia. Se ve por fin que por otra de 16 de los propios mes y año se le mandó remitir al Corregidor la causa que había principiado á formar contra dos naturales paisanos que tenía presos en Fuenterrabía por haber quitado á unos militares un hombre á quien habían arrestado.

Pero, andando el tiempo, la autoridad de los Capitanes generales de esta provincia se fué extendiendo algún tanto. Así es que se halla que por una Real cédula se autorizó en 1595 á D. Juan Velázquez para reconocer los buques que entrasen en los puertos de ella, y ver si traían bastimentos para el surtido de

los naturales, ó mercaderías prohibidas. Se ve también que en 1673 se le encargó el cuidado de los extranjeros, determinando quiénes de ellos podían residir, ó debían salir de San Sebastián, asunto que hasta entonces había sido de la exclusiva atribución de los Alcaldes. Consta igualmente que en 1676 se confirió á D. Luis Ferrer, que desempeñaba aquel cargo, la subdelegación del contrabando de la frontera, con facultad de poner veedores en esta y en San Sebastián; comisión que desempeñaron sin oposición, no solo el mismo jefe militar, sino también sus sucesores en la Capitanía general, como resulta de varios papeles. Aparece del propio modo que en 1715 el príncipe de Camproflorido, Capitán general de esta provincia, obtuvo la comisión de percibir los arbitrios destinados á la limpia del puerto de Pasajes, y en 1717 la de establecer en su frontera y costa las aduanas, cuyo gobierno superior ejerció. No es menos cierto que en virtud de la Real orden de 13 de Marzo de 1761 se delegó por el gobierno en los Capitanes generales de Guipúzcoa la expedición de pasaportes para la extracción de dinero á Francia en pago de bastimentos introducidos. En 1764 se le encargó también la matrícula de los extranjeros, y otra Real orden de 13 de Septiembre de 1791 autorizó al que entonces tenía el cargo, para entender y disponer de los asuntos pertenecientes á los refugiados franceses en el distrito de su mando, con quien se hubiesen de entender las providencias procedentes de la Real cédula de 20 de Julio sobre extranjeros domiciliados y transeuntes. A los mismos se confirió así bien la subdelegación de correos y postas de su territorio en cumplimiento de la Real cédula de 21 de Febrero de 1777. Por Real orden de 20 de Septiembre de 1796 se declaró igualmente que el Capitán general de Guipúzcoa fuese en adelante Juez del contrabando; y en virtud de otra de 18 de Agosto de

1814 se confirmó este concepto, dándosele además el título de subdelegado general de rentas de la misma provincia.

El ejercicio de la autoridad de los Capitanes generales de Guipúzcoa en la parte judicial produjo en lo antiguo diversos conflictos de jurisdicción con los Corregidores y Alcaldes ordinarios de la misma. A su consecuencia, en 10 de Mayo de 1544 se dirigió á D. Sancho de Leira una Real provisión librada por el Consejo, por la cual, después de manifestar su Alteza hallarse informado de las diferencias que ocurrían sobre el conocimiento de causas, se trató de arreglar esta materia. Tal es el objeto de la carta-partida, que forma el capítulo 17, título 3.º de la Recopilación foral, llamada impropriamente concordia, á lo menos en el sentido de que sea un convenio celebrado entre la autoridad militar y la judicial ordinaria, cuyas disposiciones se reducen á lo siguiente: 1.º El Capitán general, y en su ausencia su lugarteniente, conocerá y determinará las causas criminales que se ofrecieren entre la gente de guerra que residiere en la provincia, unos con otros. 2.º Respecto de las causas criminales que acaeciesen entre la gente de guerra y los habitantes de San Sebastián y Fuenterrabia, tendrá lugar la prevención entre la citada autoridad militar y la judicial ordinaria. 3.º Si alguna de estas causas así prevenidas fuese por delito grave, de manera que el reo mereciese pena de muerte ó mutilación de miembro, el que instruya el proceso no la sentenciará por sí solo, sino juntamente con el otro, y, en caso de discordia, se remitirá á Su Majestad. 4.º En el repartimiento de las presas y calvalgadas que se hicieren por mar ó por tierra con sola la gente de guerra, entienda exclusivamente el Capitán general, y lo mismo en las que se hiciesen de orden suya por militares, aunque vaya con estos gente de tierra. 5.º A la inversa, en las presas que

se hiciesen por gente de la tierra, aunque haya mezcla de la de guerra, conocerá la jurisdicción ordinaria. Por haberse suscitado algunas dudas sobre la inteligencia de las precedentes disposiciones, se consultó el asunto con Su Majestad, y por su resultado se libró en 15 de Agosto de 1568 la competente Real cédula con las dos declaraciones siguientes: 1.ª En las causas criminales que acaezcan entre militares y paisanos, si las partes se agraviaren de las sentencias, las apelaciones vayan al Consejo de guerra, conociendo de aquellas la autoridad militar, y á la Audiencia del territorio, si las hubiese prevenido la jurisdicción ordinaria. 2.ª Siendo graves las causas criminales, de manera que proceda pena de muerte ó mutilación de miembro, en los casos de haber lugar á prevención, según la disposición del número segundo, ambas autoridades se acompañen respectivamente para dar sentencia, y las apelaciones vengán al Tribunal superior respectivo. No obstante estas resoluciones, ocurrieron nuevas diferencias entre el Capitán Pedro Navarro, lugarteniente del Capitán general, y los alcaldes de San Sebastián, contra los cuales procedió criminalmente. Recurrióse, pues, de nuevo á Su Majestad, y á su virtud se despachó una Real provisión en 25 de Agosto de 1584, reducida á mandar el exacto cumplimiento de las dos precedentemente extractadas, bajo la pena de cincuenta mil maravedís al que las quebrantase.

SECCIÓN II.

De los tránsitos de tropas, bagajes y suministros.

El tránsito de tropas se ha hecho en esta provincia desde lo antiguo por medio de comisarios nombrados en las Juntas generales, ya añales, ya fuesen semestrales. De presumir es que la asistencia de semejantes sujetos á la conducción de la gente de guerra

no fuese en su origen más que una demostración de obsequio y bienvenida, asistencia cuya continuación pareció sin duda más adelante conveniente para evitar las extorsiones que tan comunes son en la soldadesca, sobre todo en sus marchas. Tal nombramiento de comisarios de tránsito, así que el uso que los elegidos hacían de él, parece que se fundaba en la mera costumbre, sin ninguna sanción de la autoridad real. Ofreciéronse por eso con el tiempo algunas diferencias sobre el carácter y representación de los mismos, y para evitarlas en lo sucesivo, la provincia recurrió al gobierno del Rey, solicitando la correspondiente Real cédula de aprobación y legitimación de aquella antigua costumbre, como en efecto se verificó por la despachada en Madrid á 29 de Agosto de 1637. «Por cuanto, dice, por parte de la provincia »de Guipúzcoa se me ha hecho relación que en sus »Juntas y diputaciones han nombrado de tiempo in- »memorial á esta parte comisarios entre sus hijos, »para conducir y alojar la gente de guerra que pasa »á sus presidios ó embarcaderos, todo el tiempo que »marcha por su distrito; y por que lo tengan así en- »tendido los comisarios que fueren de otras partes, »y no hagan novedad, me ha suplicado le haga mer- »ced de mandarle despachar mi Real cédula en de- »claración de ello. Y habiéndose visto en mi Consejo »de la guerra, con lo que se ofreció al marqués de »Castrofuerte del dicho mi Consejo, veedor y Comi- »sario general de las guardias é infantería, parecido »despachar la presente: por lo cual mando á los mis »Comisarios de infantería que fueren guiando las »compañías que llegaren á la raya de la dicha pro- »vincia, entregue cada uno los que llevare al Comi- »sario que fuere nombrado por ésta, el cual la ha de »recibir á la raya, pues con esto se excusarán los in- »convenientes que de lo contrario podrían resultar. »Que tal es mi voluntad, y que cualquier escribanq

»haga notoria y notifique la presente en los casos y
»en las partes que convenga, pena de cincuenta mil
»maravedís para gastos de guerra.»

Consta que en su principio los Comisarios de tránsito de las tropas eran cuatro, nombrados en otros tantos puntos, que eran: Mondragón, Segura, Tolosa y Hernani. Escogíase por lo regular para estos cargos caballeros de distinción de la provincia, cuyas funciones consistían en guiar y acompañar á los batallones desde la raya hasta el punto de su destino, ó vice-versa, auxiliándolos en sus marchas con cuanto pudiesen, haciendo preparar los alojamientos, bagajes, etc. Su ejercicio se consideraba como un cargo honorífico de república de que nadie podía excusarse, en cuya consideración era retribuido por la provincia con el salario de ochocientos maravedís por cada día de ocupación. Durante el siglo VIII, con motivo de ser más frecuentes los tránsitos de tropas, dichos comisarios se fueron aumentando, nombrándolos para los citados cuatro puntos, y además en Salinas, Escoriaza, Vergara, Villarreal ó Zumárraga, Villafranca y Oyarzun. Las Juntas celebradas en la villa de Azpeitia el año de 1779, trataron de reducir estos funcionarios hasta el número de seis, eligiéndolos de entre los vecinos de Mondragón, Vergara, Villafranca, Tolosa, Hernani y Oyarzun; pero por causa de la discordancia de los individuos de la Comisión de aquel Congreso entre sí, quedó sin resolverse por entonces este punto, como sucedió aún más adelante. Siguióse, pues, haciéndose el nombramiento de los Comisarios de tránsito en los mismos puntos que quedan citados, menos en la villa de Segura, donde no había ya tránsito de tropas desde la construcción de la nueva carretera general. Así las cosas, las Juntas del año de 1814 decretaron que ningún Comisario de tránsito saliese al desempeño de su comisión sin que recibiese al efecto la orden ú oficio de la Di-

putación, porque la escasez de medios de las cajas de la provincia no le permitían satisfacer sus salarios. Desde entonces fué decayendo y quedando en completo desuso el ejercicio de semejante ministerio militar, considerado por inútil. Esto no obstante, su nombramiento continúa haciéndose aún en el día en las Juntas generales anuales, después del de los individuos de la nueva Diputación, en observancia de la antigua práctica y la citada disposición inserta en la recopilación foral.

Uno de los servicios que afectan al país en beneficio de las tropas que transitan por su territorio es el de su asistencia con bagajes, de cuyo origen é introducción en Guipúzcoa no se encuentran noticias. Es indudable, sin embargo, que los militares en sus relevos de las plazas de la misma provincia, así que en sus venidas á la frontera y puertos de mar con motivo de las guerras extranjeras, y en particular con Francia, necesitarían de carros y caballerías para la conducción de sus equipajes estropeados, etc. Nada, por consiguiente, más natural que el que para esto se valiesen de la ayuda de los mismos pueblos del tránsito. Con respecto á los tiempos más modernos se halla que en el año de 1707, con motivo de la conducción de prisioneros de la batalla de Almansa á Francia, el Comisario á cuyo cargo iban, pretendió se hiciese este servicio á costa de la provincia ó de sus pueblos. La Diputación se opuso á semejante exigencia, fundándose en el contexto de sus fueros, según los cuales los guipuzcoanos se hallan exentos de los tributos y gabelas que pesan en los reinos de Castilla. De aquí nació el que en el reglamento hecho en 1719 sobre alojamientos, del cual hablaré en la sección inmediata, se tratase también el punto del servicio de bagajes, estableciendo la cuota que los militares debían satisfacer por cada carro ó caballería de que hiciesen uso, según la respectiva distancia, en

la forma siguiente: 1.º Los carros, bueyes y caballerías necesarias para la conducción del equipaje de cada cuerpo se pagarán antes de principiar la marcha. 2.º Por cada caballería ó bagaje mayor se pagará de un tránsito á otro tres reales de plata por cada día, y al mozo ó arriero otro tanto. 3.º Si se alquilaren muchas caballerías, se encomendarán tres á un mozo, de modo que sin atender á este se computará cada caballería en cuatro reales de plata ó seis de vellón por cada día á toda costa. 4.º Cada yunta de bueyes con su bueyerizo se pagará de Irún á Hernani ó San Sebastián doce reales vellón; de esta ciudad á Tolosa, ó al contrario, igual suma; de Hernani á Tolosa, nueve; de esta villa á Villafranca, siete y medio; de esta á Villarreal, igual cuota; de esta á Mondragón, doce; de esta á Vitoria, quince; á este mismo respecto en las demás veredas. Los jefes de las fuerzas podrán poner de acuerdo con los alcaldes, sargentos ú otros oficiales para la distribución de los bagajes y á fin de que cuiden del pago de estos antes de principiar la marcha.

Tal es el método que se siguió después en la prestación de este servicio, menos en la época de la guerra de la Independencia en que se reputó como carga local. Era esta tan pesada con motivo de la bajada de los ejércitos aliados, que en las Juntas de Deva de 1813 se generalizó en toda la provincia, al determinar que el servicio se hiciese por partidos, á cuya cabeza enviasen los pueblos los carros y caballerías que se necesitasen. Consiguiente á este principio, las celebradas en la villa de Guetaria en 1815 decretaron que el servicio de bagajería se pusiese en remate el primer domingo de cada mes en los pueblos que formaban la cabeza del partido del ramo, cuyas ofertas se comunicasen á la Diputación para su aprobación, ó para lo que hubiese lugar. Para cubrir este gasto, se acordó exigir una contribución

mensual sobre la propiedad, industria, yuntas, caballerías y ganado lanar en la proporción en que se señala, y para su percepción se nombró un depositario especial. Las Juntas de Villafranca del mes de Junio de 1823 formaron un reglamento para este servicio, bajo la base de que se rematase este mensualmente en los puntos de etapa de Irúu, Hernani, Tolosa, Villafranca, Villarreal y Mondragón. Su apoyo se estableció á razón de siete reales por legua á los carreteros, tres y medio á cada caballería mayor, y dos y medio á la menor. En las que se celebraron en Azcoitia el año inmediato se modificó este dicho reglamento en cuanto se autorizó á los distritos para nombrar comisionados especiales, que corriesen con la prestación del servicio de la bagajería, con lo que cesaron los remates acostumbrados hasta entonces. Hállase también que las de 1829 y siguientes adoptaron algunas disposiciones sobre las formalidades con que deben presentarse estas cuentas á la Diputación; que las de 1834 decretaron abonar seis reales diarios á cada caballería que esté de retén, y tres por cada legua de ida y vuelta.

Después de la conclusión de la última guerra civil se han dictado también algunas disposiciones sobre el ramo de bagajería. Así es que se ve que las Juntas de Cestona de 1840 acordaron que se hiciese á una misma hora el remate general del servicio para toda la provincia y los parciales en cada distrito, con lo cual se volvió al sistema antiguo. Este acuerdo autorizaba, no obstante, á la Diputación para que adoptase aquel método que le pareciese más ventajoso, siempre que la experiencia demostrase que el establecido no era el mejor, como en efecto sucedió, por lo cual se conservó el sistema de administración por comisionados en cada punto. Por eso se ve que las Juntas de Segura de 1841 declararon que este servicio hubiese de hacerse por toda la hermandad

mancomunadamente; para cuyo pago se repartiese su importe por el de las juntas y caballerías que tuviese cada pueblo, según se había acostumbrado anteriormente. Finalmente, las de Deva de 1857 decretaron: 1.º Que la Diputación solicitase de la autoridad superior militar una nueva demarcación de etapas, de modo que estas fuesen en los pueblos que contasen con más recursos para suministrar bagajes. 2.º Que designados los pueblos de etapa, se diese la conveniente publicidad, para que nadie pudiese alegar ignorancia. 3.º Que la Diputación señalase, abrazando las reglas que creyese conveniente, los pueblos comarcanos que deberán concurrir á cada uno de los puntos de etapa para formar la dotación de bagajería. 4.º Que formase así mismo estados del número de bagajes que cada localidad podrá suministrar en sus clases distintas, elevándolos á conocimiento de la autoridad superior militar. 5.º Que la Diputación exhortase á la autoridad militar con el fin de que los jefes de cada fuerza en la marcha no abusen del bagajero que ha rematado su viaje, etc.

El servicio de utensilios, que comprende el suministro de luz, paja, carbón y leña para las guardias, cuarteles y ranchos, no se encuentra establecido en esta provincia en tiempos antiguos. Por primera vez se hace mención de este particular en el reglamento de tránsitos del año de 1719 antes explicado, cuyos capítulos disponen que la provincia haya de suministrar la luz para los cuarteles y guardias de prevención, lumbre para estas mismas y para cocer las ollas de los ranchos y guisar las comidas. Sin embargo, se ve que las Juntas de Cestona de 1795 se limitaron á recomendar y á coadyuvar las gestiones que hicieron los pueblos al intendente militar en reclamación del importe de tales suministros hechos durante la guerra anterior. Con esto dieron á entender aquellas Juntas que estos no eran de cuenta de

la provincia, sino más bien de la Real Hacienda. Las celebradas en Guetaria en 1815 reconocieron que este servicio era carga provincial, al decretar que se encomendase á los pueblos, y que estos hiciesen sus liquidaciones con la Diputación al fin de cada mes bajo el abono de seis maravedís por plaza. Con respecto á los atrasos del mismo ramo acordaron también su pago con los sobrantes de los arbitrios; y en falta de estos, por otros medios que el estado de la caja de la provincia permitiese. Llevándose á efecto el primer extremo, el servicio de los utensilios se hizo en aquella época por medio de remates causados en los puntos de suministros, y su importe fué reconocido y pagado por la provincia con el producto de las oportunas contribuciones. En la actualidad este servicio se hace por contratistas de la Hacienda nacional, así como también el suministro de víveres de las tropas transeuntes, salvo la obligación de los pueblos á anticiparlos á las partidas sueltas que pasan con sus correspondientes pasaportes.

SECCIÓN III.

Del alojamiento y refacción.

Cosa sabida es que en los tiempos antiguos no hubo en esta provincia tropa alguna de estancia fuera de las guarniciones de las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía. Por esta razón tampoco se conocía en los pueblos de ella alojamiento de gente militar ó de guerra, sino es en los tránsitos que hacían, á la venida de Castilla ó Navarra, para aquellos presidios, ó de vuelta de estos á los mismos reinos, en sus relevos. Consta esta verdad de la acta de las Juntas de Hernani de 1596 en que se acordó requerir al Capitán general guardase esta costumbre, y que si

intentaba lo contrario, se reuniese Junta particular. Este extremo no se verificó; de que se deduce que aquel jefe militar daría la oportuna satisfacción á las justas pretensiones de la provincia. Durante el siglo XVII no aparece haberse tomado por esta disposición alguna notable sobre la presente materia; pero como el paso de tropas fué más frecuente á los principios del inmediato con motivo de la guerra de sucesión, las exigencias fueron también mayores. Suscitáronse de aquí diferentes cuestiones, en cuya vista mandó el Consejo de la guerra que en el alojar la tropa se guardase la costumbre observada hasta entonces. Para este efecto hallándose próxima la entrada de las tropas francesas, la Diputación, de acuerdo con el Comisario de ellas D. Pedro Barbier, formó y comunicó á los pueblos en 19 de Enero de 1719 un reglamento, en el cual se fijó la manera en que se habían de alojar, los suministros de víveres y bagajes que se les habían de dar, etc. Después de este tránsito, las exigencias de los militares en los alojamientos no cesaron, y antes se fueron aumentando cada vez. No contentos ellos con el servicio de camas, luz y fuego, tenían la pretensión de que se les asistiese con las cosas necesarias para el condimento de sus comidas, con otras exageraciones, á cuya concesión los pueblos se negaron generalmente.

La provincia representó al Rey los excesos que en la misma época cometían las tropas transeuntes por su territorio, solicitando el oportuno remedio. Con este objeto, así que el de guardar á los pueblos sus fueros y exenciones, Su Majestad comisionó á D. Blas de Loyola, Comandante general de la provincia, para que en unión con D. Pablo Agustín de Aguirre, Diputado general de la misma, dispusiese el oportuno reglamento de alojamientos. En cumplimiento de está Real orden se ajustó y firmó este en San Sebastián á 1.º de Abril de 1719 en los términos que paso

á extractar, además de los puntos concernientes á bagajes y utensilios, de que trataré después: 1.º Cuando hubiese de transitar alguna tropa, el Capitán general, ó la persona á quien tocara, dará aviso á la Diputación con el itinerario y expresión del número de soldados, oficiales y jefes. 2.º Los guardias de Corps serán tratados como criados de la casa Real, con la decencia correspondiente, pagando su alimento y demás cosas necesarias á los precios corrientes: satisfarán también las camas á razón de cuatro cuartos por cada noche, y los oficiales según sus graduaciones, como los de otros cuerpos. 3.º Para todas las demás tropas se dispondrán los salones ó parajes cubiertos y cerrados con gergones, si el tiempo lo permite, y sino, con paja abundante atada y plegada, gergones ó mantas para los sargentos. 4.º Si algunos soldados, por necesidad ó por conveniencia, con licencia de sus jefes, quisiesen dormir en cama, pagarán por ella cuatro cuartos por cada noche. 5.º Los jefes se alojarán separadamente: los capitanes dos con camas separadas: los tenientes y subtenientes cuatro en cada casa y cama separada. 6.º Los jefes pagarán por cada noche veinte y seis cuartos por su cama y la de un criado, luz, fuego, vajilla y servicio de mesa y cocina, y responderá además de lo que se quebrase ó faltare de la vajilla y demás cosas. 7.º Dos capitanes alojados en una casa pagarán por sí y por sus criados treinta y dos cuartos por cada noche, con las mismas obligaciones que los jefes: igual cuota los cuatro tenientes ó subtenientes, si tuviesen criados, y sino, veinte y seis cuartos. 8.º En los tránsitos se adelantará siempre algún oficial, para que se tengan dispuestas las boletas de los alojamientos para la llegada de las tropas. 9.º Todas las noches se formará un cuerpo de guardia en el paraje más acomodado del pueblo, para ocurrir á los desórdenes que puedan ofrecerse, con una cama en paraje cercano para el

oficial que la mande. 10.º Los alcaldes dispondrán que á los sargentos ó mariscales de Logis se entregue con cuenta la vajilla necesaria para guisar y servirse los soldados en su sustento, con calidad de devolución y abono de lo que se quebrare ó faltare. 11.º En las casas donde se alojaren oficiales se procurará que haya caballerizas y prevención de cebada y paja; aquella al precio corriente, y esta al cómputo de siete cuartos por cada media arroba. 12.º La carne pan, vino, sidra y demás mantenimientos y cosas necesarias deberán comprarse por los oficiales y soldados, disponiendo las autoridades locales lo conveniente para que haya abundancia de ellas. 13.º Si para el cumplimiento de cuanto va expresado necesitasen las justicias del tránsito valerse de las comarcas, especialmente para el surtido de víveres y bagajes, pedirán su asistencia como en cosa del real servicio. 14.º Los oficiales, destacamentos pequeños ó soldados sueltos que transitan con los competentes pasaportes, deberán presentarlos á las justicias de los pueblos donde llegaren, para que los alojen. 15.º Los jefes de las fuerzas que llegaren á los pueblos, de acuerdo con los alcaldes, podrán poner en las carnicerías, tabernas, ó en otros sitios públicos de venta de comestibles, sargentos ú otros oficiales, para que los soldados pagasen lo que tomaren. 16.º Todo jefe ú oficial que excediese de este reglamento y diese motivo á quejas ó disgustos en los pueblos, será castigado severamente por el Capitán general, ó por los cabos militares superiores; y si de parte del país hubiese alguna desazón, se dará cuenta al Capitán general ó Comandante, para que estos comuniquen á la Diputación de la provincia, y castiguen recíprocamente á la persona que diese motivo á ello.

Presentado el precedente reglamento á Su Majestad, fué aprobado por Real cédula librada en San Ildefonso á 24 de Junio de 1725, aunque con algunas

notables limitaciones. Tales fueron las contenidas en la cláusula de «sin perjuicio de la obligación» que la ciudad de San Sebastián ú otros pueblos de la provincia tuvieran de concurrir á los alojamientos de las tropas en especie ó en dinero, «exceptuando también lo que mira á que los oficiales de ellas paguen, cuando transitan, el alojamiento, camas, luz y leña, pues el importe de esto á los precios que se han expresado se ha de satisfacer por la provincia, abonándosele en cuenta de lo que debiere contribuir á mi Real hacienda arreglado á los citados precios.» Consiguiente á esta disposición, las Juntas del año de 1726 acordaron pagar los gastos del alojamiento de las tropas del arbitrio del donativo, para cuyo efecto entregasen los pueblos las correspondientes certificaciones del servicio, á fin de que con ellas se pudiese acudir á cobrar lo que se supliese por cuenta de la Real Hacienda. Desde esta época en adelante la provincia abonó á los pueblos el importe de los alojamientos con arreglo á la tarifa establecida en el citado reglamento, que aunque á precios muy módicos, al fin aliviaba en parte este molesto servicio. Pero aun semejante indemnización parcial cesó á consecuencia de la entrada de las numerosas fuerzas del ejército francés en tiempo de la guerra de la Independencia; indemnización que no era posible hacer en medio de las grandes atenciones ocasionadas con estos acontecimientos, que absorbían todos los fondos ordinarios y extraordinarios de la provincia. Transcurridas aquellas circunstancias, no por eso la provincia pudo satisfacer á los pueblos este servicio, por la misma razón de la escasez de recursos. En este estado, las Juntas celebradas en la villa de Segura el año de 1841, con respecto á los destacamentos fijos ó de guarnición, acordaron «que en lo sucesivo sea satisfecho por toda la hermandad en la mitad de su valor, y que este servicio se hi-

«ciera hasta tanto que el gobierno de Su Majestad resolviese lo conveniente sobre la exposición que la Diputación quedaba encargada de elevarle sobre este particular.» No aparece que estas gestiones de la provincia hubieran producido resultado alguno favorable.

El derecho de los militares en activo servicio al alojamiento se halla declarado por la ordenanza del ejército y otras reales disposiciones, y la provincia nunca lo ha desconocido. Sin embargo, se ve que por Real resolución de 25 de Octubre de 1787, ó sea, la ley 27, título 19, libro 6.º de la Novísima Recopilación, se mandó que los oficiales del ejército no gozasen de este beneficio en sus marchas más de tres días. La Real orden de 1.º de Junio de 1835, conforme con aquella disposición, declaró también que los oficiales que se hallan de guarnición permanente en los pueblos solo disfruten tres días de alojamiento. A pesar de estas determinaciones, han ocurrido con frecuencia algunas dudas y cuestiones sobre si tal tropa ha debido considerarse de guarnición permanente ó en concepto de mero destacamento, como muchas veces se ha pretendido por ella por gozar indefinidamente del alojamiento. Esta cuestión, que se suscitó en la villa de Tolosa en 1833 con motivo de la estancia de tres Compañías de tropa, fué resuelta por el virrey de Navarra, Capitán general de Guipúzcoa, en fecha 6 de Marzo del propio año. Al Ayuntamiento de aquella villa, que le había dirigido sobre este particular una reclamación, contestó, que en la misma fecha prevenía al Coronel del cuerpo que hiciese entender á sus oficiales que no tenían derecho al alojamiento más que por tres días, y que, pasados estos, debían hacerse con habitaciones por su cuenta. Parecía que idéntico á este caso el que después en el mismo año ocurrió en la villa de Irún, con respecto á tres oficiales de una compa-

ña de tropa situada en aquel punto. Sin embargo, el nuevo Capitán general de esta provincia desestimó la exención de la carga del alojamiento de aquellos pretendida por el ayuntamiento, apoyado en la resolución dictada en el caso de la villa de Tolosa. Consta que Irún recurrió en su vista al gobierno de Su Majestad contra dicha negativa; pero la resolución de esta reclamación quedó aplazada á consecuencia de los acontecimientos políticos que sobrevinieron por el mes de Octubre del mismo año. Así las cosas, se aclaró esto por punto general en virtud de la Real orden de 6 de Agosto de 1843, según la cual «toda tropa que subsista en cualquier punto menos tiempo que el de un mes debe considerarse como destinada en comisión del servicio y no de guarnición, y por consiguiente, con derecho á alojamiento.» Por lo demás, la legislación general sobre las personas exceptuadas de la obligación de recibir alojamientos es aplicable á esta provincia, y es excusado el que me ocupe aquí de estos pormenores. Lo propio sucede con respecto á las cosas que los patrones están obligados á suministrar á los alojados, consideraciones con que deben tratarse recíprocamente aquellos y estos, etc.

Otra de las prerogativas concedidas á los militares por las ordenanzas del ejército y diferentes Reales disposiciones posteriores es la exención del pago de los impuestos municipales. No así de los derechos reales, ó sea, de los que se hallan destinados á las atenciones generales de la nación, á cuya satisfacción siempre estuvieron obligados. Por tales se han considerado constantemente en Guipúzcoa los arbitrios provinciales conocidos con el nombre de *donativo*, establecidos el año de 1629 para pago del servicio pecuniario hecho á Su Majestad, mediante un convenio solemne celebrado con el comisionado del mismo, bajo ciertas y determinadas condiciones. Allí se ve

que una de estas fué que los militares de las guarniciones de las plazas hubiesen de contribuir con estos derechos como los vecinos de la misma provincia. Los recargos posteriores sobre estos arbitrios autorizados por diferentes reales disposiciones lo fueron implícitamente bajo las condiciones con que se hicieron las primitivas condiciones, y no hay duda que envuelven la obligación á las clases militares de satisfacer semejantes imposiciones, cuyo producto en gran parte se emplea en objetos del servicio nacional. Consiguientemente, la refacción consignada en favor de aquellas, que no es otra cosa que la devolución de los impuestos cobrados de quienes no tienen obligación de pagarlos, solamente pudo tener efecto respecto de los que propiamente son de las atenciones de los pueblos.

En uso de la expresada franquicia, la tropa de las guarniciones de las plazas de esta provincia ha intentado algunas veces establecer taberna y carnicería particular para el surtido de sus individuos y familias. Tal sucedió por primera vez en Fuenterrabía el año de 1717; pero se ve que á consecuencia de una queja dada por la misma ciudad, se mandaron quitar ambos puestos, mediante Real orden de 13 de Julio del propio año. Aquella guarnición volvió á poner en 1731 dos tabernas de vino para el mismo objeto; y en vista de los abusos que se cometían á la sombra de semejante franquicia, el ayuntamiento recurrió de nuevo en queja al gobierno de Su Majestad. Consiguiente á ella, por Real orden de 2 de Noviembre del propio año se mandó el cumplimiento de la anterior, sin perjuicio de que la ciudad continuase dando á los militares de la guarnición el vino que necesitasen para su consumo, sin pago de derecho alguno. San Sebastián tuvo el año inmediato otras cuestiones análogas con el Gobernador de la plaza, á consecuencia de haber pretendido el Capitán de artí-

lleva descargar en su casa una carga de vino sin presentarla en la alhóndiga, ni pagar los derechos acostumbrados. El ayuntamiento consultó el punto con la Diputación, cuya contestación se limitó á decir que se continuase cobrando los arbitrios provinciales comprendido en el donativo, por estar obligados á su pago los militares. No hubo de parte de estos reclamación alguna sobre el particular, y por consiguiente, se realizó la cobranza de ellos sin oposición. De aquí se ve que ya en el siglo pasado quedaron establecidos en Guipúzcoa dos principios favorables en su administración con relación á la clase militar, que eran la prohibición de tener estas tabernas y carnicerías particulares, y la obligación del pago de los arbitrios provinciales como equivalentes á los derechos reales. Si también es cierto que según las resoluciones generales del gobierno los militares debían gozar de franquicia respecto de las sisas de los pueblos, no se consideraron aplicables á esta provincia por razón de su estado particular foral.

La tropa de las guarniciones de San Sebastián y Fuenterrabía no por eso dejó de reclamar con insistencia el pago de la refacción, ó, en su defecto, el uso de tabernas y carnicerías particulares. Ambas ciudades se vieron molestadas sobre estos puntos, por lo que la provincia salió á su defensa representando al gobierno de Su Majestad los justos motivos que existían para que todas las clases militares estuviesen sujetas á las mismas reglas de administración, y á iguales impuestos que los vecinos del país. De aquí resultó la Real orden de 30 de Agosto de 1741, por la cual se mandó que los militares no debían eximirse de concurrir á la contribución de los impuestos municipales, sino que estaban obligados á pagarlos como los naturales y pasajeros, sin pretender la refacción. Pero tan beneficiosa y estimada determinación no fué de larga duración, como generalmente

acontece en España en las cosas que no acomodan á los militares. Se ve, en efecto, que por una Real orden de 30 de Enero de 1775, al paso de confirmar la prohibición de tener los militares tabernas y carnicerías, se declaró que no debían pagar más que los derechos reales, y no los municipales que tuviesen establecidos los pueblos con legítima autorización del gobierno. La misma Real orden prescribía que la regulación de la cuota respectiva por esta razón se hiciese por los Capitanes generales de cada provincia con acuerdo del intendente. Consiguiente á esta real resolución, por una orden del Consejo de guerra de 25 de Septiembre del mismo año se previno á la provincia formase el reglamento que debía regir en San Sebastián y Fuenterrabía; comisión de cuya ejecución se excusó, representando á Su Majestad las poderosas razones que le asistían para no intervenir en este asunto. A su consecuencia, dicho Supremo Tribunal militar acordó que las mismas dos ciudades formasen sus respectivos reglamentos de la franquicia de la tropa, señalando los derechos municipales y demás que conceptuasen no deberse incluir. Consta que San Sebastián tuvo algunas cuestiones con este motivo con el Comandante general sobre las cuotas que debían abonarse á cada clase. Hállase también que habiendo pedido el gobierno del Rey los antecedentes de lo que se hubiese obrado en esta materia, se cumplió esta Real disposición; y lo que de los documentos posteriores resulta es que no se tomó resolución en el asunto, y que quedó sin efecto ó en suspenso el pago de la refacción en cuestión. Los pueblos de la provincia continuaron desde entonces libres de semejante gravamen, como lo declaró el General en jefe del ejército D. Ventura Cano, al mandar en 1793 que la tropa debía satisfacer los impuestos establecidos, sin derecho á la refacción.

No obstante esta declaración y la posesión en que

los pueblos de la provincia se hallaban de no pagar refacción alguna á las clases militares, comenzaron estas más adelante á reclamarla. La villa de Tolosa fué donde el Comisario de guerra se empeñó en eximirse del pago de los derechos municipales correspondientes al vino que se consumía en el hospital militar; pretensión á que se opuso el Ayuntamiento, y no tuvo efecto por haberse limitado el intendente á consultar el asunto con el gobierno. En los años inmediatos, tanto en la misma villa, como en San Sebastián y otros pueblos, ocurrieron también diferencias sobre el pago de la refacción, á que siempre se opusieron estos. A su consecuencia, los militares establecieron en Tolosa y San Sebastián cantinas y carnicerías particulares, prevalidos de la fuerza armada. Los respectivos ayuntamientos hicieron contra esta violenta medida una fuerte oposición, fundándose para ello en el contexto de la Real orden ya citada del año de 1775, en los fueros y prácticas constantes del país. A la verdad, los jefes militares no pudieron menos de reconocer que las Reales órdenes dictadas sobre este ramo tendían á que la tropa no estableciese semejantes puestos para el surtido de víveres. Pero no era menos cierto que las mismas resoluciones prescribían al propio tiempo la franquicia de las clases militares en los impuestos municipales; y así no hay duda de que echaron mano de aquella medida con el fin de obligar á los pueblos al pago de la refacción correspondiente á estos, y como en su equivalencia. Por esta consideración, y en vista de los graves perjuicios que ocasionaba la subsistencia de dichas cantinas y carnicerías, para su desaparición se tuvieron que hacer arreglos respecto del pago de la refacción.

Hasta esta época solamente la tropa de las guarniciones de las plazas fuertes y demás pueblos habían pretendido la franquicia y la consiguiente

refracción. Pero se ve que por los años de 1826 diferentes jefes y oficiales retirados del servicio empezaron á reclamarla con empeño á los pueblos de sus respectivos domicilios, fundándose en el contexto de algunas reales resoluciones. El Capitán general pasó con este motivo á la Diputación, para que se sirviera comunicar á los pueblos, la nómina de las raciones que por vía de refacción debían abonarse á las clases militares conforme á la Real cédula de 27 de Febrero de 1806, mandada observar por disposiciones recientes. No se hallaban términos hábiles para dejar de cumplirlas: los militares amenazaban con el establecimiento de cantinas y carnicerías, si no se les pagaba la refacción, y los pueblos en tal conflicto acudieron á la protección de la Diputación. Al fin se vieron estos obligados á hacer arreglos con las clases militares sobre las cuotas que debían abonárseles. La resistencia á su pago cesó, sobre todo á consecuencia de una Real orden dictada en 29 de Diciembre de 1829 por acuerdo del Consejo de ministros y consulta del Supremo de la Guerra, con motivo de la oposición hecha al reconocimiento de la franquicia militar por el Diputado general de Alava. Si, pues, los pueblos desde entonces fueron pagando á las clases militares la refacción correspondiente á los impuestos municipales, no así en cuanto á los provinciales. El Capitán general en 12 de Noviembre de 1826 había declarado oficialmente que los militares no podían negarse de modo alguno al pago de los derechos provinciales, que equivalen á los reales en el resto de la Península, por estar acordados á la provincia en virtud de soberana resolución. «Añadió la misma autoridad que ningún militar se halla exento de otra cosa que de los derechos materialmente municipales, ó sea, impuestos de los pueblos.»

Uniendo á la época presente, hallamos que la Diputación provincial en 8 de Noviembre de 1842 se-

ñaló el tanto que debía satisfacerse por los pueblos guarnecidos, por razón de la franquicia, hasta nueva resolución. Se adoptó esta por la misma corporación en 5 de Diciembre siguiente, haciendo con el Comandante general el arreglo definitivo de dicho asunto, el cual se insertó y circuló á los pueblos en el Boletín oficial del siguiente día, número 112. Comunicado al Capitán general del distrito, esta autoridad en 9 de Diciembre siguiente se sirvió dirigir al Comandante general su aprobación á lo obrado en esta materia, por hallarlo conforme á justicia. A virtud de determinación, se quitaron las cantinas que la tropa tenía establecidas en algunos pueblos, y quedaron al parecer concluidas todas las diferencias pendientes. Varios ayuntamientos considerándose, sin embargo, agraviados con el citado arreglo de la refacción, pidieron á la Diputación provincial su rectificación; verificada la cual en sesión de 7 de Febrero de 1843, se pidió su aprobación al Capitán general del distrito, que no llegó á prestarla.





CAPÍTULO II.

DE LOS CASTILLOS Y PLAZAS FUERTES.

Sección I.

De los antiguos castillos.



SEGÚN se deduce de la historia general del reino y de la particular de Guipúzcoa, en los tiempos antiguos se conocieron en esta provincia varios puntos fortificados llamados castillos. De contado, D. Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, en su célebre obra *De rebus Hispanie*, al tratar de los sucesos correspondientes al año de 1200, dice que á D. Alonso VIII se le entregaron, entre otras fortalezas de fuera, las de San Sebastián, Fuenterrabía, Veloaga y Aizorroz. El mismo historiador cita también entre los puntos sometidos á dicho monarca el de Athavit, el cual en la edición complutense se lee Athagun, y se supone corresponde al de Atáun, aunque no es cosa segura. Como se ve, este autor no hace ninguna mención de los castillos de Arrasate y Elosua; pero su grande antigüedad es indisputable, y la creencia vulgar es

que existían en el tiempo de la citada unión de la provincia. D. Alonso Núñez de Castro en la crónica del mismo monarca, aunque es escritor muy posterior, así lo asegura en el capítulo 53. Que el propio Rey castellano mandó fortificar las villas de Motrico y Guetaria, su historia y los privilegios despachados para ello lo demuestran suficientemente. Sábese también que las otras primitivas villas de la provincia estuvieron muradas, torreadas y fortificadas, en especial Tolosa, Villafranca, Segura, Mondragón y Hernani. Pero en los tiempos modernos no se han conocido otras fortificaciones que las de San Sebastián, Fuenterrabía y Guetaria, que prestan alguna materia de explicación; y dejándola para las secciones inmediatas, reuniré en la presente las cortas noticias que arrojan los documentos que han estado á mi alcance.

ACHORROZ Ó AITZORROZ.

Este castillo se hallaba construído en la cima de una peña de forma muy aguda, situado en jurisdicción de la villa de Escoriaza, de difícil acceso por todos los lados, y por consiguiente, de mucha fortaleza en los tiempos en que no era conocida la artillería. Su establecimiento en punto próximo á la raya de Alava y aun de Vizcaya da á entender que era para la defensa de Guipúzcoa contra gentes extrañas. Que estas fuesen romanos, godos, moros, castellanos, alaveses ó vizcaínos, es cosa difícil de conjeturar con acierto, y así las opiniones sobre este punto serán diferentes. Sin embargo, la circunstancia de haberse hallado en su proximidad muchos huesos humanos, cascos de morriones, pedazos de lanzas y otros objetos de hierro, así que como una media docena de monedas romanas de plata del tamaño de las medias pesetas, hace presumir pertenezca á la época romana. Igual conjetura se saca del hecho de haberse encon-

trado en una heredad que está debajo de dicha peña, aunque algo apartada, en el año de 1843, una punta de lanza de pedernal de cuatro pulgadas de largo y una tercia de ancho, cuyo uso era propio de los romanos. En fin, su forma de construcción indica ser obra de estos guerreros, ó á lo menos de una antiquísima época. Pero sea de todo esto lo que se quiera, es indudable que después que Guipúzcoa se agregó á Castilla, esta fortificación dejó de tener objeto, y cuando más, podía ser de alguna utilidad en tiempo de los bandos que dividieron á esta provincia y al Señorío de Vizcaya, poniendo á sus naturales en lucha. Consta que este castillo estuvo ocupado por los tercios guipuzcoanos en 1461 con motivo de las revueltas políticas que afligieron á la nación. Descúbrese esta verdad de una Real cédula de 18 de Mayo del mismo año, en la cual D. Enrique IV dió gracias á la provincia por la defensa que sus naturales habían hecho de él, y los grandes trabajos que habían experimentado con este motivo. Con posterioridad á este acontecimiento no se encuentra cosa alguna notable concerniente á este punto fuerte, que por innecesario ó inútil se abandonó, especialmente con el adelanto del arte militar. Sin embargo, ya se sabe que aun en tiempo de la última guerra civil estuvo ocupado por la tropa carlista, para defensa contra las entradas del ejército leal por la parte de la provincia de Alava.

ARRASATE.

Tal era el nombre primitivo de la villa de Mondragón, derivado del monte llamado ahora Santa Bárbara, que la domina por la parte del medio día, el cual en lo antiguo estuvo fortificado con aquel dictado. Según la tradición vulgar, este castillo fué mandado construir por D. Sancho Abarca, Rey de Navarra, por los años de 901, para defensa de la pro-

vincia contra las invasiones de las partes de Alava y Vizcaya. Pero tal creencia no pasa de una mera conjetura, fundada en el deseo natural de un pueblo de remontar su existencia á una alta antigüedad, sin que por eso tenga un apoyo sólido en documentos auténticos, ni en la historia del país. Como quiera que sea, lo que se sabe es que este castillo en tiempo de los bandos oñacino y gamboino llegó á ser un receptáculo de revoltosos y malhechores, á cuyo abrigo cometían todo género de crímenes. Por esta razón, á súplicas de la misma villa de Mondragón, D. Enrique IV expidió en Vitoria á 31 de Marzo de 1457 una cédula mandando su demolición, así como la de otras fortificaciones de la provincia. Así se ejecutó sin tardanza, no habiendo quedado sino algunos vestigios para memoria de su existencia antigua, como noticia histórica.

ATAUN.

Es indudable que en jurisdicción de la villa de esta denominación hubo en lo antiguo un edificio ó punto fortificado, cuya situación no se puede señalar con seguridad. Sin embargo, según todas las probabilidades, estuvo donde ahora existe la iglesia de San Gregorio, con una casa fuerte avanzada inmediata, cuya grande antigüedad es indisputable. Tal fortaleza, establecida á la orilla del río Agaunza en el confín de Navarra, indica á las claras que era una defensa contra las invasiones de los habitantes de este reino: por consiguiente, si el Athavit expresado por el arzobispo D. Rodrigo Jiménez corresponde á Atáun, el origen de su construcción se ha de remontar hasta el siglo IX. La historia descubre, en efecto, que esta provincia se incorporó por aquel tiempo á los monarcas navarros para guerrear en unión contra los moros. En el caso contrario, se debe deducir que este castillo fué construído por disposición de los

Reyes de Castilla para contener á los navarros en las pretensiones que conservaron á la posesión de esta provincia después de su sumisión á D. Alonso VIII. No son más que conjeturas, á falta de noticias exactas.

BEHOBIA.

La fortaleza de este nombre existió en territorio de la villa de Irúp en paraje algo elevado sobre el río Vidasoa, cerca del paso á Francia. Su fundación se atribuye comunmente á las disposiciones tomadas por el Rey Católico D. Fernando V para resguardo del reino contra las entradas de los franceses; y en efecto, en Real cédula librada en Logroño á 21 de Noviembre de 1512 dijo á la provincia: «yo he acordado que »se faga una recia fortaleza en Irún, que es la en- »trada etc.» En su confirmación se halla que en 1518 ya existía esta fortaleza, y la gobernaba con título de tenedor ó alcaide Gonzalo de la Torre, según se ve de una Real cédula de 15 de Mayo del mismo año. También subsistía en 1539, siendo su alcaide Sancho de Alquiza, quien recurrió á las Juntas del mismo año, suplicando rogasen al emperador Carlos V, á su tránsito á Flandes, que fuese á ver dicho castillo, le pagase el sueldo devengado, y mandase acabar de reedificarlo. Construído en forma triangular, y guarnecido con el correspondiente presidio militar, este castillo se conservó en su ser hasta el reinado del emperador D. Carlos, por cuya orden parece se demolió. No existen de él más que algunas ruinas de paredes.

ELOSUA.

Hallábase este castillo donde en la actualidad subsiste la iglesia de San Andrés en el barrio de su denominación, situado entre las villas de Vergara y Azcoitia, en jurisdicción de la primera. Según Esteban

de Garibay, á quien sigue D. Alonso Núñez de Castro, es una de las fortalezas de la provincia que en el año de 1200 se entregaron al Rey de Castilla, aunque el arzobispo D. Rodrigo no hace mención de ella al hablar de aquellos sucesos. No estando situado en frontera de provincia, sino en paraje algo interior de ella, parece que el objeto de su construcción, más bien que el de contener á los enemigos exteriores, debió ser el de poner respeto á los malhechores comunes ó afiliados en los bandos indicados. Es probable que fuese demolido en el reinado de D. Enrique IV, como sucedió con otras varias fortalezas y torres; y de todos modos, es tradición que la expresada iglesia parroquial fué construída con la piedra que se utilizó de aquellas antiguas fortificaciones.

GAZTELU.

Este castillo, cuyas ruinas se descubren todavía, existió en la cima del monte del lugar de la misma denominación fronterizo á la provincia de Navarra. Su situación en este punto da á entender claramente que era construído para la defensa del país contra las incursiones de los navarros, y lo confirma la circunstancia de que estos tenían en el pueblo de Gorriti, próximo al de Gaztelu, otra fortificación análoga, de donde amenazaban de continuo. De aquí se deduce que la de Gaztelu fué construída después de la agregación definitiva de Guipúzcoa á la Corona de Castilla en 1200. Es, en efecto, cosa constante en la Historia que los navarros no consintieron en semejante desmembramiento, y que antes bien aspiraron en mucho tiempo á su recuperación; y de aquí las enemistades de los naturales de ambas provincias, sus recíprocas guerras y entradas, así que la necesidad de construir puntos fortificados para su vigilancia y respeto. Lo probable es que este castillo se demoliese

á consecuencia de la conquista del reino de Navarra hecha por el Rey Católico en 1512, pues desde entonces era inútil su conservación.

SAN ADRIAN.

Llamóse en lo antiguo fortaleza de este nombre al puerto ó paraje más eminente, que sobre grandes peñas existe en el confín de esta provincia con la de Alava, yendo por el antiguo camino real de Cegama á Salvatierra. A la verdad, su mucha elevación era en los tiempos antiguos una barrera ó dificultad considerable para el tránsito de las gentes de una provincia á otra; dificultad que la industria humana venció, abriendo paso en bóveda por debajo de la peña en más de treinta pasos de longitud y quince de latitud. Dentro de esta cueva se halla la célebre ermita de San Adrián y una casa de habitación, que sirve de venta para descanso de los viajeros, todo en el territorio de la villa de Cegama. En este punto, fortalecido más bien por la naturaleza que por obras de arte, solía haber un alcaide encargado de su conservación y defensa, revestido de la jurisdicción militar correspondiente, cuyo nombramiento hacía el Rey. Percibía además de los trágneros viajeros de una provincia á otra los derechos de pasaje, peaje y castillaje, si bien con mucha oposición de los mismos. Guipúzcoa tomó también en diferentes Juntas generales disposiciones para impedir semejantes exacciones; y los alcaldes de la villa de Segura, en tiempo en que la de Cegama dependía de su jurisdicción, procedieron algunas veces criminalmente contra los encargados de la recaudación de aquellas gabelas.

Hállase que por los años de 1523 ejercía el cargo de alcaide de esta fortaleza Juan Martínez de Zuazo, con quien la provincia seguía pleito en la Chancillería de Valladolid sobre dichas exacciones. Vese también que en 1543 la misma se hallaba bajo el go-

bierno del comendador Ortuño de Aguirre, el cual tenía puesto en ella como teniente á Juan Hurtado de Luco, vecino de Cegama. Consta así bien que en 1617 el Rey expidió á favor de D. Ortuño de Aguirre y Zuazo el título de alcaide perpetuo de la propia fortaleza, no obstante la contradicción de la provincia. Se ve igualmente que en 1630 se despachó otro título á favor de D. Juan de Aguirre y Alava: en 1678 al de D. Felipe Ortuño de Aguirre é Isunza: en 1697 á D. Eugenio de Agarto y Alava, durante la menor edad de D. Francisco Antonio de Aguirre y Salcedo. Después del fallecimiento de este, se libró en 1746 igual Real cédula de sucesión en dicha alcaldía perpetua á favor de su hijo D. Francisco Tomás de Aguirre, marqués de Monte-hermoso, la cual se presentó al uso foral de la provincia. Reconociéronse con este motivo por el consultor los documentos que exhibió el interesado para fundar sus derechos; y viéndose que el ejercicio de estos se hallaba en oposición con los fueros, franquicias y exenciones del país, se le negó aquel requisito. No se halla que dicho marqués hubiese hecho después gestión alguna sobre el particular, ni que á sus sucesores se hubiese renovado aquel título, y debe considerarse por abolido entonces.

VELOAGA Ó JELOAGA.

Este castillo ó fortaleza existía en jurisdicción del valle de Oyarzun cerca del antiguo camino real que desde este pueblo se dirige á la villa de Irún, siendo su situación en paraje eminente lleno de grandes peñascos y solitario. Su cercanía á la raya de Francia indica que era un punto de defensa para contener las invasiones de los ejércitos de este reino. No faltan quienes atribuyan la construcción de esta fortificación á los romanos ó godos, considerándola como obra ejecutada para complemento de la de Fuente-

rrabía. Pero sea lo que quiera de este particular, no cabe duda en que tenía una muy grande antigüedad, puesto que ya subsistía el año de 1200, según la relación citada al principio, del Arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada. D. Enrique IV mandó á la provincia en 1466 que por cuanto desde dicho castillo se habían hecho y esperaban hacer algunos males en esta tierra, se apoderase del mismo y derribase por el suelo, sin permitir su reedificación mientras no precediese real mandato especial. Según se deduce de otra Real cédula del año de 1468, este castillo se hallaba á la sazón en poder de los guipuzcoanos, y por consiguiente, no se había demolido todavía, cuyo hecho no consta cuándo se verificó. Incapaz de resistir á un ejército enemigo, no servía ya sino para abrigo de malhechores de todas clases, que asaltaban de continuo á los viandantes.

SECCIÓN II.

De la plaza de San Sebastián.

La primera fortificación de esta ciudad fué la del castillo de Santa Cruz de la Mota, construído en la parte más eminente del monte Urgull, que la domina. Su fundación se atribuye comunmente á D. Sancho VIII de Navarra, llamado el Fuerte, suponiendo se verificó por los años de 1194, aunque á la verdad no hay documentos con que comprobarlo. Que existía antes del año de 1200 no se puede dudar, en vista de la relación que el Arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada hace de los sucesos de aquel tiempo, puesto que cuenta á este dicho castillo como uno de los que se entregaron en aquella ocasión al Rey D. Alonso VIII en esta provincia. También es tradición que la circunvalación del expresado monte y castillo principió durante el reinado de este mo-

marca, cuando se sabe que mandó fortificar todos los pueblos de la costa marítima. Ello es que en tiempo de sus sucesores aquel monte se halló rodeado de muros, cuyos vestigios subsisten todavía, en toda la falda meridional que mira á la población; muros que después se adelantaron, de manera que parece ya se hallaba cercada esta para el siglo XV con dos puertas de entrada.

Para que el vecindario y gente de guerra de San Sebastián estuviesen bien surtidos de víveres, y por falta de ellos no dejase de defenderse, tenía un antiguo y notable privilegio. Tal era el que cuantos barcos viniesen á cualquiera de sus puertos, incluso el de Pasajes, con trigo y demás bastimentos, tuvieron que llevar á la misma ciudad la mitad de la carga á venderla precisamente en ella. Hállase que tan extraordinaria prerogativa fué reconocida por una cédula librada por D. Enrique II en Sevilla á 13 de Abril de 1376 en una sentencia compromisaria. Mandó, en efecto, por ella que todas las naves de cualesquiera mareantes que aportasen al puerto de Pasajes trigo y otras cosas comestibles, estuviesen obligados á descargar la parte que habían acostumbrado hasta entonces. «E esta parte que descargaren, »añade, sean tenudos de la llevar á la dicha villa de »San Sebastián por tierra ó por mar, para lo vender »allí, é se aprovechar de ello.» La misma Real cédula funda semejante extorsión en la razón en que convenía al servicio de Su Majestad que dicha entonces villa «estuviese bien proveída, así de compañías, como bastecida de armas é de todas cosas que »le son menester para guarda é amparamiento de la »dicha tierra de Guipúzcoa.» Este privilegio de la media descarga, cuyo uso excitó tanta oposición de parte de los habitantes de Rentería, Oyarzun y otros pueblos circunvecinos de los comerciantes de Bayona y otras partes, quedó sin efecto á mediados del siglo último.

Cuán insuficientes eran para la defensa de esta ciudad las antiguas fortificaciones, bien se conoció en las invasiones que el ejército francés hizo en esta provincia el año de 1476. Asediada entonces por este, pudo resistir á sus impulsos, gracias al valor que demostraron sus defensores, y á la falta de artillería de batir de los enemigos; pero reconociendo su peligro para lo sucesivo, representó desde luego á Sus Majestades la necesidad de aumentar y formalizar las obras de fortificaciones existentes. Dijo que con motivo de dicha guerra «había sido mucho más fatigada» que todas las otras villas de la provincia, así en «cuanto á los gastos é despenas que se habían hecho mayores y más que de las otras villas, como en «torrear é fortalecer la dicha villa, é facer al rededor «de ella baluartes y cercas con sus almenas, porque «mejor se pudiese defender, si necesidad hubiese, «é que en esto habéis gastado mucho de lo vuestro, etc.» Consiguientemente, pidió San Sebastián la real autorización para imponer algunos derechos sobre las carnes, fierros, aceros, paño, pescado y otras cosas vendibles, con cuyo producto se pudiese acabar de fortalecer la villa. Sus Majestades estimaron esta súplica, y por cédula expedida en Toledo á 20 de Febrero de 1477 mandaron al Corregidor Juan de Sepúlveda que juntándose con el Consejo de San Sebastián, viesen lo que era menester «para acabar «de facer la dicha cerca, é reparar la dicha villa, é «en qué cosas se puede é debe echar la dicha imposición.» Esta reunión del Consejo de la misma entonces villa con el indicado magistrado se verificó en el sobrado de la iglesia parroquial de Santa María á 16 de Marzo del propio año, donde se señalaron los derechos que debían imponerse á cada artículo. San Sebastián empezó á percibirlos sin haber obtenido la real confirmación de dicho acuerdo, considerando sin duda que la mencionada cédula bastaba para el

efecto. Pero en tal estado de cosas vino á esta provincia por mandado de Sus Majestades Católicas el doctor González Gómez de Villasandino, oidor del Consejo real, á inquirir qué imposiciones se exigían en ella injusta y no debidamente contra el tenor de las leyes de este reino. Habiendo hallado en esta pesquisa que las establecidas en aquella ciudad carecían de la real aprobación, prohibió bajo penas severas su exacción mientras no se obtuviese esta. La expresada ciudad se vió á su consecuencia obligada á recurrir al Gobierno en solicitud de este requisito, que logró por medio de la Real provisión librada á 30 de Junio de 1485.

Estando situada esta ciudad tan cerca de la frontera francesa, se ve que el gobierno del rey cuidó en todos tiempos de su fortificación, librando ó aplicando para el efecto las cantidades que el estado de aquellos tiempos permitía. Así es que hay noticia de que D. Fernando IV señaló á la misma ciudad 3000 maravedís de 10 dineros cada uno, merced que fué confirmada por los monarcas sucesores. No es menos cierto que los Reyes Católicos otorgaron á San Sebastián la de 64000 maravedís anuales sobre las alcabalas: 35000 de ellos sobre las de la misma ciudad, y los otros 29000 sobre las de la villa de Segura, mediante privilegio expedido en Madrid á 23 de Marzo de 1514, con la obligación de reparar los baluartes y murallas. Confirmó esta gracia D. Felipe II por Real cédula librada en Madrid á 29 de Julio de 1566, y por otra en 1588. San Sebastián correspondió á esta obligación, ejecutando de su cuenta obras considerables de defensa en su muralla; de manera que se calcula haber invertido en ellas la gran suma de 150000 ducados, sin contar con la ayuda dada por la provincia. Las que suministró la Real Hacienda se irán indicando más adelante.

Parece que la nueva muralla meridional de esta plaza se empezó á construir el año de 1516 conforme á los planos del célebre conde Pedro Navarro. Sobre ser ella muy alta, era de treinta y dos pies de espesor, teniendo en su medio al lado de la única puerta de entrada un cubo llamado imperial, por ser obra del tiempo del emperador Carlos V. Del registro de las Juntas generales de Guetaria de Noviembre de 1535 se descubre cuán poco sólida se hallaba la fortificación de esta plaza. Se ve, en efecto, que aquel congreso acordó suplicar á Su Majestad tomase disposiciones para poner en seguridad esta ciudad y la de Fuenterrabía; á cuya consecuencia sin duda se llegó á concluir en 1542 el lienzo oriental de la muralla de la primera. También se sabe que el rebelión de junto al postigo de San Nicolás, á la parte de la Zurriola, se ejecutó por los años de 1567 bajo las dimensiones dadas por el Capitán general don Juan de Acuña. Consta del mismo modo que á consecuencia de la invasión hecha por el ejército francés en 1638, el gobierno del rey determinó fortificar ambas plazas, la de San Sebastián y Fuenterrabía, cuyas obras principiaron á ejecutarse por sus mismos encargados. La provincia reunida en Junta particular ofreció servir para dichas obras con 600 peones repartidos en todos sus pueblos, pagándoseles su jornal á razón de cuatro reales diarios. En cumplimiento de este acuerdo acudieron á los trabajos muchos peones; pero por haber faltado á otros pueblos, se redujo aquel número á la mitad, que se distribuyó en las obras de las dos plazas. Por este medio se hizo al frente de la muralla de San Sebastián el Hornabeque, si bien es cierto que no llegó á concluirse con la debida perfección.

Esta plaza no tenía todavía con estas obras la necesaria resistencia por falta de traveses, ó sea, de fuegos de costado. Por lo mismo el rey envió en 1644 al

general D. Juan de Garay y á otros ingenieros militares á reconocer la plaza y trazar las obras que se hubiesen de ejecutar á dicho efecto; obras cuyos planos fueron aprobados por el gobierno de Su Majestad, y se empezaron sin tardanza á ejecutar. Tales eran los dos medio-baluartes denominados del Gobernador y San Felipe, construídos en los dos ángulos de la plaza, que miraban al sureste y suroeste, nombres que conservaron hasta los últimos tiempos. San Sebastián dió para estos dos medio-baluartes la piedra que tenía preparada para la fábrica de un muelle, y además, gente para los trabajos de los terraplenes. De su parte, el gobierno del rey cedió á la misma ciudad los 10000 escudos que se suponía estaban devengados en ella del producto del arbitrio provincial llamado donativo, y consignó sobre esta renta otros 2000 ducados anuales. Pero la provincia tenía pagado con exceso á Su Majestad el donativo pecuniario con que había ofrecido servirle, y por consiguiente, aquellas dos consignaciones no pudieron tener efecto. Esto no obstante, deseando ella contribuir en todo lo posible á la ejecución de aquellas obras, en las Juntas generales del año de 1646 se acordó señalar á San Sebastián para este efecto la suma de 10000 ducados pagaderos en cuatro años. A instancias de la misma ciudad, la provincia suplicó al rey se acabasen las fortificaciones principiadas del Hornabeque y de los dos medio-baluartes. Se quería además que el gobierno reparase la muralla que mira al puerto y concha, arruinada por los golpes de la mar, enviando para todas estas obras ingenieros y dinero. Consta que dicha cantidad se empleó por los años de 1656 en la construcción del cubo caído del Ingente, que mira á la parte de la Concha, con libramientos expedidos por el Comandante general, baron de Vateville, á favor de los rematantes de las obras. La ciudad pidió á las Juntas

generales de Villafranca de 1658, para la continuación de las fortificaciones principiadas, igual suma que la que se le había librado en 1646, ó sea, 10000 ducados, pero no se accedió á ello. En el mismo año se comunicó á dicha autoridad militar una Real orden, en la cual se decía que aunque se Juzgaba muy importante la fortificación de la ciudadela, se dejase por entonces la fábrica de ella, y se continuasen las obras del Hornabeque, uniendo á ellas el puente de Santa Catalina. Se encargaba su pronta ejecución, añadiendo que para este efecto se había mandado aplicar 12000 ducados sobre el donativo de Guipúzcoa, Alava y pueblos de la Rioja. Aunque se sacó el presupuesto de estas obras, no llegaron á realizarse por entonces, por no haber tenido efecto los recursos necesarios.

San Sebastián, que, muy al contrario de lo que ha sucedido en la presente época, tenía el empeño de fortificarse á toda costa con solidez, alcanzó en 1672 una Real orden favorable á sus designios. Disponíase por ella que retuviese en sí los 2000 ducados que próximamente importaba cada año el producto del arbitrio del donativo en la misma ciudad y su jurisdicción, con cargo de invertirlo en el reparo de las murallas y otras obras necesarias para su mejor y más segura defensa. Los representantes de ellas pretendieron el cumplimiento de esta Real determinación en las Juntas de Cestona del año inmediato, con anuncios de hacer uso de la misma de propia autoridad. Aquel Congreso no consintió, sin embargo, en la retención de la expresada cantidad, ni de otra alguna á semejante título. Consideró, al contrario, que todo el importe de aquel arbitrio estaba concedido á la provincia, en virtud de un contrato solemne celebrado con el gobierno, para pago de los censos con que se había gravado, á fin de cubrir el servicio del donativo pecuniario ofrecido. A la verdad, estas

razones no tenían una contestación seria, y reconociéndolo así la ciudad, se limitó á hacer presente la conveniencia de la ejecución de las obras proyectadas, implorando para el efecto la generosidad de la provincia. Colocada en este terreno la cuestión, ya cambiaba completamente de aspecto. Por lo tanto, aquellas mismas Juntas consignaron á San Sebastián sobre el arbitrio provincial del donativo la suma de mil ducados por una vez, no para obras de fortificaciones, sino para la reparación del puente de Santa Catalina y guarda mares del muelle; en cuyos objetos, decía, invertía anualmente grandes cantidades, que la impedían atender á lo de las murallas. La fortificación de estas quedó, por consiguiente, sin verificarse, contra lo que deseaba la ciudad. Para llevarla á efecto, determinó esta en 1682 imponer ciertos arbitrios sobre algunos géneros comestibles que se introdujesen en ella, sea por mar ó por tierra, ó que desembarcando en su puerto ó el de Pasajes, se sacasen para el consumo de los vecinos de esta última villa, la de Rentería, Oyarzun y Lezo. Se aprobaron estos arbitrios para tiempo de diez años mediante Real provisión librada por el Consejo en 14 de Febrero del mismo año, sin que conste su ejecución.

El Castillo de la Mota quedó destruído enteramente el día 7 de Diciembre de 1688 á consecuencia de haber volado el almacén de pólvora establecido detrás del mismo por la caída de un rayo. Consta que para su reparación, así que de los muelles, que también tuvieron grandes averías, la provincia dió á la ciudad mil ducados. También se ve que este castillo fué reedificado durante los tres años inmediatos, por disposición del gobierno, bajo la dirección del capitán ingeniero militar D. Hércules Torrelli, que vino de la Corte con semejante comisión. Sus obras no quedaron, sin embargo, concluídas ni en estado regular de defensa en aquel periodo, puesto que el

El mismo ingeniero escribió después desde Madrid que gestionaba cerca del gobierno, á fin de que se llevasen á cabo, por la importancia de la plaza. Así es que la ciudad en una comunicación dirigida á la provincia en 1693 decía que no podía menos de darla cuenta del estado mísero en que se hallaban las fortificaciones de aquella plaza, cuyo nombre les era impropio, por ser tan contra ella que los ingenieros se condolían de la suerte de sus habitantes. Todo tiende en favor del enemigo, añadía la ciudad en aquella comunicación. Quejábase ella al mismo tiempo de la falta de tahonas, hornos y cuarteles debajo bóvedas á prueba de bomba, á que se aumentaba la escasez de agua. La provincia representó al gobierno del rey este estado de cosas y la necesidad de adoptar disposiciones eficaces para su remedio, ofreciendo para el reparo de esta plaza y de las demás marítimas el donativo de 20000 ducados. Por Real orden de 30 de Enero de 1696 se aceptó este donativo; se reconoció el estado de las plazas por el ingeniero D. Diego Luis Arias, y se determinaron las obras que debían ejecutarse en cada una de ellas. Con respecto á la de San Sebastián, se mandó fenecer la casa del Castillo, hacer cuarteles capaces para 300 hombres, componer la cisterna vieja, acabar el almacén de pólvora y hacer otra de bóveda en la puerta vieja, con algunas otras. Para su ejecución se aplicaron en dicho donativo 140000 reales, á saber, 100000 para las obras del Castillo, y los 40000 restantes para las fortificaciones exteriores. Esta plaza tuvo nuevas averías en el sitio que sufrió el año de 1719, y mucho mayores en la embestida de 1813 por los ejércitos aliados, habiendo quedado arruinado del todo en esta última ocasión el lienzo de la murralla que miraba á la parte de la Zurriola. Sus reparaciones se ejecutaron de orden y cuenta del gobierno de Su Majestad, salvo alguna ayuda dada por la Provincia para la con-

ducción de materiales, peones para los trabajos, etc.

Desde la primera erección de las murallas de esta ciudad sus alcaldes gozaron de la singular prerogativa de abrir y cerrar diariamente las puertas de entrada de la misma. Semejante costumbre procedía seguramente de haberse hecho la cerca y cerradura de la población á su propia costa; á lo que se agregaba el haber estado á su cargo la vigilancia y defensa de la misma, así en tiempos de paz como de guerra, cuando las plazas de armas no estaban guardadas de tropa. Nada era, por consiguiente, más natural que el que los alcaldes, que eran los jefes civiles y militares de la población, ejerciesen aquella importante regalía. En ella alternaban de seis en seis meses, y cada uno en su respectivo turno conservaba en su propia casa todas las llaves de dichas puertas. Consiguientemente, á la cerradura de estas asistía personalmente cada alcalde acompañado de los vecinos más principales de la ciudad con hachas encendidas, puesto que esta operación se hacía después de entrada la noche; á la que concurría también un llavero dotado de los fondos municipales con el salario de 137 ducados anuales, de nombramiento del ayuntamiento.

Tal era la práctica antigua, la cual se modificó á consecuencia de las conmociones políticas del reino de 1521. Se ve, en efecto, que el cardenal Adriano, gobernador de él, mandó á la ciudad en carta escrita desde Vitoria en 18 de Agosto de 1522 que entregase una de las llaves al Capitán general de la provincia D. Beltrán de la Cueva, como lo verificó. Así bien consta que por Real orden fechada en Monzón á 22 de Agosto de 1542 se dispuso que una de las llaves de las puertas tuviese la ciudad, y la otra el Comandante general, con expresión de que no se tomaba esta determinación por desconfianza de los Capitulares, sino para mayor seguridad de la plaza.

Esta prerogativa de los alcaldes de San Sebastián fué confirmada por Reales órdenes expedidas en los años de 1566, 1581 y 1738, de que hay noticia. Suscitóse, no obstante, en el de 1762 una cuestión con el Comandante general sobre si el derecho de conservar la ciudad las llaves se extendía á la puerta del Mirador del castillo, que cae sobre el muelle, ó debía limitarse á la de tierra, según pretendía aquel jefe militar. La Real orden de 22 de Febrero del mismo año decidió esta diferencia á favor de la ciudad, al mandar que se siguiese observando la práctica de hasta entonces. Así se hizo con posterioridad, aunque con no poca repugnancia de los jefes militares, que no podían consentir en la intervención de la autoridad civil local en dicho acto, dirigido únicamente á asegurar el estado de la plaza. Pero aun este privilegio cesó del todo á consecuencia de la ocupación de esta por los franceses en 1794. A pesar de eso, la ciudad conservó después, y aun en el presente siglo, el empleo de llavero, en signo de la posesión de aquel antiguo privilegio, importante en su tiempo, de poca ó ninguna utilidad últimamente.

En esta plaza solía residir un gobernador militar de la clase de coronel ó brigadier, un teniente rey, sargento mayor, dos ayudantes y un capitán de llaves, y el castillo estaba al cargo de otro gobernador asistido de un ayudante. Hallábase dotada además en lo antiguo con tres compañías de infantería, y más adelante con un batallón de la misma arma, con la plana correspondiente de ingenieros y artilleros, que variaba según las circunstancias. Hoy día, en que su fortificación está reducida al Castillo de la Mota, la dotación de este consiste en un gobernador de la clase de teniente coronel con su ayudante, y para el servicio de sus baterías existen... artilleros. Dentro de la ciudad en sus antiguos cuarteles se conservan, no obstante, todavía sobre.... hombres de infantería

y.... de artillería, con sus correspondientes jefes y oficiales. Todas estas fuerzas se hallan al mando del Comandante general, de la clase de brigadier.

San Sebastián, cuyo reducido terreno intramural no permitía extender la edificación, según reclamaba su aumento de población, gestionó cerca del gobierno para el derribo completo de las murallas de la plaza.

SECCIÓN III.

De la plaza de Fuenterrabia.

Atendida la situación fronteriza de esta plaza, debemos creer que fuese ella la más antigua de las de esta provincia, destinada á defender su entrada. La tradición vulgar hace remontar su fundación á la época de la dominación de los reyes godos, y en apoyo de semejante creencia se alega que un cubo que miraba á la parte de Hendaya conservó el nombre de Wamba hasta mediados del siglo último, en que fué demolido. No niego ni afirmo lo que puede haber de verdad en todo esto, por que no hay datos seguros para lo uno ni para lo otro. Sin embargo, la conjetura más racional y probable es que la primitiva fortificación de esta población se reducía á su parte más alta, ó sea, á la casa palacio de ella, y cuando más á algunas obras exteriores de poca importancia para su resguardo. De todos modos, no se descubre que en tiempo de la unión con Navarra se hubiese tratado de hacer obra alguna de circunvalación de la actual ciudad. Por otra parte, de lo que el Arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada manifiesta, hablando de la entrega de Guipúzcoa á D. Alonso VIII, ni aun de lo que expresa el Obispo de Bayona D. García de Eugui, se puede deducir la existencia de muralla alguna entonces de Fuenterrabia. Ellos cuentan á esta entre los pueblos sometidos.

dos en concepto de castillos, á una con los de Ve-loaga, Aitzorros, Atáun, etc., que solo eran puntos sueltos fortificados.

Según opinión común, el expresado palacio fué fundado primitivamente por D. Sancho Abarca, ampliado y fortificado por D. Sancho el Fuerte, y su hermosa fachada construída por el emperador Carlos V. Tiene bóvedas, plataforma y cuarteles para acomodar hasta 850 para la tropa, obra de mucha solidez para los tiempos antiguos, sobre todo cuando no se conocía artillería. Llámasele palacio real por pertenecer á Su Majestad, como construído por disposición de los monarcas mencionados; á lo que se agrega la circunstancia de haberse alojado en él diferentes personas reales en sus tránsitos por esta provincia á Francia, ó en sentido contrario. Fuera de estas pocas ocasiones, ha servido de habitación de los gobernadores y tenientes de rey de la plaza y de cuartel de la tropa de la guarnición. En el mismo residía también antiguamente el Capitán general de la provincia, ó mejor dicho, de la gente de guerra de sus presidios, el cual cesó á consecuencia de haberse agregado este cargo al de virrey de Navarra por primera vez en 1572, según se ha dicho antes. Quedó entonces en la plaza de Fuenterrabía un teniente de Capitán general, que después obtuvo el título de alcaide, y más adelante el de gobernador, rebajándose así sucesivamente su categoría y la importancia militar. Sin embargo, se halla que hasta el año de 1632 se conservaban en la misma ciudad los empleados de la Real Hacienda militar, quienes hacían los correspondientes ajustes de su gente de guerra. Al tratar del gobierno provincial se vió también cómo en 1640 el Rey hizo al conde duque de Olivares la merced del oficio de adelantado mayor perpetuo de Guipúzcoa con facultad de proponer tres sugetos para el gobierno de esta plaza. Se dijo también allí que ha-

biendo suplicado la provincia de esta merced, quedó revocada y anulada en virtud de sentencia ejecutoriada del Consejo Real de 29 de Agosto de 1649. Consiguiente á esta resolución, el cargo de gobernador de Fuenterrabía quedó desde entonces á la libre elección de Su Majestad, según están los demás empleos militares en sus diferentes categorías.

Por lo que se deja expresado se debe admitir, como la opinión más verosímil, que la construcción de las cercas ó murallas de esta ciudad empezó después de la agregación de la provincia á la Corona de Castilla. Que D. Alonso VIII tomó disposiciones para fortificar todos los pueblos marítimos de la misma, es indudable en vista de la historia; y siendo esta ciudad una de las más importantes de aquella época, debió ser también uno de los primeros para este objeto. Fuenterrabía tenía, en efecto, un privilegio antiguo, cuya fecha no consta, señalándola 10000 maravedís anuales de 10 dineros cada uno para las labores de sus murallas. Sábese también que á virtud de otro dado por D. Enrique II en Toledo á 12 de Diciembre de 1374 se mandó que esta asignación se pagase, á saber, 8000 en los derechos de las ferre-rías, y los otros 2000 en los diezmos de la mar. Esta merced fué confirmada sucesivamente por D. Juan I en Burgos á 12 de Agosto de 1379; por D. Juan II en Valladolid á 30 de Mayo de 1412, por D.^a Juana en Burgos á 28 de Marzo de 1508, por D. Felipe II en Madrid á 25 de Noviembre de 1564. Con los auxilios ya indicados Fuenterrabía estaba ya murada y regularmente fortificada antes del año de 1476, puesto que habiendo sido asediada entonces por el ejército francés, tuvo que retirarse sin haber podido tomarla. Pero sea que sus murallas hubiesen sufrido averías durante este sitio, sea que se hubiese reconocido su poca resistencia, parece cierto que los Reyes Católicos mandaron su reparación. Tal es al menos

la tradición vulgar, no destituida de fundamento, y que habiéndose verificado las obras de defensa necesarias, se puso un escudo partido en palo, el cual de un lado tenía dos yugos con sus coyundas, y del otro un haz de siete flechas ó saetas atadas con una cuerda, y al pie este mote: *Tanto monta*. Que el emperador Carlos V perfeccionó las murallas de esta plaza, poniéndolas en el estado en que se hallaban á fines del siglo último, no parece menos cierto.

La fábrica de estas murallas, de gran anchura y elevación, era muy buena, como lo es la parte que todavía subsiste. Sus baluartes eran de 27 á 30 pies de grueso, y de 60 á 70 de alto: tiene dos puertas de entrada, la principal llamada de Santa María al Sur, y la de San Nicolás al Oeste, ambas con puentes levadizos, cubos y rebellines. Además la ciudad se halla circundada desde el Norte por Oeste y Sur de un ancho foso, y defendida por Este del río Vidasoa y brazo de mar que entra por su boca y sube á larga distancia. No obstante la fortaleza de las murallas y las demás obras indicadas, esta plaza llegó á ser indefendible desde los adelantos hechos en el arte de la guerra, sobre todo el ramo de la artillería de grueso calibre, por estar dominada de montes por diferentes puntos. Su misma proximidad al territorio francés era por una parte un motivo de una vigilancia exquisita continua, y un obstáculo para su defensa, pues en tiempo de paz podía el enemigo hacer los preparativos necesarios de ataque. Bien lo conoció el gobierno español en 1458, cuando habiendo principiado el francés á construir una torre en la ribera del río Vidasoa, se impidió su ejecución, aunque á título de que aquel sitio era territorio español. Así, pues, se debe decir que la principal fortaleza de la plaza de Fuenterrabía estuvo en el valor de sus propios vecinos y demás guipuzcoanos, que se encerraban en ella en los casos de necesidad para su defensa.

Esta plaza quedó bastante deteriorada en la embestida que en el mes de Octubre de 1521 le dió el ejército francés, y más todavía para la recuperación de la misma, verificada por el español en el de Marzo de 1524. Los daños sufridos en esta última ocasión se repararon sin ninguna tardanza por mandado del emperador Carlos V, levantando para su mayor fortificación los baluartes llamados de la Reina y Leiva, y el cubo de la Magdalena, con fuertes murallas en todo lo demás de su circuito. Hállase, en efecto, que las Cortes de Segovia de 1532 en su petición 120 suplicaron á Su Majestad que habiéndose gastado muchas cuantías en las fortalezas, reparos y cercas de Fuenterrabía, se sirviese mandar acabar las obras. La contestación de dicho monarca fué «que se había mandado entender en lo pedido, y se tendría especial cuidado del reparo y guarda de dichas fortalezas.»

Así es que en un instrumento que esta ciudad otorgó en 18 de Abril de 1543 ante Juan Sánchez de Venesa expresó que «por cuanto el Sr. D. Sancho Martínez de Leyva había mandado derribar la torre de San Nicolás y ciertos muros viejos que había en la dicha villa al rededor y circuito de ella para las obras nuevas que por mandado de Su Majestad se hacían, y que la piedra que se sacase así de la dicha torre de San Nicolás, como de los muros que se habían de derribar, se examinase por dos maestros canteros, etc.» Pero la destrucción de esta ciudad fué todavía mayor en el memorable sitio que sufrió de parte de los franceses desde el día 1.º de Julio de 1638 en adelante. El enemigo abrió dos brechas en la muralla, de manera que se podía subir por ellas á caballo; hizo volar siete minas; dió nueve asaltos infructuosos; en fin, sus bombas y granadas destruyeron multitud de casas de la población. Felipe IV, monarca reinante á la sazón, mandó que

inmediatamente se reparasen estas averías de las fortificaciones y daños de las casas de particulares; para cuyo efecto, por Real cédula dirigida á la provincia en 22 de Septiembre del mismo año, la encargó que sin dilación alguna diese la gente necesaria para los trabajos. «La plaza de Fuenterrabía, decía, ha quedado de las baterías del enemigo tal mal parada, como tenéis entendido, y para ponerlo en toda perfección, y hacer las demás fortificaciones que tengo resueltas con la brevedad que se requiere, me prometo que sin dilación habréis dado la gente que fuere menester y os pidiere el almirante. Y así os encargo y mando que si no lo hubieredes hecho, deis la gente que el almirante de Castilla, mi Capitán general de esa provincia, os advertire ser menester, etc.» Consta que por otra Real cédula de 12 de Abril de 1639 se hizo á Fuenterrabía la merced de las penas de la Cámara, que se devengasen en la misma ciudad por tiempo de cuarenta años para la reparación de sus murallas. Al hablar en la sección anterior acerca de la plaza de San Sebastián, se dijo cómo la provincia en Junta particular había decretado dar 600 hombres para los trabajos de la misma y de la de Fuenterrabía con el salario de cuatro reales diarios. Se manifestó también allí que por haber dejado de acudir los peones de algunos pueblos, aquel número se redujo después á la mitad, que se distribuyó en ambas plazas. Resulta, por consiguiente, que en cada una de estas se emplearon 150 hombres, sin que se descubra cuánto tiempo duraron estos trabajos.

La provincia en las Juntas de Zarauz de 1638, para ayuda de ellos, ofreció á Su Majestad el donativo de 10000 ducados, y en las de Vergara de 1640 otra igual cantidad. Consiguiente á esta oferta, el rey por su cédula despachada en Zaragoza á 5 de Abril de 1644 quiso que se hiciese efectiva desde luego por

la provincia en una parte «Sahed, dijo, que según
 »los tanteos que se han hecho, serán menester para
 »las fortificaciones de Fuenterrabía 16 escudos, y por
 »que conviene acudir á las cosas precisas de ellas, y
 »asegurar aquella plaza, que es tan importante, he
 »resuelto que se prevengan luego 6000 escudos, y que
 »se remitan á aquella plaza con orden expresa que
 »se gasten en el baluarte que está comenzado, por lo
 »que conviene adelantar la fábrica. Para que esto
 »tenga efecto, por la presente os mando que por la
 »cuenta de lo que debéis, así de los diez mil ducados
 »con que ofrecisteis servirme en la Junta que se
 »hizo en Zarauz poco después del sitio de Fuenterrabía,
 »como de los otros diez mil que así mismo
 »ofrecisteis en la que se celebró en la villa de Vergara
 »el año de 1640, deis y entreguéis al pagador ó persona á
 »cuyo cargo estuvieren las dichas fortificaciones los dichos
 »6000 escudos de á 10 reales, etc.» La provincia entregó
 puntualmente esta cantidad, con la cual debieran adelantarse algo las
 obras en cuanto alcanzaron. Pero como las trazadas eran de
 mucha importancia, aquella suma no podía bastar para el efecto;
 y así es que se halla que el año de 1658 no estaban todavía
 sino principiadas, según resulta de una real cédula de 31 de
 Diciembre del mismo año. «He resuelto, decía, en cuanto á las
 fortificaciones de Fuenterrabía, que se acabe y perfeccione lo
 que se ha obrado en ellas, aclarando el foso, y haciendo la
 estacada encubierta durable á las inclemencias, y que se
 adelante el baluarte que mira á Hendaya, pues falta poco.
 Y debe hacerse, no solo por el consuelo y satisfacción de los naturales,
 sino también porque á la baja mar puede tener peligro la
 cercanía de Francia; y con esta atención, cuando se cayó el
 baluarte, se pusieron estacadas y reparos en el ínterin que se
 perfeccionaba hasta levantar el cordón y terraplén. Y se
 considera que por

»aquella parte es de grande importancia que se con-
»serve una plataforma que llaman del Palacio.» Por
otra Real orden dirigida al Comandante general se
dijo que Su Majestad había mandado aplicar á las
fortificaciones de las plazas de la provincia 12000
ducados del donativo que sus villas habían ofrecido,
cuya entrega reclamó aquel jefe en comunicación de
25 de Abril de 1659. Las Juntas de Vergara del mis-
mo año, para el cumplimiento de esta Real dispo-
sición, acordaron pasarle una relación de lo que cada
pueblo había contribuido para satisfacción de aque-
lla oferta.

Vióse antes cómo la provincia hizo presente al go-
bierno del rey el mal estado de defensa en que se
hallaban sus plazas, ofreciendo para ayuda de sus re-
paraciones el donativo de 20000 ducados. También
se indicó que en virtud de la Real orden dictada en
30 de Enero de 1696, se dispone el reconocimiento y
reparación de las mismas plazas, una de las cuales
era la de Fuenterrabía. Con respecto á ella mandó
que se feneciese la entrada encubierta desde donde
cierra el foso principal debajo del baluarte de la
Reina hasta la puerta de Santa María, haciendo las
banquetas, glacis y parapetos, poniendo además esta-
cada como en la restante de la plaza. Estas obras
fueron calculadas por el ingeniero D. Diego Luis
Arias en 20000 ducados, y aunque se trazaron por
el mismo algunas otras, se dejó de disponer su ejecu-
ción por falta de fondos. Para el cumplimiento de
dicha Real resolución se reunió Junta particular en
San Sebastián el día 22 de Febrero del mismo año;
y en virtud de lo que se acordó en ella, se pusieron
en pública almoneda las que precedentemente se
dejan indicadas. Su ejecución en esta época no puede,
por consiguiente, ser dudosa. Esto no obstante, se ve
que 1707 el Capitán general D. Pedro Fernández
Navarrete reclamó con insistencia á la provincia la

asistencia de 200 trabajadores á la ejecución de algunas obras de esta plaza, cuyo mal estado había hecho presente su gobernador. Las muralias de ella se destrozaron nuevamente en el sitio que pusieron los franceses en los meses de Mayo y Junio de 1719, cuyas averías se repararon por el gobierno en los años inmediatos. Ocupada esta plaza por los mismos en 1794, al evacuarla en el mes de Septiembre del siguiente año volaron por medio de minas diferentes lienzos de sus murallas, señaladamente el cubo de Santa María y las que miraban á Francia. No quedó, pues, en pie más que un trozo de la denominada de la Reina, la de San Nicolás, el baluarte de Leiva, otro trozo de sesenta metros entre el anterior y el torreón de la Magdalena. También subsisten los portales, aunque sus costados se hallan arruinados. Así que puede decirse que entonces desapareció esta antigua plaza de armas, tan importante y memorable en un tiempo, cuyos sitios y defensas han costado tanta sangre, y causado tantos otros sacrificios. No fué, pues, en adelante más que un punto de retiro y descanso para inválidos, sin tropa de guarnición, gobernador, alcaide, ni otra autoridad militar. Solamente durante la última guerra civil tuvo el concepto de plaza, y estuvo guarnecida de tropa, así de los partidarios del Pretendiente, como de la perteneciente al gobierno de la Reina.

SECCIÓN IV.

De las plazas de Guetaria y Motrico.

GUETARIA.

Es indudable que una de las villas marítimas de esta provincia que mandó fundar y poblar D. Alonso VIII, fué la de Guetaria. Si su carta-puebla primitiva, cuya fecha era de 1.º de Septiembre de 1209, ha

desaparecido con el largo transcurso del tiempo, no por eso deja de saberse por la Historia que el objeto principal de semejante fundación era el de fortificar esta costa contra las invasiones enemigas. Así lo dicen Esteban de Garibay y Zamalloa y la Crónica general, asegurando que dicho monarca pobló para este efecto las villas de Castro Urdiales, Guetaria, Laredo, Motrico, Santander y San Vicente de la Barquera. De contado, que la villa de que me ocupo estaba cercada de murallas antes del año de 1393 se deduce de la concordia que entonces celebró con la de Zarauz sobre la entrada de esta en la vecindad de aquella. Uno de los capítulos bajo los cuales se verificó semejante anexión consistía, en efecto, en estipular que los vecinos de Zarauz no estuviesen obligados á ir á velar á Guetaria, ni á pagar cosa alguna para la reparación de su cerca; cuya existencia anterior se da de esta manera por supuesta, así como el hecho de velar en la villa da á entender que esta se hallaba cercada de murallas.

La plaza de Guetaria, cuya importancia principal era como punto de la marina para la defensa de su puerto, apenas figuró en las guerras sostenidas por la provincia contra los franceses en los siglos XV y XVI. No aparece tampoco que su fortificación se hubiese extendido en estas épocas del cuerpo de la población, ó sea, comprendiendo el monte de San Antón. Solamente se descubre que en el año de 1600 el Rey había mandado librar tres mil ducados para la fábrica del fuerte que se había de hacer en esta villa. También se halla que la misma representó á las Juntas de San Sebastián el estado de indefensión en que estaba sin fortaleza ni baluarte, y que las celebradas en Elgóibar el año inmediato acordaron á Guetaria las cartas de favor necesarias para Su Majestad para el logro de su pretensión. Consta que en el de 1637, por orden del duque de Nochera, Capi-

tán general de esta provincia, el ingeniero militar D. Antonio Gandolfo trazó algunas obras para la defensa de esta plaza, para cuya ejecución entregó la Real Hacienda 57916 reales. Consta también que estas obras se remataron por el maestro D. Cristóbal de Zuinarrista; que la distribución de dicha suma estuvo al cargo de D. Francisco de Zarauz; que, en fin, la villa dió la competente carta de pago de la misma cantidad como recibida. Se ve igualmente que en 1667 por despacho del duque de San Germán, virrey de Navarra y Capitán general de esta provincia, se libraron al alcalde de la propia villa 1271 reales de plata para la reparación de sus fortificaciones. Fueron estas principalmente la construcción de las puertas de tierra y mar, garitas, puente levadizo, cureñas de los cañones del puerto y monte de San Antón, cuya cuenta dió dicho alcalde. En 1673, á consecuencia de haber un navío francés sacado otro inglés surto en este puerto, mandó la reina gobernadora colocar la artillería necesaria para la defensa del mismo, de manera que no ocurriese en adelante un caso semejante. A la verdad, la plaza se hallaba entonces muy mal parada: no había tropa de guarnición: los cañones útiles se hallaban en tierra por falta de cureñas: tampoco había artilleros para su manejo. Tan fatal estado de la plaza no era desconocido al gobierno, y antes bien, confesándolo, quería que se pudiese el oportuno remedio; pero el resultado fué que por no haber librado fondo alguno para el efecto, se dejó de poner el puerto en estado de una regular defensa. Otro tanto sucedió en 1684, á pesar de haber representado la provincia al Rey la necesidad de colocar en él la competente artillería, de que carecía, por haberse sacado para la expedición de Burdeos la que existía de antes.

De los registros de las Juntas del año de 1685 se ve que se acordó en ellas representar á Su Majestad

el estado indefenso y totalmente desprevenido de esta plaza, así como de las demás de la provincia. Sin embargo, no se ve que el gobierno hubiese tomado ninguna disposición sobre el particular en medio de sus muchas promesas. Por eso la provincia en las Juntas del año de 1689 volvió á hacer presente la importancia de la seguridad de este puerto en las ocasiones de guerra, la poca prevención que había para el efecto, y la necesidad de que se estableciesen baterías en la isla de San Antón y en otros puntos, según solía haber antes. A su consecuencia, sin duda, el duque de Canzano, Capitán general de la provincia, empezó á hacer dos baterías y fortificaciones en dicho monte el año de 1690. La villa reiteró en 1693 al gobierno las súplicas anteriores de que se atendiese á la reparación de esta plaza, representando la ruina de un trozo de la muralla, de los puentes levadizos, puertas de entrada, estacadas, cuñías, etc. Hizo también presente la necesidad de construir en la isla de San Antón un baluarte servido de seis cañones de bronce, de alcance de una legua, á fin de que el enemigo no hiciese surgidero de su armada, como sucedió en 1638. Sin resultado alguno positivo de parte del gobierno aun en esta ocasión, á pesar de las gestiones hechas por la provincia en el mismo sentido, fué preciso que ofreciese esta el donativo de veinte mil ducados con destino á las fortificaciones de sus plazas. Al disponerse de esta cantidad por la Real orden de 30 de Enero de 1696, mencionada anteriormente, se mandó con respecto á esta plaza lo siguiente: 1.º Que se hiciese una batería cerrada debajo de la Casa Concejil baja y que miraba al puerto, capaz de catorce piezas, seis de bronce y ocho de fierro. 2.º Que se continuase la muralla principiada debajo de la misma Casa Concejil, de ochenta pies de longitud y cuarenta de altura. 3.º Que se reparase la casa fuerte ó torre que

servía de almacén de pólvora. 4.º Que se construyesen los puentes levadizos, puertas de la parte de mar y tierra, estacadas, etc. 5.º Que para todas estas obras se consignaban en dicho donativo cuarenta mil reales, que se consideraban por bastantes. Consta la entrega de esta cantidad por la provincia al encargado de la villa, así que los remates hechos por esta de las obras trazadas por el ingeniero D. Diego Luis Arias.

D. Pedro Fernández Navarrete, Capitán general de esta provincia, representó en 1707 á la misma de orden del Rey la necesidad de hacer reparaciones en las fortificaciones del puerto de esta villa. Las Juntas celebradas el propio año, estimando semejante reclamación, acordaron servir á Su Majestad, encargándose la misma provincia de su ejecución, así como también del montaje de su artillería, por lo que se dieron muchas gracias de Real orden. Trazáronse las obras que se debían hacer por el ingeniero militar D. Hércules Torrelí, de quien se habló antes. Consistían ellas principalmente en el arreglo y explicación de la indicada batería de catorce años al frente del puerto, en una segunda de siete piezas, la tercera de cinco, y la cuarta de dos, con todo lo necesario para su servicio. De su ejecución se encargó la misma villa, para cuyo efecto las Juntas la relevaron del pago de la foguera por tiempo de seis años. La provincia construyó además de su cuenta en San Sebastián veinte y tres cureñas, cuya conducción á Guetaria satisfizo también, por haberse negado esta villa á hacerla de su cargo. Consta que aquellas obras se ejecutaron por la misma villa, á lo menos el arreglo de la dicha batería, así que el derribo de la pared de una casa inmediata, que embarazaba en parte la retirada de la artillería con su correspondiente explicación. También se halla que el gobierno envió de Santander diez cañones de grueso calibre con su competente dotación de balas, por cuyo medio quedó

esta villa regularmente resguardada y defendida.

La plaza de Guetaria en las épocas á que me he referido precedentemente nunca estuvo guarnecida de tropa de infantería, solo sí de algún destacamento de artillería para el servicio de las baterías. Sin gobernador, ni otro jefe militar, estuvo por consiguiente confiada al patriotismo de sus propios vecinos, que vigilaron por su conservación y defensa; y solamente en ocasiones de guerra extranjera cuidó el Capitán general de enviar á su servicio desde San Sebastián alguna fuerza, en particular para el resguardo de la isla. Durante la guerra de la Independencia esta plaza estuvo guarnecida por los franceses, quienes al evacuarla en 1.º de Julio de 1813 dejaron al pie de dicho monte de San Antón una mina, cuya explosión causó daños considerables en la fortificación y muelle. Ocupada de nuevo por la tropa nacional á la salida de aquellos estuvo guarnecida por la misma hasta el año de 1814, en que la abandonó completamente, haciendo entrega de todos los cañones y demás efectos militares al ayuntamiento bajo inventario. Estos efectos se trasladaron después á la plaza de San Sebastián por disposición de la autoridad militar, demoliéndose las obras ejecutadas en el monte de San Antón.

Con motivo de esta evacuación se suscitó entre la misma villa y el Comandante de artillería de la provincia la cuestión sobre á quién pertenecía la propiedad y aprovechamiento de yerbas de dicho monte. La primera alegaba en su favor la antigua é inmemorial posesión de su goce, al paso que el segundo pretendía corresponder al Rey, y en su nombre á las autoridades militares, bajo el concepto de ser una fortaleza. El Capitán general D. Juan Carlos de Areyzaga decidió esta cuestión en 17 de Mayo del propio año, mandando que á los tres artilleros existentes se dejase la parte precisa al cultivo de las le-

gumbres y verduras para su consumo, y que lo demás se entregase á la villa. Quedó, pues, esta desde entonces en plena posesión y aprovechamiento de las yerbas y demás usos de aquella propiedad. Pero ocurrió de nuevo en 1824 otra disputa análoga entre la misma villa y el Comandante del destacamento de la tropa que la guarnecía; disputa que el Capitán general D. Manuel Llauder decidió á favor de aquella, mandando que no se le impidiese disponer del usufructo y aprovechamiento de dicho monte. Solamente impuso á la villa la obligación de cuidar que no se causase deterioro en su fortaleza y fábrica, que según Real orden debía conservarse para los objetos del servicio que pudiesen ocurrir.

Principiada la guerra civil, se dictó en 26 de Julio de 1834 una Real orden, por la cual se dispuso la inmediata fortificación de esta plaza. Así se verificó, habiéndose enviado desde San Sebastián algunos artilleros, practicando algunas obras precisas con el auxilio de los pueblos inmediatos, que contribuyeron á ello con materiales y operarios. Los carlistas derribaron el lienzo de la muralla principal de esta villa que mira á la parte de tierra por el mes de Diciembre de 1835, y habiendo penetrado por su brecha el día 1.º de Enero siguiente, retirándose la guarnición al monte de San Antón, continuaron en su posesión hasta el mes de Octubre de 1837. Se volvió á asegurar entonces la defensa de la plaza por medio de un magnífico murallón que se construyó por disposición de la autoridad militar de la provincia. Concluída la guerra civil, se desmanteló enteramente la fortificación del monte de San Antón, cuyos aprovechamientos por la villa respetó otra vez el Comandante general, no obstante la contradicción hecha por el gobernador de la plaza, con el empeño manifestado de utilizarse el mismo de sus yerbas. En 31 de Mayo de 1844 se desplomaron en gran parte las fortifica-

ciones de la izquierda sobre el punto denominado Catrapona-Chiquia, á cuya consecuencia quedó obstruído el paso para el muelle. Se reparó esta avería con el auxilio de la provincia; pero no tardó en retirarse la tropa de la guarnición, así que el gobernador, con lo cual quedó abandonado este punto militar. Como plaza de armas para la defensa de la parte de tierra, es incapaz de sostener un sitio regular, por estar dominada de montes inmediatos; y para el resguardo del puerto parece que el monte de San Antón es el más apropiado, como la experiencia lo ha demostrado. De contado, las baterías de la villa no pudieron defender en 1638 á la escuadra del almirante D. Lope de Hoces, que habiéndose refugiado á este puerto, fué destruída dentro del mismo por la francesa enemiga.

MOTRICO.

También se sabe que el rey D. Alonso VIII mandó cercar y fortificar esta villa en 1209, principalmente para la defensa de la parte marítima, ó la entrada de su puerto. Consiguiente á este intento, se ve que D. Alonso X en el privilegio que despachó en Burgos á 16 de Mayo de 1256, al tiempo de señalarla su término jurisdiccional, decía á los de esta villa: »mando vos que vos ayuntades todos de las comarcas á facerme esta mi villa, é esta mi puebla, é que »fagades vuestra cerca muy buena, etc.» Por otro privilegio librado en Valladolid á 3 de Agosto de 1374 se hizo á esta villa la merced de la renta anual de dos mil maravedís de la moneda usual de diez dineros cada uno para reparación de sus muros. Fundóse para ello en la consideración de que esta dicha villa se hallaba en frontera y mal reparada, y convenía se poblase para el mejor servicio de Su Majestad.

En vista de los precedentes datos, no puede dudarse que Motrico quedó cercada, murada y resguardada con más ó menos fortaleza en los tiempos inmediatos á su fundación; pero hay que confesar al mismo tiempo que nunca estuvo guarnecida de tropa, ni era reconocida como una verdadera plaza de armas.

Hallo que por la primera vez se trató de fortificarla en el año de 1696, al mismo tiempo que las plazas de San Sebastián, Fuenterrabía y Guetaria. De la Real orden de 30 de Enero del propio año, citada anteriormente, se ve que la villa de Motrico había representado al gobierno lo indefensa que se hallaba para el resguardo de su puerto, no teniendo más que seis piezas de fierro mal montadas, con otras cuatro de á diez y ocho, que al capitán general don García Sarmiento había entregado. Consiguientemente, se mandó que se reconociese el estado de esta plaza, y para las obras que se considerasen necesarias se señalaron dos mil reales en el reparto del donativo ofrecido por la provincia. Las que debían ejecutarse para el efecto expresado fueron trazadas el mismo año, así como las de las demás plazas, por el ingeniero D. Diego Luis Arias, quien propuso se hiciese una batería de cuatro cañones en el punto denominado Ibirriaga, propio para flanquear toda la entrada del puerto. También indicó la conveniencia de que para la mayor defensa de este se colocasen en el muelle de afuera dos ó tres piezas pequeñas; que se hiciese en él una banqueta en toda su largura para el disparo de la mosquetería, etc. Consta que la provincia entregó á la villa la mencionada suma: que habiendo ella puesto en pública almoneda la ejecución de dichas obras, las remató Juan de Elola, maestro cantero vecino de la tierra de Alquiza. Después de esta época no resulta de los papeles que he podido reconocer haberse ejecutado obra alguna importante de fortificación en esta villa. Tampoco apa-

rece que hubiese estado guarnecida de tropa de infantería ni artillería, sino es por los franceses durante la guerra de la Independencia, hallándose en las demás épocas al cargo de la autoridad local, auxiliada del vecindario.





CAPÍTULO III.

De las levantadas de gente.

Sección I.

Del servicio militar en general.



Los naturales de esta provincia, así como tienen deberes que cumplir para con la patria respecto al servicio militar, gozan también de algunos privilegios en cuanto á la extensión y manera de hacerlo. Consisten los primeros en la defensa armada del territorio, cuando fuese invadido por algún enemigo exterior, y así bien en acudir al llamamiento del monarca en los casos extraordinarios de guerra declarada con alguna potencia extranjera. Los segundos se refieren á la forma de hacer en ambos casos esta clase de servicio. De este último se hablará en la sección 2.^a de este mismo capítulo, á donde remito al lector, y por lo tanto me limito aquí á dar una idea general de esta obligación personal en lo que tiene relación con los guipuzcoanos.

Es indudable que la defensa armada del territorio en que uno habita debe considerarse como defensa propia, porque tiene por objeto salvar de la presa del enemigo los bienes de toda clase, la familia, el culto religioso, el reposo y todos los intereses que le son á uno más queridos. Consiguiente á esto es que así como los territorios más expuestos á las invasiones extranjeras deben gozar de algunas ventajas de compensación respecto de los situados más al interior, su obligación de acudir á la defensa del país sea más inmediata, estrecha y efectiva. Guipúzcoa, provincia fronteriza de Navarra y Francia por tierra y con larga costa marítima de puertos fondeables por mar, se halla precisamente en este caso. Por eso en tiempos antiguos, cuando los ejércitos reales eran escasos en número, y el gobierno supremo de la nación no prestaba sino un apoyo siempre tardío y nunca eficaz, se vió constantemente desamparada, entregada á sus solas fuerzas y en la necesidad de atender á la defensa de su suelo por medio de sus hijos y á sus propias expensas. Esta verdad se comprueba plenamente por la historia de los sucesos ocurridos en esta frontera en la multitud de invasiones hechas por los ejércitos franceses, especialmente en los años de 1476, 1512, 1522, 1638, 1719 y 1794. No es menos cierto que igual armamento tuvo lugar en las varias incursiones verificadas por los navarros, cuando todavía no estaban agregados á la Corona de Castilla, lo cual sucedió señaladamente en los años de 1321 y 1471, sin contar en otras ocasiones de menos importancia. A consecuencia de la entrada que hicieron el año últimamente citado, la provincia pidió al rey D. Enrique 4.^o la facultad de resistir á los invasores, y de reintegrarse de los robos y daños que hubiesen tenido sus habitantes. Se deferió á esta solicitud por una Real cédula librada en Orduña á 15 de Mayo del propio año, cuya parte dispositiva es digna de

consignarse. »E yo túvelo por bien, decía, porque vos
 »mando que cada é cuando entendieredes que cum-
 »ple á mi servicio, é á bien, é defensión é guarda de
 »esta dicha mi provincia é de los vecinos y morado-
 »res de eila, é de sus bienes é ganados, é otras vues-
 »tras cosas, con mano armada poderosamente por
 »vuestras personas é con vuestras gentes é armas, ó
 »en cualquier que entendieredes que más cumple, é
 »dando vos favor é ayuda los unos á los otros, é los
 »otros á los otros, resistades á los dichos navarros é
 »otras cualesquier gentes extranjeras comarcanas de
 »la dicha provincia, que vos han fecho é ficieren
 »cualquier guerra, ó robo, ó daños, ó muertes, é vo-
 »sotros así mismo que las fagades en la manera que
 »entendieredes que se debe facer, é usedes con ellos
 »según que ellos han usado y usan con vosotros,
 »reintegrando vos de los dichos robos, é males, é da-
 »ños, é injurias que vos han fecho é ficieren, etc.»

Lo expresado hasta aquí es referente á la defensa del territorio de la provincia, cuando es invadido por un enemigo extranjero. Por lo que toca al servicio personal de las armas por los guipuzcoanos, en las ocasiones de guerra fuera del mismo país, su obligación de acudir al llamamiento de los respectivos monarcas tampoco ha sido desconocida por ellos. Consta, en efecto, por la historia antigua que los tercios guipuzcoanos concurren á las batallas de las Navas de Tolosa y del Salado, á la conquista de Sevilla, á la recuperación de Gibraltar, á los cercos de Algeciras, Toro y Burgos, á las guerras del reino de Granada, á las expediciones de las islas Canarias y Nápoles. Los hijos de esta provincia tomaron también parte en las diferentes facciones militares ocurridas en Navarra, así que en las entradas armadas hechas en la tierra de Labort. Una nota que se pondrá al final de la presente sección dará alguna idea de todos estos servicios exteriores, y remito allí al

lector. Pero aunque el armamento interior ó local de los guipuzcoanos ha solido ser costeadado siempre por la misma provincia, no así el exterior, ó sea, cuando para cumplirlo han sido llamados fuera de los límites de la misma en virtud de las órdenes del monarca. Que ellos no tienen semejante obligación sin que se les pague antes el sueldo que les corresponde, se halla consignado en la Real cédula librada por los Reyes Católicos en Tarazona á 20 de Marzo de 1484. Su contexto literal en la parte principal es del tenor siguiente: «D. Fernando y Doña Isabel, por la »gracia de Dios rey y reina de Castilla, etc.: por cuanto por parte de vos la Junta é procuradores de la »nuestra noble y leal provincia de Guipúzcoa nos es »fecha relación, diciendo que de tiempo inmemorial »á esta parte tenéis privilegios de los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, é por nos confirmados, usados é guardados fasta aquí, é así mismo de uso é de costumbre antigua, de non salir de »los términos é límites de la dicha provincia, nin por »mar nin por tierra, para nos servir, sin que primeramente vos sea por nos pagado el sueldo para »la gente que así hubiere de ir á nos servir por »nuestro mandado: é por quanto ahora vosotros, como buenos é leales súbditos, nos servís para la prosecución de la guerra que mandamos facer á los »moros del reino de Granada con tres naos á vuestra costa é misiones, excepto solamente el pan que »nos vos mandamos dar en pago del dicho sueldo »para la gente que así ha de ir con las dichas naos, »é nos suplicastes é pedistes por merced vos mandásemos confirmar é aprobar los dichos privilegios, é »uso, é costumbre antigua, que así decís que tenéis »non embargante el dicho servicio, que agora por »nuestro mandado nos facéis, ó como la nuestra merced fuese. E nos tuvimoslo por bien, é mandamos »dar, é dimos esta nuestra carta, en la dicha razón,

»por la cual aprobamos é confirmamos los dichos
 »privilegios, é buenos usos, é costumbres, que así de-
 »cís que tenéis, para que de aquí adelante vos sean
 »guardados así y según y en la manera que fasta
 »aquí vos han sido guardados, é queremos é es nues-
 »tra merced é voluntad que por razón del dicho ser-
 »vicio, que agora nos facéis de las dichas tres naos,
 »non vos sean quebrantados los dichos vuestros pri-
 »vilegios, é buenos usos, é costumbres antiguas, que
 »hubieredes é tenedes, mas que por dar en su fuerza
 »y vigor para adelante, etc.»

La precedente Real cédula, cuyo original existe en el archivo de la provincia, se halla inserta en el título 41 de la recopilación de los fueros, á los fólíos 358 y 359. Debo advertir sin embargo, al lector que contiene algunas inexactitudes, que he corregido aquí. Los que redactaron esta recopilación para su impresión formaron el capítulo 1.º, título 24, acomodando á sus ideas un preámbulo largo que no se encuentra en la Real cédula citada. Su parte preceptiva, que empieza desde las palabras *ordenamos y mandamos*, tampoco está sacada literalmente de esta, como lo notará el lector cotejando el texto de dicho capítulo con el de la Real cédula íntegra. De aquí se ve que solamente el contenido de esta última debe servir de fundamento legal en esta materia, y no lo expresado en el citado capítulo 1.º del título 24. Su contexto revela de todos modos que el privilegio comprendido en él tiene un origen mucho más remoto que el de la fecha que figura en la Real cédula. Descubre, en efecto, que la provincia había representado á Sus Majestades Católicas que gozaba de esta prerrogativa desde tiempo inmemorial por concesión de los reyes predecesores, confirmada, usada y guardada, y así mismo por uso y costumbre antigua. Aparece también de su contenido que la provincia estaba sirviendo en la guerra del reino de Granada con

tres naves á su costa y misión, á excepción del pan que suministraba la Real Hacienda. Por esta circunstancia, habiendo creído aquella que semejante hecho podía tal vez perjudicar á su antiguo privilegio de no costear esta clase de armamentos, trató sin duda de consignar formalmente como una especie de protesta ó reserva de derechos para los casos ulteriores, según se hizo por medio de la mencionada Real Cédula.

Si nos remontamos á tiempos algún tanto anteriores, hallaremos acaso el origen del indicado privilegio en la calidad de nobles hijosdalgo, de que siempre han gozado los guipuzcoanos. Una memoria antigua del monasterio de Oña citada por el P. Berganza, con la cual está conforme la *crónica general*, dice que el conde D. Sancho García, entre otros fueros, dió á los nobles castellanos el de que no fuesen en hueste sin soldada de su Señor, pues que anteriormente tenían obligación de acompañarle sin ninguna soldada. Esta prerogativa se insertó después en el *Fuero viejo de Castilla*, cuya ley 1.^a, título 3.^o, libro 1.^o, forma con la extensión que puede verse allí, diciendo que esto era fuero de Castilla. Se comunicó sin duda á los guipuzcoanos, cuando se unieron á este reino, si es que en el estado anterior no gozaba de tal privilegio; y es lo cierto que todavía lo conservaban sin novedad en tiempo de los Reyes Católicos. No voy por lo tanto á detenerme á examinar aquí la mayor ó menor importancia de este fuero; tampoco discutiré si por haberlo perdido los demás pueblos de Castilla, que lo poseyeron en lo antiguo, es razón bastante para que también lo pierda esta provincia. Yo consigno aquí solamente el hecho de la posesión en que se hallan los naturales de ella, remitiendo por lo demás al lector á la Sección II, Capítulo I, libro IV, sobre la naturaleza de este fuero, así como respecto de los demás.

NOTA

de los servicios de la gente armada, que ha dado Guipúzcoa para fuera de su territorio, formada por años.

1212. Los tercios de esta provincia se hallaron en la batalla de las Navas de Tolosa, como también en la recuperación de Ubeda, Alcoraz, y de otras poblaciones de Andalucía ocupadas por los moros.

1330. Los mismos sirvieron á D. Alonso XI contra los moros en la conquista de Teba, tierras de las Cuevas y Ortexica, y en la recuperación de las villas de Priego y Cañete.

1334. En este año hicieron una entrada en Navarra en guerra con Castilla; talaron la comarca de Pamplona, y tomaron á fuerza de armas el castillo de Unza, siendo su mayoral Lope García de Lazcano.

1340. Se hallaron en la batalla del Salado al mando de Amador de Lazcano, su coronel.

1343. Concurrieron en gran número al cerco de la ciudad de Algeciras con su caudillo D. Beltrán Vélez de Guevara.

1374 Asistieron á la expedición de Francia y sitio de la ciudad de Bayona con el Rey D. Enrique II, que vino en persona, siendo su caudillo al parecer D. Beltrán de Guevara.

1378. Hicieron entrada en Navarra con el Infante D. Juan en gran número, obteniendo varios sucesos victoriosos al mando de Ruiz Díaz de Rojas, merino mayor de la provincia.

1410. Los tercios guipuzcoanos, acaudillados por D. Fernán Pérez de Ayala, concurrieron á la conquista de la ciudad de Antequera ocupada por los moros.

1429. De orden del Rey hicieron otra entrada

en Navarra, donde á fuerza de armas conquistaron las villas de Leiza y Areso, cuya posesión encomendó al Consejo de la de Tolosa.

1445. Fuerzas considerables de naturales de esta provincia sirvieron al Rey de Castilla contra el de Navarra en la batalla de Olmedo.

1475. Más de 2000 naturales de esta provincia sirvieron á los Reyes Católicos en los cercos de Toro, Zamora, Burgos, etc., así que en otras facciones militares ocurridas entonces.

1485. Diferentes refuerzos de ballesteros y escopeteros de esta provincia acuden á la guerra de Granada contra los moros.

1512. Tercios guipuzcoanos en número de 3500 salen al encuentro de los franceses, que se retiraban del cerco de Pamplona, y en el monte de Belate los derrotan y quitan la artillería.

1516. Otros 2500 guipuzcoanos asisten al socorro de la fortaleza de San Juan de Pie de Puerto amenazada por los franceses.

1521. Con motivo de la entrada del ejército francés en Navarra, acuden á este reino 3500 tercios guipuzcoanos repartidos en 24 compañías, al mando de su coronel D. Juan Manrique de Lara, y maestre de Campo Juan Pérez de Anciondo, y toman parte activa en la batalla de Noain.

1542. A consecuencia de la guerra con Francia, la provincia pone á las órdenes del virrey de Navarra 3000 naturales con su coronel D. Felipe de Lazcano para la entrada que hizo en la tierra de Labort.

1558. La provincia sirve á Su Majestad con 3500 naturales en la entrada que se hizo en Francia á incendiar la villa de San Juan de Luz.

1631. Acompañan al Infante Cardenal 400 guipuzcoanos en el viaje que hizo á Flandes.

1636. Se hace armamento general y entran 4000 hombres en la tierra de Labort hasta Bayona, al

mando de su coronel D. Diego de Sarmiento.

1794. Con motivo de la guerra con Francia, la provincia se arma en masa, y 4600 de sus hijos en el territorio de aquella entonces república, siendo su coronel.....

SECCIÓN II.

Del armamento foral.

Por fuero y costumbre observados desde tiempo inmemorial, Guipúzcoa tiene su armamento foral, ó sea un método peculiar de organización militar. Practica también una manera que le es propia para prestar el servicio de las armas en defensa del monarca y de la patria, cuando estos sagrados objetos tengan necesidad de la concurrencia de sus hijos. Ante todas cosas hay que presuponer para esto: que cuando su territorio es invadido por un ejército extranjero, ó por alguna persona poderosa, todo guipuzcoano se halla obligado á salir á su defensa; y por eso se dice que todos los vecinos y moradores de los pueblos de la provincia, padre por hijo, deben en tal caso acudir á repeler al invasor. Este deber se halla expreso y terminante en una Real cédula librada á petición de la provincia por D. Enrique IV en Toledo á 23 de Noviembre de 1473. Su texto literal, es como sigue: «Si »por aventura algún Conde ó Señor, ú otra gente extranjera poderosa, quisiese apoderarse, ó tentare de »se apoderar de alguna de las villas, ó cualesquier »casas, ó lugares de la dicha provincia; que todos los »vecinos ó moradores de las dichas villas ó lugares, »sin esperar unos á otros, luego que fuere dado el »apellido ó supieren en cualquier otra manera, padre »por hijo que recudan sobre la tal villa, lugar ó casa, »de que se quisiere apoderar, ó se apoderaren ó tentaren de se apoderar; é trabajen con todas sus fuerzas, si cercaren algunas de las dichas villas, lugares

»ó casas, por la descercar; é si se apoderasen de ella,
»por los echar de ella, é por poner en su libertad á la
»tal villa, lugar ó casa, que dé apellido á las dichas
»villas y lugares. Item si algún veciuo ó vecinos
»de cualquier de las dichas villas ó lugares fuere
»muerto, ó preso ó cercado en alguna casa por cual-
»quier Conde ó Señor, ó por cualquier gente extran-
»jera, ó por algún pariente mayor de esta dicha pro-
»vincia; como lo tal conteciese, luego se dé apellido
»al lugar de la necesidad que ocurriere, é las dichas
»villas é lugares, é sus gentes, acudan al lugar para
»donde fuere dado el apellido padre por hijo. Otro
»sí, si fuere muerto alguno, que trabajen con todas
»sus fuerzas por vengar la tal muerte, é si fuere preso
»por soltar, é si fuere cercado por descercar, á costa
»y misión de las dichas villas y lugares: é si algunos
»delincuentes é cometedores de los dichos casos ó al-
»guno de ellos, vengando la dicha muerte, ó por sol-
»tar el dicho preso ó presos, ó por descercar al que
»estuviere cercado ó encerrado, fueren muertos ó he-
»ridos, que las dichas villas ó lugares, se fagan due-
»ños, é sostengan á los dichos matadores é feridores
»á costa é misión de la provincia: é que las villas é
»lugares, donde se diese el tal apellido, sean tenidos
»de se levantar é acudir al dicho apellido ó lugar
»donde ocurriere la dicha necesidad, so pena de mil
»doblas á cada un Concejo, é cada cien doblas á cada
»persona singular.»

Los guipuzcoanos deben cumplir este servicio alis-
tándose para el efecto personalmente debajo de la
bandera de la ciudad, villa ó lugar donde fuere ve-
cino. Tan estricta se ha considerado semejante obli-
gación de concurrencia personal en las ocasiones de
guerra declarada que no se ha querido eximir de ella
ni aun á los parientes mayores, caballeros de las ór-
denes militares, ni á otras personas algunas privile-
giadas. Esta ordenanza se comprueba por el contexto

de dos reales cédulas que se hallan insertas en el título 24 de la recopilación foral. La primera, que es de 7 de Marzo de 1625, está concebida en los términos siguientes: «La provincia de Guipúzcoa me ha representado que algunos particulares hijos suyos han intentado eximirse de ir debajo de banderas de las villas en ocasiones de guerras, como eran los caballeros hijosdalgo de aquella provincia; y que siendo esto contra mi servicio, es en perjuicio suyo. He acordado que cualesquiera órdenes ó decretos míos, de que se pueda haberse causado esta novedad, y las cédulas que en virtud de ellos se han despachado, se suspendan en cualquier estado en que estuvieren, y se use de ellos por ningún caso; y que el Consejo, oyendo á las partes, y calificando el derecho de sus pretensiones, me consulte lo que pareciere.»

El motivo que hubo para dictarse esta real determinación ya queda explicado en la Sección 1.ª, Capítulo 1.º, libro 2.º de esta misma obra. Podrá verse allí cómo ciertos caballeros, denominados en lo antiguo parientes mayores, celebraron en Villabona en 1624 una reunión confidencial. Su objeto, según el concepto público, era el de eximirse de servir en las banderas de los respectivos pueblos, formando ellos mismos alguna fuerza independiente, para acudir á la defensa de la provincia amenazada de invasión por el francés. He aquí la razón que movió á la provincia para solicitar al Rey la derogación de todos los privilegios en materia de servicio militar en casos de guerra, contenidas en dicha Real cédula; que equivale á la igualdad de obligaciones entre los guipuzcoanos, sin distinción de categorías sociales de ninguna clase. La misma es también la que le hizo insistir en suplicar y obtener la segunda Real cédula; que fué librada en Barbastro á 4 de Febrero de 1626. Por ella, en confirmación de la que se ha

copiado, se autoriza á la provincia, así como también al Corregidor de la misma, para obligar con graves penas á los tales caballeros y demás personas privilegiadas á que se alistasen y fuesen debajo de la bandera del pueblo de su domicilio; sin que en manera alguna pudiesen pretender formar cuerpo independiente de la Coronelía de la provincia. Sin embargo, esta obligación de los caballeros de las órdenes militares de servir en las banderas de sus pueblos se limitó por otra Real cédula de 23 de Febrero de 1649 á las ocasiones precisas de acontecimientos de la provincia en que sus naturales salgan padre por hijo. La misma les eximió de la obligación de salir á servir fuera del distrito de Guipúzcoa, á menos que el Rey saliese al ejército, ó se ofreciese ocasión tan precisa, que con particular orden declarase Su Majestad que deben concurrir en ella. Tal es el último estado de la legislación militar de la provincia acerca de la presente materia.

Consiguiente á esta obligación general de los guipuzcoanos de acudir á la defensa del país en los casos de invasión extranjera, era la necesidad de que estuviesen alistados, organizados militarmente, y provistos de armas. Ninguna de tales prevenciones estaba ciertamente de más en una provincia fronteriza como Guipúzcoa; amenazada constantemente por un enemigo poderoso, guerrero é inquieto, cual era el francés. Todos los pueblos tenían por lo tanto para dicho efecto en sus casas consistoriales cierto número de armas de fuego y blancas, tambores, pífanos y demás enseres necesarios para la guerra; en cuya buena conservación ponían el debido cuidado los respectivos ayuntamientos, jefes natos de la fuerza. Ellos, también desde tiempo inmemorial, hacían todos los años en épocas determinadas de festividades solemnes, tales como el Corpus Christi y San Juan] Bautista los alardes, muestras de armas y revistas de la

gente. De aquí la necesidad de que todos los ayuntamientos acreditasen estas facciones militares por medio de los competentes testimonios, que debían remitir á las Juntas generales de la provincia. Las villas y demás pueblos, que se gobernaban por sí, ejecutaban dichos alardes, etc., en las plazas públicas de los mismos; pero los lugares que dependían de la jurisdicción de las primeras tenían que presentarse en estas para dicho efecto. Semejante concurrencia de las vecindades á las cabezas de sus respectivas jurisdicciones fué resistida en particular por las dependientes de la villa de Segura; resistencia, que dió motivo á algunos altercados y largos pleitos en tela de justicia. La provincia tomó parte en estas diferencias, y á su petición se expidió una Real cédula su fecha 18 de Junio de 1528, por la cual se mandó se guardase la costumbre antigua de que los lugares fuesen á hacer los alardes á las cabezas de las respectivas jurisdicciones. Por otra de 10 de Diciembre de 1595 se declaró que la costumbre, derecho y ejecutorias que tuviesen algunas vecindades eximiéndoles de semejante concurrencia debía entenderse únicamente en los casos en que no precediere mandato real para hacer los alardes. Esta disposición se mandó cumplir y ejecutar por las Juntas de Zarauz de 1600.

De todo lo expresado hasta aquí se vé que la provincia ha tenido desde los tiempos más antiguos una milicia permanente de todos sus naturales, que fuesen capaces de llevar las armas. Con ella hizo la defensa de su frontera en las guerras que tuvo, tanto terrestres como marítimas, con Francia y otras naciones, de que dá buen testimonio la historia. Sin embargo, es preciso reconocer que semejante organización militar era muy imperfecta, atendidos los adelantos que ha hecho el arte de la guerra. Por lo mismo se trató de mejorarla, para los acontecimientos

políticos que pudiesen sobrevenir en el reino, por medio de un reglamento. Este fué acordado por las Juntas generales de Villafranca de 1823 modificado por las particulares de Azcoitia del mismo año, y reformado nuevamente por las generales de Zumaya de 1825 y de Vergara de 1827. Respecto de sus disposiciones me limitaré aquí á decir que, con arreglo á esta última organización, se formaron en toda la provincia ocho batallones de Tercios, compuestos de naturales de otros tantos partidos, con la fuerza numérica de 4662 hombres efectivos. Fué entónces la vez primera en que se creó una Coronelía permanente, destinada á dirigirlos; puesto que anteriormente este empleo era temporal, para mientras duraba la ocasión, que hacia necesario su ejercicio. Esta desviación de la práctica antigua tuvo por objeto aquietar el empeño del gobierno del rey de crear en esta provincia, como en otros, cuerpos de voluntarios realistas; institución que repugnaba á la mayoría sensata de la misma, por no ver en ella sino un medio de oprimir á los que no pertenecían á las opiniones monárquicas exaltadas. Por evitar pues este inconveniente fué preciso armar el país en masa, y sin distinción de colores políticos, como lo exigían las razones de concordia. Tal armamento subsistió hasta el mes de Octubre de 1833, en que principió la guerra civil; desapareciendo entónces por efecto de la misma.

Guipúzcoa desde tiempo inmemorial ha gozado de la singular prerogativa de nombrar el Coronel, ó sea caudillo principal de la gente armada de sus naturales; no solamente en los casos de invasión extranjera, sino también para mandar la destinada á operar fuera del país en ocasiones de guerra. Esta regalía procede sin duda de la antigua organización de milicias, en que cada ciudad, villa ó provincia levantaba el número de gente que podía, y la

arreglaba en la manera que le permitían sus conocimientos militares. De la numerosa repetición de elecciones hechas por la provincia quedó constituida una práctica constante, y de esta una costumbre tan arraigada, que llegó á adquirir la fuerza de un verdadero fuero. Así es que se halla que Gil López de Oñaz, vecino del lugar de Amasa, acandillaba en 1321 á los guipuzcoanos en la batalla de Beotibar; y que Lope García de Lazcano, que lo era del Concejo del mismo nombre, era jefe de la gente de esta provincia en la entrada que hizo en Navarra en 1334, verdad es que no consta los nombres de otros que en el mismo siglo y aun en el siguiente desempeñaron estos cargos en las diversas facciones militares que ocurrieron; pero no se puede dudar de que fueron nombrados por la misma provincia, según lo prueba la práctica posterior. Lo que no tiene duda es que el rey Católico D. Fernando V. pasó á los parientes mayores de esta provincia desde Burgos en 28 de Mayo de 1512 una carta con encargo de que se apercibiesen con todos sus dependientes para la guerra contra Navarra, y cosa natural era que ellos también acandillasen la gente que armasen y mantuviesen. Parientes mayores de la provincia de Guipúzcoa, dice, «Yo escribo al corregidor de la dicha »provincia que de mi parte os hable lo que os dirá »sobre el apercibimiento de vuestras personas, casa »y parientes; por lo que yo vos eucargo le deis entera fé y crédito, y que aquello pongais así por obra, que en ello nos servireis.» En otra carta escrita por el emperador á Juan Beltrán de Iraeta desde Pamplona á 6 de Noviembre de 1523 se hace igual encargo.

Aparece, sin embargo, que los capitanes de los tercios de Guipúzcoa reunidos en la Iglesia de Santa María de la villa de la Guardia, al paso para Logroño, nombraron en 19 de Junio de 1521 por su

Coronel á D. Juan Manrique, hijo primogénito del Duque de Nágera, y por maestro de Campo á Juan Pérez de Auciando, vecino de Tolosa, repostero de la reina. Este acto se verificó en escritura otorgada ante Martín de Otazu, escribano de esta última villa, y es el documento más antiguo que se encuentra de nombramiento de Coronel de la gente de Guipúzcoa. Se verificó por sus capitanes por la precipitación con que se pusieron en marcha al socorro de la expresada ciudad, sin que la provincia hubiese tenido tiempo para congregarse en Junta general ni particular para hacer el nombramiento. No es menos cierto que D. Juan Ortiz de Gamboa natural de Zarauz, mereció de la provincia congregada en San Sebastián en Junta particular el día 3 de Enero de 1524 el honor de ser nombrado Coronel de los dos mil hombres levantados para la recuperación de la plaza de Fuenterrabía ocupada por los franceses. Consta también que en 1542 la provincia nombró á D. Felipe Lazcano por Coronel de los tres mil hombres, que envió al ejército de Navarra para la entrada en Francia. Del mismo modo que en 1557 eligió á don Juan de Borja, señor de la casa solar de Loyola, por Coronel de los tercios destinados á la guerra de San Juan de Luz. Nombró igualmente en 1615 á don Alonso de Idiáquez Duque de Ciudad Real, para el recibimiento del rey D. Felipe III: en 1625 á D. Martín de Aróstegui, para la defensa de la provincia amenazada por el francés: en 1631 á D. Diego de Isasi para el mismo objeto: en 1636 al propio para la ocupación de los pueblos de Hendaya, Urruña y otros de Francia: en 1639 á D. Martín de Arrese Girón, marqués de Casares, para la defensa de la frontera: en 1681 á D. Domingo de Isasi con igual objeto. No aparece en el siglo XVIII más nombramiento de Coronel que el del marqués de Valmediano, y por su impedimento del marqués de Santa

Cruz, en 1794, con motivo de la guerra con la república francesa. En el presente tampoco ha ocurrido otro que el del conde de Villafranca de Gaytan, verificado en 1825 por la Diputación extraordinaria mediante delegación de las Juntas generales.

El derecho foral de la provincia para el nombramiento del coronel de su gente nunca le fué negado por el gobierno de los reyes de Castilla; y al contrario ha sido reconocido por él en algunas ocasiones, como se vé de los ejemplares siguientes. Una Real orden dada por la reina gobernadora en 30 de Abril de 1557 expresa que no solamente había parecido bien á Su Magestad el nombramiento de tal caudillo hecho en D. Juan de Borja, sino que en carga se procediese á hacer la elección de los capitanes que debían mandar la fuerza que se levantase. Las Reales cédulas de 13 de Marzo y 22 de Abril de 1636, de que luego hablaré, dán también por supuesta semejante regalía; pues no solamente determinan la forma en qué el Capitán general debía corresponderse con el coronel de la provincia, sino que usa de las palabras *vuestro Coronel*. Por lo que D. Felipe V. en 19 de Enero de 1656 comunicó á la provincia, con motivo de los temores de guerra con Inglaterra, le encargó que estuviese prevenida para la defenza de sus plazas fuertes y puertos de mar. Añadía que, siguiendo lo que en otras ocasiones había acostumbrado, nombráse luego Coronel de la gente que se hubiese de alistar; eligiendo para este puesto persona de toda su satisfacción que organizáse las compañías de sus naturales, D. Carlos II. en otra Real cédula librada en 1.º de Febrero de 1682 manifestó así bien á la provincia que aprobaba la medida tomada por esta de formar Diputación á guerra, para tratar de la defensa del país como también para nombrar el Coronel y Sargentos mayores de la gente. Finalmente en Real orden de 6 de Marzo de

1794 se dijo á la provincia que Su Magestad tenía por inexcusable el que hiciese la elección de sugeto, que sirviese el empleo de Coronel con todas las facultades anexas. Consiguientemente le mandaba procediese sin la menor dilación al nombramiento de este caudillo, conforme á lo prevenido por su fuero, en persona que fuese de su satisfacción. En cumplimiento de esta Real resolución, la provincia nombró por tal Coronel al marqués de Valmediano, dando conocimiento de ello al gobierno; sin embargo, por otra Real orden se le manifestó que aunque á Su Magestad sería muy grato esta elección, si la actualidad del servicio inmediato á su Real persona no se lo impidiese, había tenido á bien el que no se emplease en tan honroso encargo. Al trasladar á la provincia esta Real orden de 31 del mismo mes de Marzo, se le encargó procediese á la elección de otra persona de su satisfacción, para el referido empleo de Coronel de las compañías de sus naturales; como la verificó en el marqués de Santa Cruz, que tampoco aceptó, y quedó la cosa en tal estado.

La elección de Coronel de los tercios de Guipúzcoa comunmente se ha hecho por la Junta general ó particular, y alguna vez que otra en virtud de su delegación por la Diputación. Para el ejercicio de sus funciones los así nombrados no han necesitado de confirmación de los monarcas; solamente del título que les ha solido expedir la provincia conforme al estilo común de la milicia. Esto no ha impedido el que la provincia, guardando la debida urbanidad y para conocimiento de las demás autoridades haya puesto en noticia del gobierno la elección que hubiese hecho. Tampoco el que este en contestación haya manifestado alguna vez que ella había parecido bien á Su Magestad ó cosa semejante. Por lo demás, como la autoridad del Coronel emana de la Provincia, su ejercicio depende también de la misma, ó de la Di-

putación que la representa; por más que en las operaciones de campaña que requieren unidad de acción y un centro de dirección, tenga que concurrir á la ejecución de las disposiciones del Capitán general. Sin embargo, no debe corresponderse este con la Provincia y su Coronel por orden, sino por vía de aviso y advertimiento; práctica cuya antigüedad se halla reconocida por una Real cédula de 16 de Septiembre de 1597, inserta en la recopilación foral. Tal uso fué confirmado por otra Real orden de 13 de Marzo de 1636, en la cual entre otras cosas se dijo á la Provincia lo siguiente. «Por las órdenes, que »he mandado dar, tendréis entendido de la forma »con que se ha de corresponder el Capitán general »de esta Provincia con vos y vuestro Coronel y con »la gente de ella, que ha de ser por vía de aviso y »advertencia, etc.» Por otra de 22 de Abril del mismo año se manifestó el deseo de Su Magestad de conservar á la Provincia las prerogativas que tuviese en este particular, mandando que para el efecto se le presentasen los privilegios que tuviese. En Real orden de 4 de Abril de 1793 se manifestó igualmente á la Provincia que aunque el Capitán general debía entenderse con ella por vía de aviso y advertimiento, y no por orden, como lo dispuso Felipe II. y se había observado, pasasen al Coronel los avisos de lo que había de obrar, y así lo ejecutase sin resistencia ni contradicción. Se prescribió la observancia de esta disposición por otra Real orden de 12 de Julio de 1799, con inserción de la anterior.

Tal era el sistema militar que rigió en Guipúzcoa mientras subsistió el armamento foral de tercios, en substitución del método de reemplazos del ejército vigente en las provincias del interior del reino. Por eso la provincia en sus representaciones dirigidas en diversos tiempos y ocasiones á los monarcas de Castilla dijo constantemente que el sistema de quintas

era contrario á sus fueros, usos, costumbres y exenciones, en uno de sus puntos más fundamentales, más graves y más delicados. La reseña de los antecedentes de esta materia, que acaba de hacerse, acerca de la manera con que se ha procedido ella desde tiempo inmemorial en el ramo militar, parece justifica la exactitud de aquel aserto. Por lo mismo consideraría por el acto de gobierno el más impolítico y el más imprudente el en que se tratase de nivelar á esta provincia en dicho ramo con lo que se observa en el resto de la nación.

NOTA

de los armamentos que ha hecho Guipúzcoa para la defensa de su territorio por años.

1321. Los tercios guipuzcoanos acaudillados por Gil López de Oñaz concurrieron á la batalla dada en el campo de Beotibar contra los navarros y franceses gascones reunidos, que invadieron el territorio guipuzcoano, entrando por Berástegui.

1450. Se armaron y apercibieron para la defensa del territorio con motivo de la llegada de un ejército francés sobre Bayona ocupada por los ingleses, y temores de invasión.

1451. Guipúzcoa hizo igual armamento de sus hijos á consecuencia de la entrada del Conde de Fox en la provincia de Labort.

1461. Armáronse también este año, y acudieron al socorro del castillo de Aitzorroz, sito en el valle de Léniz, padeciendo grandes trabajos.

1466. La provincia hizo otra levantada este año con el fin de apoderarse del castillo de Veloaga en Oyarzun ocupada por el mariscal García López de Ayala, según lo había mandado el Rey, teniéndolo después á la disposición de Su Majestad.

1476. Se armó también en considerable número

para la defensa del país, y en especial para la de las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía, con motivo de la invasión del ejército francés de 40000 hombres al mando de Aman, Señor de Labrit.

1512. Toda la provincia se arma en masa, padre por hijo, para la defensa de su territorio, invadido por un numeroso ejército francés.

1516. Viéndose la provincia amenazada por los franceses, hace otra levantada general y 500 naturales entran en las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía para su defensa.

1521. Guipúzcoa vuelve á hacer otro armamento general con motivo de la invasión de los franceses en su territorio y en Navarra.

1524. Este año concurren 2000 guipuzcoanos mandados por su coronel Juan Ortiz de Gamboa á la recuperación de la plaza de Fuenterrabía, que había sido de antes ocupada por los franceses.

1542. Con motivo de la publicación de la guerra con Francia, la provincia entra 2000 de sus naturales en las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía para su defensa en caso de ser asediadas.

1558. La provincia, hace levantada general padre por hijo, á consecuencia de haberse acercado á la frontera tropas francesas después de la entrada hecha por las españolas en tierra de Labort.

1579. Hizo también armamento general á consecuencia de haberse aproximado á la frontera numerosas fuerzas del ejército francés.

1597. Por igual motivo hubo este año tres levantadas de gente para la defensa del territorio, para cuyo efecto acudieron 3000 hombres á la villa de Irún y plaza de Fuenterrabía.

1625. Se arman y arriman á la frontera 4000 naturales de la provincia, á consecuencia de recelos de invasión de los franceses, permaneciendo á costa de la misma en Irún por espacio de cincuenta días.

1632. Prevención general de la gente de armas tomar de la provincia, con motivo de la guerra con Francia, con asistencia de una parte de ella á los muros de la plaza de Fuenterrabía.

1638 y 1639. Levantada general padre por hijo, á consecuencia de la invasión del francés, asedio de la plaza de Fuenterrabía, y resguardo posterior de la frontera.

1667. Con motivo de la declaración de guerra con Francia, y sucesiva ruptura de hostilidades, entran 300 naturales en Fuenterrabía para su defensa.

1674. Armamento de 600 hombres para el resguardo de la frontera y defensa de Fuenterrabía.

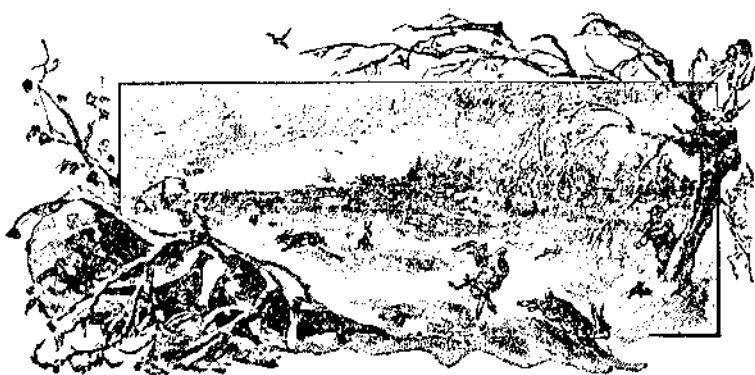
1681. Prevención general de la gente de armas tomar, pronto para acudir al primer aviso con motivo de las amenazas de invasión del francés.

1700. Se arman 400 naturales y entran en la plaza de Fuenterrabía para su defensa, por temores de invasión de franceses.

1719. La provincia hace un armamento de 5000 hombres para su defensa, á consecuencia de la entrada del ejército francés al mando del mariscal duque de Berwik.

1793. Con motivo de la guerra con Francia, la provincia arma 4600 hombres, cuyo coronel fué el marqués de Santa Cruz, los cuales sirvieron á las ordenes superiores del Capitán general, entrando en territorio de aquella entonces república. Esto sin perjuicio y además del batallón de 750 voluntarios de la misma provincia, de que hablé antes.





CAPÍTULO IV.

De los asuntos de mar.

Sección I.

De las autoridades marítimas.

No se tiene noticia de que en los tiempos antiguos hubiese en los puertos de Guipúzcoa autoridad alguna particular del ramo de marina, ó sea otra que la militar y la ordinaria de los alcaldes. Aparece sí la existencia de un veedor del almirantazgo, más adelante la del superintendente de plantíos en San Sebastián; pero las funciones de estos empleados reales, más que de autoridades de marina, eran del ramo del resguardo de mercaderías ilícitas y del fomento de montes. El establecimiento de Comisarios de marina, ó sea de funcionarios pertenecientes á la hacienda de la misma, puede por lo tanto referirse en esta provincia á los principios del siglo XVIII. Desde entonces se encuentra una larga série de ellos con la denominación de Comisarios ordenadores, que indica

corresponder al cuerpo administrativo más bien que al militar facultativo.

Las atribuciones de estos delegados para las cosas marítimas debieron limitarse á promover las levas de la marinería, inspeccionar el estado de los montes, y cuidar en sus casos de la fábrica de los buques de la Real armada. Más adelante, cuando estos empleos radicaron mejor, se quiso darles alguna más intervención, ya sea respecto de la navegación, ya en cuanto á la pesca, ya en algunas otras materias. Se trató, en una palabra, de constituirlos en una verdadera autoridad militar provincial de marina, confiriéndoles jurisdicción civil y criminal, que hubiesen de ejercerla con la asistencia de un asesor letrado. Guipúzcoa se resistió constantemente á reconocer en su territorio semejante judicatura, cuya existencia no aparece consignada en sus fueros, ordenanzas y leyes. A la verdad, toda su legislación supone que la jurisdicción contenciosa de su distrito debe estar repartida entre las justicias ordinarias y el Capitán general, según los casos respectivos, y cuanto saliese de esta esfera se ha considerado como una herida causada á las instituciones del país. Pero en honor de la verdad, es preciso manifestar aquí que el gobierno del Rey procuró generalmente conciliar con estas sus propias exigencias. Tal sucedió respecto de la ordenanza de 1.º de Enero de 1751, cuyas prescripciones generales se modificaron considerablemente en favor de las libertades, usos y costumbres de estos naturales, restringiendo la autoridad de los Comandantes de marina en varios puntos. Como se dirá después más detalladamente, esto sucedió especialmente en cuanto á las matrículas, levas, navegación, pesca, varadas y naufragios. La judicatura de los Comandantes de marina no por eso quedó suprimida en principio á virtud de aquella Real orden; pues al prohibir á los guipuzcoanos servir en barcos

extranjeros, y abrigar en los suyos á los desertores de la matrícula de otras provincias, la conservó terminantemente. «Siendo el Ministro de marina, dice, »Juez privativo en estos asuntos con facultad de perseguir y aprehender los contraventores, y no menos »con la declarada por el artículo 189 de proceder »contra los guipuzcoanos desertores de los bajeles de »Su Majestad, sin que las justicias se opongan, antes »le franqueen todo el auxilio, que de ellas impartiere.»

Como bien se sabe el Real decreto de 18 de Abril de 1800 dió á los Comandantes de marina de los puertos el carácter puramente militar, separando de ellos las funciones del ramo de Hacienda. Su ejercicio fué por consiguiente encomendado exclusivamente á oficiales del cuerpo general de la Real armada; y aunque el que á la sazón tenía aquel ministerio carecía de semejante circunstancia, la provincia recomendó al gobierno su permanencia en el puesto con las mismas facultades anteriores. El Rey no tuvo por conveniente acceder á esta pretensión de la provincia y nombró por Comandante militar de ella con el carácter expresado al Capitán de navío D. José de Astigarraga quien se posesionó del cargo en 30 de Mayo del mismo año. No por eso dejó de volver á representar á Su Majestad sobre la inteligencia de aquel decreto, solicitando en su consecuencia algunas declaraciones sobre la extensión del mando conferido á dicho nuevo funcionario, cuyo ejercicio podía perjudicar á las regalías de la provincia. La resolución del gobierno á esta gestión no se hizo esperar por mucho tiempo. Por Real orden dada en San Lorenzo á 6 de Octubre del mismo año se declaró en efecto, que el nuevo arreglo mencionado, «no había de alterar por entonces lo que estaba mandado para el régimen y gobierno de dicha jurisdicción en la ordenanza del año de 1751, y que por consiguiente en

»nada podía influir esta novedad contra los fueros y
»regalías particulares. de estas provincias.»

La ordenanza de matrículas de 12 de Agosto de 1802, respetando el gobierno particular de las mismas limitó también la jurisdicción de los Comandantes de marina de ellas. Cuanto se dispuso en la Real orden de 6 de Mayo de 1752 respecto á las matrículas, levas, navegación, pesca y demás actos de mar indicados, no tuvo por consiguiente novedad. Fundada en iguales consideraciones, dispone que «el
»oficial que fuese nombrado para ejercer el mando
»de la jurisdicción militar de marina en cualquiera
»de las provincias vascongadas, dará aviso de su arribo en papel de oficio á la Diputación respectiva,
»presentándola, según practica, el real nombramiento antes de posesionarse de su empleo; cuyo acto
»ha de verificarse con las formalidades prevenidas
»por punto general.» Consta que los sujetos nombrados posteriormente para el desempeño de este cargo, en cumplimiento de la precedente disposición, han exhibido á la Diputación sus reales despachos, ó que á lo menos han dado conocimiento de sus nombramientos y llegada á San Sebastián á posesionarse de ellos.

Tampoco se conoció en lo antiguo, en ninguno de los pueblos de esta provincia, funcionario de marina de nombramiento real con la denominación de capitán de puerto. Hubo solamente en el de San Sebastián un mayordomo nombrado por la cofradía de mercaderes, capitanes, maestros y pilotos de la misma ciudad, para entender en todo lo concerniente al servicio marítimo con la jurisdicción necesaria para este efecto. Este régimen se varió por D. Enrique IV por medio de reglas dictadas en la misma ciudad el año de 1463 para la dirección de los mayordomos, y se mejoró á instancia de ella por los reyes católicos 1480. Después de esto la policía de los puertos

correspondió privativamente á los respectivos alcaldes según disposiciones administrativas acordadas por la provincia en sus Juntas y diputaciones de que se ha hecho mención anteriormente en esta obra. Solamente se halla que el consulado de San Sebastián obtuvo en 1776 la facultad de nombrar un teniente de puerto para que ejerciese las funciones de la capitanía del de la misma ciudad, facultad de que hizo en adelante.

Pero como en el puerto de Pasajes, no había semejante funcionario ni otro, uno de los regidores del Ayuntamiento de San Sebastián ejerció la policía y jurisdicción del mismo. Sus agnas se hallaban en verdad, comprendidas dentro de la demarcación municipal de dicha ciudad, y como por razón de la distancia sus alcaldes no podían atender por sí mismos en la mayoría de casos, que exigen una pronta asistencia, de allí la necesidad de delegar su autoridad en los demás concejales alternativamente. Este regidor torrero, llamado así desde principios del siglo XVII, en que se construyó la torre situada á la entrada de este dicho puerto, era por consiguiente el único jefe del mismo. De él dependía la gente de mar de ambos barrios: él expedía las patentes de navegación y pesca: él era el Juez de arribadas, varadas, naufragios y presas: él ejercía por fin, la veeduría del ramo del contrabando.

Aunque las ordenanzas generales de marina, de que ya se ha hecho mención, crearon los capítulos de puerto, semejantes funcionarios no fueron por de pronto introducidos en ninguno de los puertos de esta provincia. Su instituto al principio era el desempeñar las atribuciones asignadas en dichas ordenanzas y en especial el cuidado, conservación y policía de los puertos. Pero una vez de establecidas las comandancias militares de marina á cargo de oficiales pertenecientes al cuerpo de la real armada, con las fa-

cultades y jurisdicción de que ya se ha hablado, varió también considerablemente la institución de los capitanes del cuerpo. A la verdad estos empleados, no solamente fueron dotados con las atribuciones limitadas indicadas, sino que se constituyeron en verdaderos Jueces, aunque dependientes de los comandantes, en asuntos de la navegación, pesca, averías, varadas, naufragios, etc. Semejante judicatura era, como no se puede dudar, opuesta á los fueros, usos y costumbres de esta provincia, sin cuyo quebranto no podía ser reconocida ni admitida. Por lo mismo el gobierno del rey no intentó por entonces de introducirla en ninguna de estas dos provincias marítimas, apesar del establecimiento de los comandantes militares de marina

Hallándose en este estado las cosas, ocurrió que por Real orden dada en Aranjuez en 1.º de Junio de 1805, al paso de disponerse la formación de una sola villa con los dos barrios de Pasajes se mandó que se estableciese en ella un capitán de puerto, que nombrase Su Majestad. Determinose también por ella que la ciudad de San Sebastián retirase desde luego al regidor torrero y los dependientes que tuviese en aquel puerto, cesando en el ejercicio de toda jurisdicción en él. Una medida de efectos tan trascendentales halló en su plantificación una fuerte oposición, dando motivo á que se representase contra su tenor. Hizólo, en efecto, la ciudad de San Sebastián por el perjuicio que sufría en la desmembración de su territorio y en la jurisdicción del puerto; y el Consulado de la misma se quejó así bien, por que se le privaba de la posesión en que estaba del conocimiento de las varadas y naufragios. El gobierno de Su Majestad no revocó, sin embargo, la resolución adoptada sobre el particular, como era la de uniformar el régimen de este puerto con los demás del reino. De aquí el que se suscitase luego entre el alcalde de la misma villa y

su capitán de puerto una cuestión sobre á quien correspondía dar permiso para pescar con redes dentro de él, ó mas bien determinar el grandor de las mallas que debían usarse para el efecto. Ambas partes consultaron el punto en cuestion con el excelentísimo Señor D. José de Mazarredo, uno de los generales de marina, conceptuado comunmente de los mas entendidos en las ordenanzas de la misma. Este ilustrado jefe contestó que «no se podía replicar á la exposición tan exacta como luminosa con que el alcalde resumía las funciones del capitán del puerto según la letra intergiversable de la ordenanza, para fundar que no le competía alguna en materia gubernativa de pesca.» Concluyó que en resúmen dentro del puerto de Pasajes solo correspondían á su capitán dos puntos de intervención. 1.º Ver si había inconveniente en que se pescase de noche, por razón de barcos de cuarentena, sanidad ú otro entredicho. 2.º Acordar la hora de la salida de los pescadores á la mar, de noche, para que la ronda no les impidiese. Tanto el alcalde, como el capitán del puerto, se aquietaron con este dictamen y pasaron por su contenido á causa del gran respeto que les merecía la opinión de la persona consultada.

No obstante lo que acabo de expresar, se halla que el gobierno de Su Majestad estaba resuelto á elevar al capitán del puerto de Pasajes á la categoría de una autoridad local de marina. Así es que, aprovechándose de la ocasión de las cuestiones que sostenía con el consulado de San Sebastián sobre el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, hizo dos declaraciones trascendentales en virtud de real orden de 7 de Junio de 1806. Por una parte resolvió que aunque los capitanes de puerto carecen por punto general de Jurisdicción, según las ordenanzas de la armada, el de Pasajes lo tenía en calidad de subdelegado nato del comandante, por no haber en este puerto ayudan-

te de distrito. La otra consistía en determinar que estando declarado ser este puerto de la corona real, y que su capitán ejerza las funciones de ordenanza, lo mismo que todos los de su clase en los otros puertos de los dominios de Su Majestad, correspondía á este y no al alcalde, dar las licencias para pescar, si fuesen necesarias. «Es privativo de la jurisdicción de »marina, añadía todo lo relativo á la pesca.» A consecuencia de una comunicación del alcalde de aquella misma villa tomaron conocimiento de este asunto las Juntas generales celebradas en San Sebastián por el mes de Julio del propio año, por cuyo acuerdo se remitió su determinación á la Diputación. Después de haber obtenido los dictámenes de tres abogados esta corporación representó al gobierno del rey la oposición que estas declaraciones tenían con los fueros del país. Por lo mismo solicitó la supresión de dicha capitanía de puerto, ó que á lo menos su desempeño se entendiese sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos especiales á estas provincias consignadas en la ordenanza de marina de 1751 y real órden aclaratoria de 6 de Mayo de 1752. Las gestiones que hizo la provincia sobre este asunto no hallaron, sin embargo, acogida favorable de parte del gobierno de Su Majestad.

Lejos, pues, de accederse por este á lo solicitado por aquella, se ve que por Real orden de 29 de Septiembre del mismo año se mandó que se cumpliese lo dispuesto en la de 7 de Junio anterior. «Pertene- »ciendo á Su Majestad, decía en su apoyo, el puerto »de Pasajes, su Capitán debe ejercer en él las fun- »ciones que á los de su clase prescribe la ordenanza »en los mismos términos que los demás capitanes de »todos los otros puertos de los dominios de Su Ma- »jestad.» El gobierno fué todavía más adelante en esta materia; puesto que por otra Real orden de 9 de Diciembre de 1806 se dispuso establecer capitanes de

puerto, oficiales de armada en los de San Sebastián, Guetaria, Deva, Orio, Zumaya y Motrico. Se añadía que estos debían ejercer en ellos las funciones de ordenanza, del mismo modo que se practicaba en Pasajes y demás puertos de los dominios de Su Majestad. Por la propia Real orden quedó nombrado para el de San Sebastián D. Lorenzo de Mestreitua, teniente de fragata de la Real armada, y Su Majestad se reservó hacer los nombramientos para los demás puertos mencionados. Una determinación tan trascendental á la constitución de este país alarmó mucho á sus habitantes, en particular á los de la costa marítima. Reunióse, pues, con tan importante motivo Junta particular en la villa de Azcoitia el día 10 de Enero de 1807, por cuyo acuerdo la Diputación dirigió al Ministro de Marina en 13 de Abril siguiente una extensa representación, exponiendo las razones que ocurrían para que no se llevase á efecto el establecimiento de los capitanes de puerto. Esta gestión fué nuevamente desestimada en virtud de la Real orden de 18 de Mayo del mismo año, por la cual se dispuso se diese posesión de sus empleos á los expresados funcionarios. La ciudad y consulado de comercio de San Sebastián solicitaron de nuevo con posterioridad la reposición del gobierno de este dicho puerto al ser y estado antiguos; pero por Real orden de 18 de Octubre de 1817 comunicada por el ministerio de marina se volvió á denegar definitivamente semejante pretensión. «Es la soberana voluntad, dijo, »que la policía y mando de dicho puerto corresponda »á la jurisdicción de marina, que deberá continuar »como al presente, ejerciéndola en la forma que sus »ordenanzas le previenen, y se practica en todos los »principales puertos del reino.» Finalmente por otra de 23 de Abril de 1828 á consecuencia de nuevas instancias, se repitió la negativa. Tal es el último estado de este asunto.

SECCIÓN II.

De la navegación y pesca.

Una gran parte de los naturales de esta provincia se halla dedicada á la navegación y pesca marítima, como medios de sustento; para cuyos efectos se presta una larga costa, sus buenos puertos, las bahías resguardadas, y algunas ensenadas de su territorio. Las lejanas navegaciones, que los guipuzcoanos hacían en tiempos antiguos por razón del comercio, así que su inclinación á la pesca, no pueden ponerse en duda. Así lo dan á entender los diferentes privilegios, que á estos fines les concedieron los monarcas castellanos, las guerras tenidas con Inglaterra, los tratados de paz celebrados con esta misma nación, la conquista de las islas Canarias, el descubrimiento de las de Terranova, etc. Confirman la importancia de la marina guipuzcoana las conversas ó sea convenios hechos con los pueblos limítrofes de la provincia de Labort, de que se habló anteriormente en el libro V Capítulo V Sección III.

Los principales privilegios otorgados por los Reyes de Castilla para el fomento de la marinería y navegación de esta provincia son los siguientes: 1.º Por una Real cédula de 30 de Junio de 1498 se dispuso que los vecinos de esta provincia, que fuesen con sus barcos á otros puertos, pudiesen aderezarlos, libremente y proveerse de todos los bastimentos necesarios sin exigírseles por ello más derechos que los acostumbrados de tiempo inmemorial. 2.º Por otra de 3 de Septiembre de 1500 se mandó que los barcos de esta provincia fuesen preferidos para la carga de bastimentos y mercaderías en los puertos de ella á los de naciones extranjeras. 3.º Por otra de 6 de Julio de 1513 se determinó que en Guipúzcoa no se fabricasen navíos para extranjeros, ya fuese por estos mis-

mos, ya por los naturales. 4.º Por otra de 18 de Enero de 1582 se declaró que los buques de esta provincia pudiesen tripularse con la cuarta parte de marineros extranjeros, habiendo falta de naturales del país. 5.º Por otra de 19 de Septiembre de 1647 se mandó que los barcos de mayor porte, de fábrica de la provincia fuesen preferidos para la carga á los menores, y estos á los extranjeros de más porte, comprados por naturales, y tripulados por maestre y gente española.

El ejercicio de la pesca marítima, ramo muy importante de la industria de los guipuzcoanos, ha sido enteramente libre en las costas de la provincia, y no han necesitado para el efecto de permiso de autoridad alguna. Cierto es que la cofradía de mareantes de San Sebastián tenía un privilegio concedido por la Reina D.^a Juana de pescar y echar redes desde la punta de Jaizquibel hasta la barra de Orio con exclusión de los pescadores de otras partes. Pero no lo es menos que semejante privilegio fué contradecido siempre por la provincia como opuesto á la libertad é igualdad de derechos de sus hijos, que forman una confraternidad, y así nunca tuvo efecto. Consta también que en virtud de sentencia del Rey D. Enrique II fecha en Sevilla á 13 de Abril de 1376 se declaró que la bahía de Pasajes fuese de libre uso para la pesca respecto de los habitantes de San Sebastián, Rentería y tierra de Oyarzun. Se halla igualmente que en virtud de una concordia celebrada á 2 de Mayo de 1416 entre las villas de Zumaya y Guetaria, la ría de la primera quedó común para la pesca de los vecinos de ambas. Finalmente, se ve que igual mancomunidad se declaró entre los de Motrico y Deva en la ría de este último nombre por real sentencia de la Chancillería de Valladolid del año de 1568, pronunciada después de un largo pleito, que llegó á ejecutoriarse.

Pero esta antigua libertad de pescar dónde y como quiera de los guipuzcoanos, empezó á tener algunas restricciones por medio de la ordenanza de marina de 1.º de Enero de 1751. La provincia representó al gobierno contra ellas, á cuya consecuencia por Real orden de 6 de Mayo de 1752 se declaró que «la pesca en los puertos y costas de esta provincia, se ejecutará libremente por los naturales de ella, bajo las reglas particulares del propio país, sin intervención del Ministro de marina.» Al propio tiempo establece á continuación que «ha de subsistir en su fuerza el artículo 192 que prohíbe á los guipuzcoanos servir en embarcaciones extranjeras, y que en Guipúzcoa ó en sus embarcaciones de comercio ó pesca, se abriguen desertores de la matrícula de otras provincias.» La ordenanza de matrículas de mar de 12 de Agosto de 1802, conforme con la general de marina, establece así bien que la gente de mar de estas provincias podrá pescar y navegar libremente en sus costas y embarcaciones que se habilitasen en sus puertos. Para hacerlo fuera de ellas, y dentro de los límites de las demás provincias, exige las circunstancias de haber hecho una Campaña, y estar formalmente alistados en sus respectivas cofradías de mar. El mismo artículo 2.º, título 11, establece que los naturales de estas provincias, que se ejercitasen fuera de ellas en la pesca, navegación, y cualquiera otra industria de mar, han de estar sujetos, así como los demás matriculados á la jurisdicción de marina. Con arreglo á las mismas disposiciones, y á las Reales órdenes de 19 de Mayo de 1828, 20 de Diciembre de 1833, y 17 de Abril de 1834, los roles ó licencias para navegar en la costa de Guipúzcoa y Vizcaya deben expedirse á los buques de su matrícula por los alcaldes de sus respectivos puertos, y por el Comandante de marina cuando es para fuera del distrito de las mismas provincias.

Uno de los objetos más notables de la pesca marítima de los habitantes de esta provincia era en lo antiguo el de las ballenas, cuya carne se derretía para grasa, y las barbas se vendían para otros usos diferentes. La destreza de aquellos para la matanza de estos cetáceos, que tanto frecuentaban estas costas de mar, ha sido celebrada y proverbial. Consta que Alvar Gómez de Castro, vecino de Valladolid, pretendió exigir ciertos derechos sobre las ballenas que se cogían en esta provincia; pero que, habiéndose opuesto á su pago los Concejos de San Sebastián, Motrico y Guetaria, se les declaró por enteramente libre. La Real carta ejecutoria de esta declaración se expidió por la Chancillería de Valladolid á 4 de Febrero de 1469 según resulta de documentos. También se halla por otra parte, que Miguel Martínez de Eugomez, preboste de la entonces villa de San Sebastián, quiso en 1480 llevar la mitad de la primera ballena que mataron los vecinos de Guetaria, alegando para el efecto una merced del Rey D. Enrique IV. Sometida esta cuestión á Jueces árbitros, declararon estos que dicha mitad de ballena pertenecía á esta última villa; pero al propio tiempo condenaron á la misma á que pagase á Eugomez 640 quintales de fierro, equivalentes á sus derechos. Este laudo fué aprobado por ambas partes por medio de una escritura otorgada en la villa de Orio á 27 de Mayo del mismo año, y la de Guetaria entregó el fierro á que había sido condenada. Los pescadores de esta hicieron en 20 de Noviembre de 1474 una ordenanza por la que cedieron á su Concejo la mitad de todas las ballenas que matasen para el reparo de los muelles, cercas y guardamares. Parece que con el tiempo resultaron algunas cuestiones sobre el modo de repartir el importe de las ballenas; y para conciliar todos los intereses se redujo en el año de 1682 á una tercera parte la mitad de ellas. También es positivo que dichos

pescadores, llevados de su religiosidad, cedieron á la Iglesia parroquial de la misma villa las lenguas de las ballenas que cogiesen.

Los guipuzcoanos no se limitaron en sus navegaciones á las costas del mar Oceano Cantábrico, sino que para practicarlas se extendieron á países remotos. Ellos fueron los que en unión con los Vizcainos descubrieron las islas de Terranova, y los inventores de la pesquería, trinchería y sequería del bacalao; en cuya posesión se hallaron hasta el año de 1697 en que el Rey de Francia se negó á darles los pasaportes que se acostumbraban, conforme á los tratados de conversa. Fundóse esta negativa en un decreto que el mismo monarca había publicado en 1696 á consecuencia de la guerra con España, mandando que no se diesen salvo-conductos para dichas islas por ser colonias francesas. La provincia representó al gobierno del Rey Católico contra el despojo de un derecho usado y guardado desde tiempo inmemorial; y además opuesto á uno de los artículos de la conversa celebrada en 1694 con los pueblos de Labort, y aprobada por los respectivos soberanos. En su consecuencia, los oficios que el Embajador español practicó en la Corte de París restablecieron á los guipuzcoanos en la antigua posesión de la expresada pesquería. Con noticia que la Francia iba á ceder dichas islas á la Inglaterra, la provincia en 1712 volvió á suplicar al Rey para que en el tratado de paz de Utrecht se conservase á los naturales de la misma en la posesión de esta pesquería. Su Majestad se dignó dar sus órdenes sobre el particular á sus plenipotenciarios el duque de Osuna y el marqués de Monteleón; por cuya intervención se logró que en el artículo 13 de dicho tratado quedase asentado el derecho reclamado por la provincia. Las palabras de que usa son del tenor siguiente: *Quando quidem vero ex parte Hispaniæ urgetur jura quædam piscationis ad insulam Terrænovæ*

exercenda, ad Cantabros aliosve regis Catholici subditos pertinere, consentit contemque majestas britanica ut privilegia omnia quae Cantabrigiae, aliove Hispania populi jure sibi vindicare poterunt, ipsis intacta conserventur, etc.

No pareció á la provincia tan expresivo como deseaba el contexto de este artículo; por lo que suplicó otra vez al Rey se dignase mandar aclararlo. A vista de esta gestión Su Majestad mandó á la provincia que enviase navíos á la pesquería de Terranova, para que la práctica aclarase lo estipulado, como lo ejecutó despachando un barco; pero este volvió según fué, por que el gobernador inglés de aquellas islas no le permitió pescar mientras no llevase una orden de su rey. Con este desengaño se hicieron varias reclamaciones por el marqués de Monteleón, embajador español en Londres, con una memoria instructiva de los derechos y prerogativas de los vascongados para hacer la pesca en aquellas costas. Stanhope, Ministro de Estado á la sazón, reconoció la razón y justicia de los guipuzcoanos y vizcainos, manifestando que nada tendría que oponer á su reclamación, si no mediara una acta del parlamento hecha en el año décimo del reinado de Guillermo III. Esta contestación, propia de un diplomático inglés, no era en verdad más que un mero pretexto para no acceder á lo que se solicitaba con tanto derecho. Ciertamente es que en la citada acta de 1698 se expresaba que los extranjeros no podían usar de anzuelo, pescar, ni hacer acto alguno que mirase á comercio ó pesca en los puertos y mares de Terranova ni en alguna de las islas adyacentes. Pero semejante ley, acordada en tiempo en que la Francia estaba en posesión de Placencia y de una grande extensión de terreno, solo podía aplicarse á la parte que entonces ocupaba Inglaterra, única respecto de la cual podía mandar. Francia cedió á la Inglaterra en virtud del citado tratado de Utrecht todo el territorio que poseía en

aquellas islas; cesión, que no podía perjudicar en manera alguna á los derechos legítimamente adquiridos por terceros interesados, como lo eran los vascongados. Por otra parte, esta cesión se verificó reservando la facultad de pescar y secar el bacalao en cierta extensión; de la cual los franceses han usado posteriormente sin la menor contradicción de los ingleses, á pesar de estar en vigor la expresada acta. Semejante diferencia de conducta respecto de los súbditos de una y otra potencia no parece justificable ante la razón ni es digna de una gran nación. Lo era todavía menos después de haberse estipulado en un tratado solemne de paz que á los vascongados se conservarían intactos los derechos que justificasen tener; derechos que en efecto justificaron, probando la larga y nunca interrumpida posesión en que estuvieron de pescar y secar el bacalao en dichas costas.

Guipúzcoa ha reclamado posteriormente en cuantas ocasiones se han ofrecido el reintegro de este derecho de sus hijos, aclarando para el efecto el artículo 15 del tratado de paz de Utrecht. A sus gestiones se debió que en los artículos del celebrado en 1721 en.....se conviniese lo siguiente. «Su Majestad británica» dará las órdenes para que los guipuzcoanos y Vizcaynos tengan la pesca del bacalao en los mares de »Terranova, y que todo lo demás que no estuviese »cumplido tendrá la misma fuerza que si estuviese »inserto en el tratado de alianza defensiva entre las »tres coronas.» Tales órdenes no se comunicaron, y por consecuencia los vascongados continuaron privados del ejercicio de sus derechos. En el año de 1728, con motivo del congreso de plenipotenciarios de Soissons, á virtud de iguales reclamaciones, y en cumplimiento de una Real orden dirigida por el marqués de la Paz, la provincia envió á este ministro del rey los instrumentos comprobantes de la posesión en que estuvieron sus hijos de la pesquería en los expresa-

dos mares. Nada se adelantó, sin embargo, aun en esta importante ocasión; por que las conferencias se disolvieron sin haber llegado á celebrarse tratado alguno. Cuando el año de 1748 se estaba celebrando el congreso de Aquisgran, la provincia volvió á suplicar al rey expidiese sus órdenes á sus plenipotenciarios para que en el tratado que se celebrase se aclarase en favor de los vascongados el artículo 15 del de Utrecht. Pero, aunque Su Majestad hizo la recomendación solicitada, esta no tuvo el resultado deseado; por que en el tratado que se estipuló no se tomó en consideración la pretensión de los vascongados. Tampoco tuvieron mejor efecto las gestiones que en el propio sentido hicieron estos cerca del gobierno del rey en los años de 1752, 1759, 1781 y 1800, según consta de las actas de los mismos. Así, pues, los naturales de esta provincia han perdido por unos medios tan injustos la pesquería de bacalao en las islas de Terranova; pesquería que habían ejercido con mucho provecho suyo desde una remota antigüedad, juntamente con los Vizcainos y franceses de los pueblos comarcanos. En resumen, la mala fé con que el gobierno inglés ha procedido en la ejecución del artículo 15 del tratado de Utrecht, al mismo tiempo que la debilidad á que se redujo el nuestro: he aquí las causas del despojo que padece este país en dicha materia, difícil ya de remediar, según van pasando los años.

SECCIÓN III.

De las arribadas, varadas y naufragios.

Queda expresado en la Sección I que como en lo antiguo no hubo en los puertos de Guipúzcoa ningún Juez particular de marina, los alcaldes respectivos ejercieron la jurisdicción necesaria para conocer de las arribadas, varadas y naufragios de barcos. A los

mismos correspondía por lo tanto privativamente auxiliar á salvar las personas, recoger y beneficiar los efectos y mercaderías, poner en seguro los restos de las embarcaciones, etc., en los casos de semejantes siniestros. Todas aquellas diligencias, que la humanidad, justicia y la protección debida al comercio recomiendan para minorar en lo posible las desgracias de los que las han experimentado, eran en una palabra de la incumbencia de las justicias ordinarias de los puertos. Verdad es que en el de San Sebastián se estableció el año de 1691 un funcionario de nombramiento Real con el título de Juez de arribadas de Indias. Sus atribuciones se limitaban á cuidar de las que pudiesen hacer en dichos puertos accidentalmente los navíos de la Real armada destinados á Andalucía; y como por consiguiente no se le dió jurisdicción ni intervención de ninguna clase con respecto á las demás embarcaciones, no hubo dificultad para su admisión. En una palabra, la introducción de este funcionario no alteró el estado de las atribuciones de las autoridades del país respecto de las expresadas ocurrencias marítimas.

La única excepción que hallamos sobre este particular es la de la ciudad de San Sebastián. Es cosa constante que su consulado de comercio desde su erección de 1682 se había considerado autorizado por sus ordenanzas para ejercer la jurisdicción respecto de las arribadas, varadas y naufragios de barcos que ocurrieran en la costa correspondiente á la misma ciudad. Se entendió ser tal la misión de dicha corporación en el hecho de conferírsela genericamente la facultad de conocer de todos los negocios concernientes á comerciantes, mareantes, capitanes y maestres de navíos de Europa, que arribasen á los puertos de esta provincia. De todos modos los alcaldes de San Sebastián no pretendieron en adelante ejercer la jurisdicción que anteriormente tuvieron en dichas ma-

terias, y el tribunal del consulado no halló oposición para su desempeño. Esta intervención del consulado en ellas no solamente le fué mantenida por las ordenanzas de marina de 1.º de Enero de 1751, sino que se le extendió á toda la costa de la provincia. Su artículo 193 declara, en efecto, que «en las varadas ó embarrancamientos de embarcaciones nacionales ó extranjeras en las costas de Guipúzcoa entienda como hasta aquí el consulado sin intervención del ministro de marina, la cual no es necesaria. cuando por haberse salvado la gente y papeles se saben los dueños de embarcaciones y cargas.» Añade que «en naufragios absolutos en que no se haya salvado gente ni papeles actue el consulado con noticia ó intervención del Ministro, concurriendo ambos á las providencias de poner en salvo los efectos, á su custodia, publicación del naufragio, etc.» La Real orden de 6 de Mayo de 1752, de la cual se tiene antes hablado, confirmó la precedente disposición, mandando que en las arribadas de navíos de Europa á los puertos de esta provincia entendiéndose en adelante el consulado, bien fuese con destino fijo ó por accidente y así mismo en las varadas ó embarrancamientos de embarcaciones nacionales ó extranjeras. Consiguiente á esta declaración, el consulado entendió en una varada ocurrida en Zarauz en 1770, en el naufragio de un bergantín, que sin tripulación ni carga apareció en 1771 al frente de la barra de Zumaya, y en otro de un barco procedente de San Sebastián, que se perdió en la costa de Guetaria en 1783.

A pesar de los ejemplares que acabo de presentar á favor del Consulado de San Sebastián respecto de las arribadas, varadas y naufragios que ocurriesen en toda la costa marítima de la provincia, los demás pueblos de esta no se creyeron perjudicados en su antigua jurisdicción. Consiguientemente, las villas de Motrico y Deva acudieron á las Juntas generales del año de

1786, reclamando el ejercicio independiente de la correspondiente á sus respectivos alcaldes en los citados siniestros marítimos. Su súplica fué estimada por aquel Congreso, concediendo á ambas villas, así que á las demás de la costa marítima la voz y costa que pidiesen para sostener los recursos convenientes ante la superioridad en el expresado sentido. Las dos villas reclamantes sostenían que según los principios de la constitución guipuzcoana, todos los pueblos de la hermandad de esta provincia son perfectamente iguales en derechos é independientes entre sí. Fundadas en esta base, decían que San Sebastián no había tenido jamás título alguno para aspirar á desnivelar esta igualdad, ni por lo tanto para ingerirse á ejercer jurisdicción ni autoridad de ninguna clase en el territorio de los demás pueblos de Guipúzcoa. Es de fuero, de costumbre, y disposición de leyes escritas, añadían, la primera instancia de los alcaldes de ella á prevención con los corregidores respecto de todos los negocios civiles y causas criminales de su respectivo territorio. Si los alcaldes de San Sebastián, concluían, quedaron separados de una parte de su antigua jurisdicción, ó sea de la denominada mercantil, mediante el establecimiento del consulado, fué por que la misma ciudad lo solicitó. Tales fueron los argumentos principales de dichas dos villas en defensa de la antigua autoridad de los alcaldes de la costa sobre las arribadas, varadas y naufragios de barcos en sus respectivos territorios y que hicieron dictar á las Juntas aquel acuerdo. San Sebastián representó fuertemente contra este al gobierno de Su Majestad por medio de una extensa exposición, en que procuró rebatir las consideraciones alegadas por los pueblos quejantes. Alegando además los ejemplares de la posesión en que se hallaba su consulado desde el año de 1751 de ejercer su jurisdicción mercantil en las citadas materias en toda la costa marí-

tima de la provincia. De Real orden se pidió informe de esta gestión á la Diputación, quien lo evacuó en 14 de Marzo de 1787, después de haber oído sobre el particular á todos los interesados; recopilando las diferentes consideraciones de hecho y de derecho que concurrían en favor de la jurisdicción indepediente de los pueblos de la costa en dichas materias. He aquí, pues, formalizado en el ministerio de marina un expediente gubernativo, remitido luego al Consejo de Castilla para su prosecución contenciosa en vista de las encontradas pretensiones de las partes interesadas.

Pendiente todavía su resolución, ocurrió el año de 1789 el naufragio de un barco dinamarqués en la costa de Fuenterrabía. Apenas se tuvo noticia de este acontecimiento, el Alcalde de la misma ciudad acudió á prestar toda la ayuda y socorro posibles á la gente de su tripulación, á salvar las velas, cables y cuantos efectos se podían del mismo barco varado entre las rocas. Todos los auxilios posibles estaban pues prestados por aquella autoridad local y cuantas diligencias judiciales correspondía formar en el asunto se podían considerar por terminadas. En tal estado de cosas ocurrió que uno de los cónsules, ó sea vocales del tribunal del consulado de San Sebastián, en virtud de comisión especial de este se presentó con su escribano á reclamar el conocimiento del naufragio, con entrega de todos los autos para su prosecución según las ordenanzas. Pero el Alcalde de Fuenterrabía no reconoció en dicho consulado semejante jurisdicción en el caso, y de aquí una competencia formada ante el Supremo Consejo de Castilla, resuelta en 30 de julio del mismo año. «Se declara, »dijo, que el Alcalde ordinario de la ciudad de »Fuenterrabía en haber prestado los auxilios convenientes para salvar el buque y sus efectos, como en »las providencias que ha tomado para su custodia y

»distribución á los interesados de conformidad con
»estos, no se ha excedido del uso de sus facultades; y
»en atención á tener concluídos cuantos procedimien-
»tos exigía el caso, remítanse al consulado de San
»Sebastián los formados por dicho Alcalde, á fin de
»que sobre averías de los géneros, pago de fletes,
»ajustes entre capitán, pilotos y tripulación, ó sobre
»cualquiera otra contienda en materia de comercio,
»que á instancia de partes se suscitase por recurso ó
»incidente, la sustancie y determine conforme á de-
»recho.» No satisfecho de esta declaración, el consu-
lado suplicó de ella ante el mismo Consejo Real, con
cuyo motivo cruzaron nuevos escritos con difusos ra-
zonamientos. Consta que este expediente continuaba
todavía ventilándose con calor en 1801, sin que apa-
rezca el resultado definitivo que hubiese tenido; y lo
más probable es que unido al general, que pendía
sobre el mismo asunto de la jurisdicción de los
demás pueblos de la costa, se hubiese suspendido
su resolución hasta dictarla en este. Aparece sí que
por los años de 1806 y 1807 se trató de hacer una
transacción entre la provincia y el consulado, pero
que no se realizó.

El consulado de San Sebastián no solamente tuvo
cuestiones con los demás pueblos de la costa sobre el
conocimiento de las arribadas, varadas y naufragios,
sino también de la autoridad militar de marina.
Como ya se ha manifestado antes, la jurisdicción de
estas materias le fué reconocida explícitamente por
las ordenanzas navales de 1751, y confirmada por las
del año de 1802. Su artículo 21, título 11, dice «que
»en lo perteneciente á varadas y naufragios seguirán
»los consulados de Bilbao y San Sebastián en la po-
»sesión de disponer el salvamento de los náufragos
»y cargamentos con independencia de otro juzgado.»
Tal es la disposición en que se apoyó aquel tribunal
mercantil para intervenir privativa y exclusivamente

en los casos posteriores de aquellos siniestros. Pero semejante estado de cosas cambió enteramente el año de 1807 á consecuencia del establecimiento de capitanes de puerto; y todavía más en virtud de la Real orden de 4 de Febrero del mismo año, declarando que desde entonces debía entenderse anulado dicho artículo de la ordenanza de 1802. La misma Real orden dispuso, en una palabra, que la autoridad de marina ejerciese en aquellos siniestros las funciones que fuesen facultativas con toda la plenitud de jurisdicción. Ella aprobó por lo demás la conducta del Comandante de marina en haber puesto á disposición del consulado los efectos salvados de un barco naufragado, reservándose entender en las demás diligencias ulteriores. Por otra Real orden de 30 de Diciembre de 1824 se confirmó la precedente legislación, mandando la observancia del artículo 17, título 7.º de las ordenanzas de 1802 y reales resoluciones de 29 de Noviembre de 1803 y 29 de Mayo de 1804. Consiguiente á este principio, declaró que «la pericia y »juicio facultativo, ó la calificación de estos sucesos »toca exclusivamente á los jefes de marina; y la parte »de gastos, abonos, pagos, y asuntos de cuentas, que »dicen relación con los tratos de comercio son de la »exclusiva competencia de los tribunales consulares.» La legislación establecida por el código de comercio vigente sobre la competencia de jurisdicción en los casos de arribadas, varadas y naufragios se halla basada en iguales principios, y el mismo código arregla también las responsabilidades procedentes de semejantes sucesos marítimos. Estas disposiciones rigen por lo tanto en Guipúzcoa, donde aquel código está admitido desde su primera publicación.

No obstante las declaraciones hechas en favor de la jurisdicción militar de marina, cuya indicación queda hecha, los alcaldes de los pueblos de la costa, procedieron en algunos casos de varadas y naufra-

gios ocurridos posteriormente. Uno de ellos sucedió en 1833 á consecuencia de la pérdida del bergatín mercante titulado *General Oquendo*, destrozado en las peñas cerca de la barra de Orio. Este barco había salido por el temporal del puerto de Guetaria, donde no pudo sostenerse, y fué llevado por la fuerza del mismo al citado punto de la desgracia dejando en aquella bahía algunos efectos, que el Alcalde de la misma villa procuró salvar y beneficiar, formalizando las oportunas diligencias. Noticioso de este procedimiento el Comandante de marina de la provincia, pretendió tomar conocimiento de la causa. Consiguientemente requirió al Alcalde para la entrega de todos los autos, extremo á que esta autoridad se opuso fuertemente; y de aquí resultó formada la acostumbrada competencia de jurisdicción, cuyo resultado fué favorable al ramo de marina. La Suprema Junta de Competencias en 1.º de Julio del mismo año declaró, en efecto, que correspondía á la jurisdicción de marina el conocimiento de los autos formados por el citado Alcalde para el salvamento, conservación y destino de los efectos del expresado bergatín.

Igual declaración recayó en otra competencia de jurisdicción formada entre el mismo Comandante de marina y el Alcalde de la villa de Zarauz, con motivo del naufragio del bergatín francés nombrado *L' Amable*, varado en aquella costa en 1840. «Se declara corresponder el conocimiento de estos autos á la jurisdicción de marina; y en su consecuencia remitirse al Comandante general del Departamento del Ferrol, para que disponga se continuen con arreglo á derecho». Tal fué el fallo del supremo tribunal de Justicia de 24 de Septiembre del mismo año. Lo propio sucedió en otra competencia suscitada en 1841 entre el alcalde de la ciudad de Fuenterrabía y el capitán del puerto de ella, en concepto

de delegado del comandante de marina de la provincia á consecuencia de haber varado en las rocas de aquella el buque ingles *Príncipe Coburgo*.

SECCIÓN IV.

Del uso de los puertos.

Todos los puertos marítimos de Guipúzcoa se consideraron desde los tiempos más remotos de uso y servicio público, no solamente para los habitantes de la misma provincia, sino aun para los de fuera de ella. Podíase por consiguiente entrar en ellos con cualquier barco: reparar las averías que hubiesen tenido estos en la mar; cargar y descargar las mercaderías, etc.: todo con sujeción á las leyes del reino, ordenanzas de la provincia, y reglamentos de policía sanitaria y urbana. Así, pues, las únicas cuestiones que aparece haberse suscitado sobre la presente materia se limitaron al ejercicio de la jurisdicción respecto de las aguas. Tuviéronlas las villas de Motrico y Deva, las de Zumaya y Guetaria, y las de Orio y Aya, según se expresó en otro lugar de esta obra; pero las de San Sebastián con Fuenterrabía, Rentería y tierra de Oyárzun, se extendieron á otros puntos, y fueron muy graves. Conviene por lo tanto dar aquí alguna noticia de estos ruidosos asuntos, objeto de discusiones de varias Juntas, y de no pocos pleitos.

Es indudable que con arreglo á la carta puebla de San Sebastián de los años de 1180 el puerto de Pasajes pertenecía al término municipal de la misma ciudad. Se vé en efecto que por ella se asignó todo el trecho comprendido desde el rio Oria hasta el Bidasoa, y desde la costa marítima hasta la villa de Arano, dentro del cual se hallan las aguas de dicho puerto. Las cuestiones sobre este asunto principiaron después que el rey D. Alonso VIII otorgó en

1203 á Fuenterrabía el título de villa de por sí, y luego al consejo de Oiarso los fueros, usos y costumbres con que hubiere de gobernarse. Tres eran los puntos principales sobre que versaban: el dominio, la jurisdicción y el uso de las aguas del puerto. San Sebastián creía pertenecerla en ellas una verdadera propiedad cual un particular tiene respecto de una heredad; creencia á mi ver muy equivocada por falta de una justa y debida apreciación legal del derecho público y nacional. A la verdad es una doctrina constante deducida de las leyes de las siete Partidas que los ríos y puertos de mar pertenecen comunalmente á todos los hombres. Quiere decir que nuestra legislación los reconoce y declara como de dominio público, y no del patrimonio de los pueblos, donde existen. En esta conformidad se vé que el rey D. Enrique II, hallándose en San Sebastián en 1374, cometió el conocimiento de esta cuestión á los doctores Juan Alfonso y Ruiz Bernal, oidores de su audiencia; quienes con vista de los documentos presentados por las partes litigantes declararon en Valladolid á 30 de Septiembre del mismo año que según las leyes el puerto de Oiarso era público. Por consecuencia quedó resuelto que los derechos sobre él pertenecían á la corona real, como representación natural de los intereses nacionales en una monarquía, sobre todo si es absoluta. San Sebastián no se aquietó al parecer con esta determinación, sino que suplicó de ella. Es lo cierto que continuaron las disidencias entre la misma y los pueblos de Rentería y Oyárzun de una manera ruidosa; en tanto grado que llegaron á ocurrir varios bullicios, peleas, muertes, robos, daños, talas de viñas, manzanales y otros árboles de una parte á la otra con grande escándalo. Sometidas al arbitrio del mismo monarca, pronunció este su sentencia en Sevilla á 13 de Abril de 1376, volviendo á declarar que este puerto correspondía de derecho á

la corona real, bajo cuyo Señorío se hallaba. Por otra sentencia dada en 5 de Mayo de 1475 por Juan Martínez de Rada y Miguel Sánchez de Ugarte, como Jueces árbitros, con acuerdo de Juan de Villa y Gonzalo García de Villadiego, doctores y catedráticos de la Universidad de Salamanca, se declaró igualmente que el señorío y propiedad de este puerto no eran de San Sebastián. Finalmente la Real orden de 27 de Junio de 1807 anteriormente citada confirmó las precedentes resoluciones, al establecer que el puerto de Pasajes pertenece á la corona real.

San Sebastián salió mas airosa en el punto cuestionado sobre la jurisdicción de las aguas de este dicho puerto. Ella sostenía que en la desmembración que había sufrido su antiguo término municipal con los Villazgos de Fuenterrabía y Rentería no había sido privada de los derechos de estas aguas; sino tan solamente de la parte de tierra firme, que no llegaban á bañar en sus mayores crecientes. Rentería por el contrario, bajo el fundamento de que este puerto tenía la denominación de Oiarso, y de ser ella la cabeza de este territorio, sustentó sus derechos al expresado puerto y sus aguas. Esta diferencia se decidió por Martín García de Licona, en calidad de Juez árbitro arbitrador, por medio de la sentencia pronunciada en 23 de Abril de 1455. Se declaró por ella terminantemente que la jurisdicción de este puerto y sus aguas desde las puntas hasta la iglesia de Lezo cuanto la mar creciente alcanza pertenecía á la entonces villa de San Sebastián. Por nuevo laudo dictado en 12 de Noviembre de 1456 por Martín Martínez de Lasarte y Miguel Martínez de Urdayaga con igual carácter se declaró que el término jurisdiccional de dicha ciudad se extendía hasta la casa Pontica sus tierras y heredades inclusive con el jun-cal de la entrada de Rentería. La sentencia arbitral ya citada del año de 1475 declaró también que la

jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio de aquellas aguas pertenecía á la misma ciudad de San Sebastián. Por ella se asignó al término municipal de esta todo el terreno que hay desde la entrada del local hasta Molinao, y desde aquí arriba hasta donde tiene los términos y jurisdicción de ella en la tierra firme conjunta con la dicha ribera por donde sube la creciente del mar hasta Rentería. Finalmente por otra sentencia de la Real Chancillería de Valladolid de 24 de Septiembre de 1619 se mandó guardar á San Sebastián los privilegios, concordias y ejecutorias que tenía ganadas sobre la jurisdicción de este dicho puerto. Esta misma providencia disponía que para su seguridad ó resguardo se hiciese una torre, donde se pusiese de presidio una de las dos compañías de San Sebastián, como se ejecutó en los años de 1621 y siguientes en la banda occidental del mismo puerto á costa de la propia ciudad.

Desde que las precedentes declaraciones tuvieron lugar la policía de este dicho puerto perteneció á la ciudad de San Sebastián ó su Aynntamiento, que la ejerció por media de uno de sus regidores. Estos alternaban su residencia en la mencionada torre por meses con todas las facultades necesarias para dicho efecto. Consiguiente á lo expresado por Real orden de 19 de Agosto de 1677 se encargó á la misma ciudad que el regidor que asistía á aquel punto tuviese especial cuidado y vigilancia de que ninguno de los barcos que llegasen á él echase en su canal lastre, zahorra, ni otra bascosidad, sino que lo hiciesen en el paraje llamado Sableo. «De haberse echado este género de cosas, añadía, ha nacido la ruina del puerto, que obliga á tratar de su remedio, y así conviene que por todos los medios posibles se procure su limpieza y que esté navegable.» Consiguiente á esta Real disposición, la expresada corporación municipal formó el año de 1751 el oportuno reglamento

de policía de este puerto, que publicado por medio de bando se ejecutó por el regidor torrero. Tal era el estado de cosas de esta dependencia hasta el año de 1805 en que se cambió por completo. Al disponerse por la Real orden de 1.º de Junio del mismo antes citada que las dos poblaciones de los Pasajes formasen una sola villa independiente, se mandó que la ciudad de San Sebastián cesase en el ejercicio de toda jurisdicción en ambos barrios. Como consecuencia de esta medida, se ordenó también que la misma ciudad retirase desde luego al regidor torrero y dependientes que tenía en la aldea de San Pedro; en cuya substitución se estableciese un capitán de puerto, que nombraría Su Majestad, según queda explicado mas por menor en la Sección I. Estas disposiciones fueron confirmadas por las Reales órdenes de 27 de Julio de 1807 y 23 de Abril de 1828, y son las que rigen y se observan substancialmente, como también se ha manifestado antes.

El uso del puerto de Pasajes, ó sea la libre descarga, y tránsito de mercaderías, fué igualmente materia de largas y reñidas controversias entre San Sebastián, Rentería y Oyázu. La primera pretendió estorbar estos derechos en varias ocasiones, y los habitantes de los otros dos pueblos quisieron conservarlos con tesón. San Sebastián no tenía sin duda presente que con arreglo á las leyes del reino, siendo los ríos y puertos de dominio público, su uso debía ser igualmente común ó permitido á todos los hombres. Pero, si tal era y es en general el principio de Justicia y de derecho internacional, con más razón debía observarse con respecto á los habitantes de un mismo país, vecinos y limítrofes. No pueden desconocerse en efecto, los grandes vínculos de amistad, fraternidad, urbanidad, y las otras relaciones fundadas en el interés recíproco, que deben unir entre sí á los hombres constituidos en semejante situa-

ción, sobre todo en Guipúzcoa donde el principio de igualdad y hermandad es el fundamento de su estado. Los hechos demuestran, sin embargo, que entre los expresados tres pueblos faltó con frecuencia esta armonía natural y tan conveniente. Así es que se vé que la cuestión de descarga de géneros en este puerto fué sometida al rey D. Enrique II y que este monarca la decidió por la sentencia arbitral ya citada del año de 1376. Declaró por ella que los de Rentería y Oyárzun tenían facultad de traer por el puerto de Pasajes en barcos propios los mantenimientos y demás cosas necesarias para su sustento; pero puso algunas restricciones á las introducciones que se hiciesen en embarcaciones flotadas, ó para el uso de otros consumidores.

Los mismos tres pueblos tuvieron entre sí más adelante otro pleito en la real Chancillería de Valladolid sobre la carga y extracción de fierros por este dicho puerto. En este negocio San Sebastián obtuvo en 1587 una Real carta ejecutoria por la cual se respetó y conservó á los vecinos de Rentería y Oyárzun el derecho de sacar el fierro elaborado de las ferreñas de sus territorios. Pero con respecto al fabricado en otras, se limitó á reservar su derecho á salvo para otro juicio; que equivalía á una negativa de presente, y no consta haberse hecho uso de aquel. Aparece sí que, según se expresó anteriormente, ocurrió una nueva controversia en 1695 con motivo de haber el regidor torrero impedido la extracción de unas sidras de la cosecha propia á vecinos de Rentería por el mismo puerto de Pasajes. Se dijo también allí que esta cuestión había sido resuelta en 1699 en sentido favorable á los cosecheros de la misma villa, así que de los demás de la provincia, quedando de esta manera establecido el principio de la libertad de comerciar por este puerto. De todos modos semejantes trabas puestas en lo antiguo á ella quedaron suprimi-

das en virtud de las Reales ordenes modernas en especial por la de 23 de Abril de 1828. Según ella, tanto los pueblos situados en la ribera, como la ciudad de San Sebastián, pueden usar libremente de este puerto, según les convenga, para el abrigo y conservación de los buques de su comercio, carga y descarga de efectos, establecimiento de almacenes, y demás correspondientes al tráfico mercantil.





CAPÍTULO V.

DE LOS SERVICIOS MARÍTIMOS.

Sección I.

De las levas de marineros.



AS levas de gente de mar, para la tripulación de los buques de la Real armada, han sido practicadas en Guipúzcoa desde tiempo antiquísimo é inmemorial. Para convencerse de esta verdad, no se necesita más que recorrer la historia nacional tanto antigua como moderna, donde se hallarán datos muy importantes de los grandes y continuados servicios que los naturales de esta provincia han prestado á la Corona Real y al Estado por mar en ocasiones de las guerras extranjeras. Ella dice también que los guipuzcoanos conquistaron en semejantes facciones un distinguido nombre como prácticos, sufridos, constantes y valerosos.

No hay la debida claridad sobre la forma en que se hacía este servicio marítimo en los tiempos anti-

guos, esto es, si voluntariamente ó por sorteo; pero ateniéndonos á lo que se observó más adelante se puede conjeturar con bastante fundamento que solamente se usó del primero de dichos medios, y nunca del segundo. Fúndome para esto en el contexto de la misma Real cédula de pedido de la gente de mar dirigidas á la provincia con tanta frecuencia y cuasi de continuo. Adviértense en ellas generalmente dos circunstancias muy importantes al caso: primero que no se hallaban redactadas en forma de mandato: sino mas bien como una mera petición: segunda, que tampoco señalaban el número preciso de marineros, sino comunmente el mayor que fuese posible. De aquí es que, si bien la provincia llevada de su lealtad y celo atendió de ordinario á este servicio, no faltaron ocasiones en que por circunstancias particulares no lo hizo. Es también un hecho constante que no se usó jamás del medio de la fuerza ó violencia, para que los comprendidos en el servicio lo prestasen, como lo es que unas veces salieron á su desempeño más ó menos que en otras ocasiones sin que hubiese regla fija en este particular. También es de advertir que, hecho una vez el apronto ó entrega de marineros, ordinariamente se dirigía á la provincia una Real cédula de gracias por la puntualidad, celo y lealtad que había manifestado en el servicio.

De los numerosos antecedentes que existen en el archivo de la provincia resulta que, hecho el pedido de la gente marina, el orden regular ha sido de tratar del asunto en Junta, ya sea general ya particular. Cuando la provincia no fijaba el número de hombres, que cada pueblo marítimo hubiese de suministrar, la leva se hacía por medio de enganches de voluntarios; pues todavía se conservan edictos publicados en algunas villas el año de 1574 para el alistamiento de los que quisiesen prestarse á hacer este servicio. Si el número de hombres que se hubiese de

dar era determinado por la provincia, entouces era consiguiente su reparto en los pueblos, quienes debían completar el cupo, según les pareciese. Para lo uno y otro, cada Junta general acostumbró nombrar, como lo hace aun en el día, comisarios llamados de marinería; cuyo encargo principal ha sido y es el de atender á la realización de las levas y conducir á los alistados al punto donde hubiesen estos de embarcarse. De aquí se ve que la provincia nunca ha desconocido la obligación de servir al Rey y á la patria por medio de gente marinera, cuando este servicio ha sido necesario. Pero, si esta es una verdad, que no se puede desconocer, no es menos cierto que ella se ha opuesto siempre con firmeza á la intervención de autoridades extrañas en esta materia, ora fuesen militares, ora del ramo de marina, ora de cualquiera otra clase de nombramiento del gobierno. Las Reales órdenes que sobre esta materia se dirigían á la provincia se limitaban á prescribir las cualidades ó circunstancias que habían de tener los que hubiesen de servir en las armadas. Tal fué lo que determinó la expedida en 20 de Abril de 1587, al disponer que la tercera parte de los que se diesen hubiese de ser de prácticos en el ejercicio marítimo y arte de navegar, pudiendo ser los demás bisoños. Si pues, alguna vez por falta de tener presentes estas costumbres y métodos de la provincia, se ha dado comisión á las autoridades del gobierno para proceder por sí á las levas de marineros sin comunicación de la provincia, la ejecución de semejantes órdenes ha sido suspendida á virtud de reclamación de la misma.

Uno de estos casos ocurrió el año de 1597 á consecuencia de haberse encargado al Capitán general D. Juan Velázquez una leva de marineros sin que se contase para realizarla con la provincia. Las Juntas generales celebradas el mismo año representaron al Rey contra semejante alteración de prácticas usadas

hasta entonces de tiempo inmemorial; novedad además perjudicial al mismo Real servicio, por los embarazos que su ejecución encontraría en los pueblos que hubiesen de concurrir á la leva. A su consecuencia en 16 de Septiembre del propio año recayó una Real cédula, por la cual se declaró que en las ocasiones de levass que se ofreciesen en adelante se daría la orden conveniente, para que no se alterase la costumbre tenida hasta entonces. «Pues estoy cierto, decía Su Majestad, del cuidado y prontitud con que os habéis de emplear en la ejecución de lo que se os mandare, etc.» Todavía fué más explícita y terminante otra Real cédula expedida en Madrid á 26 de Julio de 1647, que se halla inserta en la recopilación foral de la provincia. De ella resulta que los jefes militares y otros ministros de Su Majestad desentendiéndose de las antiguas prácticas del país, habían hecho por sí mismos algunas levass de marineros con mucho rigor y violencia. La misma Real cédula manifiesta que además se habían suscitado algunas cuestiones sobre la admisión de los que habían servido ya en las armadas reales, admisión á que se oponían dichos comisionados, á título de que estos tales eran marineros alistados sin haber cumplido el compromiso anterior. «He resuelto, dijo, que para las levass de marineros, que de aquí adelante se hicieren en ella para la tripulación de mi armada del mar Oceano nombre la dicha provincia personas que asistan á los ministros á quien yo mandare cometerlas, como se ha hecho este presente año, y que los dichos ministros procuren hacerlas con la mayor suavidad y satisfacción de la provincia que fuere posible.»

A pesar de estar concretada á los pueblos marítimos, como los prácticos en el arte de navegar, la obligación de prestar el servicio de marinería, no por eso hubo una matrícula de los hombres de mar suje-

tos á su desempeño. Por primera vez se mandó practicar esta operación al Corregidor de la provincia en virtud de Real cédula de 5 de Octubre de 1607. Este funcionario intentó cumplimentar semejante disposición; pero á consecuencia de la contradicción hecha por las Juntas se mandó sobreseer en su ejecución por Real cédula de 18 de Diciembre del mismo año. Como medida general se decretó nuevamente la práctica de la matrícula de marineros por Real orden de 31 de Octubre de 1625, concediendo á los que se alistasen voluntariamente en ella varias exenciones y prerogativas. La provincia volvió á representar á Su Majestad contra semejante medida, y de los hechos posteriores se deduce que tampoco tuvo efecto en esta ocasión. Se ve sí que por Real cédula de 16 de Junio de 1628 se significó á la provincia la extrañeza que había causado un decreto hecho por la misma en sus Juntas de Segura de Abril del propio año, acordando que ningún Alcalde obligase á embarcar á ningún marinero contra su voluntad. «Las órdenes que se envían, decía, para que en las levass se proceda con suavidad, no deben entenderse en términos de que cuando no quieran alistarse voluntariamente se excusen de la obligación que tienen de hacerlo, siempre que fuere necesario para los efectos del Real servicio y seguridad de las costas y comercio.» A pesar de cuanto queda expresado, se sabe que desde tiempos antiguos existe en cada pueblo marítimo una cofradía de mareantes, con sus respectivas ordenanzas, mayordomos, cajas, etc. Consta también que cada una de estas cofradías tiene su libro, donde se asientan los nombres de los que pertenecen á ellas. No hay duda por consiguiente, que solamente los comprendidos en estas asociaciones estaban obligados al servicio de la marinería, ó sea á las levass de hombres de mar, que se pidiesen por el gobierno, únicos contribuyentes á sus gastos, así como

derecho habientes á los beneficios de esta profesión.

Hállase que en 1717 encargó el Rey al general D. Antonio Gaztañeta la formación de un reglamento de levass y reclutas de marinería de esta provincia. Este entendido marino dirigió á la Diputación en 23 de Noviembre del mismo año el resultado de sus trabajos; calcado bajo el principio de que las levass se hiciesen con suavidad, y de que en su ejecución no se perjudicase á los fueros de estos naturales. Consta de doce capítulos, cuyo extracto passo á hacer; 1.º En cada puerto marítimo habrá un libro donde estén asentados los vecinos y moradores que sean de la profesión de mar. 2.º Cuando el Rey avisare á la provincia la orden de la leva de gente de mar, y los ministros de marina destinados á este efecto participaren á la Diputación su comisión, dictará esta sus disposiciones á los comisarios que tuviese en los puertos; en cuya vista se ensayará primero el alistamiento de voluntarios y si de esta manera se completase el número pedido nada más se tendrá que hacer. 3.º Si el número de voluntarios no fuese suficiente para cubrir el respectivo cupo repartido, la Diputación hará que cada pueblo marítimo lo complete sin excusa alguna según le pareciere más conveniente. 4.º Hecha la entrega de la recluta de la gente de mar á los ministros de Su Majestad encargados de su recibo, arreglarán estos su distribución en las diferentes clases á que se les destine, según la aptitud respectiva. 5.º La tercera parte de la gente de mar que se diere podrá componerse de bisonos, ó que no hayan servido antes, con tal que sepan bogar un remo, y sean de cuerpo y ánimo proporcionado para que se habiliten entre los prácticos. 6.º El tiempo del servicio de la gente que se reclutase correrá, no desde el día en que se asentare, sino desde el en que el Rey le ordenare, desde el cual se les asistirá con el socorro diario correspondiente para su manutención.

7.º Ningún recluta de marinero podrá pretender más pagas que las que estuvieren señaladas y mandadas se den adelantadas hasta el cumplimiento del tiempo de su servicio, terminado el cual se les dará el oportuno papel de resguardo. 8.º Concluída la campaña, y quedando los bageles de la armada de invernada, se dará á los marineros embarcación, bastimentos necesarios y su socorro diario, para que puedan restituirse á sus casas. 9.º Los marineros que sirvieron en los bageles de la Real armada del Oceano serán preferidos para las navegaciones de la carrera de las Indias, así en los galeones de Tierra firme, como en las flotas de Nueva España y en los navíos sueltos de registro. 10.º Cuando hubiere algunos reclutas de esta calidad, si naturales de esta provincia, aunque no sean de los pueblos marítimos, quisiesen sentar plaza entre los nuevos, podrán ser admitidos para el aumento de la marinería, siempre que sean tales de quienes se espere su habilitación. 11.º Si el Rey pidiere la recluta en número tan crecido que la provincia no pudiese dar, los ministros de marina podrán convenir con la Diputación y sus comisarios el modo más suave, y representar de conformidad á Su Majestad lo que más convenga. 12.º Para que las pagas que anticipe el Rey queden aseguradas, cada marinero deberá presentar y asentar en los libros por fiador un hombre conocido del país, ó se fiarán unos á otros los marineros, con tal que no sea recíproca esta fianza. Además el marinero que faltó, ó que volviere al país sin licencia legítima sea preso y sirva por un año sin sueldo en los navíos de la Real armada.

Por más favorable que se considerase el precedente reglamento, no se puede menos de reconocer que dejó sin resolver la dificultad principal de este negocio, ó sea la forma de realizar las levass. A la verdad, su capítulo tercero no determinó cómo se habían de

completar los respectivos cupos de marineros, cuando no se presentase número suficiente de voluntarios. Previendo este caso bastante común, solo dice que los pueblos los completen *según les pareciere mejor*, sin determinar si podrán valerse para ello de la fuerza material, ó de algunos medios de apremio, desentendiéndose de aquella suavidad con que la Real cédula del año de 1647 quiere se hagan en esta provincia las levas de marineros. No obstante esta omisión, ó sea la falta de la debida aclaración, se vé que la Diputación pasó á informe de los mismos pueblos marítimos dicho reglamento. Hállase también que estos manifestaron separadamente su conformidad á su contenido, en cuya vista fué aprobado por aquella corporación provincial; mandándose después su cumplida y puntual ejecución por Real órden dirigida á la provincia en 13 de Diciembre del propio año. Consiguientemente, aunque las levas se hicieron en los inmediatos según dicho reglamento, se vé que su ejecución encontró en los pueblos grandes dificultades y contradicciones. Hállase sobre todo que la ciudad de San Sebastián, que en todos tiempos había dado el ejemplo de puntualidad en esta clase de servicios, antiguos y modernos, salió alegando un privilegio, que suponía tener para no ser obligados sus hijos á su desempeño. Procedía esto de la falta de inteligencia de los mismos pueblos marítimos sobre el número de reclutas con que cada uno de ellos debía contribuir en las levas sucesivas, no bien determinado.

En tal estado de cosas se comunicó á la provincia en 1726 una Real órden encargando la formación de una matrícula de la gente de mar, según se había mandado al comisario de marina de la misma. Dictada con un espíritu conciliador, quería esta disposición que semejante operación se hiciese de manera que no se opusiese á los fueros, ni al reglamen-

to formado en 1717 por el General Gaztañeta, que se ha extractado poco ha, asunto de que la provincia empezó á ocuparse desde luego. Reconocidos ya para entonces algunos inconvenientes y vacíos de aquel arreglo, fué preciso que las Juntas del mismo año trataran de consultar la materia con personas inteligentes y prácticas residentes en el propio país de pueblos interesados en este servicio. Tales fueron D. Bernardo de Arocena y D. Domingo Gregorio de Iun Ibarbia, vecinos de San Sebastián; cuyas observaciones fueron adoptadas como decreto por las Juntas generales celebradas en la villa de Villafranca el año de 1727. Consiguiente al parecer de aquellos, se acordó: que cada pueblo marítimo formase sus libros de cofradía y marinería con toda distinción: que el consulado de San Sebastián cuidase que ningún armador, comisionado ó aprestador de navío admitiese en él por marintero á quien no estuviese alistado en alguno de los puertos marítimos. Se dispuso también que estos, que volviendo los navios terno-veses, formasen sus listas puntuales y las enviasen á la Diputación, y sucesivamente remitiesen cada año á las Juntas una razón de los marineros ausentes, muertos y de los nuevamente alistados. Quedó prohibido además á los marineros de esta provincia el embarcarse en buques extranjeros. En una palabra, la idea de estas disposiciones era obligar indirectamente al alistamiento, á la permanencia de los marineros en el país, y al servicio voluntario en las armadas reales, radicando en la Diputación el conocimiento del verdadero estado de la gente de mar de sus puertos. La prohibición impuesta á los marineros alistados de la provincia para embarcarse en navíos extranjeros se alzó luego á favor de los que fuesen á la pesca de ballenas, á consecuencia de las reclamaciones hechas por las autoridades de los pueblos limítrofes franceses. Pero el gobierno tuvo noti-

cia de esta medida, y considerándola perjudicial al real servicio, mandó á la provincia que embarace á sus naturales servir en barcos extranjeros. Después, á súplicas de los diputados de aquellos pueblos, se dictó otra Real orden para que se dispusiese fuesen á San Juan de Luz los arponeros, que no hiciesen falta en la pesca, de los naturales de esta provincia; y en su cumplimiento se pidió á la misma villa la nómina de los marineros de aquella clase, que sus navíos balleneros necesitaban para el servicio de dicha pesquería.

La ordenanza general de marina decretada por el Rey en 1.º de Enero de 1751 para el régimen y fomento de la marinería que debía servir en la armada naval, y en el comercio, tráfico y pesca, se mandó ejecutar en esta provincia por Real orden de 9 de Febrero del mismo año. Aquella real disposición contenía diferentes limitaciones favorables á los marineros naturales ó vecinos de esta provincia, ya en cuanto á conservar á las Justicias ordinarias la jurisdicción que por fuero y otras reales órdenes les compete, ya en punto á no establecerse en ella la matrícula prescrita para los demás puntos marítimos. Solamente imponía la obligación de remitir anualmente al ministro de marina de San Sebastián listas de la gente de mar que hubiese en cada pueblo, según de antes se hallaba establecido. No obstante estas excepciones, la provincia hizo á Su Majestad algunas observaciones acerca del contenido de dicha ordenanza; á cuya consecuencia, por Real orden de 6 de Mayo de 1752 comunicada al ministro de marina de San Sebastián se hicieron en ella las declaraciones siguientes. 1.ª Se suprimirá la palabra *matrícula* en las patentes de navegación. 2.ª Las embarcaciones podrán tripularse con marinería de la provincia sin intervención del ministro de marina, no admitiéndose gente de otras sin licencia de este. 3.ª Las embar-

caciones que se separen de Guipúzcoa deberán llevar lista del equipaje certificada por el consulado, pasándose copia al ministro de marina. 4.^a Las relaciones de la marinería existente podrán hacerse solo por número, sin expresión de nombres y apellidos. 5.^a No se permitirá navegar á los naturales en otras embarcaciones que en las propias, ni la pesca fuera de las costas de la provincia, sin certificación del Ministro de marina. 6.^a La gente de mar y maestranza de Guipúzcoa queda sujeta enteramente á la jurisdicción ordinaria, sin intervención de la marina. 7.^a Los matriculados de otras provincias, que naveguen con licencia en embarcaciones del país, serán tratados como los de Guipúzcoa en sus pleitos, pretensiones sobre sueldos, y otros asuntos que dimanen de navegación. 8.^o Los guipuzcoanos no sirvan en embarcaciones extranjeras, ni se abriguen en esta provincia desertores de la matrícula de otras, siendo el Ministro de marina Juez privativo de estos casos. Para el mejor cumplimiento del servicio de marinería las Juntas generales de Cestona de 1759 á propuesta de los siete pueblos de la costa, hicieron un acuerdo con varias disposiciones concernientes á este asunto, que pueden verse en su registro.

El gobierno particular de la gente de mar de las provincias vascongadas fué respetado también por la ordenza de matrículas de 12 de Agosto de 1802 en varios artículos de título XL. Disponían estos en resumen lo siguiente: 1.^o En las provincias marítimas de Guipúzcoa y Vizcaya no se establecerá el alistamiento de matriculados ni la formación, régimen y servicio de los tercios navales en el pié prevenido por punto general. 2.^o La gente de mar de sus costas continuará dependiente solo, como hasta aquí, de la jurisdicción ordinaria, según sus usos y costumbres, sin perjuicio de la obligación de concurrir al servicio de la armada naval, conforme á las reglas que se

prescriben 3.º Las respectivas diputaciones entenderán privativamente en la cuenta y razón del número, existencia y paradero de su marinería, sin perjuicio de que anualmente por el mes de Noviembre pasen al Comandante militar de marina un estado de la gente de mar de cada pueblo. 4.º Corresponderá á la respectiva Diputación señalar los individuos, que completen el número mandado, de que pasarán relación á dicho ministro y prevendrá este á la misma corporación el paraje donde haya de congregarse la gente para su embarque. 5.º En el acto del pago haré saber dicho Comandante de marina á los individuos de mar convocados que desde aquel día quedan sujetos á todas las obligaciones de los demás matriculados empleados en el real servicio. 6.º Será obligación de las mismas Diputaciones aprontar y entregar para el real servicio los reemplazos de los muertos, desertores, y de los que se inutilicen durante la campaña, cuya nota pasará el Comandante de la provincia.

Por último, del registro de actas de las Juntas generales celebradas en la villa de Villafranca el año de 1865 se ve el arreglo que la Diputación hizo con el gobierno de Su Majestad sobre esta materia. Consta, en efecto, de aquel impreso que por Real orden de 25 de Agosto de 1864, de acuerdo con el Consejo de Estado, se desestimó la solicitud, que la provincia había hecho, sobre la exacción del servicio de mar; mandando que se procediera con arreglo á ordenanza de marina á rectificar la lista de marineros hábiles, ó que en defecto cumpliría el artículo 26, título 11, de la ordenanza de matrículas. Según se manifestó antes, con arreglo á su contexto, sin haber hecho una campaña y estar formalmente alistados en las respectivas cofradías, no podrían los marineros de esta provincia navegar fuera del límite de sus costas. Los graves perjuicios, que semejante disposición hu-

biera ocasionado en la provincia y la consideración de la multitud de levas de gente de mar, que anteriormente se han hecho en ella, según se convence de sus papeles, fueron motivos, que obligaron á la Diputación á reconocer que no podían dispensarse de concurrir al servicio de la armada. Trató sí de que se hiciese este según las prácticas consuetudinarias, recayendo el reparto proporcional sobre la base móvil del número de marineros que apareciesen alistados formalmente y por propia voluntad para gozar de las ventajas de navegar y pescar fuera de los límites de las costas. En su consecuencia, por Reales órdenes de 2 de Febrero y 9 de Marzo de 1865 se aprobó el convenio celebrado en este sentido con el Comandante de marina de San Sebastián. Según su tenor, Guipúzcoa debe dar para la armada nacional siete marineros en cada semestre de los primeros cinco años; quedando sujeta, vencido este plazo á entrar en relativa proporción con las demás provincias de la monarquía á prestar el servicio, bajo la base de los que voluntaria y formalmente se alisten. Tal será la condición, para que puedan gozar entonces de las ventajas que ofrece la navegación en todo el orbe. Las expresadas Juntas tomaron conocimiento de este convenio, y lo aprobaron en el concepto de estar en consonancia con el fuero, y con no pocos antecedentes prácticos, según las palabras del acuerdo que se hizo sobre el particular.

No obstante esta resolución, en las Juntas celebradas en Azcoitia el año inmediato se volvió á tratar del asunto de la marinería con el objeto de evitar conflictos para cuando llegue á transcurrir el plazo de los cinco años para los que rige el convenio mencionado. Así pues se acordaron para cuando llegue semejante caso las disposiciones siguientes: 1.^a Que gestione cerca del gobierno para que se abra una nueva matrícula de marineros. 2.^a Que se aumente la

consignación de los 6000 reales señalados por cada hombre que forme parte de los cupos. 3.^a Que se establezca en San Sebastián un comisionado especial, para proporcional voluntarios. 4.^a Que la Diputación dé á este comisionado sus instrucciones sobre las circunstancias que hayan de reunir los voluntarios que hayan de recibirse para el servicio marítimo. 5.^a Que en el caso de que el comisionado no reúna el número de hombres necesario para cubrir la convocatoria, la Diputación lo comunique á los alcaldes de los puertos, á fin de que procedan al apronto de los hombres que falten por los medios que les sugiera su prudencia y celo, bajo el tipo establecido hasta entonces para los repartimientos. 6.^a Que los gastos que ocasionare dicho comisionado de enganches sean de cuenta y cargo de la provincia.

SECCIÓN II.

Del corso y presas.

Como la nación española tuvo en los siglos anteriores tan frecuentes guerras con la francesa, los naturales de Guipúzcoa, cuya pericia en los achaques de la mar es indisputable, acostumbraron armar sus navíos en corso. Otro tanto hacían los habitantes de la costa del mar Oceano en el territorio francés fronterizo á esta provincia, á quienes tampoco se puede desconocer igual destreza marítima. Así es que sin remontarnos á tiempos muy remotos, hallamos que á solicitud de las Juntas de la provincia, D. Fernando V expidió en Zaragoza á 30 de Junio de 1498 una Real cédula, por la cual dió licencia á estos naturales para salir en corso. Su Majestad no exigió á los armadores de navíos otra circunstancia sino la de que diesen fianza ante el Corregidor de que no ofenderían ni molestarían á otros barcos que á los de

los franceses, respetando á los nacionales y los de estados amigos. Con motivo de la guerra con Francia, D. Carlos I autorizó en 1525 generalmente á todos los súbditos para armar en corso, según se ve en una ley recopilada. Hizo además á los corsistas la merced del quinto, que por disposiciones antiguas pertenecía á la Real Hacienda en las presas que se causasen; con cuyo aliciente, semejante ejercicio marítimo se aumentó, y fué muy usado por los habitantes de la costa de esta provincia. Por consecuencia fué grande el número de buques de guerra, que armaron estos á su propia costa en los años inmediatos; muchas también las presas que hicieron en los mares de Francia y Holanda, cuya relación histórica no es de este lugar.

Hallamos así bien que mas adelante, ó sea en el año de 1690, el comercio de San Sebastián construyó para la seguridad de esta costa una fragata de guerra de 42 piezas de artillería. El mando de este buque nombrado Nuestra Señora del Rosario y Animas, se dió á D. Pedro de Ezabal, vecino de la misma ciudad, quien desde luego salió á correr con real patente, y apresó diferentes embarcaciones franceses, que infestaban estos mares. Consta igualmente que en 1703, á consecuencia de una excitación hecha por el rey, algunos naturales de esta provincia fabricaron y armaron en corso las fragatas de guerra tituladas San Sebastián, Santa Teresa, Jesús María y José, San Estéban y San Juan. Sus capitanes D. Juan Antonio de Igarzabal y D. Domingo Pérez de Isaba solicitaron las patentes con facultad de dar las fianzas acostumbradas ante las justicias ordinarias; no obstante las ordenanzas de corso dictadas recientemente, las cuales disponían se cumpliera esta última formalidad ante el gobernador de las armas. Hubo por consiguiente algunas dificultades para alcanzar dicha gracia, que por fin concedió el rey en

virtud de súplicas de la provincia. Para la protección del comercio marítimo, el consulado de San Sebastián acordó así bien en 1779 armar una fragata corsaria de 22 cañones de á 8 en batería, y 4 menores sobre alcázares, cuyo coste se calculó en 30.000 pesos. Invitó á la provincia para que se interesara en esta empresa, suscribiéndose en una buena cantidad; pero á causa de los atrasos en que se hallaba por las considerables sumas que tenía anticipadas á la caja de caminos, no pudo prestarse á ello. Se limitó por consiguiente á expresar al consulado el aprecio que le merecía el celo que manifestaba en este negocio del real servicio y de interés propio.

Bien se puede preveer cuales serían las consecuencias de dos comarcas marítimas confluentes armadas en corso. No faltaron tomas recíprocas de embarcaciones con sus mercaderías, peleas marítimas, incursiones en los territorios, robos, quemas de casas, muertes de personas, y otros insultos, que por la poca civilización de aquellos tiempos no escaseaban. Así es que vemos que las Juntas generales celebradas en la entonces villa de San Sebastián representaron el año de 1456 á D. Enrique IV todos estos males. Para su remedio en lo posible solicitaron la facultad de hacer una concordia sobre dichos puntos con los habitantes de la ciudad de Bayona, y villas de Cabretón, Biarritz, San Juan de Luz y demás tierra de la provincia de Labort, según en tiempos anteriores se había verificado. Consta que Su Majestad concedió este permiso por medio de la Real cédula expedida en Segovia á 29 de Diciembre del mismo año; y aunque es de presumir que se celebraría en el inmediato el arreglo proyectado, no se encuentra su noticia en el archivo de la provincia.

Las muchas presas de embarcaciones francesas, que los corsarios de esta provincia hicieron á principios del siglo XVI según queda indicado, obligaron

á los habitantes de la frontera del mismo vecino reino á solicitar el sobreseimiento de las hostilidades. Querían más bien conservar las antiguas relaciones de amistad y buena correspondencia, así que un arreglo de los daños recíprocos, que se hubiesen causado injustamente por el motivo de las guerras pendientes entre ambas coronas. A consecuencia de tan buenos deseos, se pasó á celebrar entre ambas provincias la competente concordia, la cual se llegó á firmar en el burgo de Endaya á 11 de Septiembre de 1536. Su otorgamiento se hizo por ante Joanes de Echagoyen y Hernando Gómez de Zuloaga, asistiendo los apoderados de esta provincia, los del señorío de Vizcaya, Encartaciones y de las cuatro villas de la costa de la mar de Castilla, de la una parte. Por la otra concurrieron los Diputados de la ciudad de Bayona y su jurisdicción, tierra de Labort y baronía de Cabreton. «Habiendo respecto, dice el encabezamiento de este documento, á que los reyes no tienen ejércitos y armadas en estas fronteras, ha sido acordado que los artículos, que de suso serán declarados, sean entre ellos guardados y observados hasta que por los reyes, sus soberanos señores ó alguno de ellos, sea mandado lo contrario.» Siguen los capítulos en que concordaron todas las partes interesadas, cuya substancia en cuanto á la presente materia se reduce á lo que paso á expresar. 1.º Los habitantes de los países contratantes se abstendrán de hacer en adelante los unos á los otros daño alguno por mar ni por tierra en sus personas y bienes. 2.º Los de la una parte no entrarán en el territorio de la otra sin salvo conducto, á menos que sea por ocasión de tormenta ó fortuna de mar, en cuyo caso serán bien recibidos en los puertos respectivos. 3.º Si sus barcos estuviesen cargados de mercaderías de otros, no se les hará daño, ni en la mar, ni en los puertos á donde arribaren. 4.º Los vecinos de una de las partes contratantes no

podrán comprar navío, ni otro bajel alguno para navegar, sino es de los de la otra parte. 5.º Durante la presente concordia, ningun vecino de la una parte contratante podrá usar contra los de la otra de marcas y represalias en sus bienes, ni en las mercaderías de que estuviesen cargados sus barcos. 6.º Si los habitantes de una de las partes contratantes, hiciesen alguna presa sobre la mar, de navíos de gente no comprendida en esta concordia, los de la otra no podrán quitársela. 7.º Cuando alguna de las partes contratantes cargase mercaderías en nave, que no sea de vecino de las mismas comarcas, si fuese apresada en la mar, haya de ser de buena presa para los aprehensores. 8.º Si los reyes respectivos no quisiesen que las partes contratantes usen de esta concordia, ó que el uno declarase la guerra al otro, aquellos á quienes viniese antes el mandamiento sean obligados á notificar á los otros, á saber, los de la parte francesa á los Alcaldes de San Sebastián, y los de la española al Gobernador de Bayona ó al bayle de la tierra de Labort. 9.º Después de hecha esta notificación, cada una de las partes será todavía segura por espacio de quince días. 10.º Para conocer de las quejas y querellas respectivas. se nombrarán por Jueces conservadores de la presente concordia á los que se expresan en ella, cuyas sentencias se ejecuten no obstante apelación.

Consta que el día 17 de Octubre del mismo año los apoderados de las mencionadas comarcas, española y francesa, se volvieron á reunir en la entonces villa de Fuenterrabía con el objeto de ratificar la precedente concordia. A este motivo se agregaba la pretensión hecha por la ciudad de Burdeos de incorporarse á la misma capitulación. Los Diputados de Guipúzcoa no se consideraron autorizados sin nuevos poderes de la provincia para celebrar concordia con los de dicha ciudad; por lo cual se suspendió de

tratar acerca de este asunto hasta consultarlo con la Junta general, próxima á reunirse en la villa de Segura. Se convino, no obstante, en que por todo el tiempo que mediaba hasta fin del mes de Noviembre se abstuviesen unos y otros de hacerse recíprocamente mal y daño alguno, sea por mar ó por tierra. También se estipuló que si la provincia en las indicadas Juntas acordaba la admisión de Burdeos en el tratado de Hendaya, rigiesen con esta ciudad todos los capítulos que se habían ajustado en el mismo, como si hubiese asistido á su otorgamiento. Del registro de aquellas Juntas consta que esta concordia fué presentada y aprobada por ellas; pero que, habiendo parecido justas las causas explicadas por los Diputados concurrentes á su otorgamiento, decretaron no admitir la anexión de Burdeos. Las mismas Juntas acordaron también que los alcaldes de la costa cuidasen de exigir á los armadores de barcos fianzas abonadas de pagar todo el daño que sucediese por su causa, así como el juramento de cumplir puntualmente la concordia referida.

A pesar de sus terminantes cláusulas, algunos habitantes de los países representados en ella, faltando á lo convenido, hicieron presas de barcos, males y daños en la mar á los de la otra parte. Fué, pues, necesario que los apoderados de Guipúzcoa, Vizcaya, Bayona, Labort y Cabretón se juntasen de nuevo en el burgo de Hendaya á fin de providenciar el remedio á semejantes excesos. En su consecuencia, llegaron á ponerse de acuerdo sobre ello, otorgando á 22 de Agosto de 1537 la competente escritura, en la cual, según las intenciones expresadas en la del año anterior, asentaron diferentes capítulos, cuyo resumen es como sigue: 1.º Los habitantes de las comarcas contratantes se restituirán recíprocamente las presas que los unos hayan hecho á los otros, sin costas, daños, ni intereses. 2.º Si las cosas apresadas no existiesen

en el estado que tenían cuando fueron cogidas, y los damnificados y damnificadores no conviniesen en la liquidación, se hará esta por los jueces que se designan. 3.º Quedan en su fuerza y vigor los artículos convenidos entre los contratantes después del tratado de Hendaya del año último, así que las seguridades dadas por cada parte. 4.º Las embarcaciones que en el día pertenecen á los habitantes de las partes contratantes, gozarán de los mismos privilegios expresados en dicha concordia. 5.º Los Diputados de la provincia, Señorío, ciudad, tierra y pueblos contratantes nombrarán su respectivo procurador, con el cargo de promover la restitución de las presas é indemnización de daños. 6.º Si alguno de los lugares comprendidos en esta concordia hiciese alguna presa ó daño á otro de la otra parte, podrá este dar la información de semejante hecho ante su propio Juez y presentarla luego al procurador de la jurisdicción á que corresponda el damnificador. 7.º Las pruebas de las presas y daños se practicarán en la forma y manera que se explican. 8.º La restitución de las presas se hará en los puntos que también se designan.

Después de haber convenido todos los concurrentes en los precedentes capítulos, ocurrió la novedad de que los Diputados de Bayona y Cabretón no tuvieron por conveniente firmarlos. Lo verificaron los demás apoderados para su celebración, mediante lo cual, quedó para con ellos terminada esta concordia, cuyo otorgamiento pasó ante Pedro de Echagoyen y Pedro Sánchez de Venesa. Todo su contenido fué confirmado por nueva escritura, que las mismas partes celebraron en Hendaya á 30 de Septiembre del mismo año. Acto continuo, con arreglo á sus prescripciones, cada una de aquellas nombró el respectivo procurador encargado de promover la restitución de las presas y la reparación de los daños y males inferidos los unos á los otros. Esta concordia se mandó

guardar y observar por otra celebrada en Fuenterrabía á 30 de Abril de 1543. Intervinieron en ella los representantes de la misma ciudad, los de Irún, Oyarzun, Rentería, Pasaje de la banda Oriental y Lezo, de la una parte, los de Urruña, Ciburu, Hendaya y Viriatu, de la otra, haciendo algunas otras declaraciones de que se trató en otro lugar.

Según también se tiene dicho en el libro V, capítulo V, sección III, esta provincia y la tierra de Labort ajustaron el año de 1652 otra concordia por medio de sus Capitanes generales D. Diego de Cárdenas y el Conde de Tolonjón, previa real autorización. Allí se hizo mérito de los capítulos concernientes á la libertad de comercio recíproco entre los habitantes de ambas comarcas; y los que tenían más relación con la materia del corso y presas de barcos consistieron en resumen en las disposiciones siguientes: 1.^a Habrá perdón y olvido de todas las hostilidades hechas mutuamente hasta ahora. 2.^a Si en adelante se cometiesen algunos daños ó robos, los respectivos naturales procurarán de buena fe que los delincuentes sean castigados, y se verifique la satisfacción de los daños inferidos. 3.^a Los límites de ambas provincias contratantes para los efectos de la presente concordia se declara que son los que se expresan aquí. 4.^a Los navíos, barcos y pinazas de los naturales de ambas provincias, que navegaren á lo mercantil con mercaderías, no podrán ser apresados por súbditos españoles ni franceses, con tal de que tengan pasaporte de los respectivos Capitanes generales. 5.^a Esta obligación de tomar pasaportes solo se entiende respecto de las embarcaciones que tengan que navegar fuera de los límites de la respectiva provincia, y no se extiende á los casos de navegar de un puerto á otro de su propio territorio. 6.^a Si contraviniendo á la presente concordia, se hiciesen algunas presas de navíos, bajeles ó mercade-

rias comprendidas en esta libertad, los naturales de ambas provincias tendrán obligación de hacer las diligencias necesarias en justicia hasta fenecer la causa, á no ser que en las tales presas se hallase gente de guerra, municiones y armas, de más de las que trajese para su defensa 7.^a Ningún navío, barco, ni pinaza, que venga á puerto de ambas provincias, sea de vacío, sea con mercaderías ó bastimentos, podrá ser apresado dentro de cuatro leguas de los mismos puertos, aunque no traiga pasaporte, ni sea de los naturales de aquellas. 8.^a Los bajeles y fragatas de corso de las dos provincias podrán hacerse hostilidades mutuamente, según lo han verificado hasta ahora, sin que por esto se entienda violada esta concordia. Presentada la misma á Su Majestad, fué aprobada á consulta del Consejo de guerra; y para su cumplimiento se expidió la correspondiente Real cédula á 22 de Julio de 1653, según se expresó en el lugar citado anteriormente.

En el mismo se hizo relación de las confirmaciones que tuvo esta concordia en los años de 1667 y 1675, y allí podrá consultarlas el lector. La última, que fué la celebrada en 1694, previa real licencia, contenía en su capítulo 7.^o lo siguiente: «que en caso »de que, contraviniendo á este ajustamiento, algunos »súbditos de los dos reyes apresasen algunos navíos, »bajeles ó mercaderías, de las que son comprendidas »en esta libertad, y sucediere llevar la tal presa á »los puertos de Guipúzcoa, de Labort, ó á otra de España ó Francia, ó á los de los estados de la obediencia de Su Majestad Católica, los naturales de »ambas provincias tengan obligación de hacer las »diligencias necesarias, que se requieren en justicia, »hasta fenecer la causa, si no es que en tales presas »se hallase gente de guerra, municiones y armas, de »más de las que trajeren para su defensa. En tal caso »las dichas armas y municiones se darán solamente

»por buena presa, y no los dichos navíos ni mercaderías; lo cual se entienda tan solamente respecto de los navíos de dichas provincias, y no para los de otras partes, que no han de gozar de esta libertad, sino juntamente con las dichas armas y municiones han de quedar confiscados recíprocamente las de mercaderías y navíos en que se condujeren.»

El conocimiento de las causas de presas y su repartimiento entre los interesados ha sido materia de cuestiones entre las justicias ordinarias de la provincia y la autoridad militar superior de la misma. Aquellas pretendían competirles la intervención en virtud de lo determinado en la carta-partida del año de 1544, según la cual la jurisdicción ordinaria debía entender en las presas que se hiciesen por gente de la tierra, por más que hubiese mezcla de la guerra. La provincia sostuvo esta inteligencia; y por consiguiente, defendió eficazmente con su voz y costa la jurisdicción de los alcaldes ordinarios de su territorio. Semejante conflicto ocurrió al parecer por primera vez en 1690, á consecuencia de las diferentes presas de barcos franceses que hizo la fragata corsaria Nuestra Señora del Rosario y Animas, armada por el comercio de San Sebastián, cuyo Capitán era D. Pedro de Ezabal. Quiso conocer de esta asunto el duque de Canzano, gobernador de las armas de la provincia, ya en este concepto, ya también en el de superintendente del Corso, título que suponía habersele expedido por Su Majestad, y á cuya exhibición se resistía tenazmente. En vista de esta divergencia de pareceres, pasó el negocio á noticia del Rey, quien en Real cédula expedida en 6 de Diciembre del mismo año mandó que, tanto los alcaldes de San Sebastián, como dicho jefe militar, sobreeseyesen en esta materia hasta que tomase la correspondiente resolución. Se mandaba además que la provincia presentase en el Consejo de la guerra los fueros en que

fundaba la competencia de sus alcaldes en este negocio. Hízose así, y en su consecuencia se libró en 15 de Marzo de 1691 la oportuna Real cédula de su resolución, dictada á consulta del mismo Consejo. «Se »manda, decía, que por ahora, y sin perjuicio del derecho de las partes, se cometa el conocimiento y repartimiento de las presas que hicieron las fragatas »armadas por los de San Sebastián, á los alcaldes de »aquella ciudad, y que se envíen luego las órdenes »por los Consejos de guerra y Castilla.» Esta resolución se repitió por medio de las Reales cédulas libradas en 6 y 20 de Junio del mismo año, con encargo de su cumplimiento. A pesar de ellas, el Consejo de guerra se opuso en 1691 á la expedición de patentes de Corso á otros armadores de navíos que las habían solicitado. Semejante contradicción se fundaba principalmente en el pretexto de que debían dar nuevas fianzas ante el gobernador de las armas de la provincia, previa información acerca de la vida y costumbres de los expresados dueños de las fragatas. La provincia volvió á recurrir á Su Majestad contra semejantes exigencias; y en su vista, en 17 de Septiembre del mismo año se mandó que no se alterase la resolución dictada á favor de los armadores y corsistas de la provincia y alcaldes de San Sebastián. Consiguientemente, dispuso que se diesen las licencias pedidas para salir á corso las fragatas que estaban fabricadas y armadas para este efecto, así que las que se pidiesen en adelante. Por las nuevas contradicciones que hizo la autoridad militar, á instancias de la provincia, se mandó cumplir esta disposición en virtud de otra Real cédula de 3 de Diciembre del propio año.

Las precedentes reales determinaciones, limitadas á los armadores y corsistas de Guipúzcoa, recibieron su confirmación por medio de otra general dictada en 29 de Febrero de 1692. Por ella, á consulta de la

Junta de Comercio del reino, se quiso favorecer y fomentar el ejercicio del corso; y uno de los alicientes que se decretaron fué el de eximir este ramo de la dependencia del Consejo de guerra y gobernadores puestos por él, concediendo su jurisdicción á las justicias ordinarias de los puertos. En 23 de Diciembre del propio año se comunicó al Consejo otra real disposición, por la cual se cometió á este Supremo Tribunal el conocimiento de las causas de presas de esta provincia en apelación. Tal era la legislación vigente en esta materia, cuando el antes citado Capitán Ezabal apresó en 1695 dos naves portuguesas, que navegaban con mercaderías francesas, y así bien un buque corsario de Fuenterrabía cogió en 1696 dos pinazas de Bayona en revancha de otras dos guipuzcoanas apresadas por los de San Juan de Luz. Los dueños de aquellas dos reclamaron su restitución bajo el supuesto de que en semejantes apresamientos se había faltado al tratado de la conversa establecida entre ambas comarcas; al paso que los armadores y corsistas sostenían la legitimidad de las presas por razón del contrabando que contenían las embarcaciones tomadas. No obstante estas consideraciones, el Rey mandó su restitución, que se verificó por acuerdo de las Juntas de 1698, sin perjuicio de solicitar que los interesados fuesen oídos en justicia.

Con motivo de la guerra de sucesión, la provincia dispuso que los naturales que quisiesen armar en corso, diesen ante las justicias ordinarias las fianzas prescritas por las leyes, y acudiesen á sacar las reales patentes á la secretaría de la guerra, según estaba mandado. La contaduría de marina puso algunas dificultades al cumplimiento de esta disposición, y consultó el punto al Consejo de Guerra. En su vista, en 7 de Noviembre del mismo año declaró este: «que se dejase á los alcaldes el conocimiento de las presas, aunque sucediese el caso de la disputa que so-

»bre él podría ofrecerse, que sería muy raro.» Se repitió esta declaración en 5 de Diciembre del propio año, añadiendo «que la misma regla hubiese de correr en cuanto á las presas hechas por corsistas franceses, pues la facultad concedida por entonces á las justicias no exceptuaba á ninguno.» A pesar de esto, el infante almirante general cometió en 1739 el conocimiento de las que se hiciesen por los vecinos de esta provincia al comisario de marina establecido en el puerto de Pasajes, hecho que obligó á la Provincia á representar á su Alteza en favor de la jurisdicción de los alcaldes ordinarios. No se halla que las gestiones hechas en este sentido hubiesen obtenido resultado favorable, y así es de suponer que el comisario de marina hubiese corrido con aquel encargo durante la guerra habida con Inglaterra en dicha época. Ya se sabe por lo demás que la ordenanza de corso publicada por D. Carlos IV en Segovia á 20 de Junio de 1801 arregló todas las materias concernientes á este ramo. Su artículo 11 comete exclusivamente á los comandantes militares de marina de las provincias con insistencia de sus asesores el conocimiento de las presas que los corsarios condujeran ó remitieran á los puertos. La ordenanza de matrícula de 1802, en el título 11, artículo 19, dispone igualmente que, «para que una embarcación pueda armarse en corso en los puertos de Guipúzcoa y Vizcaya, ha de preceder aviso del Comandante de marina respectivo, con arreglo á las instrucciones con que se hallare, y después de cumplidas las circunstancias y formalidades prevenidas en la ley para los otros puertos del reino, entregará la real patente al capitán ó patrón del buque, que ha de estar autorizado para ello con previa licencia de su Diputación, perteneciendo privativamente el conocimiento de las presas hechas por armadores vascongados, ó de cualquiera otras provincias, al co-

»mandante de marina del puerto á que fueren conducidas.

SECCIÓN III.

De los servicios de buques.

Guipúzcoa no solamente ha servido al estado con gente marinera y de tripulación para las reales armadas, sino que ha construído y dado á sus monarcas en diferentes ocasiones algunos buques de guerra. Consta, en efecto, de la historia nacional que las naves guipuzcoanas hicieron parte de la escuadra que al mando del almirante Ramón Bonifaz concurreó el año de 1248 al asedio y rendición de la ciudad de Sevilla, ocupada por los moros. También se sabe por igual medio que en 1342 diversas galeras de la misma provincia, en unión con la escuadra castellana, concurren al cerco de Algeciras, siendo almirante Micer Gil Bocanegra. No es menos cierto que sus navíos asistieron en las expediciones marítimas que los monarcas castellanos dirigieron, á saber; en 1350 contra la Inglaterra, en 1372 contra la Rochela, y en 1385 al cerco de la ciudad de Lisboa. Cosa sabida es igualmente el descubrimiento de las islas Canarias hecho en 1393 por una escuadrilla compuesta de naves guipuzcoanas y vizcaínas reunidas. Tal es una mera indicación de los servicios navales antiguos, sin otros muchos que la obscuridad de la historia de aquellos tiempos oculta á nuestro conocimiento.

Viniendo á los más modernos, hallamos que la provincia continuó en ellos prestando iguales importantes servicios marítimos. Así es que los Reyes Católicos dirigieron á la provincia desde Vitoria á 13 de Diciembre de 1483 una carta real patente, por la cual le hacían saber su determinación de aumentar la armada para la guerra contra los moros; y en su

consecuencia pidiendo los navios y gente que se concertase con el licenciado Diego Rodríguez de Baeza, comisionado para este efecto. «Y confiando en la »lealtad de vosotros, decían, y en la habilidad que »tiene la gente de esa provincia para las cosas de la »mar, y que es razón que para cosa tan meritoria y »loable vosotros seáis requeridos, acordamos de enviar allí al licenciado Diego Rodríguez de Baeza, »para que de nuestra parte sobre ello hable con vosotros, y concuerde el servicio que para la armada »de esta flota nos debedes facer, etc.» Que á consecuencia de la precedente Real cédula la provincia sirvió á Sus Majestades el año inmediato con tres navios sostenidos á sus expensas, es cosa completamente demostrada. Resulta justificada esta verdad por medio de dos Reales cédulas expedidas en Tarazona á 20 de Marzo de 1484, de las cuales la una se insertó en el capítulo III, Sección I, del presente libro, en las cuales se expresa terminantemente que la provincia servía á la sazón á Sus Majestades con tres naves á su costa y misión en la indicada guerra. La provincia no creyó, sin embargo, ser obligatorio semejante servicio naval, á lo menos en la forma en que lo hizo, y ya se vió en el lugar citado la satisfacción que aquellos monarcas le dieron.

Consta así bien de una información dada ante el Corregidor de la provincia que entre los años de 1550 al 1555, durante la guerra con Francia, los guipuzcoanos armaron á su propia costa diferentes embarcaciones. Aquella enseña también que en dichos cinco años apresaron mas de mil naves francesas mayores y menores en sus costas; sucesos cuya relación omito por pertenecer mas propriamente á la historia del país, que no trato aquí de escribir. Por lo que hace el siglo XVII vemos que por comisión del rey vino á esta provincia en 1606 D. Gaspar Ruiz de Pereda, con el objeto de formar en el puerto de Pa-

sajes una escuadra de quince navíos para el resguardo de estas costas. En este número de buques se comprendían los nueve de la escuadra de Vizcaya, que á la sazón estaban enteros, y por consiguiente, debían armarse los seis restantes en esta provincia. Pereda embargó para este efecto en los puertos de la misma cuantos navíos había de 300 á 700 toneladas, que fueron varios; pero, habiéndose recibido una Real orden, mandando que solo se dispusiesen por de pronto de cuatro, el armamento se limitó á los mismos.

Sin que todavía se concluyese este armamento, ocurrió que en fin del año citado se perdieron en la costa de Francia la Capitana Real y otros tres navíos de dicha escuadra de Vizcaya. De aquí tomó motivo Guipúzcoa para solicitar al rey que la nueva que se estaba preparando, se titulase con su propio nombre. Fuera de la expresada circunstancia, alegó en apoyo de su pretensión que esta escuadra se aparejaba en puerto guipuzcoano, con general, y mucha parte de los capitanes, oficiales y marineros naturales de la misma provincia. Añadió que uno de los cinco navíos salvados de los de Vizcaya era fabricado en los astilleros de Rentería, y otros dos rehabilitados en los mismos; de manera que, según ella, no existía ya razón ni motivo para que la nueva escuadra conservase la denominación de dicho Señorío en competencia con Guipúzcoa. Felipe III, en consideración á estas circunstancias, atendió á la solicitud de esta provincia mediante Real cédula expedida en Guadalupe á 6 de.....de 1607. «Habiendo considerado, dice, »que lo más de la escuadra del cargo de D. Antonio »de Oquendo está compuesta de navíos y gente de »esa provincia, he tenido por bien lo que me habéis »suplicado, dándole nombre de escuadra de esa provincia, etc.» Vizcaya se opuso á semejante variación de título, y para fundar mejor esta contradicción, envió á la corte dos comisionados especiales,

como lo hizo después Guipúzcoa para desvirtuar sus trabajos. En vista de esta diferencia, para no dar lugar á cuestiones judiciales, el rey, á consulta del Consejo de Guerra, mandó que dicha escuadra se denominase de Cantabria, por cuyo apresto y expedición dió muchas gracias.

Después de esto, se halla que la provincia acordó en las Juntas de Azpeitia de 1618 servir al rey con una escuadra de ocho navíos y dos pataches, siendo la Capitana de más de 651 toneladas. Para el efecto propuso tomar á su cargo por asiento su fabricación bajo ciertas y determinadas condiciones, de las que las principales eran en resumen las siguientes: 1.^a Que la Real Hacienda hubiese de anticipar á los fabricantes las cantidades que se señalaron, descontándolas del sueldo que se devengase durante el tiempo del servicio. 2.^a Que este hubiese de ser por cuatro ó cinco años. 3.^a Que la provincia hubiese de proponer el general, almirante y capitanes de mar y tierra, para que el rey les diese los títulos. 4.^a Que los expresados jefes y oficiales hubiesen de gozar de los mismos sueldos, honores y preeminencias que tenían los de la armada del mar Océano. 5.^a Que hubiese de correr de cuenta de la Real Hacienda la paga de las seis adelantadas á la gente de mar, cuyo reclutamiento haría la provincia. 6.^a Que hubiese de ser de cargo de la Real Hacienda la provisión y sustento de toda la gente de mar y tierra. 7.^a Que también hubiese de correr de cargo de Su Majestad la provisión de la artillería, armas, municiones y pertrechos de guerra. 8.^a Que las presas que hiciese la escuadra se hubiesen de repartir entre los que se hallasen en ella, sacando el quinto para el rey. 9.^a Que el general de la escuadra tuviese jurisdicción civil y criminal respecto de las causas de la gente de mar, con apelación al capitán general de la armada. 10.^a Que el daño que tuviesen los navíos de la escuadra,

peleando, rompiendo árboles, vergas, timón, costado, áncoras, etc., se hubiese de reponer por cuenta de la Real Hacienda. El rey aceptó el ofrecimiento de dicha escuadra con las precedentes condiciones, mediante Real cédula librada en 10 de Julio de 1618, y por otra de 28 de los mismos mes y año encargó se propusiesen las ternas para cada uno de sus empleos. A su virtud se hicieron estas propuestas en las Juntas de Villafranca del mes de Abril del año inmediato en los términos siguientes: Para general D. Antonio de Oquendo, D. Carlos de Ibarra, D. Antonio de Isasi Idiáquez: para almirante D. Juan de San Milián y Oquendo, D. Gerónimo de Azcárate y D. Martín de Mallea: para contador y veedor Marcos de Cortaberría, Martín de Portu y Miguel de Erauso: para capitanes los mismos fabricantes de navíos. En su consecuencia, el rey nombró por general de la escuadra á dicho Oquendo, por almirante á D. Antonio de Isasi Idiáquez, y por capitanes á Sebastián de Echazarreta, García de Villaviciosa, Miguel Sanz de Venesa, Martín de Argarate y á Pedro Lajust, todos naturales de la misma provincia. Formada así la escuadra, salió á navegar en los años inmediatos al servicio de Su Majestad en las reales armadas con fatales resultados. Por una parte, por no habérseles pagado los sueldos ofrecidos, se arruinaron los fabricantes de los buques, algunos de los cuales se perdieron en los puertos por falta de medios para repararlos en sus averías tenidas en las navegaciones. De otra, los cinco capitanes mencionados perecieron andando en el servicio, sin que sus familias tuviesen remuneración alguna de parte del rey.

En virtud de otra excitación de este, se fabricaron en esta provincia por los años de 1623 y 1625 dos galeones, uno por el contador Antonio de Ubilla, y el otro por el Capitán Miguel Ercilla. Sirvieron de Capitanes de las flotas de Nueva-España y sus fabri-

cadores también se arruinaron completamente, por no habérseles cumplido las condiciones convenidas en la contrata. Por la misma época el almirante Juan de Erauso hizo con el gobierno del Rey otro asiento de tres galeones para servir con ellos en sus Reales armadas. A cuenta de su fábrica y apresto se le adelantó alguna cantidad, aunque no la suficiente para acabarlos; y por no habérsele pagado los sueldos ofrecidos, ni cumplido las demás condiciones estipuladas, murió empeñado y pobre. Uno de sus navíos, la Capitana, se quemó en el puerto de Pasajes, á donde había venido á invernar, y tampoco fué atendida su familia por el gobierno de Su Majestad, cosa muy común en España. Felipe IV encomió, sin embargo, estos servicios de la provincia en una cédula dirigida á ella en 30 de Septiembre de 1625; y teniéndose por muy servido de ellos, y en alguna enmienda y remuneración de esto, y para que sus vecinos se animasen á continuarlos, le hizo merced de los quintos de denuncios.

Poco tiempo después, ó sea, el año de 1629, á consecuencia de haber los holandeses ocupado á Pernambuco, mandó el Rey al marqués de Castel-Rodrigo que aprestase luego en esta provincia una armada. En su cumplimiento celebró el correspondiente asiento con el Capitán D. Francisco de Bustinzoro, vecino de la ciudad de San Sebastián, reducido á la fabricación de dos galeones de guerra de 600 á 700 toneladas cada uno, la que se verificó inmediatamente. Dicho contratista hizo la entrega de los dos buques en Lisboa, donde tripulados de gente y armados de artillería salieron á navegar para ir en conserva de los de la Plata, que llevaba á su cargo el general D. Antonio de Oquendo. Con arreglo á la contrata, se debía pagar á Bustinzoro el importe de los dos galeones al tiempo de su entrega en Lisboa. Sin embargo, las dependencias del gobierno dejaron

de cumplir esta obligación tan sagrada bajo el pretexto de que los buques estaban sirviendo á la Corona de Castilla; y aunque en vista de semejante contestación acudió á las oficinas de Madrid en solicitud de pago, no pudo conseguirlo, á pesar de los repetidos decretos dados por el Rey para el efecto. El resultado de este asunto fué que Bustinzoro empleó ocho años entre Lisboa y Madrid en estas diligencias: que aunque al cabo de este tiempo logró le consignasen el pagamento en la primera, fué casualmente en la época en que ocurrió luego la rebelión de aquel reino. Bustinzoro y consortes quedaron á su consecuencia arruinados, burlados en sus esperanzas, y desengañados de la mala fe del gobierno. Si este no quiso ó no pudo cumplir el expresado contrato, otro tanto sucedió en algunos otros de igual naturaleza celebrados en la misma época con particulares de esta provincia, quienes así bien salieron gravemente damnificados.

Muy presente todavía en la memoria de los guipuzcoanos este irregular proceder del gobierno, se dirigió á la provincia en 31 de Marzo de 1646 otra Real cédula sobre lo mismo. Por ella se le encargaba que de acuerdo con Vizcaya y el partido de las cuatro villas dispusiese desde luego la construcción de algunos navíos para componer una escuadra, que con el nombre de Cantabria hubiese de servir en la Real armada del mar Océano. A este efecto ofrecía conceder los arbitrios que le propusiese la provincia, así que todas las comodidades, como á la navegación de las Indias, realizando además las ventajas de semejante empresa. Reunióse con este motivo Junta particular en la iglesia de Santa Cruz, sita en la jurisdicción de la villa de Azcoitia el día 24 de Mayo del mismo año. Pero tan escarmentados se hallaban los fabricantes de buques con las contratas anteriores, y tal era su desconfianza en el gobierno, que se resolvió

manifestar al Rey la absoluta imposibilidad en que se hallaba la provincia de encargarse de semejante construcción, que exigía grandes caudales. Limitóse por lo tanto á ofrecer su protección y ayuda á los fabricantes de contrata particular, con lo cual este asunto no tuvo por entonces más consecuencias. Sin embargo, las Juntas de Zarauz de 1647 ofrecieron servir al Rey con maderamen para la fabricación de cuatro galeones en cumplimiento y á cuenta del donativo que tenía ofrecido, proposición que fué aceptada por Su Majestad. Consta que á su virtud se cortaron en los montes de Aldaba en Tolosa los árboles robles necesarios para la tabla de la Capitana, que debía fabricarse en los astilleros de San Sebastián, á donde desde luego fueron conducidos, y su importe se pagó del producto del arbitrio del donativo.

Por otra Real cédula de 30 de Mayo de 1662 se encargó á la provincia la construcción de dos bajeles de guerra, ó á lo menos de uno, para el aumento de las fuerzas marítimas necesarias á la defensa del reino. En ellas ofrecía además conceder los arbitrios que fuesen necesarios para el efecto, con tal que no fuesen muy gravosos. Sin embargo, no se realizó servicio alguno de esta clase, según resulta del registro de la Junta particular celebrada en Vidania el día 19 de Julio del mismo año; pues se ve que en ella se acordó representar á Su Majestad la imposibilidad en que se hallaba la provincia de hacerlo, abrumada con las continuas exigencias de su gobierno. La provincia recibió otra Real cédula fechada en Buen Retiro á 10 de Febrero de 1677, por la cual el Rey excitaba el celo de la misma para que le sirviese con una escuadra de navíos del mayor número y calidad posibles. Semejante pedido era una consecuencia de los grandes descalabros que la Real armada había experimentado en las costas de Sicilia, y cuya recuperación deseaba el gobierno de Su Majestad, según

lo declaraba el mismo. Pero si el motivo de la honra nacional, que intervenía para el efecto indicado, debía considerarse por justo y legítimo; si la escasez de recursos de la Real Hacienda no era menos cierta, tampoco el estado de la caja de la provincia era aventajado, después de tantos gastos como ocasionaban sus armamentos, donativos y otras atenciones extraordinarias. A pesar de esto, la provincia ofreció servir á Su Majestad con una escuadra de cuatro navíos de guerra y un patache, bajo algunas condiciones. Tales eran principalmente las relativas al número de toneladas que habían de tener, la cantidad que la Real Hacienda hubiese de pagar por cada una, el tiempo en que debía hacer la entrega, el nombramiento de los jefes y oficiales de la escuadra, etc. El gobierno puso algunos reparos á estos capítulos, y de aquí el haberse de tratar de este negocio en diversas Juntas para su modificación y revisión, á fin de llegar á un arreglo. Consiguióse al fin que Su Majestad prestara su aprobación á las condiciones últimamente propuestas; pero cuando se estaba tomando disposiciones para dar principio á la fabricación, se recibió una Real orden, por la cual se mandó suspender esta. «He resuelto, decía, que por ahora se suspenda la ejecución de la fábrica ajustada, con que me habíais de servir, y que se ejecute la de dos bajeles, que he mandado hacer para la armada de la carrera en que ha de entender el Capitán Ignacio de Soroa, para cuyo breve logro os encargo asistáis.» Por otra Real orden de 24 de Marzo de 1680 se dijo igualmente á la provincia que se la relevaba de la obligación que había contraído de la construcción de la escuadra; y que en su compensación sirviese con infantería para la tripulación de los bajeles del cargo del general D. Miguel de Oquendo.

Las Juntas celebradas en la villa de Zumaya por el mes de Mayo de 1692 propusieron servir al Rey

con una fragata de guerra de cincuenta cañones puesta en la mar en el término de cuatro meses. Su objeto principal era el resguardo de esta costa, que se veía molestada por diferentes buques corsarios franceses; servicio que se quiso sustituir al donativo de diez mil ducados, que la Diputación había ofrecido recientemente. Hízose esta propuesta bajo las condiciones que paso á expresar: 1.^a Que la provincia hubiese de cobrar en reales de plata los impuestos que se exigían en los de vellón sobre el vino y bacalao. 2.^a Que se le concediese la facultad de cobrar arbitrios por el pescado salado que pasaba á Navarra. 3.^a Que el Rey diese el título de Capitán de mar y tierra al que hubiese de mandar la fragata, y que todos los cabos, oficiales y gente necesaria de su servicio se nombrasen por la provincia sin intervención de otro alguno. 4.^a Que los servicios que prestase esta fragata se entendiesen como verificados en la Real armada del Océano, despachándose para este efecto por el Rey las patentes necesarias á favor de las personas elegidas por la provincia. 5.^a Que se concediese á la provincia jurisdicción privativa para conocer de las causas de las presas que hiciese esta fragata y las de particulares, que en su conserva saliesen á navegar, en grado de apelación de las sentencias que dictasen los alcaldes. Su Majestad se dignó admitir este servicio en virtud de Real cédula librada á 3 de Marzo de 1693, con solo la advertencia de que esta fragata hubiese de hacer buena guerra, arreglándose á lo dispuesto en las ordenanzas del corso. Esta restricción equivalía á denegar á la provincia la jurisdicción que había solicitado para conocer en apelación de las sentencias que pronunciasen las justicias ordinarias de su territorio en las causas de presas. Deseábase además que el aumento del impuesto del donativo durase, no solamente mientras la fragata sirviese, sino hasta la extinción de todas

las obligaciones que tenía contraídas la provincia para objetos del real servicio. Por esta razón, las Juntas celebradas en Vergara por el mes de Mayo del mismo año dirigieron al Rey una nueva propuesta para la construcción de dicha fragata; proposición que no fué admitida por Su Majestad, al paso de manifestar á la provincia la gratitud por su celo y aplicación al real servicio, según resulta de la Real cédula expedida en 29 de Marzo de 1694. No se encuentra que la provincia hubiese hecho con posterioridad servicios de esta naturaleza.





CAPÍTULO VI.
DE LOS GENERALES DE TIERRA Y MAR.

Sección I.
De los generales de tierra.

A



ALDAY (D. Martín de), natural de Escoriaza, sirvió en los reales ejércitos, obteniendo el grado de maestro de Campo.

Alzad (D. Joaquín Julián de), natural de Oñate, de profesión abogado, tomó parte por la causa de D. Carlos á principios de 1833, y continuó sirviendo en las filas de este, llegando á ser Comandante general de la provincia de Alava con el grado de Brigadier. Cuando se hizo el convenio de Vergara, se retiró á Francia con la división alavesa de su mando, permaneciendo en el mismo reino hasta el mes de Junio de 1848, en que entró en esta provincia con la categoría de Mariscal de Campo. Puesto á la cabeza de una partida de armados para resucitar la causa del Pretendiente, empezó á correr por el país; pero perseguido por todas partes por la

tropa y celadores de la provincia fué hecho prisionero en el monte de Barrayate el día 2 de Julio, y fusilado en la mañana del 3 en la villa de Zaldivia, donde fué enterrado.

Anciondo (Juan Pérez de), natural de Tolosa, maestro de Campo de los tercios guipuzcoanos en la batalla de Noáin contra el ejército francés el año de 1521.

Arámburu (D. José Francisco Basilio de), natural de la misma villa, Caballero Comendador de la Orden de Alcántara, Capitán general de las Islas Baleares, etc. Se distinguió el día 20 de Abril de 1744 en el ataque de las trincheras, delante de Villafranca de Niza, ocupadas por las tropas del Rey de Cerdeña; en cuya recompensa Felipe V le hizo la merced del título de Conde de Villafuertes, así que del patronato de la iglesia parroquial de Rexil.

Areizaga (D. Carlos de), natural de Villarreal, fué Coronel del regimiento de Cantabria en 1705, primer caballerizo y gentil hombre de Su Majestad, y Capitán general de los reales ejércitos.

Areizaga (D. Felipe de), natural de la misma villa, Caballero de la Orden de Santiago, y Teniente general de caballería en el ejército de Cataluña.

Areizaga (D. Juan Carlos de), natural de la misma villa, Barón del Sacro-Romano Imperio, Caballero del hábito de Santiago, y de la Cruz laureada de la Orden de San Fernando, Teniente general de los reales ejércitos, y últimamente Capitán general de las tres provincias vascongadas. En 1794 fué Comandante del batallón de voluntarios creado por esta provincia durante la guerra de la república con Francia; concluída, continuó sus servicios en la de la independencia, distinguiéndose en la batalla de Alcañiz de 23 de Mayo de 1809. Nombrado luego General en jefe del grande ejército de Castilla la Nueva, fué desgraciadísimo en la batalla de Ocaña de 19 de

Noviembre del mismo año; sin embargo, el Rey le nombró en 1814 General en jefe del ejército de reserva estacionado en esta provincia, con la Capitanía general de las tres vascongadas. Murió en la villa de Tolosa el día 18 de Marzo de 1820, estando ejerciendo este último cargo, y su cadáver fué conducido al Campo Santo de su pueblo nativo.

Arteaga (D. Juan de), natural de Villafranca, maestro de Campo en Milán por los años de 1630, y Caballero de la Orden de Santiago, murió en las guerras de Italia en la misma época.

Arteaga (D. Juan Antonio de), natural de la misma villa, Caballero de la Orden de Santiago y maestro Campo general.

Arteaga (D. Luis de), natural de la misma villa, Teniente general de los reales ejércitos, y Gobernador de la plaza de Jaca, murió por los años de 1780.

B

Berrolarán (D. Francisco de), natural de Irún, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y Capitán general de Caracas y Venezuela en 1692, condecorado por Carlos II con el título de Marqués del Valle de Santiago, con grandes porciones de tierras en la primera de dichas provincias.

E

Echagüe (D. Rafael de), natural de San Sebastián, sirvió desde 1833 en adelante de Oficial en el batallón de Chapelgorris creado por la provincia para la defensa del trono de la Reina. Trasladado al ejército, ascendió sucesivamente en la carrera militar, obteniendo en 1854 el grado de Mariscal de Campo con el cargo de Capitán general de Valencia. En la última guerra de Africa fué Comandante general del primer cuerpo del ejército, por cuyos servicios ascendió al grado del Teniente general: obtuvo luego la

Capitanía general de Puerto-Rico, trasladado después á la de las Islas Filipinas.

Echaluze (D. Bernardo de), natural de Ezquioga, sirvió durante la guerra de la Independencia en los batallones de esta provincia, y después ascendió sucesivamente á Mariscal de Campo, obteniendo además la gran Cruz de San Hermenegildo. Fué segundo Cabo de la Capitanía general de estas provincias, después Ministro del Tribunal Supremo de guerra y marina, y murió en la villa de Vergara el año de 1866.

Emparan (D. Francisco José de), natural de Azpeitia, sirvió en el regimiento de las guardias Reales, y obtuvo en 1703 el mando del de Cantabria, creado por la provincia. Cesó en este servicio en 1715 á causa de su ascenso, llegando gradualmente á ser Teniente general de los reales ejércitos, con la Comandancia general de las Islas Canarias. Murió el año de 1717.

Esteibar (D. Francisco de), natural de Mondragón, mandó las fuerzas terrestres y marítimas de las islas Filipinas en clase de Maestre de Campo por espacio de veinte y cinco años en guerra con los Chinos y los Ingleses sus aliados, alcanzando muchas vicctorias y defendiendo aquellos importantes territorios. Al regresar á Europa, falleció en Veracruz á 18 de Julio de 1669.

G

Gamboa (D. Juan de), natural ó vecino de Motrico, coronel de los tercios guipuzcoanos en el cerco del castillo de Burgos en 1476, alcaide de Fuenterrabía al tiempo en que esta plaza fué sitiada por el ejército francés el mismo año, y más adelante Capitán general de estas fronteras, del consejo de Su Majestad, etc. Murió en esta provincia por el mes de Febrero de 1496, siendo enterrado en el cementerio de

la iglesia parroquial de Irún, según el letrado de su sepultura existente fuera del cuerpo de la misma iglesia.

Garro (D. José de), natural de Mondragón, siguió la carrera militar, en la que ascendió al grado de maestro de Campo general, fué gobernador de Tecumán, Buenos-Aires y Chile, y murió el año de 1702, estando ejerciendo la Capitanía general de los presidios de esta provincia.

Gaztañaduy. (D. Iñigo de), natural de Escoriaza, maestro de campo.

Gaztañaduy (D. Juan Francisco de), natural de la misma villa, teniente de Capitán general en la provincia de Casamarca.

Gazteluando (D. Cristóbal de), natural de Oñate, jefe de los tercios de la misma en la guerra con Francia en 1638, después de maestro de Campo y Teniente general, encargado del descubrimiento de algunas provincias del reino del Perú, donde hizo señalados servicios.

I.

Ibarrola (D. Julián Romero de), descendiente de la villa de Usúrbil, maestro de Campo valeroso en los estados de Flandes por los años de 1562, murió en la villa de Soler de los de Milán.

Idiáquez (D. Alonso de), natural de San Sebastián, duque de Ciudad-Real, virrey de Navarra y Capitán general de Guipúzcoa en 1615, se distinguió en las guerras de Flandes y liga de Francia contra los hugonotes, así que en las acciones de Burgoh-zoom, San Quintín, Noyón, Charlemón, le Chapelle y otras. En la de Fontaine-francaise, que tuvo lugar en 1595, después de haberse batido gloriosamente, cayó del caballo herido en un río y quedó prisionero; y puesto en libertad por la suma de veinte mil escudos, volvió al servicio del Rey. Murió en Milán el día 7 de Oc-

tubre de 1618, hallándose ejerciendo el cargo de maestre de Campo general.

Idíduex (D. Juan de), natural de Azcoitia, duque de Granada de Ega, ayo y sumiller de corps del príncipe de Asturias, que después reinó con el nombre de Fernando VI.

Ipeñarricta é Idíduex (D. Tomás de), natural de Villarreal, Capitán general que fué de Andalucía en el reinado de Felipe V.

Irazazabal y Andía (D. Francisco de), natural de la villa de Tolosa, Caballero Comendador de la Orden de Santiago, del Consejo de la guerra en los estados de Flandes, y veedor general de sus ejércitos, en los que militó, recibiendo varias heridas. Continuó sus servicios en la guerra de expulsión de los moriscos de Granada, fué al socorro de la plaza de Mármora con gente á su costa propia, después mandó la infantería de Andalucía, y últimamente en 1625 fué nombrado Gobernador de las Islas Canarias.

Iramain (D. José de), natural de Mondragón, maestre de Campo, falleció en la ciudad de Potosí hacia el año de 1740.

Isasaga, Arrúe y Mogica (D. Juan de), natural de Villafranca, maestre de Campo, Caballero de la Orden de Calatrava, floreció á principios del siglo XVII.

Iturbé (D. José Ignacio de), natural de Azpeitia, fué guardia de corps, tomó parte á favor de D. Carlos en el levantamiento de estas provincias por Octubre de 1833, en cuyas filas ascendió á Brigadier. Fué, no obstante, uno de los jefes que más contribuyeron á que se hiciese en 1839 el convenio de Vergara: después en 1841 obtuvo el grado de Mariscal de Campo, y falleció en su pueblo nativo el año de 1854.

J

Jáuregui (D. Gaspar de), natural de Villarreal, llamado vulgarmente el Pastor, por haberlo sido en

su niñez, y el primero que en 1810 se levantó en esta provincia con una partida de otros seis individuos á favor de la independencia nacional. Esta pequeña partida se fué engrosando con el tiempo con voluntarios hasta que llegó á reunir tres batallones completos, cuyo coronel fué, siendo tal la organización militar que adquirieron estos, que hizo frente con frecuencia á los acreditados generales franceses militantes en el país. Los daños y pérdidas que este intrépido caudillo guipuzcoano les causó fueron de mucha consideración. En la segunda época constitucional se comprometió en el partido liberal, y á la entrada del ejército francés en 1823 en España, habiéndose retirado al interior, obtuvo en Asturias el mando de una brigada. Disuelto entonces el gobierno constitucional, pasó á Francia en calidad de prisionero de guerra, y no regresó á España hasta el mes de Octubre de 1833, en que fué llamado por el Capitán general á consecuencia del alzamiento carlista. Mientras duró la guerra civil, ascendió sucesivamente á los grados de Brigadier y Mariscal de Campo con la Comandancia general de la provincia, y hecha la paz fué nombrado segundo cabo de la Capitanía general de las tres vascongadas, en cuyo desempeño murió en Vitoria el día 19 de Diciembre de 1844 á la edad de cincuenta y tres años. Sus restos mortales fueron trasladados por la Diputación de esta provincia á un panteón erigido en la Iglesia parroquial de su pueblo nativo, en memoria de los distinguidos servicios prestados á la patria.

L

Lardizábal (D. Ignacio de), natural de Segura, sirvió en el regimiento de las guardias reales con el grado de Capitán, equivalente al de Coronel de infantería de línea. Se puso á la cabeza de la sublevación carlista de esta provincia en Octubre de 1833,

obteniendo el cargo de Comandante general, presidente de la Diputación á guerra y los grados de Brigadier y Mariscal de Campo. Adherido en este último concepto al Convenio de Vergara, murió en Irún el día 24 de Enero de 1849 á los 63 años de edad.

Lazcano (Lope García de), natural ó vecino del Concejo de su apellido, caudillo de los tercios guipuzcoanos en la entrada que hicieron en el entonces reino de Navarra y toma del Castillo de Unza en 1334.

Lazcano (Juan López de), natural ó vecino del mismo Concejo, vino en 1476 de la Corte á la defensa de la plaza de Fuenterrabía, cuando la villa de Irún había sido ocupada por el ejército francés; y habiendo entrado en aquella, gobernó á los tercios guipuzcoanos, derrotando á los franceses.

Lazcano (Amador de), natural ó vecino del mismo Concejo, caudillo de los tercios guipuzcoanos en la batalla del Salado contra los moros el año de 1340, después alcaide gobernador de Cazorla y Caballero de la Orden de la Banda.

Legazpi (Miguel López de), natural de Zumárraga, sirvió en la milicia, y después fué escribano mayor del Cabildo y Alcalde ordinario de Méjico. En 1564 se le dió el mando de la expedición dispuesta para la conquista de las islas Filipinas con los títulos de Gobernador y Adelantado de las tierras que sometiese, revestido de amplios poderes para el ejercicio de estos cargos. Verificada la expedición, tomó posesión de la ciudad de Manila en nombre del Rey en 1571, erigiéndola en capital de todas las islas Filipinas, estableciendo en ella un ayuntamiento y gobierno municipal. Tuvo que sujetar después algunos jefes indios que se sublevaron; hizo reconocimientos por el interior de la isla de Luzón; con su prudente y generoso proceder fué atrayendo á los habitantes de ella; en

fin, con la de los misioneros sometió al dominio español un extenso territorio. Este insigne guipuzcoano murió de repente en aquella capital el día 20 de Agosto de 1572, siendo sepultado su cadáver en la iglesia del convento de San Agustín.

Lersundi (D. Francisco de), descendiente de la parte paterna de la villa de Azcoitia, de la materna de la de Deva, nació en la mar yendo embarcada su madre á la Coruña, donde estaba su marido de Coronel. Principió la carrera militar en el batallón de Chapelgorris creado por la provincia en 1833 para la defensa del tróno de la Reina; y colocado después en el ejército, ascendió sucesivamente al grado de Teniente general, que ahora tiene, en premio de sus servicios y merecimientos. Se halla condecorado con varias cruces militares, es Senador del reino, y ha sido Ministro de la guerra y marina, Presidente del Consejo de ministros, y por último Gobernador Capitán general de la Isla de Cuba en el año pasado de 1866.

M

Mendizabal (D. Gabriel de), natural de Vergara, fué Comandante del batallón de voluntarios creado por la provincia en 1794 para la defensa del territorio contra los franceses. Concluída la guerra de la república, continuó sirviendo á la patria en la de la Independencia, en la que alcanzó el grado de Teniente general, haciéndose memorable por el valor y serenidad con que en 1809 rechazó en Alba de Tormes los ataques de la caballería francesa, formando cuadro con su división. Después fué nombrado General en jefe de la ala izquierda del cuarto ejército, en cuyo concepto asistió á la batalla de San Marcial de 31 de Agosto de 1813, y mandó una división en la de Tolosa de Francia de 1814. En recompensa de estos servicios obtuvo el año de.....la merced del título de

Castilla con la denominación de Conde del Cuadro, Vizconde de Astorga, estando ya condecorado con las grandes cruces de San Fernando y San Hermenegildo, y murió de edad abanzada en Madrid el año de 1838.

Mondragón y Otalora (D. Cristóbal de), natural de la villa de su primer apellido, sirvió en los estados de Flaudes con grande fama de valor y pericia militar, siendo uno de sus hechos notables el haber desbaratado con la caballería de su mando la del Conde Mauricio, que gobernaba Felipe de Nasau, á quien hizo prisionero. Murió por el mes de Enero de 1596, siendo Gobernador de la plaza de Amberes.

O

Oñaz y Loyola (D. Martín García de), natural de Azpeitia, Señor de la casa solar de Loyola y hermano mayor de San Ignacio, Caballero de la Orden de Calatrava, obtuvo diferentes puestos militares, y últimamente el de Gobernador Capitán general de Chile. Casó en Lima con la hija del Inca del Perú, de quien tuvo dos niñas, de las que la mayor contrajo matrimonio con D. Juan de Borja, hijo segundo del duque de Gandía, titulado marqués de Alcañices.

Orbe y Elio (D. José María de), natural de Irún, sirvió de Capitán en los batallones de tercios de Guipúzcoa en 1794, y de Comandante de uno de los de Vizcaya en la guerra de la Independencia. En 1833 se puso á la cabeza de la sublevación carlista de Vizcaya en calidad de Corregidor, por cuyos hechos el Pretendiente le elevó á la dignidad de grande de España, y le nombró segundo Comandante general del mismo Señorío, y más adelante, en 1838, Ministro de la guerra. A consecuencia del Convenio de Vergara del año inmediato, emigró á Francia, donde falleció.

P

Portu (D. Juan Pérez de), natural de Irúu, General que militó en tiempo de Felipe III, y murió en la ciudad de Manfredonia de Sicilia el año de 1618.

U

Uranga (D. José de), natural de Azpeitia, sirvió en la guerra de la Independencia de oficial en los batallones de la provincia; se colocó después en el ejército, donde obtuvo sucesivamente diferentes ascensos, siendo Brigadier al principio de la última guerra civil. Se declaró entonces por la causa del Pretendiente; reunió fuerzas en Alava para su defensa; en fin, se halló á las órdenes de D. Tomás de Zumalacárregui en varias acciones. Al realizar D. Carlos su expedición al interior del reino, nombró á Uranga Teniente general de su ejército con el cargo de Capitán general de Navarra y Provincias Vascongadas, que desempeñó hasta el regreso de aquel á estas.

Urdinola (D. Francisco de), natural del valle de Oyarzun, maestre de Campo y Capitán general del reino de Perú.

Urbiztondo (D. Antonio de), natural de San Sebastián, fué paje del Rey Fernando VII; se comprometió en 1821 en el partido absolutista, y en 1833 se declaró por la causa de D. Carlos. Desde que logró penetrar en Navarra, siguió en el ejército de este desempeñando diferentes empleos, y señaladamente en 1837 el de Comandante general de Cataluña con el grado de Mariscal de Campo. En 1839 se adhirió al Convenio de Vergara, continuando en adelante sus servicios en el ejército de la Reina, donde alcanzó el grado de Teniente general y la Capitanía general de Navarra. Más adelante se le confirió el título de Marqués de la Solana, el gobierno y la Capitanía general de las islas Filipinas, y por último, en 1856 fué

nombrado Ministro de la guerra, falleciendo al año siguiente.

Z

Zuloaga (D. Gabriel José de), natural de Fuenterrabía, Gobernador de la provincia de Venezuela en 1742, se distinguió en la defensa de ella, cuando fué atacada por los ingleses, á quienes rechazó, causando grandes pérdidas, por cuyos hechos obtuvo el título de Conde de la Torrealta.

Zumalacárregui (D. Tomás de), natural de Ormaiztegui, sirvió en los batallones de esta provincia durante la guerra de la Independencia, y concluída esta, en el ejército. En 1821 tomó parte en la facción realista de Navarra en clase de Comandante de uno de sus batallones, y en 1833 era Coronel efectivo de un regimiento, de cuyo mando fué separado por sospechas de ser partidario de la causa del Infante D. Carlos. Resentido de este hecho, se puso á la cabeza de la facción de Navarra, mando en cuyo desempeño manifestó capacidad para organizar, pericia en preparar y dirigir los combates, y valor personal en la ejecución de estos. Dotado de estas cualidades, hizo frente á las tropas de la Reina en multitud de encuentros, les sorprendió muchas veces, causando en ellas grandes pérdidas, mucho desaliento y terror, sobre todo con el sistema de fusilar á todos los prisioneros. Este memorable caudillo carlista fué herido de una bala de fusil en el sitio que puso á Bilbao en 1835, á cuyas resultas murió en la villa de Cegama el día 24 de Junio del mismo año, siendo á la sazón Teniente general y en jefe del ejército del Pretendiente. Después de este suceso, D. Carlos le nombró Capitán general del mismo, grande de España con el título de Duque de la Victoria, Conde de Zumalacárregui, con otras mercedes á favor de su familia. La historia juzgará, por lo demás, con el tiempo si la.

conducta militar y política que observó este jefe durante su comando fué conforme ó no á los principios de humanidad y civilización de la época presente.

SECCIÓN II.

De los generales de mar.

A.

Aguirre (D. Pablo Agustín de), natural de San Sebastián, capitán de navío, célebre por la resistencia que el día 19 de Abril de 1740 hizo á la altura del cabo de Ortegá á tres navíos ingleses de 70 cañones con el único de su mando, batiéndose de una manera heroica.

Aguirre y Oquendo (D. Joaquín de), natural de la misma ciudad, mayor general la primera vez que se erigió este empleo, quien por comisión del gobierno redactó las ordenanzas navales de 1751, murió de presidente de Guatemala.

Albizuri (D.....de), natural de Eibar, general de la Real Armada en los mares del Sur, falleció á principios del siglo XVIII.

Alliri (D. Antonio de), natural de Zubieta, de la jurisdicción de San Sebastián, caballero de la orden de Calatrava, almirante en la carrera de Indias, falleció á principios del siglo XVII.

Aramburu (D. Marcos de), natural de San Sebastián, general de los galeones de Indias, quien el año de 1606 condujo una escuadra desde Rivadeo á Lisboa.

Aramburu (D. Hernando Martínez de), natural de la misma ciudad, almirante de caravelas, el que acompañó al general D. Juan Ronquileo en la expedición de las islas Filipinas, año de 1610.

Aramburu (D. Pedro de), natural de Tolosa, caballero de la orden de Santiago, almirante de la es-

cuadra del mar Océano por los años de 1686, falleció en el de 1696.

Arbelaiz (D. Lucas de), natural de Irún, almirante honorario, sirvió muchos años en las armadas reales, y retirado de sus achaques, murió en la misma villa, año de 1696.

Arizulueta (Juan de López de), natural de Eibar, el que en tiempo del emperador Carlos V fué general de la armada de Indias con su galeón nombrado «Flor de lis», haciendo muchas hazañas.

Arizaga (D. Antonio de), natural de Orio, almirante que fué de la Real Armada.

Ayalde (D. Tomás de), natural de Usúrbil, caballero gran cruz de las órdenes militares de San Hermenegildo y de Isabel la Católica, Teniente general de la Armada nacional, falleció por los años de 1832.

C.

Churruca (D. Cosme Damián de), natural de Motrico, brigadier de la Real Marina, mandó el navío «San Juan», de 74 cañones, á las órdenes de Gravina, en el combate naval de Trafalgar de 21 de Octubre de 1805, durante el cual recibió un balazo de cañón en la parte superior del muslo derecho. A pesar de esta desgracia, este valiente marino, metido en un barril de harina, continuó mandando con una serenidad heroica hasta que dejó de existir á las tres horas, por cuyo suceso tuvo que rendirse dicho navío. La mayor parte de la escuadra española tuvo en seguida la misma suerte, entregándose al almirante inglés Nelson.

E.

Echeverri (D. Juan de), natural de San Sebastián, conde de Villalcazar, marqués de Villarrubia, cuatro veces general de los galeones, floreció en el siglo XVII.

Echeverri (D. Juan Domingo de), natural de la misma ciudad, hermano del precedente, general de las flotas, floreció en el citado siglo.

Echeveste (D. Francisco de), natural de Usúrbil, en la comunidad de Aguinaga, obtuvo dos veces el cargo de los galeones de Filipinas, fué embajador del rey al emperador de la China, y murió en Méjico el día 20 de Octubre de 1753 á los 69 años de edad.

Eguiguren (D. Lázaro de), natural de Eibar, sargento mayor de la Real Armada del cargo de D. Antonio de Oquendo en la expedición á Pernambuco en 1631, tomando parte en la terrible batalla ocurrida con el general holandés Hauspater, á cuya consecuencia fué nombrado almirante de aquel, y pereció por tormenta, ejerciendo este cargo.

Elcano (Juan Sebastián de), natural de Guetaria, maestre de la nave titulada Concepción, que con algunas otras fueron destinadas en 1519 al descubrimiento del paso al mar Pacífico, sin dar la vuelta por el cabo de Hornos. La expedición consiguió en 1521 el fin que se había propuesto, no sin haber pasado grandes trabajos y contratiempos; por lo que Elcano regresó á España en 1522 en la nave Victoria, después de haber navegado 14000 leguas, con su tripulación reducida á 18 hombres extenuados. Por estos servicios el rey le hizo algunas mercedes, entre ellas la del uso de un escudo de armas en que figurase un globo con este letrero: *Primus circumdixi me*. Quería significar esto que había sido el primero que había dado toda la vuelta al mundo. Elcano determinó hacer parte de una nueva expedición que en 1525 ordenó el rey se realizase al mando de D. García Jofre de Loaisa á las Molucas, para cuyo efecto armó de su cuenta en Portugalete cuatro naves. Para esta jornada, además del gobierno del buque, nombrado Sancti-Spiritus, se le dió el cargo de piloto mayor y guía de toda la armada, que equiva-

lía á las funciones de segundo general de ella. Si los trabajos de la primera expedición de este marino fueron grandes, todavía fueron mayores los de esta segunda en que las naves fueron destrozadas por horribles tormentas. A sus resultas enfermó Elcano, hizo su testamento, dejando varias mandas á la iglesia de Guetaria, á su aneja de Asquizu, ermitas, hospital, etc., y falleció á los cinco días de haber tomado el mando superior de la expedición por muerte del general Lonisa, con arreglo á la Real provisión secreta. En memoria de las hazañas de tan distinguido hijo, la provincia le erigió en 1861 en la misma villa nativa una estatua de bronce sobre el arco existente entre el pueblo y muelle.

G

Gaztañeta (D. Antonio de), natural de Motrico, Teniente general de la Real Armada, uno de los marinos más distinguidos por su intrepidez y pericia náutica, escribió un tratado sobre la navegación, y otro sobre la construcción, con mucho aplauso de los inteligentes. Fué quien introdujo en España la buena arquitectura naval, y murió en Madrid año de 1728 á los 72 años de edad.

Guilistegui (D. Juan de), natural de la misma villa, Almirante de una armada de seis galeones en la expedición del general D. Juan Ronquillo á las islas Filipinas en 1610, y Caballero del hábito de Santiago en 1625, en premio de sus servicios.

I

Irigoyen (Martín de), natural de Rentería, Almirante de la escuadra del mar Océano en 1597, peleó valerosamente con la Capitanía inglesa, cuya bandera cogió, después fué de orden del virrey de México como Almirante en la expedición de las islas Filipinas en 1610, y murió en la mar.

Isasi Idiáquez (D. Antonio de), natural de Eibar, Caballero de la Orden de Alcántara, de los Consejos supremos de guerra y de marina, Almirante de la Real Armada del mar Océano en 1621, y después General de los galeones de la carrera de Indias.

Iturriza (D. Juan de), natural de Motrico, Caballero de la Orden de Santiago, Almirante de la Real Armada, floreció á fines del siglo XVII.

L

Larraspuru (D. Tomás de), natural de Azcoitia, Caballero Comendador de la Orden de Alcántara, del Consejo de Su Majestad, Capitán general de la Real Armada en la carrera de las Indias, murió el año de 1632 á los cincuenta de edad, después de haber prestado distinguidos servicios al Rey y á la patria.

Lazcano (Juan de), natural del Concejo de su apellido, General de la Real Armada dispuesta en 1512 para la defensa de los estados de la iglesia.

Lezo (D. Blas de), natural de Pasajes, en su barrio de San Juan, Teniente general de la Real Armada, célebre en la historia por la defensa de Cartagena de Indias año de 1741 contra la escuadra inglesa mandada por el Almirante Vernón.

O

Oquendo (D. Miguel de), natural de San Sebastián, obtuvo en 1577 el título de General de marina, y habiendo aprestado en el puerto de Pasajes en 1582 una escuadra de catorce navíos de alto bordo, fué á las órdenes de D. Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, á las islas Terceras contra el prior de Ocrato. Juntas ambas escuadras, desbarataron cerca de la isla de San Miguel á la escuadra francesa mandada por Felipe Estrosi, con muerte de este mismo, fuga del prior, rendición de la Capitana y entrega de

la isla. Oquendo mandó también once navíos de grueso porte en el poderoso armamento naval hecho en 1588 contra Inglaterra.

Oquendo (D. Antonio de), hijo del precedente, natural de la misma ciudad, General de la escuadra de Cantabria formada en 1618, en cuyo mando hizo señalados é importantes servicios, siendo ascendido en su recompensa en 1626 al grado de Almirante general de la armada del mar Océano, que la dirigió con grandes pruebas de valor y talento. Así es que en 1627 socorrió sin orden con mucho riesgo la plaza de Mármora estrechada por los moros: en 1631 sostuvo una terrible batalla naval con el general holandés Hampater, yendo al socorro de las plazas de Pernambuco y Todos Santos del Brasil. Tuvo en 1639 otro encarnizado combate en el canal de la Mancha con la escuadra holandesa, yendo á llevar socorros á los Países-Bajos, y con su fragata la Capitana resistió á toda la enemiga, sin que hubiesen podido abordarla; hecho que mereció la satisfacción y aprecio particular del Rey, como lo manifestó haciéndole la merced del título de Vizconde. Este valeroso é ilustre marino guipuzcoano falleció en la Coruña, á donde había ido de Real orden, á consecuencia de una fiebre que contrajo con las fatigas de la expedición, por el mes de Mayo de 1640.

Oquendo (D. Miguel de), hijo de fuera de matrimonio del anterior, natural de la misma ciudad, General de la escuadra de Cantabria en 1656. En este mismo año fabricó por asiento hasta seis galeones y un patache, y en 1663 de su cuenta otros dos navíos para la armada del mar Océano. La circunstancia de haberse perdido en la expedición del propio año todos los navíos de su mando contra las costas de Rota, y algunas otras contingencias poco favorables, le obligaron á retirarse á su casa de campo de San Sebastián, donde murió dedicado al estudio de la literatura.

Orbea (D. Martín de), natural de Eibar, Caballero de la Orden de Santiago, General de la flota de Nueva-España, y electo general de los galeones.

R

Recalde (D. Juan Martínez de), natural ó vecino de Tolosa, Almirante general de la Real Armada dirigida el año de 1588 contra la Inglaterra.

Rentería (Martín de), natural de la villa de su mismo apellido, General de la escuadra del mar Océano, quien en 1526 decretó sobre Ibiza la escuadra del célebre Barbaroja, bey de Argel, á cuyas resultas el emperador Carlos V le dió en 1529 un privilegio para que usase un escudo de armas donde figurase un galeón con los buques enemigos, según se ven en su casa palacio de Uranzu.

U

Ugalde y Orella (D. Lorenzo de), natural de San Sebastián, General de la Real Armada en los mares de Filipinas por los años de 1646 y 1647, el que con solos cinco bajeles sostuvo un reñido y largo combate contra diez y ocho de guerra holandeses, hecho que fué muy celebrado.

Urdanibia (D. Sancho de), natural de Irún, General de la Real Marina, que sirvió desde el año de 1600 en adelante, teniendo varios encuentros gloriosos contra los enemigos de la corona, y murió en Cádiz año de 1644, dejando sus bienes para la fundación de un nuevo hospital en aquella villa, su patria, con otras obras piadosas.

Urdinso (D. Bartolomé de), natural, según unos, de San Sebastián, según otros, de Irún, General de la Real Armada, que después de haber servido muchos años, murió en el Puerto de Santa María á bordo de la Capitana, año de 1726.

Urquiola (Antonio de), natural de Guetaria, supe-

rintendente de la fábrica de navíos y galeones del rey en esta provincia á fines del siglo XVI y principios del XVII, y general de la escuadra de Cantabria.

V

Vicuña (D. Diego Ascensio de), natural de Legazpia, almirante general de la real armada desde el año de 1625 en adelante.

Vidazabal (Miguel de), natural de Motrico, almirante de la Real Armada, que en el año de 1618 apresó en el estrecho de Gibraltar cinco navíos moros cargados de dinero, y batió después á otra escuadra mora de veinte y ocho navíos, apresando á veinte de ellos, y rescatando mil y quinientos cristianos cautivos, que llevaban de la isla de Lanzarote. En el mismo año citado peleó valerosamente con otra escuadra holandesa de veinte y cuatro navíos, en cuya batalla no fué tan feliz; pues tuvo que retirarse, después de haber sufrido grandes pérdidas, y falleció á poco tiempo de enfermedad en San Lúcar de Barrameda.

Villaviciosa (Juanot de), natural de Lezo, general nombrado para el mando de la escuadra de la provincia destinada á la expedición de 1582 á la isla de San Miguel, cargo que no quiso admitir por ciertos motivos particulares. Asistió, sin embargo, como aventurero con una nave armada á su propia costa, con la que peleó valerosamente contra la escuadra francesa, y murió de dos balas de fusil, siendo victorioso en el combate.

Z

Zamalde (Martín de), natural de Rentería, general del mar del Sur, que murió en la ciudad de los reyes del Perú, año de 1657, después de haber dejado muchos regalos á la iglesia parroquial de aque-

lla villa, y algunas fundaciones piadosas para los pobres.

Zuazola (D. Lorenzo de), natural de Azcoitia, caballero de la orden de Santiago, general de la Real Armada, que partió á las islas Filipinas por el mes de Diciembre de 1619, pereció en una tormenta ocurrida el día 2 de Enero de 1620 en la playa de Vejer, cerca de Gibraltar, y su cadáver fué sepultado en la misma villa.

Zubiaurre (D. Pedro de), natural de Irún y vecino de Rentería, general de la Real Armada, que sirvió al rey en las guerras de Holanda por los años de 1568 y 1605, en las cuales se distinguió por su valor, así como en otras muchas ocasiones, y murió en Inglaterra el año últimamente citado.





LIBRO IX.

Del ramo legislativo y judicial.



CAPITULO I.

DEL DERECHO CONSTITUIDO.

Sección I.

Del derecho en general.



Es cosa indudable que la legislación antigua de Guipúzcoa fué meramente consuetudinaria, ó sea, consistente solamente en los usos, costumbres y albedríos. Por más que registren cuantos antecedentes se puedan haber á las manos de personas estudiosas, no se hallará noticia, antecedente, ni vestigio alguno de que en los primeros tiempos, ni mucho después, hubiese tenido esta provincia leyes escritas, cuya aplicación ni el estado atrasado de civilización lo permitía. Los Romanos, que eran los que por razón de su mayor cultura podían darla las suyas, no lo hicieron sin duda durante su dominación en este país. Ellos, según el

principio general de su política, no imponían sus leyes á los territorios que iban conquistando, sino que dejaban á los habitantes de estos vivir con las propias, sus usos y costumbres, prefiriendo hacer prevalecer á aquellas, más bien por el imperio de la razón, que por razón de imperio: *non ratione imperii, sed imperio rationis*. Pero de todos modos, los Romanos no fueron propiamente conquistadores de Guipúzcoa; y si llegaron á dominar en ella andando el tiempo, acaeció esto después de haberla ocupado en concepto de aliados ó confederados. No había por lo mismo razón alguna para que promulgasen é hiciesen obligatorias en este país sus leyes civiles ni criminales; y esto tanto menos se ha de presumir, cuanto que apenas se puede suponer en ellos ningún motivo particular para causar á sus habitantes semejante novedad. Su interés verdadero era el de mantenerlos contentos, ó á lo menos pacíficos, sin crear inquietudes necesarias de ninguna clase; como hubiere acaso sucedido, contrariándolos en sus antiguos usos; y los que los gobernaban no dejaban de conocer bien esta verdad.

Iguales consideraciones ocurren con respecto á los godos, que sucedieron á los romanos en la dominación de estas provincias, para deducir la política que seguirían en ellas en orden á las materias de legislación. Estos invasores no exterminaron las comarcas que conquistaban, ni sometieron á la esclavitud á los habitantes de ellas; sino que, reservando para sí el mando y una parte de las tierras, dejaban á los pueblos sugetados el resto de ellas, sus costumbres y el uso de sus propias leyes. No era tampoco este modo de proceder efecto de la tolerancia natural de aquellos vencedores, sino porque semejante conducta facilitaba su establecimiento permanente en el país conquistado. Además, es un hecho en que convienen los historiadores nacionales, que aun los mismos go-

dos carecieron de leyes escritas hasta el tiempo de Eurico, primer Rey que las redactó, rigiéndose hasta entonces por sus costumbres, y es claro que lo propio debió suceder con las gentes de este país. San Isidoro en la historia de dichos conquistadores, hablando de aquel monarca, dice: *sub hoc rege legum statuta in scriptis habere ceperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine regerantur*, que equivale á lo expresado. De todos modos, las leyes que Eurico hiciera, y cuya investigación no pertenece á este lugar, no llegaron á observarse entre los españoles en general, y menos todavía entre los guipuzcoanos en particular. Otro tanto debemos juzgar acerca del Breviario que Alarico hizo redactar y dió á los pueblos de España y Francia que habían estado sometidos á los Emperadores romanos, así que respecto de otra compilación de leyes que se supone haberse hecho de orden del Rey Leovigildo.

Con respecto al célebre Fuero Juzgo, es cosa constante que siendo un código de leyes hechas por los Reyes godos, y aprobado en un concilio nacional, rigió en la monarquía castellana. Atendida su respetabilidad en razón de los venerables Obispos que concurrieron en aquella Junta á su confección, y teniendo también presente que se reunió en él la legislación puramente nacional vigente sobre diferentes materias civiles, pudiera creerse que también tuvo aplicación en esta provincia. Sin embargo, lo más probable es que ni en el tiempo en que se formó aquella compilación, ni aun con posterioridad, rigió ella en esta provincia, á lo menos con carácter obligatorio. A la verdad, siempre se la halla atendida á sus usos y costumbres, y ningún vestigio nos ha dejado la antigüedad de haber tenido aplicación legal dicho código. Esto mismo expresó el historiador Paulo Emilio en su obra *De gestis francorum*, quien hablando de los Cántabros, dijo lo siguiente: *et cum vi-*

sigothi hispanis jura darent, nunquam imperatum fecere suis semper legibus usi. Traducido al castellano, quiere decir, que siendo así que los visigodos dieron leyes á los españoles, nunca las admitieron los cántabros, esto es, los habitantes de estas montañas, quienes al contrario usaron siempre las suyas propias. Véase en esta manifestación un testimonio bien explícito é importante de la opinión que dejó emitida acerca del no uso del Fuero Juzgo en esta provincia de Guipúzcoa.

Pero quiero suponer por un momento que las leyes de los Reyes godos contenidas en cualquiera de las cuatro compilaciones de que acabo de hablar hubiesen regido en esta provincia mientras dominaron ellos en España. No se podrá á lo menos desconocer que con la irrupción de los moros y la conquista que hicieron del territorio español, menos en la parte de estas comarcas montañosas, todas las instituciones creadas por aquellos monarcas quedaron de hecho anuladas, ó á lo menos, sin ningún uso, fuerza, ni efecto. Sus leyes, sus condes, sus jueces, y cuantos funcionarios habían establecido para hacerlas ejecutar, desaparecieron por completo, quedando entregados los países á su propia suerte, á sus antiguos usos y costumbres. Guipúzcoa se unió en tal estado de cosas á la Navarra, para hacer causa común en la defensa de sus respectivos territorios amenazados por el pujante sarraceno; unión verificada seguramente en el mismo estado civil que tenía á la sazón, ó sea, con las propias leyes, fueros, usos y costumbres con que se gobernaba. Los cambios políticos hechos después por ella, agregándose á la Corona de Castilla, y restituyéndose otra vez á la de Navarra, no alteraron seguramente su estado legislativo. Adherida á sus antiguos usos y costumbres, por más que se utilizara de los fueros, privilegios y franquezas de que gozara el país á que se uniera, Guipúzcoa no por eso adoptó

las leyes civiles y criminales de este, á lo menos, no se encuentra la menor noticia de ello. Podrá decirse acaso que el largo transcurso del tiempo ha debido borrar los vestigios de haberse observado en esta provincia las leyes con que se regía Navarra, que es el Reino á que estuvo más unida. Téngase presente, sin embargo, que la base de su legislación era el derecho romano, y que sus disposiciones no rigieron jamás en esta nuestra provincia. Obsérvase por otra parte la diversidad de leyes de aquel antiguo Reino en materias fundamentales respecto de las observadas en Guipúzcoa; tales como en la absoluta facultad de los padres para disponer de sus bienes por testamento en favor de uno solo de los hijos, respecto de los derechos de las viudas, etc. ¿Cómo era posible que un país, donde en un tiempo hubiesen prevalecido semejantes leyes, no se conservaran algunos vestigios ó recuerdos de su antigua observancia? En verdad, tanto olvidado no parece regular, ni es de presumir en manera alguna.

Todo lo contrario de lo que se ha expresado precedentemente con respecto á la legislación adoptada en Guipúzcoa ha sucedido en ella desde definitiva agregación á la Corona de Castilla en 1200. A la verdad, no se puede menos de confesar que como regla general todos los códigos publicados en este reino, así que las pragmáticas, leyes y demás disposiciones dictadas por sus comarcas, ya en materia civil, ya en la criminal, ya en la comercial, ya en la administrativa, han sido obligatorias en esta provincia. Pero esta regla general de conducta ha tenido siempre, como sucede aún en el día, una excepción muy importante, digna de que los gobiernos no la olviden, si han de proceder con justicia y legalidad. Tal es la de que ninguna de aquellas medidas legislativas, reales decretos ú órdenes, deben tener aplicación ó ejecución en este país en los puntos que se opongan

á sus fueros, privilegios, exenciones, franquicias y libertades, sus buenos usos y costumbres inmemoriales, que equivalen á verdaderos fueros. Consiguiente á este principio fué el establecimiento del *pase*, ó sea, el derecho reservado á la provincia para examinar si las disposiciones emanadas del gobierno de Su Majestad, ó los despachos librados por tribunales y juzgados de fuera de su territorio, contenían algo que fuese contrario al estado político y legislativo de la misma. Este era el objeto y fin de aquella importante prerogativa, y no el de consultar si la providencia sometida á ella era útil, conveniente ó perjudicial al país, bajo cualquier concepto. Si ocurría este último extremo, es decir, el caso de que se juzgase que la medida podía producir algunos males ó inconvenientes, lo que legalmente procedía era, no la retención de la orden ó despacho, sino el representarlos decorosamente á donde correspondiese, sin perjuicio de autorizarse su uso. En este sentido han procedido constantemente los consultores de la provincia en los dictámenes que han emitido por escrito sobre los pases, y conforme á ellos han arreglado también su conducta las Juntas y Diputaciones en los casos que se han ofrecido. Guipúzcoa, en una palabra, es provincia que forma una parte integrante de la monarquía española desde su definitiva agregación á ella; y como tal ha debido obedecer, cumplir y autorizar la ejecución de las leyes, decretos y órdenes de sus soberanos en su territorio. Pero al mismo tiempo ha tenido y conserva ella, bajo la salvaguardia de sus antiguos fueros, usos y costumbres, un estado político y legislativo particular á que las providencias generales del reino no pueden perjudicar, sin destruirlo del todo. Hé aquí expuesto en términos genéricos qué leyes y disposiciones del gobierno obligan á los guipuzcoanos, según el régimen foral.

Como las noticias histórico-legales que tenemos en

esta provincia no alcanzan sino á una época muy moderna, nos vemos imposibilitados de dar explicaciones acerca de la admisión en ella de los códigos publicados en los reinos de Castilla durante los siglos XIII y XIV. Verdad es que la legislación principal de los pueblos de la misma, así como sucedió en lo general del reino, consistía en aquella época en los fueros municipales contenidos en las cartas-pueblas, que arreglaban diferentes puntos del derecho político, administrativo, civil, criminal, etc. Lo es también que dichas cartas-pueblas eran consideradas como unos verdaderos códigos legislativos, más bien que ordenanzas de gobierno de los pueblos. Hay que tener igualmente presente que en el estado atrasado en que se hallaba la sociedad, y en ausencia de las necesidades y relaciones que después se han creado y multiplicado, apenas debía sentirse la falta de leyes generales. A todo esto se agregaba la tendencia natural de los pueblos á conservarse en un modo de ser particular, no común con otros, y menos dependiente de ellos. En una palabra, como el nombre de *fuero* representaba en el concepto vulgar la idea de un privilegio, merced, concesión y franquicia, se creía gozar en aquel estado de unas grandes ventajas; y por esto repugnaron someterse á la ley general, que consideraban por depresiva de sus libertades. Semejante repugnancia no podía, sin embargo, existir con respecto al Fuero-viejo de Castilla publicado por D. Alonso VIII el año de 1212, fuero que comprendía los privilegios otorgados por el conde D. Sancho García, y que no podían menos de agradar á los guipuzcoanos. Por otra parte, ya se sabe que el Rey D. Pedro el único confirmó y volvió á promulgar en 1356 dicho código. Dijo terminantemente en su prólogo que aquel monarca estando en el hospital de Burgos, había hecho á todos los Concejos de Castilla la gracia y merced de confirmarles todas las cartas que

tenían del Rey D. Alonso el viejo, es decir, del VI de este nombre, así que las otorgadas por el mismo D. Pedro. Guipúzcoa pertenecía ya á la Corona de Castilla, y por consiguiente, fué comprendida en esta gracia, de cuyo goce ningún monarca posterior la privó. La consecuencia de todo esto es que el Fuero viejo de Castilla fué introducido y rigió en esta provincia coma código legislativo de sus habitantes, en la propia forma que lo fué de los de los reinos de Castilla rigurosa.

Después de esta compilación, la más importante que se nos presenta es la titulada ahora comunmente Fuero Real, aunque se la denominó Fuero de las leyes, Libro de los Concejos de Castilla, etc. Es indudable que el Rey D. Alonso X, por cuya orden se redactó y publicó en 1255, quiso que fuera un código general para todos los pueblos de Castilla, así que para toda clase de personas, según resulta de su prólogo y del que el Rey D. Pedro puso en el del Fuero viejo. «Entendiendo, dice el primero, que la mayor »partida de nuestros reinos non hobieron fuero fasta »el nuestro tiempo, y juzgábase por fazañas y albedríos de partidos se los homes, é por usos desagui- »sados sin derecho.... hobimos Consejo con nuestra »corta, é con los sabidores del derecho, é dímosles »este fuero que es escripto en este libro porque se »juzguen comunalmente todos varones é mujeres é »mandamos que este fuero sea guardado por siempre »jamás, é ninguno non sea osado de venir contra él.» Aquel sabio monarca no pudo, sin embargo, conseguir que este notable código fuese admitido para su uso por la universalidad de los pueblos de sus reinos. Halló al contrario una decidida y fuerte resistencia, en especial de los ricos-hombres de Castilla la vieja bien avenidos con sus antiguos fueros y privilegios, en tanto grado, que se vió obligado á suspender su ejecución en las Cortes celebradas en la ciudad de

Burgos, año de 1272, poniendo en observancia y vigor el Fuero Viejo. Pero esto no impidió el que se fuese dando después aquel mismo código en calidad de fuero municipal á varios pueblos que lo pedían, como el más regular y completo de todos los publicados hasta entonces. Con respecto á Guipúzcoa en particular, debemos presumir que en los diez y siete años que estuvo vigente, regiría también en sus pueblos, y que cesaría del todo su uso desde la citada época de suspensión en Castilla. A la verdad, no se halla el menor antecedente de que con posterioridad se hubiese otorgado en concepto de fuero municipal á ningún pueblo de esta provincia, que era el único medio de que pudiese establecerse su uso en ella, después de habérsele quitado el carácter de código general. Otra cosa es que habiendo D. Alonso XI reconocido la legitimidad de su aplicación en el ordenamiento hecho en las Cortes de Alcalá de Henares del año de 1348, los pueblos se hubiesen servido de él después en el orden correspondiente, por razón de la justicia de muchas de sus disposiciones.

Bien se sabe que el código de las siete partidas, aunque fué compuesto en tiempo de D. Alonso X, no se promulgó hasta las citadas Cortes de Alcalá de Henares, en que se autorizó su uso en el lugar señalado en su Ordenamiento. Es indudable que esta compilación legislativa fué hecha para el uso general del Reino de Castilla y provincias adheridas á él, en la intención de su sábio autor, como lo convence el solo hecho de no haberse dado á ningún pueblo en particular como fuero municipal. Todo su contenido confirma plenamente semejante concepto, pues se ve que todas sus disposiciones fueron dictadas para con cuantas personas viviesen dentro de la monarquía castellana, sin excepción de provincias ni pueblos. Guipúzcoa estaba, por consiguiente, sometida á su observancia en todo lo que no rozase con sus

fueros, buenos usos y costumbres, y el resultado posterior demuestra que sucedió así. Las leyes comprendidas en las partidas figuran, en efecto, en plena observancia desde su publicación en todos los juzgados de esta provincia, donde constantemente se han visto y se ven citadas en los pleitos pendientes entre partes, para la decisión de los negocios del orden administrativo, para la aplicación de las penas, etc. ¿Ni cómo era posible que esta provincia desechara una obra tan encomiada por sabios jurisconsultos, y que sino es perfecta, como de hombres, contiene principios tan excelentes de justicia y moralidad? Téngase presente además que los procuradores de varios pueblos de Guipúzcoa concurrían en el siglo XIV á las Cortes que celebraban los monarcas castellanos, y que de esta manera se sometían de hecho á las determinaciones que se tomaran en ellas, mientras no fuesen contrarias á su estado foral particular. Consiguientemente, las disposiciones concernientes al dominio de las cosas, á las relaciones de familia, á las sucesiones testamentarias ó *ab intestato*, á los contratos y demás procedentes del derecho civil privado, apenas podían afectarle. Todo esto induce á creer que el Código de las Siete Partidas fué admitido en Guipúzcoa desde su publicación en 1348, con la salvedad expresada, y que en el mismo concepto rige aún hoy día en ella, en tanto que sus leyes no hayan sido derogadas ó modificadas por otras posteriores.

No consta si las célebres ochenta y tres leyes llamadas de Toro fueron comunicadas ó no á esta provincia de una manera especial para su cumplimiento, ni lo que en el supuesto afirmativo hubiese obrado ella en el asunto. Lo regular y probable es que el cuaderno comprensivo de las mismas se hubiese dirigido al corregidor para su ejecución, según el estilo que estuviese establecido entonces; pero de todos

modos es indudable que estuvieron en plena observancia en esta provincia, como lo están todavía en su generalidad sobre la derogación de algunas. Sus disposiciones se dirigen, en verdad, á arreglar las materias de derecho civil privado, que no tienen roce alguno con los fueros, usos y costumbres de la misma, y no había motivo fundado para pretender que no rigieran en este país. Ninguna reclamación se encuentra, por otra parte, haberse hecho en este sentido por parte de la provincia al gobierno del Rey; y se ve que sus disposiciones fueron alegadas constantemente en los juzgados ordinarios de la misma por los abogados, sirviendo además de regla de conducta á los corregidores y alcaldes. Sábese por lo demás que estas dichas leyes fueron insertas en la Recopilación formada de orden del Rey Felipe II, y publicada por el mismo en 1567, y otra vez en la Novísima Recopilación sancionada por Carlos IV en 1805. Es, pues, claro que estos dos códigos confirmaron la autoridad legal de las expresadas ochenta y tres leyes de Toro, así como por igual motivo la de las disposiciones procedentes del Fuero Real, Ordenamiento de Alcalá, reales pragmáticas y leyes sueltas que comprenden en su texto. Tenemos por consiguiente que la legislación civil de Guipúzcoa, lo mismo que la de los reinos de Castilla, hasta las reformas hechas durante el presente siglo se componía de los códigos que paso á expresar en el orden de preferente autoridad siguiente: 1.º La Novísima Recopilación. 2.º La Recopilación de 1567 con respecto á las disposiciones de ella no comprendidas en la Novísima. 3.º El Fuero Real y los fueros municipales de cada ciudad, villa ó lugar en cuanto fueren usados y guardados en el respectivo pueblo y no sean contrarios á las leyes. 4.º Las Siete Partidas.

SECCIÓN II.

Del derecho civil.

Habiendo dado en la sección anterior una idea general de la legislación que rige en Guipúzcoa, paso á exponer en la presente algunas consideraciones acerca de ciertas materias del derecho civil con relación á sus habitantes en particular. Pondré también en conocimiento de los lectores algunos proyectos de Ordenanzas formadas por la misma provincia en el propio ramo, y que presentados á la real aprobación necesaria para adquirir el carácter de leyes, los monarcas unas veces lo han sancionado, y en otras no lo han tenido por conveniente. En una palabra, por más cierto que sea que la legislación civil castellana ha regido y rige en Guipúzcoa, como regla general de derecho, no por eso ha dejado de tener esta provincia sus leyes especiales en determinados puntos, y ocupándose en otros de acomodar las disposiciones generales á sus necesidades particulares. Se hace, pues, preciso ocuparnos de este asunto, y tanto más cuanto sin ello no se podría comprender cómo se ha administrado la justicia en esta provincia, ni qué ideas han prevalecido en la misma sobre estos puntos. Me limitaré, sin embargo, á los más principales, omitiendo por razón de la brevedad otros menos importantes.

Uno de los más notables en que la provincia tuvo bastante empeño en los siglos XVI y XVII fué respecto de la facultad de los padres para mejorar en tercio y quinto á las hijas. Ya se sabe que una ley hecha en las Cortes de Madrid del año de 1534 dispuso, entre otras cosas dirigidas á contener los excesos y daños que se experimentaban, que ningún padre pudiese dar ni prometer por vía de dote ni casa-

miento de hija tercio ni quinto de sus bienes, ni se entendiera esta mejorada tácita ni expresamente por ninguna manera de contrato entre vivos. La provincia consideró semejante disposición por perjudicial á las familias en razón á la libertad que coartaba á los padres para hacer sus arreglos como mejor les pareciese, y ya en 1587 se trató de solicitar al Rey una declaración para que no se usase en este país. Aunque se obtuvieron algunos dictámenes de abogados de la Corte en este sentido, no se ve que se hubiesen llevado á efecto las diligencias correspondientes al logro de este intento. Volvió á ocuparse de este asunto en las Juntas generales celebradas en la villa de Vergara el año de 1659, donde se hizo una ordenanza reducida á que, no obstante la citada ley, los padres de esta provincia pudiesen mejorar á las hijas por vía de dote en contrato entre vivos. Solicitada su confirmación en el Consejo de Castilla, la contradijo su fiscal, motivo por el que no se adelantó en el asunto, y se continuó en esta paralización, observando la ley general hasta las Juntas de Elgóibar de 1671. Acordóse en estas promover aquel expediente, y esto mismo se repitió en las que se celebraron en la villa de Cestona el año de 1673; pero aunque se practicaron algunas diligencias para este objeto, se suspendió su continuación á consecuencia de un decreto hecho por las de Fuenterrabía.

No obstante esta determinación, se halla que las Juntas celebradas en la villa de Tolosa por el mes de Mayo de 1696 volvieron á tomar en consideración este asunto, que se consideraba en el país por tan interesante al bien de las familias. Así, pues, hicieron una ordenanza, por la cual se disponía que cualquiera persona pudiese dar por contrato entre vivos ó como última voluntad á uno de sus hijos ó hijas, ó al nieto de estos, todos sus bienes muebles y raíces, derechos y acciones. Establecía además que los pa-

dres podían apartar á los otros hijos ó hijas y descendientes legítimos «con cualquiera cosa ó cantidad, »poca ó mucha, que les quisiesen señalar.» Concluía la misma que los hijos, hijas, ó descendientes de estos, no pudiesen pedir ni demandar cosa alguna contra la voluntad y disposición de los padres ó ascendientes legítimos, no obstante lo prescripto en la indicada ley de Madrid. Las razones que descuellan en el acuerdo hecho por aquellas Juntas sobre esta materia pueden reducirse á tres. Era la primera de esterilidad y cortedad de las haciendas libres de la provincia: segunda, los muchos pleitos que resultaban sobre legítimas: tercera, los perjuicios que se seguían de la partición de bienes entre muchos interesados. De estas tres razones, la primera y tercera apenas pueden satisfacer bajo el aspecto económico. A la verdad, ni es cierto que todas las haciendas libres fuesen estériles y cortas, ni su partición entre varios herederos podía en términos regulares producir los males que se suponían, á lo menos si esta operación no se llevaba á un extremo. Si por lo demás los pleitos que se indicaban eran un verdadero inconveniente, digno de atenderse por el legislador, debían atribuirse, no al contexto de aquella ley, sino al empeño de los mismos padres en obrar en los arreglos de sus familias contraviniendo á sus disposiciones. La letra de estas se halla en verdad bien terminante y clara, y su espíritu no puede ofrecer dudas.

Pero, como ya se ve, la ordenanza mencionada no se limitaba á alzar la prohibición impuesta por la ley de Madrid á los padres para mejorar á las hijas por vía de dote ó casamiento en el tercio y quinto por contrato entre vivos. Vendo ella todavía mucho más adelante, quería que se facultase á los primeros para dejar todos sus bienes á un solo hijo ó hija, separando á los demás de la participación de las herencias con cualquiera cosa ó cantidad, poca ó mucha, que les se-

ñalasen. Era esto, en una palabra, introducir entre nosotros la ley navarra, aplicada de las de las Doce Tablas, según las cuales los padres gozaban de una omnímoda libertad en esta materia. No es este el lugar ni la ocasión de examinar esta gravísima cuestión de legislación, renovada por ilustrados juriscultos en estos presentes tiempos, encomiando unos las ventajas de semejante facultad, impugnándola otros por los inconvenientes que la achacan. Lo que no admite duda es que el sistema propuesto por la provincia contenía una medida muy radical, contraria á las máximas de la legislación castellana observada constantemente desde tiempo inmemorial, en oposición por lo tanto con los usos y costumbres nacionales. Sus antiguos códigos, el Fuego Juzgo y el Fuero Real, confirmados por las leyes de Toro, consignan la facultad de los padres para mejorar á uno de los hijos ó hijas en el tercio y quinto de sus bienes. Pero al mismo tiempo reservan de semejante libertad al resto de sus herencias á título de legítimas en las que no pueden perjudicar á los hijos; sistema con el cual se ha creído haber combinado una racional facultad de los padres en la disposición de sus bienes, evitando los abusos que pudieran resultar de una absoluta libertad. Así pues las ordenanzas dispuestas por la provincia en el sentido expresado se presentó al Consejo de Castilla para su aprobación, según había acordado la misma. El fiscal de Su Majestad, á quien se pasó el expediente, impugnó la pretensión de la provincia, fundánlose para el efecto en que era contraria á las leyes del reino, en cuyo concepto se denegó la confirmación por aquel supremo Tribunal; y aunque se suplicó de esta providencia, se mandó guardar lo decretado. Tal fué el contexto del auto ejecutoriado dictado en 19 de Enero de 1697, según los antecedentes de la materia que obran en el archivo de la provincia.

Con la precedente declaración quedó terminado así este negocio, y por consiguiente en pleno rigor en Guipúzcoa la citada ley de Madrid. Los pleitos que antes de ella parece resultaban en las familias, debieron también excusarse después de ella; á lo menos no había ya justo motivo para promoverlos, sabiendo cada cual á qué atenerse en materia de legítimas. Esto no obstante, se ve que á los cincuenta años, ó sea, en las Juntas de Azcoitia de 1747, el representante de la unión de Sayaz volvió á llamar la atención de las mismas sobre el propio asunto. Representó principalmente la conveniencia de no dividirse las haciendas, los muchos pleitos que resultaban sobre aumento de legítimas, la necesidad de poner remedio á ellos autorizando á los padres para señalarlas á los hijos á su arbitrio, á la manera que se hacía en Navarra, Aragón y Vizcaya. Dijo además que en el caso de no adoptarse este sistema, al menos se debería determinar un tiempo limitado para el uso de las acciones competentes en materia de legítimas. Bajo este concepto, propuso que para rescindir las renunciaciones no hubiese más término que el de veinte años entre presentes y treinta entre ausentes, y que en cuanto á legítimas no fuesen oídos, si no las reclamaren dentro de treinta años entre presentes y cuarenta entre ausentes, debiendo en todo caso exceder la lesión dos veces más de la cantidad recibida. Aquellas Juntas remitieron esta exposición á la Diputación; y aunque del registro de las del año inmediato consta haberse adoptado lo propuesto por una comisión, no se ve que el asunto hubiese tenido resultado.

Otro de los puntos notables del derecho civil, que ha solido ocupar á los letrados de esta provincia, así como á los que no pertenecían á esta profesión, ha sido el de la reversión de los bienes aportados á los matrimonios á los troncos de donde procediesen. Para

entender esta materia, hay que tener presente la disposición de la ley 6.^a de Toro, según la cual, por regla general, los ascendientes son herederos *ab intestato* de los hijos ó descendientes legítimos, así como lo son estos de aquellos. La misma ley exceptúa, sin embargo, de esta disposición general en su última parte aquellas villas y lugares «donde, según el fuero de la tierra, se acostumbra tornar sus bienes al tronco, ó á la raíz.» Atiéndase bien que con arreglo á esta ley, para que tenga efecto el derecho de reversión al tronco, es preciso que el fuero de la tierra lo prescriba, y la costumbre de la misma lo sancione. Guipúzcoa, como corporación, carece de semejante fuero, puesto que no ha tenido legislación civil particular; y no se halla también poco que en ninguna de las cartas-pueblas de las villas de la misma provincia se hubiese establecido semejante sistema de reversión de bienes. Consiguientemente, se esta fuera de duda, por una parte, que la excepción contenida al final de la mencionada ley de Toro no tiene aplicación en esta provincia, donde debe regir la sucesión regular de los ascendientes á los descendientes *ab intestato*. Pero, si esto es muy cierto, no lo es menos que por una costumbre general en el país se establece en la mayor parte de las escrituras de los contratos matrimoniales el pacto de la reversión de los bienes respectivos al tronco ó familia de donde proceden. Semejante disposición comprende el caso de disolverse el matrimonio sin hijos habidos en él, ó que habiéndolos tenido, hubiesen muerto antes de haber llegado á la edad pubertad, ó despues de esta *ab intestato*.

Bajo estos antecedentes, hallamos que el representante de la villa de Vergara llamó la atención de las Juntas generales celebradas en San Sebastián el año 1643 sobre esta materia. En una exposición que presentó dijo que en algunas escrituras de contratos ma-

trimoniales se omitía la cláusula de reversión, ya fuese esto por descuido de los escribanos, ya por malicia de los mismos. Añadió que semejante omisión era de consecuencias muy perjudiciales al bienestar de las familias, para cuyo remedio presentó un proyecto de ordenanza provincial, dirigido principalmente á proveer con la oportuna disposición el caso en que las partes interesadas no pactasen formalmente la reversión de los bienes. Quiso, pues, que si ocurría este caso se sirviese como realmente pactada esta cláusula, sin privar por eso á los esposos de la libertad de asentar en los contratos matrimoniales cualquiera otra disposición contraria á la reversión otra modificativa que tuviesen por conveniente establecer. Las expresadas juntas, sin tomar resolución alguna sobre este asunto, la remitieron á las que debían celebrarse en la villa de Hernani por el mes de Noviembre del mismo año, previa consulta de los Ayuntamientos. Parece que la mayoría de estos no aprobó el mencionado proyecto, en cuya conformidad la citadas Juntas decretaron que se observase lo que se había usado y practicado hasta entonces, sin que se hiciese novedad alguna. Aquella ordenanza quedó, por consiguiente, sin efecto ni más consecuencia. Si es cierto que á pesar de esto ha continuado después la costumbre de establecer en las escrituras de contratos matrimoniales la cláusula de reversión de los bienes aportados por los cónyuges, no lo es menos que en los casos de no asentarse semejante cláusula de una manera expresa y terminantemente, se ha observado el orden regular de suceder.

Esta misma es la jurisprudencia establecida en la actualidad con respecto á la reversión de bienes en esta provincia. Una decisión del Tribunal Supremo de justicia de 19 de Diciembre de 1859, sobre un pleito seguido en primera instancia en el Juzgado de la villa de Tolosa, declaró en uno de sus consideran-

dos que el orden legal de suceder en esta provincia es el establecido en la legislación de España. Por otra pronunciada por el mismo Tribunal en 28 de Abril de 1866 se reconoce así bien la validez del pacto de reversión de bienes al tronco de donde proceden, que asientan los esposos capaces de contraer en los contratos matrimoniales, para los casos antes indicados. Con respecto á los demás se consignó el principio de que debía quedar á salvo la disposición general del derecho. Se ha aclarado y determinado, por consiguiente, este punto tan importante de nuestro derecho civil particular, que tantas dudas, cuestiones y pleitos había producido.

Cuando en el año de 1768 se promulgó la Real pragmática sobre el establecimiento de los libros de hipotecas, hubo algunas dudas acerca de la manera en que debía arreglarse esta materia en esta provincia. Estas dificultades procedían principalmente de que aquella real disposición prescribía que la toma de razón de las escrituras sujetas á este requisito hubiese de hacerse precisamente en los pueblos cabezas de partido donde estuviesen situadas las fincas respectivas. Guipúzcoa no estaba dividida en los partidos judiciales á que se refería la Real pragmática, por componer todos sus pueblos una sola hermandad con derechos iguales, así que un solo corregimiento ambulante por tandas. Por el contrario, como cada alcalde de ciudad ó villa ejercía toda la jurisdicción civil y criminal en primera instancia, aunque á prevención con el corregidor, el territorio de aquellas con sus aldeas formaba un verdadero partido judicial. Se hizo, por lo tanto, preciso establecer los libros de hipotecas en cada ciudad ó villa á cargo de sus escribanos de Ayuntamiento, en cuya forma se plantearon dichos oficios. Consta que después, en 31 de Julio de 1775, obtuvo la provincia una Real provisión del Consejo, en cuya virtud se la prorrogó por

término de un año la toma de razón de las escrituras, extendido á cuatro más por otra resolución del propio Tribunal de 25 de Noviembre siguiente. Fuera de estas providencias particulares, la legislación general del Reino concerniente á la materia de hipotecas, así que la perteneciente á la forma y manera de llevarse los libros establecidos para ello, rigió también en adelante en esta provincia sin diferencia alguna de las demás.

Semejante estado de cosas se alteró el año de 1845, á consecuencia de haberse establecido los oficios de hipotecas en las cabezas de los cuatro Juzgados de primera instancia, con arreglo á una Real orden. Las Juntas generales celebradas el mismo año en la villa de Villafranca tomaron conocimiento de este asunto, y recomendaron á la Diputación para que en caso de necesidad apoyase las gestiones que sobre el particular hiciesen los Ayuntamientos y escribanos, dando también de su parte los pasos que creyese convenientes para conseguir el fin á que ellos aspirasen. A pesar de las gestiones que en consecuencia se practicaron, los oponentes á la medida no alcanzaron ninguna determinación favorable á sus intentos, lo cual fué un gran bien para el país. Es indudable, en efecto, que los oficios de hipotecas de esta provincia, al cargo de los escribanos de Ayuntamiento de cada pueblo, y en algunos al de sus fieles de fechos, se hallaban en el desarreglo más completo y deplorable. Su traslación á las cabezas de partidos judiciales al desempeño de funcionarios especiales, permanentes y responsables, fué, por consiguiente, una medida muy ventajosa, por más que los escribanos de los demás pueblos tuviesen con esto algún perjuicio, por razón de los emolumentos que dejaban de percibir. No tengo semejante opinión acerca de los registros de la propiedad, que con posterioridad se han establecido, á lo menos en la forma en que lo han sido, y

cuya dilucidación no pertenece á la presente obra.

Los mayorazgos siempre estuvieron vigentes en Guipúzcoa desde su institución en el Reino, rigiéndose en un todo con arreglo á las leyes generales del mismo. Otro tanto sucedió con las vinculaciones hechas por testadores en el tercio y quinto de sus bienes, con arreglo á la facultad que les concedían las célebres leyes de Toro. Tan común fué el uso que se hizo de ella en esta provincia, que puede decirse que la mayor parte de las vinculaciones que existían en ella pertenecían á la clase de las de tercio y quinto, á lo menos la que se componían de un reducido número de fincas. Su repartición entre los hijos se consideró por lo tanto como muy perjudicial y aun destructora de las casas, familias y de sus memorias. Incluido en estas ideas, D. Ignacio Javier de Arteach, Abogado y Vicario de la Iglesia Parroquial de la villa de Vergara, recurrió á las juntas celebradas el año de 1753 en la ciudad de San Sebastián, presentando un plan dirigido á remediar los inconvenientes ó males indicados. Su pensamiento contenía dos partes, que eran: la primera, autorizar á los padres para vincular toda su herencia, especialmente las casas solares; la segunda, determinar una cuota fija de legítimas para los demás hijos, de manera que no pudiesen pretender mas. Examinando este asunto en las Juntas de los años inmediatos, al fin se llegó á tomar resolución en las que se celebraron en la villa de Guetaria en el de 1758. Acordóse, pues, en ellas impetrar la real facultad para que los vecinos y moradores de esta provincia pudiesen fundar mayorazgo regular ó electivo de todos ó parte de sus bienes, señalando á los demás hijos ó hijas á cada cien ducados por lo tocante á las raíces, y cincuenta por lo respectivo á los muebles. Se añadió que cualquiera acción á legítimas ó á suplemento de ellas, no introduciéndose judicialmente en debida forma dentro de

diez años entre presentes, y veinte entre ausentes, menores ó privilegiados, quedase extinguido enteramente. La provincia no alcanzó, sin embargo, la confirmación de este decreto, y la materia de los mayorazgos se conservó en el mismo estado anterior, es decir en el uso de las facultades que concedían las leyes de Toro respecto de la disponibilidad de los bienes con el gravamen de la restitución ó vinculación.

De aquí resultaba que los padres, mejorando á uno de los hijos en el contrato matrimonial, en el tercio y quinto de todos sus bienes, les aplicasen aun el resto de ellos con la obligación de dar á los demás tanta ó cuanta cantidad para pago de legítimas, al tiempo en que hubiesen sus acomodos, ó en el que fijasen.

Con respecto á los mayorazgos y demás clases de vinculaciones, mientras subsistieron, se hallan en esta provincia dos disposiciones particulares. Una es la facultad de imponer sobre fincas de particulares ó comunidades los caudales pertenecientes á las mismas fundaciones, concedida á la provincia por el Consejo de Castilla en 15 de Abril de 1786, cuando por medida general estaba dispuesto que semejantes imposiciones se hiciesen sobre la renta del tabaco. Otra comunicada en Real orden de 20 de Octubre de 1833 á instancias de la provincia, por la cual se autorizó á los poseedores de fincas vinculadas en su territorio, para que pudiesen «cambiar y permutar aquellas, »cuyo valor no excediese de doce mil reales, por otras »que considerasen más ventajosas, sin sujeción á las »formalidades establecidas hasta entonces.» La única que exigía era la tasación pericial, una sencilla información de utilidad ante el Diputado general, y la remisión del expediente por este á la Real Cámara para su aprobación. Pero esta Real orden no pudo tener efecto por causa de la guerra civil, que se promovió en la misma época, dejando en olvido seme-

jantes negocios. Restablecida después en 1836 la ley de supresión general de los mayorazgos y de toda clase de vinculaciones, decretada por la ley de 11 de Octubre de 1820, sus disposiciones se han aplicado plenamente en esta provincia. Merced á semejante providencia, la agricultura ha recibido grandes beneficios, las poblaciones mejoras importantes, y los habitantes en general un reconocido aumento de bienestar. Si es cierto, como expuso la provincia en una representación dirigida al Rey, que cuando menos estaban fuera de la circulación más de tres cuartas partes de la propiedad raíz de su territorio, podrán calcularse las ventajas que habrá producido la abolición de las trabas que la impedían. A la verdad, no pueden ocultarse á ninguna persona imparcial, por más que algunas adheridas á las instituciones antiguas quieran cerrar los ojos á la evidencia de la luz, así que á los resultados satisfactorios de la práctica.

Guipúzcoa ha tenido también su legislación peculiar consuetudinaria, que subsiste todavía en parte, en materia de arrendamientos de fincas, en especial sobre los deshaucios y desocupos de ellas. Con respecto á las tierras de labor ó caseríos de labranza, es, en efecto, una costumbre general que los arrendamientos se hagan de San Martín 11 de Noviembre á otro igual día del año ó años siguientes, según sean á término fijo ó por años. En el primer caso no había ni hay cuestión, porque amo y colono en fuerza del contrato se hallan despedidos sin necesidad de nuevo aviso para el día del vencimiento del plazo señalado. No así en el segundo, ó sea, de los arriendos por años, pues era preciso que aquellos se desiesen recíprocamente la despedida para el día de San Juan Bautista, 24 de Junio, para que el desocupo de la finca se verificase por San Martín del año inmediato. Pero semejante costumbre ha sido abolida por el decreto de las Cortes de 8 de Junio de 1813,

y en su consecuencia, bastará que las partes se den el deshaucio con un año de anticipación. La ley de 9 de Abril de 1842 respecta al contrario las costumbres de cada pueblo sobre el tiempo anticipado en que hayan de darse las despedidas en los arrendamientos de casas y otros predios urbanos. Consiguientemente, deberán observarse las prácticas que haya establecidas en esta materia en cada localidad, siendo la más común la de darse el aviso para el día de San Juan Bautista, á efecto de que salga el inquilino el de San Martín citado.

SECCIÓN III.

Del derecho criminal.

Guipúzcoa ha tenido también en ciertos puntos una legislación criminal particular, en medio de reconocer como regla general la establecida para los antiguos reinos de Castilla. Sería imposible, sin embargo, hacer en la presente obra una explicación circunstanciada de las penas establecidas en las antiguas ordenanzas de la hermandad, tantas en número, tan difusas y tan recargadas de semejantes disposiciones, sin orden alguna de materias. Además, considero excusado hacer aquí semejante trabajo, después de la idea general que di acerca de este asunto en el libro V, capítulo I, sección II. Me concretaré por lo tanto á hacer la relación de algunas disposiciones más importantes no mencionadas en aquel lugar, y de otras proyectadas en épocas posteriores para la mejor sustanciación de las causas criminales, conforme á las ideas y necesidades que han sobrevenido.

Los principios fundamentales de la expresada antigua legislación criminal pueden reducirse á los puntos siguientes: 1.º Los hijosdalgo no pueden ser presos por causa de deudas procedentes de obligación civil, 2.º Los alcaldes de la hermandad no pueden

dar tormento á ningún vecino de la provincia sin consejo ni firma del letrado conocido, que también sea vecino de la misma. 3.º Ningún alcalde de la hermandad puede prender, ni tomar, ni proceder por vía de querrela ni de oficio, contra ningún hermano de esta provincia que sea de buer a vida y fama, arraigado y abonado hasta en cuantía de ocho mil maravedís, salvo que le emplacen con arreglo á derecho. 4.º Ningún juez ni executor prenda ni fatigue á ninguna persona de esta provincia por ruego, mando, ni soborno de parientes mayores, ni de otro alguno. 5.º Aquel que primero hallare á un hombre muerto, tenga que lanzar apellido en el lugar, y un mozo de cada casa tenga que salir enseguida en persecución del matador. 6.º La cosa robada que fuese comprada por un tercero, sea devuelta á su dueño, á menos que la compra se haga en algún mercado ó en almoneda pública; en cuyos casos la restituya á su dueño, pagándole la mitad del precio que entregó. 7.º Los Concejos en cuya jurisdicción se cometiere algún robo á viandante, paguen á este lo que le hubiese sido robado, según su declaración, hasta en cuantía de quince florines de oro; y quien no se contentare con esto, haga sus justificaciones ante los respectivos alcaldes antes de salir del lugar. 8.º Cualquiera que cometiere fuerza en cosa de otro, apoderándose de ella de propia autoridad sin mandato de Juez competente, sea obligado á restituir la posesión á quien se le despojare de ella, y además pague por vía de pena cinco mil maravedís. 9.º Quien matare á un acotado, después que estuviere asentado por tal en el libro de la hermandad, ó lo prendiere y lo entregare á esta, tenga de premios mil maravedís. 10.º El que solo descubriere dónde está el acotado, si fuere preso á consecuencia de semejante delación, tenga quinientos maravedís. 11.º El Juez de la provincia que azotare ó desorejare por justicia á cualquier malhechor,

tenga el premio de diez florines corrientes: á quien ejecutare pena capital se den treinta florines de igual especie, además de su salario ordinario. 12.º Nadie sea osado de construir cárcel en su casa, y menos de aprisionar en ella á otro de autoridad propia. 13. El preso que haya sido despachado y mandado libertar, no sea detenido en la cárcel por razón de costas procesales, ni por los derechos del carcelero. 14.º Cuando se cometiere algún delito grave, tal que merezca la pena capital, la provincia pueda ofrecer á quien prendiese al autor de él un premio de hasta cien doblas. 15.º Si los bienes que la hermandad de la provincia mandare vender á algún malhechor condenado por delito, no tuvieren comprador, tenga que hacerse dueño de ella el Concejo en cuya jurisdicción existieren.

Atentas siempre las Juntas de las provincias al bienestar de sus habitantes, se han ocupado diferentes veces de mejorar la administración de la justicia criminal de su territorio. Haciéndose, pues, cargo las celebradas en la villa de Tolosa el año de 1696 de los graves daños que se experimentaban de los continuos pleitos que se seguían sobre estupro, trataron de poner el oportuno remedio mediante una ordenanza que redactaron, para someter á la aprobación de Su Majestad. Redújose á acordar que no procediese la acción criminal ni civil por razón de estupro cometido en esta provincia, sino solamente en alguno de los casos siguientes: 1. Cuando se probase haberse cometido este delito por medio de la fuerza y violencia real y verdadera, sin que bastase la presunta. 2.º Cuando se probase haber mediado promesa de fe y palabra de casamiento. 3.º Cuando se probase haber intervenido promesa y ofrecimiento de interés señalado y determinado. Añadía que la prueba en estos tres casos y cada uno de ellos debía ser conforme á derecho. Consta que se interpuso el co-

rrispondiente recurso para la aprobación de esta ordenanza en el Consejo de Castilla, y también que este supremo Tribunal desestimó la pretensión de la provincia, fundándose en que no estaba en consonancia con las leyes generales del Reino. Se mantuvieron por consiguiente estas en plena observancia en la provincia en materia de estupros, como sucedió con posterioridad, por no haberse tratado ya más en Juntas de semejante asunto á su reforma.

Otra de las ordenanzas que se encuentra haberse formado por la provincia en materia criminal es la relativa á las penas imponibles contra los ladrones. Dió ocasión á ello la Real pragmática publicada en 23 de Febrero de 1734, por la cual se impuso la pena capital á los que teniendo la edad de diez y siete años cumplidos robasen dentro de la corte y cinco leguas de su rastro, ya entrando en casas, ya acometiendo en las calles ó caminos, con otras menores á los que no tuviesen dicha edad, etc. Las Juntas generales celebradas en la villa de Mondragón por el mes de Mayo del mismo año, con la experiencia de los muchos robos que se cometían en esta provincia, creyeron conveniente se hiciese extensiva á su territorio dicha pragmática. Representaron por lo tanto á Su Majestad en este sentido; y en efecto, se accedió á la súplica, mandando que en todos los pueblos de Guipúzcoa se ejecutasen con los que incurriesen en la transgresión de aquella disposición las penas que correspondiesen á sus delitos, conforme al contexto de la misma. Ya se sabe que en 10 de Noviembre de 1735 se publicó una nueva pragmática aclaratoria de la citada del año anterior sobre hurtos y robos en la corte y su rastro. A su virtud la provincia volvió á representar al Rey en 1737, pidiendo igualmente la aplicación de lo contenido en la misma á su territorio. Sin embargo, Su Majestad no tuvo por conveniente acceder á semejante solici-

tud, mandando al contrario que en todo aquello que literalmente no estuviera expresado en la primera, y legalmente no debía ser comprendidos en ella, se arreglase á lo prevenido por los fueros, y no estándolo en ellos, á la disposición del derecho. La citada Real pragmática tuvo alguna modificación con respecto á los robos que se cometiesen en la corte y las cinco leguas de su rastro, en virtud de la expedida en 9 de Abril y 23 de Noviembre de 1745, que también se halla inserta en la Novísima Recopilación. Según ella, las penas de los hurtos simples debían ser arbitrarias, según y como la sala regulase la cualidad del delito, disposición que también se observó en esta provincia. Las demás publicadas posteriormente sobre estas y otras materias criminales se aplicaron del mismo modo en ella, como ha sucedido en la presente época con el código penal, y otras diferentes leyes sueltas del ramo, cuya enumeración no tiene objeto en este lugar.

Solicita también la provincia para que la justicia criminal fuese administrada con la debida prontitud, especialmente en los casos de robos y fuerzas en caminos y campos, ha redactado para este efecto algunos reglamentos de procedimiento. El primer acuerdo que se halla sobre este particular es el de las Juntas de Zumaya de 1765, en que se encargó á los dos asesores que formasen un método arreglado al fuero para asegurar el más pronto y menos costoso despacho de las causas criminales. Dichos abogados presentaron su trabajo en las Juntas de Fuenterrabía del año inmediato con el título de Instrucción para sustanciar las causas criminales de oficio sobre los casos de hermandad y demás comprendidos en el fuero, trabajo que mereció la aprobación de aquél congreso. Lo más notable que se encuentra entre sus diferentes disposiciones es lo siguiente: 1.º concluída que sea la sumaria en las causas sobre delitos que

no merezcan pena más que la pecuniaria, destierro, servicio de las armas ó en alguna de las plazas de la provincia, se corten y rematen, imponiendo á los reos las penas establecidas por fuero. 2.º Las causas sobre delitos de más gravedad, luego que se evacue la diligencia de la confesión á los procesados, se recibirán los autos á prueba, sin nombrarse promotor fiscal. 3.º No se entregarán los autos á los procesados ó sus defensas hasta después de la ratificación de los testigos de la sumaria, en cuyo estado se les admitirán los escritos, interrogatorios y pruebas que ofreciesen. 4.º Concluso el término probatorio, sin más diligencias, se determinarán las causas con asesor dentro de segundo día, según los méritos del proceso. 5.º Las sentencias que recayesen en las causas seguidas por curso de hermandad se ejecutarán, no obstante su apelación; pero las que se dictasen por delitos no comprendidos en los capítulos del fuero se consultarán con el Tribunal superior correspondiente. Cuán imperfecto era semejante precedimiento, en el cual se atendía tan poco á la defensa de los supuestos reos, sacrificando todo á la deslumbradora idea de la celeridad en la satisfacción de la vindicta pública, se halla á la vista de cualquiera persona inteligente é imparcial. Sea, pues, por las dudas que se ofreciesen sobre esta materia, sea por algún otro motivo, que no conocemos, ello es que no se solicitó por entonces la real aprobación de dicha Instrucción, á pesar de haberlo decretado aquellas Juntas.

Tratóse de obtener este requisito el año de 1782, después de haberla modificado en algunos puntos por consejo de letrados de la corte. En su conformidad, se estableció la necesidad de oír brevemente á los procesados, aun en las causas menos graves, antes de dictarse la sentencia; no se precisó á los Jueces y asesores á pronunciarla en el término de segundo día, se amplió algo señalado para la prue-

ba, etc. Presentado así el recurso en el Consejo de Castilla, se libró en Marzo de 1784 una real provisión para que el Corregidor de la provincia informara sobre el particular. Con su vista, el fiscal de Su Majestad expuso «que no parecía hubiese reparo en la aprobación de estas ordenanzas con la salvedad de por ahora, y de sin perjuicio y aditamento de que las apelaciones de las sentencias de los alcaldes de la hermandad se otorgasen para ante el «corregidor de la provincia, etc». Semejante intervención de este magistrado en tales causas pareció una novedad, y cosa no conveniente á la provincia. Por esta razón las Juntas que se celebraron el año inmediato en la villa de Vergara determinaron que se previniese desde luego al agente en corte suspendiese todo paso y diligencia ulterior en la materia de la confirmación pendiente.

Habiéndose renovado el asunto de las Juntas de 1796, se nombró una comisión para la formación de un plan de sustanciación de las causas criminales, trabajo que fué presentado en las del año inmediato. Aunque más extenso que el dispuesto el de 1766, las bases del procedimiento propuesto en él eran las mismas; especialmente la ejecución de las sentencias sin consulta al Tribunal superior, la falsa de defensa de los procesado, la cortedad del término de prueba concedido para la justificación de los hechos. Su espíritu tendía, en una palabra, á precipitar la terminación de las causas, atendiendo muy poco á la defensa de los supuestos reos, considerada por inútil y excusada. Tanta era la prevención que los autores de este proyecto tenían en la materia, que al paso de establecer la inmediata ejecución de las sentencias condenatorias en las causas seguidas por curso de hermandad, querían que las absolutorias y aquellas en que se impusiese pena leve, no se publicasen ni ejecutasen sin consultar con la Diputación. «Como al-

»guna vez pudiera suceder, decía uno de los artículos, que la justicia quisiese usar con el reo de una »indebida indulgencia, siempre que el delito sea grave, no se han de publicar, ni poner en ejecución las »sentencias absolutorias, ó que imponen pena leve, »sin consulta con la Diputación, y que esta resuelva »sobre el particular en vista de los autos, etc.» Apenas podría discurrirse un procedimiento más injusto, duro y cruel, ni pudiera creerse tanto empeño en castigar con penas graves á los procesados, si no lo viésemos estampado en un documento formal. Erigir por otra parte á una corporación popular, puramente administrativa y económica, cual es una Diputación provincial, en una especie de Tribunal criminal de justicia, es confundir completamente el objeto, fin y misión de cada autoridad. Defectos tan capitales no impidieron el que la comisión de aquellas Juntas, que examinó dicho trabajo, lo calificase de digno del mayor precio. Pero, esto no obstante, se ve que por indicación de la misma comisión acordó dicho congreso consultar este plan con letrados de la Corte; y como estos no lo hallaron aceptable por el Consejo de Castilla, fué el motivo para que no se solicitase en este su confirmación.

Este asunto permaneció en el mismo estado hasta las Juntas del año de 1824, por las cuales se comisionó á los dos consultores de la provincia, para que formasen un reglamento de procedimiento criminal análogo á los fueros. Sin que estos letrados hubiesen desempeñado su trabajo, se ve que en las celebradas el año inmediato se acordó que solo el Licenciado D Luis de Arocena corriese con este encargo. Aceptada tan delicada comisión, este ilustrado abogado la evacuó sin tardanza, presentando su trabajo en las Juntas de Fuenterrabía de 1826, las cuales reunieron á la diputación su examen y aprobación. Por fin, después de haberse consultado el proyecto con dos

de los más acreditados abogados del país, se volvió á presentar á las Juntas en las celebradas en la villa de Motrico del año de 1828, por las cuales fué adoptado, acordando además que se pidiese á la superioridad la correspondiente aprobación. Es indudable que el procedimiento criminal mencionado era un trabajo mucho más completo, más racional y mejor concebido que los que se habían dispuesto hasta entonces en la provincia. Su espíritu era de abreviar las causas en todo lo posible, así en las sumarias como en los plenarios, en la pronunciación de las sentencias, como en la ejecución de ellas; sin dejar por eso de conceder alguna más latitud á la defensa de los acusados, á las pruebas que propusiesen, y de guardarles en todo las consideraciones debidas á su estado. Esto no obstante, la parte orgánica no dejaba de tener sus defectos, como luego se verá.

Las bases principales de este dicho procedimiento, para cuya redacción parece sirvió de modelo en muchos puntos el reglamento criminal de Vizcaya, fueron las siguientes: 1.^a La creación de un Juzgado criminal á cargo de un Teniente corregidor, con un fiscal y defensor de reos, revestido de jurisdicción para toda la provincia. 2.^a Que esta jurisdicción del teniente corregidor fuese á prevención con los alcaldes ordinarios, quienes pudiesen hacer remisiones voluntarias de las causas que formasen al juzgado de aquél. 3.^a La obligación de los alcaldes ordinarios de expresar en los autos de oficio si formaban la sumaria con intención de remitirla al teniente Corregidor, ó para sustanciar y determinar la causa ellos mismos. 4.^a Concluido el sumario, puesta la acusación, hechas la defensa, las pruebas, las ratificaciones de los testigos, y dictada la sentencia, la remisión de esta en pliego cerrado con los autos al Tribunal superior de la provincia. 5.^a Este Tribunal se compondrá del corregidor, diputado general, su adjunto y

dos abogados, que estos mismos dos diputados nombrasen en cada causa. 6.^a La vista de todas las causas criminales por este Tribunal superior en única instancia, contándose para la resolución como un voto el emitido en el pliego cerrado por el Juez instructor de la causa, con los otros cinco concurrentes en persona. 7.^a La mayoría de votos uniformes cause sentencia, y no se puede imponer pena capital, sin que haya cuatro votos conformes para ella. 8.^a Para la imposición de otras penas corporales, en cuyo señalamiento no haya mayoría conforme, sígase las reglas de benignidad y moderación que se expresan, así como también en los casos de empate. 9.^a Este reglamento solo tenga lugar para los casos de hermandad, debiendo sustanciarse y determinarse las causas por delitos conformes con arreglo á las disposiciones generales del derecho.

El reglamento de procedimiento criminal de que acabo de hablar no tuvo real aprobación, á pesar de las gestiones hechas por la provincia para el efecto. Si ahora pasamos á examinar en conjunto, al par de algunas cosas buenas, hallaremos también no pocas imperfecciones hijas de la época en que fué redactado. No se puede, en efecto, desconocer que la creación del juzgado de un teniente corregidor, con su fiscal y defensor de reos, era una mejora de importancia, visto que muchos alcaldes, unos por negligencia, otros por miedo, cuales por contemplaciones, dejaban de administrar la justicia según correspondía. También es cierto que un Tribunal colegiado podía haber reportado muchos beneficios al país, estando bien organizado, por la celeridad en el despacho de cierta clase de causas, atendida la tardanza que se experimentaba en la chancillería de Valladolid, cuyo territorio era tan extenso. Sin embargo, es preciso convenir que el Tribunal provincial ideado en el plan mencionado no llenaba las condiciones

oportunas para alcanzar que se deseaban y esperaban. A la verdad, su jurisdicción se extendía á castigar los delitos más graves y hasta los más atroces: se quería, por consiguiente, que estuviese autorizado para imponer las penas de presidio de largos años, cadena, trabajos forzados, y aun la misma capital. Las sentencias que por su mayoría de votos conformes se pronunciasen, se proponía fuesen irremisiblemente ejecutorias. No se admitía de ellas ninguna apelación, suplicación, revisión, ni otro recurso alguno á la superioridad, por la mala inteligencia de las leyes, indebida apreciación de los hechos, pasiones, antipatías, ó cualquier otro motivo por el que sus fallos mereciesen revocarse, anularse ó reformarse. Por otra parte, los Jueces tenían que aplicar las penas señaladas en los cuadernos de ordenanzas de la hermandad, puesto que se seguían las causas por el curso de esta. Consiguientemente, debería haberse visto á cada paso el horroroso é inhumano espectáculo de las horcas, garrotes, azotes, vergüenza pública, desorejamientos y otras que repugnan á la civilización y sentimientos de humanidad de la presente época, de que carecieron los autores de las ordenanzas antiguas. En fin, aquella terrible y tan general sentencia *Que mueran por ello*, se hubiera debido ejecutar con frecuencia en las plazas de esta provincia, sin ningún recurso humano para evitarlo ni remediarlo.

La potestad de juzgar, con que se quería revestir á los dos diputados forales, no parece tampoco estuviese arreglada á los buenos principios de legislación criminal. Hombres por lo común no letrados, y por lo tanto no conocedores de esta ciencia, sin práctica alguna en distinguir al criminal del inocente, y sobre todo en hacer una justa apreciación de los hechos y la debida graduación de las penas, sus fallos no podían satisfacer á la opinión pública por su acierto. Si es verdad que estarían asociados de su respectivo le-

trado, cuyas luces podían ilustrarlos, no por eso dejarían de votar con libertad por sí mismos, según lo tuviesen por conveniente. Diráse acaso á esto que ellos generalmente se adherirían á la opinión de los respectivos asociados, entonces el resultado sería que cada uno de estos estaría revestido de dos votos, cuando el Corregidor y el Juez instructor de la causa no tendrían sino á cada uno, lo cual hubiera sido otra anomalía. Cualquiera debe conocer que el juzgar acerca de la vida, libertad, honra, bienes, en fin, de todo lo que constituye el ser del hombre, es un verdadero oficio, cuyo buen desempeño requiere mucha ciencia y larga práctica. No es por lo tanto asunto propio de hombres legos, que ni han hecho estudios de legislación, ni se han ejercitado en su aplicación á los casos ocurrentes; y así, el encomendarlo á quienes por su estado se hallan en semejante caso, sería exponer á la sociedad á contingencias muy funestas, que conviene evitar. Pero en fin, que estos peligros se sacrificasen á la deslumbradora idea de la celeridad en el despacho de las causas sobre delitos menos graves, pudiera pasar y admitirse. Establecerlo precisamente para los casos más graves y atroces, cuales son los delitos á que es aplicable el curso llamado de la hermandad, sin lugar á consulta, apelación, ni á otro recurso alguno, en que pudieran remediarse los yerros cometidos en la primera vista, es cosa que no puede racionalmente admitirse.





CAPITULO II.

DE LOS CUADERNOS DE ORDENANZAS Y SU COMPILACIÓN.

Sección I.

De los cuadernos de ordenanzas.



QUIPÚZCOA tuvo diferentes ordenanzas peculiares, si bien amoldadas á las generales del reino, para el gobierno de su hermandad, cuyo objeto queda explicado en la sección anterior. Las primeras de que usó fueron dispuestas en la Junta general de procuradores de los pueblos de la provincia celebrada en la villa de Tolosa el año de 1375; Junta que tuvo lugar bajo la presidencia de García Pérez de Camargo, alcalde de la Real Audiencia y Comisario enviado al efecto por el Rey D. Enrique II. Estas ordenanzas, cuyo original no se encuentra en el archivo de la provincia, se hallan insertas en el cuaderno de las formadas el año de 1453, de que se hablará luego. Su redacción, sin ninguna numeración de capítulos, sin división, ni separación de ninguna clase, es confusa y de difícil inteligencia; y aunque expresa que

era necesario proveer las cuatro cosas siguientes, el lector se ve obligado á discurrir y adivinar cuáles eran estas á que quiso aludir. Los asuntos ó puntos principalmente determinados en ellas pueden reducirse á los que paso á manifestar: 1.º Por cuanto los alcaldes ordinarios no pueden administrar la justicia tan cumplidamente como conviene al Real servicio y bien de la tierra, se nombrarán cada año siete alcaldes de la hermandad, que con los tres de las tres alcaldías tengan este cargo. 2.º Dichos siete alcaldes de la hermandad serán de los mejores de toda la tierra, arraigados y abonados, según el lugar y manera correspondientes, no de bandos ni de treguas, y tales, que guardarán el servicio del Rey y el provecho de la misma tierra. 3.º La jurisdicción de estos siete alcaldes de la hermandad, que será común en todo el territorio de la provincia, se limitará á conocer de los robos y otros delitos que se cometan de noche en los montes y caminos públicos. 4.º El procedimiento por curso de hermandad será breve y sumario, dirigido solamente á averiguar la verdad; y dictada la sentencia, no se admitirá ninguna apelación ni otro recurso de ella. 5.º A fin de que los mercaderes anden salvos y seguros en los caminos, nadie sea osado de pedir cosa alguna en estos; y el que lo hiciere, incurra en la pena impuesta al robador. Estas ordenanzas fueron aprobadas por el expresado monarca en Sevilla á 20 de Diciembre de 1375; y D. Juan I las confirmó en las Cortes celebradas en Burgos á 18 de Septiembre de 1379, cuando su advenimiento al Trono.

Según se indicó en la sección anterior, el Rey D. Enrique III envió á esta provincia al doctor Gonzalo Moro, oídor de su audiencia, con el objeto de reformar la hermandad y ordenanzas de la misma. La Real cédula de comisión que le dirigió al efecto, se hallaba concebida en los términos siguientes: «Sepades que me es fecho entender que los de la me-

»rindad de Guipúzcoa, así los de la merindad de las
 »villas é lugares de la dicha tierra, como de las al-
 »caldías de Sayaz, é de Aleria é de Aiztundo, que
 »por algunos bollicios ó alboratos, que entre ellos
 »fueron recrecidos, é de otras discordias en la her-
 »mandad, que entre ellos fuere puesta y firmada por
 »el Rey D. Enrique mi abuelo, é por el Rey D. Juan
 »mi padre y mi Señor, á cuyas almas Dios dé santo
 »paraíso, que non curaban de la guardar los unos
 »nin los otros, según que lo acostumbraron guardar
 »en los tiempos pasados; en lo cual, si ellos non
 »guardasen la dicha hermandad, á mi seguirme hya
 »gran deservicio, é pérdida, é dapno en la dicha tierra
 »de Guipúzcoa. Por que vos mando, vista esta mi
 »carta, que vayades á la dicha merindad de Guipúz-
 »coa, é que los fagades Juntas todos por sus procura-
 »dores suficientes, que veades el cuaderno de la her-
 »mandad, que entre ellos fasta aquí habían de los
 »señores reyes, é en todas aquellas cosas que vos en-
 »tendieredes que cumplen á mi servicio, é á pro, é
 »guarda de la dicha tierra, á toda la hermandad, que
 »vos entre ellos ficieredes é firmaredes, yo lo he y
 »habré por firmado, bien así como si yo mismo lo fi-
 »ciese estando presente en la dicha hermandad. E
 »por esta mi carta mando á todos los de la dicha
 »hermandad, así de las villas é lugares, como de las
 »alcaldías é tierra llana de Guipúzcoa, que tengan, é
 »cumplan la hermandad, que vos así firmaredes é
 »ficieredes, so pena de los cuerpos é de cuanto han á
 »cada uno para la mi Cámara, é yo vos do todo mi
 »poder cumplido é bastante por esta mi carta para
 »ello, é los unos nin los otros non fagades ende al
 »por alguna manera, so las dichas penas. Dada en la
 »ciudad de Avila á 23 del mes de Marzo año del na-
 »cimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1397. Yo
 »Juan Alfonso la fiz escribir por mandado de nuestro
 »Señor el Rey.—Yo el Rey.—Registrada.» El ex-

presado doctor, en cumplimiento de su comisión, hizo reunir en el coro de la Iglesia Parroquial de San Salvador de la villa de Guetaria á los procuradores de todos los pueblos de esta provincia; y de conformidad con los mismos estableció las ordenanzas que consideró convenientes para el régimen de su hermandad. Con todas ellas se formó un cuaderno compuesto de sesenta capítulos ó leyes. No tienen numeración alguna correlativa, según se estila en el día; pero se hallan colocados en párrafos separados, que facilitan algo su hallazgo.

La mucha extensión de estas ordenanzas no permite insertarlas aquí literalmente, ni aun el hacer un extracto de cada una de ellas. Me limitaré por lo tanto á indicar que su cuaderno es un conjunto desordenado de leyes penales, de otras disposiciones de materia criminal, de procedimiento del mismo género, de policía de caminos, de seguridad de los viandantes, y sobre otros ramos semejantes. Por ellas se conserva la institución de los siete alcaldes de hermandad, creados en las del año de 1375, nombrados por otros tantos partidos, con jurisdicción común en toda la provincia. Según las mismas, el alcalde de hermandad, ante quien se presentase una querella, debía proceder luego á practicar la correspondiente pesquisa asistido de un merino; pero para dictar sentencia definitiva, debía llamar á otro alcalde, el más cercano del lugar donde se hubiese cometido el delito. Una vez de pronunciada, no había de ella alzada, vista, ni suplicación, salvo el recurso de querellarse al Rey contra los que la dieron; y para la imposición de la pena no era necesaria una prueba plena de la criminalidad, sino que bastaban ciertas presunciones. Por regla general prohibieron los desafíos de personas y ferrerías; pero los autorizaron entre hijosdalgo en algunos casos particulares, que señalan. Las mismas imponían la pena capital al que matase á otro,

no siendo en defensa propia; al que hiriese á otro con arma sobre asechanza; al procurador de Junta que riñiendo con otro procurador le hiriese con cuchillo, ballesta ú otra arma, de manera que le rompiese el cuero, y le hiciese sacar sangre; al que robase más de cinco florines en camino, ó más de diez fuera de este; al forzador de moza virgen, mujer casada ó de otra cualquiera; al que quebrantase casa ó iglesia por robar; al que cortase barquines de ferrería por hacer mal; al que talase más de cinco árboles frutales ó viñas; al que diese fuego á casa, panes, viñas, árboles frutales, ferrería, colmena ó navío, por hacer daño á su dueño; en fin, á los que trajesen rallón. Disponían que se arrancasen los dientes á los testigos que faltasen á la verdad en las pesquisas, y que se cortasen las orejas á los que llevasen de comer á los acotados. Imponían la pena de cadena á los que pusiesen asechanzas para matar ó herir á otro; al procurador de Junta, que riñiendo en ella con otro sacase cuchillo de la baina, armase ballesta ó lanzase arma, aunque no hiriese; á los que pedían en los caminos, y por que no les diesen les amenazasen. Otra señalaba la de azotes á los carboneros, maceros y oficiales de ferrería, que habiendo tomado dinero adelantado de su amo por sus trabajos, fuesen á servir á otras partes sin pagar sus deudas. Mandaban igualmente la quema de casa al herrero que hiciese rallón, y que si no tenía casa fuese ahorcado. Aplicaban por fin la multa á otros varios delitos de menor gravedad, que escuso de expresar.

A pesar del establecimiento de las precedentes ordenanzas, la experiencia demostró la necesidad de otras nuevas; pues ocurrieron casos que no podían ser determinados por ellos. Para este efecto, el Rey D. Juan II envió á esta provincia con título de Corregidor y justicia de ella al doctor Juan Velázquez, oidor de la Real Audiencia á principios del

año de 1415. En su consecuencia, á 1.º de Febrero los procuradores de todas las villas de Guipúzcoa se reunieron con este Comisario regio en la entonces villa de San Sebastián, donde de común conformidad hicieron otras ordenanzas, por las cuales fuesen juzgados los habitantes de la misma provincia. Sus disposiciones pueden resumirse en extracto en los capítulos siguientes: 1.º Los que no tengan oficio ni modo de vivir conocido, sean requeridos para que aseguren con fiador que vivirán honradamente; y si no dieren este, se les mande salgan de la provincia, y sean habidos por andariegos y vagamundos. 2.º Cuando algunos caballeros, escuderos ó señores de solares mantuviesen á alguno de estos en sus casas, si después que cometiesen algún delito les diesen acogida en ellas, tengan que entregarlos á la justicia que conozca de la causa; y caso de no hacerlo así, incurran en iguales penas á que estuviese sujeto el tal malhechor. 3.º Los señores que quieran librarse de la responsabilidad de dichas personas, deben hacer la dejación de ellas ante el Concejo del pueblo donde moran con la competente formalidad. 4.º Si dichos señores hiciesen semejante dejación de sus dependientes, ó saliesen estos de sus casas sin licencia, sin mandado de los mismos, no sean responsables de sus delitos, á no ser en el caso de que después de cometidos los acogiesen en sus casas para ocultarlos. 5.º Los alcaldes y oficiales de los Concejos sean obligados á cumplir los capítulos precedentes sin necesidad de que sean requeridos para el efecto. 6.º Todo aquel á quien se desafiare por otro sin derecho, tenga que hacer saber dentro de seis días al Corregidor ó al Alcalde del Rey, y en su defecto, al Alcalde de la hermandad más cercano. 7.º Si algunos de Vizcaya, Alava, Navarra ú otras partes desafiaren á los de esta provincia, el Corregidor los requiera para que desistan del desafío; y

si no lo hiciesen, sean tenidos por acusados. 8.º En los delitos que se cometan de noche, las presunciones por dicho de un solo testigo de vista, ó de cualquiera otra manera, sean habidas por prueba suficiente para la aplicación de la pena. 9.º Los sospechosos de haber cometido algún delito tengan que purgar su inocencia, si el querellante lo solicitare, por medio de un juramento solemne prestado sobre los santos Evangelios delante del altar de San Esteban de Lartaun. 10.º En las causas de reos presentes no haya apelación, ni súplica, de las sentencias definitivas, sino que estas se ejecuten desde luego. Tal es el resumen de las expresadas ordenanzas, cuya Real cédula de confirmación fué despachada en Valladolid á 23 de Marzo de 1415, que original se conserva en el archivo de esta provincia.

El lamentable estado á que redujeron á la misma los bandos, discordias y guerras intestinas durante el reinado de D. Juan II, multiplicaron los robos, muertes, quemas y otros delitos atroces. Se halla, en efecto, que la provincia representó á Su Majestad en 1453 que desde el tiempo del fallecimiento de la Reina D.ª Catalina los bandos habían tenido subyugada á su servidumbre á toda la tierra, de manera que ni los mandatos reales se cumplían, ni se atrevían á presentar ni leer. «E dix, expresa una Real »cédula, que siempre en la dicha tierra se continúa »guerra de fuego é de sangre, más cruel que si fuera »de cristianos á moros, é se ponía fuego á las mis »villas é lugares, é moría mucha gente á traición é »mala ley, é los robos eran infinitos, é la subjección »de los menudos muy grande, como de esclavos á señores, etc.» De aquí la necesidad en que se vió la provincia de buscar los medios que pareciesen más convenientes para la represión de tamaño desorden y anarquía. Reunida, pues, para este efecto la hermandad en Junta general de procuradores, formó las co-

rrespondientes ordenanzas, las cuales fueron aprobadas por el Rey en Arévalo á 23 de Abril de 1453. La Real cédula que para su ejecución se libró en la misma fecha se halla inserta en la recopilación foral, pero sin el contexto de la relación de la petición presentada por la provincia, que omitió el encargado de hacer aquella.

Las ordenanzas de que acabo de hablar no consiguieron poner remedio á los males que sufría el país, en particular por los excesos de los parientes mayores. Consiguientemente, la Junta de procuradores de la hermandad de la provincia dispuso un nuevo cuaderno de ellas, por medio del cual trató de llenar los vacíos que se notaron en los anteriores, de aclarar algunas disposiciones, y de reformar otras. Este nuevo cuaderno fué presentado al Rey Enrique IV, el cual la confirmó por cédula librada en Vitoria á 30 de Marzo de 1457, de vuelta de esta provincia, «Considerando, dice, los clamores que ante mí de cada día venían por muchas personas de los robos, fuercas, quemas, muertes, feridas de omes, é otros excesos, é delitos, é maleficios, que con poco temor de Dios, y en menosprecio de la mi justicia, y destruymiento, y bastamiento de la dicha mi provincia de Guipúzcoa y de los vecinos y moradores de ella eran fechos y cometidos, etc. Otrosí, por parte de los procuradores de la dicha hermandad me fué fecha relación que para mejor reformatión, guarda y conservación de la dicha hermandad eran necesarios ciertos capítulos, que ante mí en el mi consejo presentaron, su tenor de los cuales es este que se sigue.» Este cuaderno comprende 146 capítulos de ordenanzas no menos incoherentes y confusas que las anteriores, redactadas sin orden alguno de materias, y con preámbulos excesivamente difusos. Sus disposiciones conservaban la institución de los Alcaldes de hermandad, su modo de proceder anterior, la prueba

de indicios, la no admisión de las apelaciones de las sentencias de la primera instancia, y otras muchas cosas del cuaderno del año de 1397. Varias de ellas trataban de las Juntas generales y particulares de la provincia, de los procuradores concurrentes á ellas, de los repartimientos de gastos, de los salarios de los mensajeros y de otros diferentes puntos de gobernación de la misma. Como los desórdenes que se experimentaban en el país se atribuían principalmente á los bandos y querellas de los parientes mayores, sus dependientes y adheridos, otros capítulos de las mismas Ordenanzas tuvieron por objeto reprimir el poder de estos caballeros, castigar sus excesos, y reducirlos á la ley común. Por lo demás, en su conjunto se encuentran las particularidades que paso á expresar: 1.^a Los Concejos sean obligados á indemnizar á viandantes de la suma del dinero ó del valor de las cosas que les fueren robadas en los caminos públicos de la respectiva jurisdicción hasta la cuantía de quince florines de oro. 2.^a De la tercera parte de esta indemnización sean relevados los Concejos de Segura, Vergara, Elgueta, Mondragón, Fuenterrabía y Rentería, por ser fronterizos, á quienes se pague dicha cuota en la primera Junta general. 3.^a Se prohíben los emplazamientos de legos en los Tribunales eclesiásticos sobre asuntos profanos. 4.^a Las justicias de Guipúzcoa pueden entrar en Vizcaya á prender cualquier acotado ó malhechor, y lo mismo las de este señorío en aquella provincia. 5.^a Los juicios anden con señales, bajo las penas que establece. 6.^a Los que cometan muerte ú otro mal en desafío sean relevados de la pena del aleve, pero no de las demás civiles y criminales impuestas por las leyes generales del Reino. 7.^a Todos los que vengán á morar en esta provincia, siendo mayores de catorce años, se obliguen con juramento á mantenerse en su hermandad, sin afiliarse con los señores de solares. 8.^a

Se prohiben severamente las asonadas, llamamientos de gentes, repiques de campanas y otros movimientos semejantes populares. 9.^a Que las justicias de la provincia puedan echar de su territorio á los parientes mayores, que sean desobedientes á sus mandatos, ó que acogiesen en sus casas á malhechores sin querer entregarlos.

El mismo Rey D. Enrique IV, queriendo acabar de pacificar esta provincia con la mejora de su legislación, expidió para el efecto dos Reales cédulas fechadas en Fuenterrabía á 4 de Mayo de 1463. La una fué dirigida á los alcaldes, comisarios, procuradores, oficiales, escribano fiel y demás personas de la hermandad, por la cual les hacía saber los motivos que había tenido para nombrar á los doctores Fernan González de Todelo y Diego Gómez de Zamora, y á los licenciados Pedro Alfonso de Valdivieso y Juan García de Santo Domingo, para examinar y reformar las Ordenanzas de ella. Se comunicó la otra á los Concejos, alcaldes, regidores, demás oficiales y hombres buenos de las villas y lugares, por la cual, al paso de anunciarles dicho nombramiento, les mandaba cumpliesen lo que aquellos determinasen. Por no dilatar me demasiado, copiaré solamente en lo preciso la primera, que se halla bastante difusa.

»E por que yo soy informado, dice el rey, que la dicha hermandad non está bien regida nin reformada, nin se administra enteramente la justicia en ella, según debe; é que intervienen en la dicha hermandad personas non cumplideras á mi servicio, nin al bien público de ella; é que algunos capítulos del cuaderno de la dicha hermandad non son guardados nin se guardan, é otros capítulos del dicho cuaderno están é son de reformar, é corregir, é algunos otros de añadir; é así mismo que se han fecho é facen repartimientos de maravedís por la dicha hermandad indebidamente, é se han gastado é

»gastan los dichos maravedís como non deben, de
 »lo cual han recredido á mi deservicio, é daño á la
 »dicha provincia: mi merced é voluntad es de refor-
 »mar á la dicha hermandad, por manera que se pue-
 »da ejecutar é ejecute por ella la dicha justicia, é de
 »cometer, é por la presente cometo á los dichos docto-
 »res é licenciado Pedro Alfonso de Valdivieso y al
 »licenciado Juan García de Santo Domingo, é á
 »cada uno de ellos, que puedan entender é entien-
 »dan en todas las cosas tocantes á la reformation de
 »la dicha hermandad, é mandar constreñir so gran-
 »des penas que se guarden los dichos capítulos del
 »dicho cuaderno, que vieren que se deben guardar,
 »é para reformar la dicha hermandad é los capítulos
 »del dicho cuaderno, que vieren que se deben corre-
 »gir, menguar, declarar, añadir, é facer ordenar de
 »nuevo otros cualesquiera capítulos é cosas, que ne-
 »cesarios ó complíderos fuesen etc.»

Los expresados cuatro comisarios regios no tar-
 daron en cumplir el encargo de reformar las Orde-
 nanzas de esta provincia. Habiendo concluido sus
 trabajos, convocaron para la villa de Mondragón la
 Junta general de procuradores de la misma, la cual
 se celebró en las casas de Juan López de Oro el día
 13 de Junio del propio año ante Domenjon Gonzá-
 lez de Andía, Escribano fiel de la provincia, y Fer-
 nán Alvarez de Pulgar, Escribano de cámara del Rey.
 Constituidos en ella personalmente aquellos, man-
 daron de parte de este que toda la provincia fuese
 gobernada por las Ordenanzas contenidas en la com-
 pilación que entregaron, cuyo original existe en el
 archivo de la misma. Declararon también que las
 comprendidas en el cuaderno viejo no se presenta-
 sen en adelante en ninguna causa, salvo las de este
 nuevo, al que debía quedar reducida toda la legisla-
 ción de la hermandad guipuzcoana. «Mandamos, di-
 »jeron, que la dicha hermandad sea regida, gober-

»nada y juzgada por las dichas leyes, ordenanzas,
»adiciones y declaraciones, que en este dicho volu-
»men serán asentadas, é non por otras algunas, y que
»estas dichas leyes y ordenanzas sean habidas per-
»petuamente por cuaderno y por leyes y Ordenan-
»zas de la hermandad, y que las dichas leyes y or-
»denanzas y cuaderno viejo de aquí adelante
»non sean traídas nin presentadas en fechos ni en
»cosas algunas de la dicha hermandad, salvo las que
»son contenidas en este dicho cuaderno, pues todas
»las dichas leyes y ordenanzas son reducidas á esta
»dicha compilación, etc.» Esto no obstante, quisieron
que el cuaderno de Ordenanzas antiguas quedase en
fuerza y vigor para la validación y autoridad de
lo contenido en la última colección, y á fin de que se
supiese de donde procedía.

El conjunto de ella se compone de 207 capítulos de
leyes redactadas con los mismos defectos que se han
indicado respecto del cuaderno formado el año de
1457, y el fondo de sus disposiciones se halla basa-
do en idénticos principios de rigorismo penal, toda-
vía en mayor escala. Por ellas la pena de muerte se
aplica en tantos casos, ó sea, por tantos delitos, que se
hace difícil enumerar. A los encubridores de ladro-
nes con la cosa robada, sabiendo que lo son, se im-
pone igual pena que á los mismos autores del delito
principal. Conservan la de arrancar los dientes á los
testigos, que en una pesquisa criminal falten por la
primera vez á la verdad en sus declaraciones, á quie-
nes en caso de reincidencia mandan se corte la len-
gua, y por la tercera vez disponían sean muertos. Las
penas de incendio de casas, azotes, cadena, vergüen-
za pública, se ven reproducidas con profusión en este
nuevo cuaderno, el cual adopta igualmente el prin-
cipio de que las presunciones son bastantes para
condenar á un acusado, cuando no hay pruebas ple-
nas. Esta compilación comprende además diferentes

disposiciones sobre Juntas generales y particulares de la provincia: así bien sobre los Ayuntamientos de los pueblos, sus alcaldes, regidores, repartimientos, etc. Se advierte que en estas materias de gobierno provincial y municipal el último cuaderno de Ordenanzas se había ocupado más que los anteriores, con tendencias á su adelanto y mejora.

Durante el reinado del mismo monarca se hicieron otras varias Ordenanzas sobre puntos de alguna importancia. Hállase, en efecto, que á petición de la provincia congregada en Junta, Su Majestad despachó en Ocaña á 30 de Enero de 1469 la Real cédula de aprobación de las que había acordado aquella, que eran tres en número. La primera disponía que ningún alcalde de hermandad diese tormento á ningún hermano de ella sin consejo y firma de letrado conocido, individuo de la misma hermandad, y que quien hiciese lo contrario, incurriese en la pena de muerte y perdimiento de todos sus bienes. Por la segunda se mandaba que ningún alcalde de hermandad prendase á ningún hermano de ella, que fuese arraigado en cantidad de diez mil maravedís arriba, no habiendo contra él querella, ó no fuese acotado, ó público malhechor. Según la tercera, los letrados presidentes de las Juntas tenían obligación de firmar las sentencias definitivas que diesen estas.

Las Juntas que se celebran en la villa de Elgóibar en 1470 hicieron otras nueve Ordenanzas, las cuales fueron así bien confirmadas por Real cédula librada en Medina del Campo á 23 de Agosto del mismo año. Su primer capítulo se dirigía á contener los abusos de autoridad de los alcaldes de hermandad, en especial por tener en prisión á algunos hasta finalizar el año de su cargo. Por los otros cuatro se establecían penas contra los escribanos que rehusasen dar á los interesados los traslados de las escrituras; contra los Concejos ó particulares que resistie-

sen la ejecución de cualquier mandamiento de las Juntas; contra los que viniesen de Vizcaya, Alava, Navarra y otras partes á desafiar á Concejos ó personas singulares de esta provincia. El sexto, séptimo y octavo tratan acerca del modo de proceder en las Juntas generales, de la jurisdicción de estas para conocer de las incidencias de los puntos atribuídos á ellas expresamente por las Ordenauzas, etc. Finalmente, el noveno dispone que la persona contra quien otra temiese que le hubiese de matar, herir, ó causar otro daño, tuviese que asegurar dentro de tercero día con fianza, de que no hará semejante mal que padeciese semejante temor.

A pesar de todas estas disposiciones legislativas, la provincia no consiguió disfrutar todo el orden que deseaba en sus cosas. Habíanse, en efecto, experimentado algunos excesos de parte de los ministros de la hermandad de la misma, de sus villas y lugares: la justicia se hallaba por esta razón despreciada: los querellantes se habían aumentado: los malos ensoberbecido. Para poner remedio á estos males, á virtud de convocatoria del Corregidor Juan de Sepúlveda, y con asistencia de este mismo, los procuradores de la provincia se reunieron en Junta el día 8 de Enero de 1482 en la Iglesia de Santa María de Olas, que es en término de Basarte. En este congreso provincial se examinó y aprobó un nuevo cuaderno de veinte y nueve Ordenanzas, que ya se hallaba redactado de antemano por personas comisionadas al efecto. Sus disposiciones se reducían á determinar los casos en que hubiesen de convocarse las Juntas particulares, las cualidades y circunstancias de los procuradores elegidos para ellas y las generales, y cómo se habían de hacer en estas los repartimientos. Ellas, en fin, arreglaban otros puntos de buen gobierno de la provincia, que es difícil expresar sin extenderse demasiado. Publicadas por el Corregidor de dicha Jun-

ta para su cumplimiento, parece que algunos procuradores concurrentes prestaron desde luego á ellas su conformidad; pero otros pusieron ciertas dificultades para su aprobación, sin consultar su contenido con las villas sus representadas, como en negocio nuevo y de gravedad. Esta manifestación de los segundos fué bastante motivo para que Sepúlveda les intimase que dentro de seis días saliesen de la provincia, y que en el término de veinte se presentasen en la Corte ante Sus Majestades. Tan violenta determinación no llegó, sin embargo, á realizarse en ninguno de los dos extremos indicados. Consta que los procuradores castigados se presentaron el día 15 del mismo mes con los testimonios de aprobación de las Ordenanzas por las respectivas villas, con lo que evitaron su salida. En vista de esto, la misma Junta á una con el Corregidor solicitó á los Reyes Católicos la aprobación de aquellas por medio de una exposición, en la que expresó los motivos de la formación de aquel cuaderno. «Nos ayuntamos, dice, los »procuradores de todas las villas, é lugares, é alca- »días de la provincia, é con gran delibranza de al- »gunos principales de ella para ello diputados en »uno con mí el dicho Corregidor fueron diputados, »entendiendo ser así complídero á servicio de Dios, »é de vuestras altezas, é á la ejecución de la nuestra »justicia, é al adelantamiento é gobernación de la »hermandad, é paz é sosiego de la república de la »dicha provincia é de los en ella habitantes, haber- »nos fecho, é ordenado, é establecido, é constituido »las leyes, capítulos, ordenanzas é constituciones si- »guientes.» Reconocidas estas por Sus Majestades en el Consejo, merecieron su aprobación, y para su cumplimiento se libró la competente Real cédula en Medina del Campo á 17 de Marzo del mismo año de 1482. Con posterioridad se dictaron otras muchas Ordenanzas sobre algunos puntos particulares de

gobierno y administración de justicia; pero como no se estableció ningún cuaderno folmal de ellas, se omite aquí su relación, á reserva de hablar de su contenido en sus respectivos lugares.

González inserta en su colección de documentos una Real cédula de 5 de Agosto de 1491, dirigida al licenciado Alvaro Ruiz de Porras, juez de residencia de esta provincia. En ella se expresa se había hecho relación á Sus Majestades que en la hermandad de esta, sus villas y lugares, había muchas leyes y privilegios contrarios unos á otros, los cuales eran causa de que se hiciesen en ellas algunos desórdenes y aun agravios, cuyo remedio cumplía al Real servicio y procomún de estos habitantes. «Por que vos »mandamos, añade, que luego que vos esta nuestra »carta fuere mostrada, catéis é fagáis catar el arca de »las escrituras de las hermandades de la dicha provincia, é veáis los privilegios é cartas, que de nos é »de los reyes de gloriosa memoria nuestros progenitores tienen, é saquéis una relación de todos ellos, é »por quien fueron otorgados, é en que tiempo, é en »que data, é si algunos fueren de enmendar los enmendéis é corrijáis juntamente con las personas que »por cada una de las dichas villas para ello fueren »diputadas, é así corregidos y enmendados enviadlos »ante nos al nuestro Consejo, para que en él se vea, »é sobre ello faga cumplimiento de justicia.» Ni original ni copia auténtica de este importante documento existe en el archivo de la provincia, ni hay noticia de que en su virtud se hubiese hecho la reforma de los privilegios y ordenanzas de la hermandad á que se refiere. Inserto aquí su contenido principalmente para demostrar que los monarcas de Castilla procedían de acuerdo con las Juntas de procuradores de la provincia, para hacer las reformas que conviniesen en los cuadernos de sus ordenanzas.

Todo el cúmulo de las publicadas hasta entonces

no bastó para conseguir el buen régimen de la provincia, su paz, sosiego y la ejecución cumplida de la justicia. Así es que en las Juntas generales celebradas en la villa de Villafranca por el mes de Abril de 1529 se acordaron para aquellos fines otras nuevas, cuya confirmación se solicitó á Sus Majestades por medio de una exposición que presentó en el Consejo Real el Comendador Ochoa Alvarez de Isasaga, Comisionado especial para el efecto. El cuaderno que se formó con ellas se componía de 27 capítulos no numerados, en general muy difusos, sin división de materias, y cuya parte dispositiva era precedida por lo general de preámbulos razonados. Tratan de las Juntas generales y particulares de la provincia, de los procuradores concurrentes á ellas, de los repartimientos de gastos, de la forma de reclamar los haberes de la provincia, de los comisionados en Corte, de la composición de los caminos públicos, del cumplimiento de los fueros y ordenanzas y de otras varias disposiciones concernientes á la gobernación de la provincia. Se ve, por consiguiente, que el objeto de ellas se había modificado de una manera notable, si se compara con el que tuvo en la formación de las de épocas anteriores. Ya se indicó que estas fueron dirigidas principalmente á arreglar el ramo de la administración de la justicia criminal con el señalamiento de penas y una breve tramitación de las causas. Después las necesidades más modernas obligaron á la provincia á fijar su atención respecto de la gobernación civil, dejando á los juzgados ordinarios el cuidado de la administración de justicia. Como quiera que sea, habiendo estas nuevas ordenanzas obtenido la Real aprobación, se expidió para su cumplimiento la competente Real provisión, fecha en Madrid á 22 de Diciembre de 1529.

Isasaga presentó el cuaderno de ellas en las Juntas generales que se celebraron en la villa de Zu-

mayor por los meses de Abril y Mayo del año inmediato, cuyo singular acuerdo es digno de copiarse. «Platicado largamente, dice el acta, por los dichos »procuradores sobre las dichas ordenanzas, que el »dicho comendador Isasaga había traído é presentado en la dicha Junta, dijeron que ellos besaban »pies y manos de Su Majestad por la merced que les »había hecho en confirmar las dichas ordenanzas. »Pero por cuanto ellas eran nuevas, é del establecimiento de ellas no había sabido la provincia universalmente, é les parecía que las ordenanzas antiguas convenían más á la provincia de Guipúzcoa y »á su buena administración y gobierno: que ellos no »recibían, ni recibieron, las dichas ordenanzas, ni el »uso y ejercicio de ellas, antes que protestaban y protestaron de usar de sus ordenanzas antiguas para el »gobierno de la provincia, no obstante las dichas ordenanzas nuevas, las que mandaban y mandaron »que no se pusiesen en el libro de las ordenanzas y »privilegios de esta provincia para usar de ellas.» Esto se decretó en la sesión del 3 de Mayo con la ligereza que está á la vista de cualquiera. Conociéronla sin duda luego los mismos procuradores concurrentes á aquellas Juntas; pues se ve que en la sesión del día siguiente acordaron la revisión formal y solemne de este negocio en una Junta especial ó extraordinaria. «Este día, se dijo, hablado largamente »sobre lo que tocaba á las ordenanzas nuevamente »hechas, y sobre lo que toca á la libertad é hidalguía »de los homes fijosdalgo de esta provincia, sobre lo »que hizo relación el Comendador Isasaga: pareciéndoles á los señores Corregidor, Junta y procuradores que este género era tan importante á la dicha »provincia, pues que es de la calidad que á todos »consta, y para que mejor se provea en ello, como »conviniere; acordaron é mandaron que se haga »Junta particular solo para ello, y que esta Junta se

»haga en la villa de Tolosa en 23 de Mayo, y que
 »envíen de cada villa y alcaldía los Concejos de la
 »dicha provincia que envíen á esta Junta cada dos ó
 »tres personas honradas, ancianas y discretas para
 »procuradores, bien instruídas é informadas, para
 »que se provea en ello como fuere bien y procomún
 »de la dicha provincia, y que les parecía que á este
 »Ayuntamiento debían venir letrados de esta provin-
 »cia, para que con su Consejo y parecer se provea
 »mejor lo que á todos.... y nombraron para ello á los
 »presidentes de la Junta y al bachiller.... (sigue la
 »designación de otros nueve letrados).» No existe en
 el archivo de la provincia el registro de actas de la
 expresada Junta particular, ni se descubre por otros
 medios la resolución que se ha tomado en ella, si es
 que se celebró. Pero de todos modos, todas las proba-
 bilidades están en que confirmaría el acuerdo de las
 citadas Juntas generales, es decir, la no admisión de
 las ordenanzas nuevamente aprobadas por el Consejo
 de Castilla, y que por lo tanto quedaron sin uso.

Hecha esta reseña de las ordenanzas contenidas
 en los diferentes cuadernos que han regido en Gui-
 púzcoa, conviene que las examinemos, aunque sea
 rápidamente, bajo el aspecto filosófico-legal. Lo pri-
 mero que respecto de ellas llama la atención de cual-
 quier observador es el plan general ó método bajo el
 cual fueron redactadas. Según se ha visto atrás, nin-
 guno de los cuadernos que las contienen guarda la
 menor división de materias, ya fuese esto por títulos,
 capítulos, secciones, ó de cualquiera manera seme-
 jante, que pareciese más acomodada al caso. Así es
 que, después de hablar una ordenanza acerca de la
 pena imponible á un malhechor, acaso la inmediata
 trata de repartimientos, la otra vuelve á señalar á
 otra clase de delincuentes, y así indistintamente otras
 cosas. Cualquiera conoce que semejante confusión de
 asuntos tan diferentes en una misma compilación es

un gran inconveniente, que dificulta mucho hallarla disposición que se desea. Lo es también la falta de numeración de cada capítulo, para las citas que hubiese que hacer, y poder comprobarlas en caso necesario, especialmente cuando el volumen es de alguna extensión, como sucede con la mayor parte de las que han regido en esta provincia. Eslo igualmente la mucha dilatación de cada capítulo, la repetición de ideas con diferentes palabras, y la poca precisión de estas. Para colmo de la confusión de todo el conjunto de los enunciados cuadernos, los preámbulos ó exordios, que muchas veces preceden á la parte dispositiva de cada capítulo de ordenanza, sobre extenderlos demasiado, dan lugar á interpretaciones de diversos géneros.

Su materia penal todavía es más censurable por las fatales consecuencias que su ejecución producía á la causa pública. Aterra en verdad la prodigalidad con que se impone por ellas la pena de muerte; la sangre fría con que decretan cortar las orejas y lengua, arrancar los dientes; en fin, la ligereza con que señalan las de azotes, cadena, vergüenza pública y quema de casas. Para los buenos de los jurisconsultos que los reyes enviaban á reformar la legislación de esta provincia, la vida del hombre conceptuado por malhechor no merecía sin duda consideración alguna. Ni admitían graduación alguna de mayor á menor gravedad, de más ó menos alarma producida en la sociedad, en los delitos que definen. Ellos igual pena aplicaron al asesino, al ladrón en camino público, al simple hurtador fuera de este, al que meramente hiriese con arma, al que cortase barquines de ferrería, al talador de cinco árboles frutales ó viñas, al que trajese rallón, al herrero que hiciese esta arma. La terrible sentencia de *que mueran por ello* estaba decretada contra todos estos desgraciados indistintamente con tinta roja. Por otra parte el mero encu-

bridor de un ladrón incurría en la misma pena que este; es decir, en la capital, cuando el robo ó hurto era en más de cinco ó diez florines respectivamente. El que acogía en su casa, ó llevaba de comer ó beber á un acotado, movido tal vez de sentimientos de humanidad, parentesco, amistad, etc., era tratado con igual rigor que el mismo delincuente. Así es que las ordenanzas de 1397 prescribían que al tal mozo ó manceba de acotado á quien le llevase de comer «públicamente desnudos como nacieron, sin camisa, ni otro paño ninguno, con una soga á la garganta, é las manos atadas atrás, por la villa más cercana donde esto acaeciere, é las pleguen una de las orejas á raíz del casco en la puerta dela tal villa, é esté así plegado desde la hora de prima fasta hora de Vísperas, etc.» Tampoco atendía esta legislación á las circunstancias atenuantes de los delitos, salvo en los homicidios en defensa propia: la tentativa y el delito frustrado, según sus principios, eran así bien considerados como el acto consumado.

De esta breve reseña se ve que los cuadernos de las ordenanzas antiguas de la provincia respiraban en todas sus páginas el rigorismo más completo. Sus autores creyeron que su aplicación era el verdadero y único medio de contener á los malhechores, de poner orden y sosiego en el país, y de dar seguridad á sus habitantes, y se equivocaron. Yo comprendo bien la necesidad que había de medidas fuertes para reprimir la osadía de tanto foragido en una sociedad desquiciada por la anarquía, despedazada por los bandos de los parientes mayores, y atemorizada por la falta de respeto de la autoridad central. Conozco también que en el estado de barbarie en que se hallaban entonces las costumbres públicas y privadas, era preciso que los remedios que se aplicasen para su reformation debían corresponder á la gravedad de los males que se experimentaban. Nunca, sin embargo,

convendré en que esta profusión de la pena de muerte y demás afflictivas indicadas fuese la más propia para conseguir dicho efecto, tan plausible por otra parte. Creo al contrario que el efecto saludable de las penas no consiste precisamente en su crueldad, sino más bien en la seguridad de no lograr la impunidad. Juzgo también que cuanto más graves sean ellas, menos probabilidad hay de que sean ejecutadas con puntualidad. ¿Qué otro objeto produjeron estas mismas ordenanzas de la provincia en su parte penal? Sus prescripciones no pecaban ciertamente por lenidad, ni por las consideraciones que guardaban hacia los acusados; y sin embargo, los asesinatos, robos, fuerzas, incendios de casas y otros crímenes graves se multiplicaban de una manera espantosa. Aumentábanse también las penas para su represión; pero un sentimiento de humanidad, superior á las leyes, las dejaba sin ejecutar.

La manera de proceder, establecida por las ordenanzas para los juicios criminales por curso de hermandad, adolecía igualmente de graves defectos. Reducíase á una pesquisa ó sumaria información de testigos, acerca del hecho criminoso, su autor ó autores; después de la cual, á título de la necesidad de la brevedad en el cumplimiento de la justicia, se pasaba á dictar la sentencia. No se ve que se diese lugar á la defensa del acusado como criminal, ni las pruebas de su inocencia, ó al menos de las circunstancias que podían atenuar su criminalidad. Los indicios de esta, tales como la fama pública, la desaparición del lugar del sugeto indicado y otros semejantes, se reputaban por suficientes para la condena; y solamente cuando el acusado podía probar con dos testigos de buena fama que al tiempo en que ocurrió el delito estaba en otro lugar, podía librarse de la pena. El uso del tormento se hallaba también reconocido, para arrancar confesiones de delitos que tal vez no se habían co-

metido. Para colmo de este injusto proceder, las sentencias de los alcaldes de hermandad eran ejecutivas; pues no se admitía de ellas apelación, consulta al superior, recurso de revisión, nulidad, ni de ninguna otra clase. No quedaba al interesado ó á su familia otro derecho que el de querellarse ante el Rey sobre los abusos de autoridad que el alcalde de hermandad hubiese cometido en el desempeño de su cargo. El uso de semejante facultad, sobre ser siempre costoso, apenas era practicable en el estado de costumbres de aquella época; y en todo caso, por más que consiguiese castigar al juez que hubiese abusado de su poder, nunca podía remediar los males que una vez hubiese causado. Reasumiendo lo expresado, se puede decir que en Guipúzcoa las ordenanzas antiguas de la hermandad, tan encomiadas por algunos ignorantes, entregaban la vida, los bienes y el honor de sus habitantes á la arbitrariedad de los alcaldes de la misma. Tal era su aspecto en la parte criminal, pues de la civil me ocuparé en el inmediato capítulo.

SECCIÓN II.

De la compilación de los fueros, ordenanzas y leyes.

Recordará el lector cómo al tratar de la Sección I, Capítulo I, del libro IV, se manifestó que en lo antiguo las únicas reglas de gobierno de Guipúzcoa fueron los usos y costumbres de sus habitantes. Tendrá también presente que se expresó allí que esta provincia tampoco tuvo leyes escritas hasta la época del reinado de D. Enrique II, durante la cual se redactaron las primeras ordenanzas de su hermandad. Estas, pues, las que después se dictaron sucesivamente, los privilegios, mercedes, algunas sentencias ejecutorias de tribunales y diferentes reales cédulas sueltas formaban su legislación particular,

siendo como supletoria la general del reino. Claro es que estando así desparramado el derecho civil, criminal y administrativo de la provincia, y fuera del alcance común, era ininteligible para la gran mayoría de los guipuzcoanos compuesta de labradores.

Conociendo un inconveniente tan grave, las Juntas generales celebradas en la villa de Cestona el año de 1581 acordaron hacer una recopilación ordenada por los fueros, privilegios, leyes y ordenanzas de la misma provincia. El objeto que se propusieron al dictar esta determinación fué el de facilitar á los habitantes de ella el conocimiento de su legislación, hacer más efectiva su observancia, y evitar en los pleitos las compulsas de sus disposiciones con los gastos y retardos consiguientes. Se quiso al mismo tiempo descartar la multitud de leyes inútiles y quedadas en desuso, contenidas en las ordenanzas de la hermandad, y que no servían más que de embarazo, confusión y ocasión de multitud de cuestiones. Tratóse, en una palabra, de que la colección proyectada no comprendiese sino las disposiciones que se considerasen por verdaderamente útiles, y que al mismo tiempo estuviesen vigentes ó en uso. Para este efecto se dió comisión al licenciado Cristóbal López de Zandategui, abogado vecino de la ciudad de San Sebastián, y á Luis Cruzat, de la propia vecindad, quienes presentaron sus trabajos en las Juntas generales celebradas en la villa de Zarauz en el mes de Noviembre de 1582 con el título de *Cuaderno de la hermandad*. Revisado este por el Corregidor y comisionados nombrados para ello, Cruzat volvió á presentar la obra enmendada en las Juntas generales celebradas en la villa de Azcoitia por Noviembre del año inmediato. Aprobado este nuevo trabajo por aquel Congreso, se escribió á los agentes en Corte para que solicitaran en el Consejo de Castilla la competente licencia para su impresión; pero, habiendo

advertido ellos los inconvenientes y dificultades que se ofrecían para entablar semejante recurso, se desistió de esta idea. La compilación así ordenada quedó, por consiguiente, de simple manuscrito, sin fuerza ni autoridad legislativa. Esto no obstó para que la provincia se sirviese de ella en muchos años como de instrucción y guía para el despacho de los negocios, en medio de su complicada legislación; sin desistir por eso de su pensamiento de simplificarla, coordinarla y publicarla en impreso para conocimiento universal de los naturales de la misma.

Las Juntas generales celebradas en la villa de Vergara por el mes de Mayo de 1612 renovaron para este efecto á Juan Pérez de Alzolarás la comisión que ya se le tenía dada en las anteriores. Su encargo no se limitaba á hacer una mera recopilación de las ordenanzas, sino que se extendía á quitar las que no pareciesen á propósito, y añadir las que faltaban de incorporarse al volumen formado en 1585. Alzolarás presentó su trabajo en las Juntas celebradas en la villa de Motrico por el mes de Noviembre del mismo año, aunque muy incompleto, según dice la acta. Por esta razón se dió esta dicha comisión á Juan Ochoa de Aguirre, escribano de número y vecino de la villa de Tolosa, en concepto de sugeto entendido en estas materias, y muy versado en los negocios públicos de la provincia. Este dió el descargo de su obra en las Juntas generales celebradas en la ciudad de San Sebastián del mes de Mayo de 1614, donde se aprobó la reforma de la recopilación que había hecho. Se decretó imprimirla desde luego, para cuyo efecto en las Juntas de Hernani del año inmediato se aprobó el ajuste hecho con un impresor de Pamplona; pero tal impresión no se realizó, ya fuese por razón de su mucho coste, ya por no haber alcanzado la provincia la real licencia necesaria para ello en aquellos tiempos. El trabajo de Aguirre pareció por

otra parte susceptible de algunas mejoras. Así es que en las Juntas de Vergara de 1632 se encargó al licenciado D. Juan López de Arteaga, abogado y archivero de la provincia, para que hiciese una nueva recopilación de los fueros, leyes y ordenanzas de la misma. Presentóla en las que se celebraron en la villa de Hernani por el mes de Noviembre de 1634, donde fué aprobada; y consiguientemente, se acordó pedir la licencia de la superioridad para su impresión, la que tampoco tuvo efecto. En este estado y sin más adelanto, las Juntas de San Sebastián de 1652 volvieron á dar igual comisión al licenciado D. Domingo de Ayaldaburu, quien por su edad y ocupaciones se excusó de este trabajo.

Cada vez veía más la provincia la necesidad de coordinar su embrollada legislación; y con este fin las Juntas celebradas en la villa de Guetaria el año de 1685 encomendaron esta obra á D. Miguel de Arámburu, caballero de la orden de Santiago, vecino de la villa de Tolosa. Hé aquí las palabras literales de este acuerdo. «Por cuanto esta provincia para su buen gobierno y conservación propia tiene dispuestas muchas Ordenanzas desde el año de 1584 en que últimamente se recopilaron las leyes más esenciales que tiene en el cuaderno que desde entonces se ha usado, y conviene se ponga en él por leyes municipales todas las Ordenanzas confirmadas por Su Majestad que no estuvieren puestas y asentadas en el dicho cuaderno por ser posteriores á su disposición, para que se sepa y ejecute por todos lo que por ellas se ordena y manda: acordó y decretó la Junta que D. Miguel de Arámburu recoja y vea todas las dichas Ordenanzas nuevas, y las ponga y asiente por leyes municipales de la provincia en los títulos á que corresponden, formando para ello cuaderno nuevo, y que, hecha esta diligencia, se sirva de él la provincia de aquí adelante, poniendo el original en

»el archivo y un traslado en la Secretaría, etc.» Arámburu presentó sus trabajos en las Juntas de Villafranca de 1690, con el título de *Nueva recopilación de los fueros, privilegios, leyes, ordenanzas, buenos usos y costumbres de la provincia de Guipúzcoa*, cuya obra fué aprobada por el mismo Congreso. El siguiente año se solicitó en el Consejo de Castilla la competente licencia para su impresión, para cuyo efecto se presentó el manuscrito con certificación de José de Garmendia, Escribano de número de la villa de Tolosa, y archivero de la provincia, respecto de su autenticidad. La solicitud se comunicó al fiscal de Su Majestad, el cual no puso dificultad alguna á su admisión en el fondo. Solamente expuso la necesidad de que la provincia exhibiese los documentos originales, cuyos traslados se querían imprimir; ó que en el caso de que hubiese para ello algún inconveniente, á lo menos se diese orden para su comparación y comprobación con los originales. Visto el negocio por el Consejo, lo providenció en este último sentido en virtud de decreto dado en 17 de Marzo de 1694. Para su cumplimiento se libró el correspondiente despacho de comisión al Corregidor de la provincia D. Juan Antonio de Torres, quien después de hacer el cotejo de documentos que le fué ordenado, presentándose en la villa de Tolosa, remitió las diligencias al Consejo con el competente informe.

En vista de este, y oído nuevamente el parecer del fiscal de Su Majestad, aquel supremo Tribunal dictó su auto definitivo en 2 de Septiembre de 1695. A su virtud se dió licencia á la provincia para hacer la impresión que había solicitado, añadiendo en ella las palabras que faltaban en algunos capítulos; y para que se corrigiesen los pliegos según se fuesen imprimiendo, se dió comisión al licenciado D. José de Vergara, relator de número del mismo Consejo. Declaróse, no obstante, que esta impresión fuese y se

entendiese con calidad de «sin perjuicios de la corona Real y de tercero interesado, ni que sirviese para dar á sus capítulos más fuerza y autoridad que la que habían tenido y tenían en el estado de entonces.» Semejante restricción, que en cierto modo desautorizaba la misma recopilación que se deseaba imprimir, no fué del agrado de la provincia. Gestionó, pues, en el Consejo de Castilla, para que desapareciera en la Real provisión, ó se modificara; pero tuvo que pasar por ella á causa del empeño que tenía de hacer su publicación sin más tardanza. Obtuvo al mismo tiempo el competente Real privilegio exclusivo para la reimpresión de la obra por tiempo de diez años. Para el cumplimiento de todo lo mandado se expidió por aquel supremo Tribunal la correspondiente Real provisión fechada en Madrid á 3 de Abril de 1696, que se halla inserta al frente de la misma recopilación impresa. Consiguiente á esta Real facultad, se ejecutó la impresión de ella el mismo año en la villa de Tolosa por Bernado de Ugarte, impresor de la provincia, cuyos trabajos se fueron inspeccionando y corrigiendo sucesivamente, según se había mandado, por el citado relator del Consejo. De aquí se ve las esquisitas precauciones que se tomaron para la fidelidad, exactitud y corrección de esta obra, que no dejaba de ser de importancia en aquellos tiempos.

Esta dicha recopilación, donde se procuró distribuir convenientemente los asuntos, consta de 51 títulos subdivididos en diferentes capítulos ó leyes. Su conjunto forma un tomo en folio de 361 páginas de á dos columnas, con más un índice de títulos y capítulos al principio, y otro bastante copioso de materias al fin, siendo la impresión de letra crecida y clara. Uno de sus principales defectos consiste en la amalgama de disposiciones tan heterogéneas y de distinto orden en un mismo cuerpo legislativo desti-

nado á proporcionar instrucción. Tales son las propiamente forales, los privilegios, mercedes, usos y costumbres, con las orgánicas, gubernativas, administrativas, penales, de procedimientos criminales, policía rural, reglamentarias de varias clases, de administración de justicia, etc. En vista de esta confusión, soy de parecer que la provincia debía haber hecho dos recopilaciones independientes enteramente entre sí, y que en haber obrado de otra manera se cometió una gran falta, cuyas fatales consecuencias se experimentan aún en la actualidad, según es notorio á todos. La una debió componerse solamente de los fueros, privilegios y bases fundamentales del gobierno provincial con la denominación de *cuaderno foral*. Este en muy pocas páginas de reducida forma hubiera podido comprender una especie de constitución política, de carácter estable, fijo y permanente, lo cual presentaba desde luego la gran ventaja del mejor conocimiento y más fácil conservación de las leyes verdaderamente útiles de la provincia. La otra colección pudo haberse dispuesto con las Ordenanzas vigentes en materias de gobierno, que pareciesen más acomodadas á las circunstancias de la época, descartando ese fárrago de disposiciones reglamentarias, penales, y otras de naturaleza variable. Su título pudo haber sido el mismo que se propuso en 1583, que fué el de *cuaderno de la hermandad*, ú otro semejante, que indicase ser una colección de leyes orgánicas. A pesar de eso, la colección se hizo con todas las expresadas materias, formando un conjunto sumamente perjudicial bajo todos conceptos; en términos de que á cada paso ofrece confusión, complicación y dudas, como se convence cualquiera á su simple lectura. De aquí ha resultado que los fueros é instituciones fundamentales, cuya conservación interesa tanto á la provincia, se hayan confundido, exponiéndose á perder aquella majestad y repetabili-

dad que debían tener á la manera de la arca Santa de los israelitas.

Mucha parte de las disposiciones contenidas en dicha recopilación se halla en completo desuso, por estar en contradicción con las ideas y circunstancias reinantes en el presente siglo. Otras han sido revocadas ó modificadas por leyes posteriores, ya generales del reino, ya particulares de la provincia; prestando esto solo un motivo á dudas y cuestiones aun á los mismos letrados, de complicación y confusión á los que no han hecho profesión del estudio de la legislación. Si, pues, cuando se hizo dicha compilación, era conveniente ejecutar una entresaca de lo verdaderamente foral y constitutivo respecto de lo que no tenía semejantes cualidades ¿qué no se podrá en la actualidad? Para que lo primero se conozca bien, se conserve, se honre, y se transmita puro á la posteridad, creo necesario el que se ejecute esta obra importante tan pronto como las circunstancias especiales de la provincia lo permitan. La civilización actual no consiente por otra parte que al lado de los preciosos fueros, privilegios y libertades del país ocupen un lugar las bárbaras penas y otras muchas disposiciones absurdas de la antigüedad. Así es que, hablando franca y desapasionadamente, no comprendo cómo se ha tratado en estos tiempos de hacer su reimpresión tal como es.

Por lo demás, la forma ó plan bajo el que se practicó la recopilación de que me ocupo no parece tampoco la mejor. Desde luego se ve que el mucho volumen que tiene es un inconveniente para su uso y manejo en el despacho de los negocios que diariamente se ofrecen en la provincia. Los preámbulos, ó sea, exposición de motivos, que generalmente preceden á cada capítulo de ella, sobre que son una obra de los sujetos que intervinieron en su redacción, puesto que no se encuentran en el texto de las orde-

nanzas originales, no sirven para otra cosa más que para abultarla. Ni por otra parte deja de ser algo chocante el que se pusiesen semejantes razonamientos á disposiciones publicadas hacía ya tres siglos, adivinando el espíritu de ellas, el fin que se propusieron las mismas, ó sus autores al dictarlas. En resumen, por más que la recopilación foral y legislativa que tiene Guipúzcoa reciba su autoridad ó fuerza legal en las disposiciones originales en que se funda; por más defectuoso que sea el plan bajo el que se halla formada, y el método con que se ejecutó, es indudable que su uso para la instrucción de las gentes y despacho de los negocios sirve de mucha utilidad. Bajo este concepto es digna de poseerse por todo guipuzcoano, sobre todo por los letrados, personas dedicadas al estudio de la historia, y demás que se ocupan de los negocios públicos. Por lo demás, se me permitirá recordar aquí á quien corresponda la necesidad de dar alguna más importancia que la que generalmente se le ha dado al conveniente arreglo y esmerada conservación de los documentos originales en que se funda esta recopilación. La confianza de que los derechos de la provincia se hallan suficientemente justificados por el solo hecho de su inclusión en ella, no es cosa prudente en hombres públicos; y menos lo es todavía en estos tiempos, en que hay un empeño en poner en cuestión todas las antiguas instituciones de esta provincia.

Consiguiente esta en su propósito de tener reunidas é impresas las leyes de su gobierno, decretó en las Juntas de Mondragón de 1752 hacer una recopilación de todas las ordenanzas confirmadas después de la que queda explicada. Se acordó además en las mismas que, hecho este trabajo, se imprimiesen y encuadernasen á continuación de la de 1696 por vía de suplemento. La redacción de este se encomendó á D. Nicolás de Altuna, quien en las Juntas de Deva

de 1756 manifestó que tenía concluida la obra; y á su consecuencia, se dispuso pedir al Corregidor de la provincia la correspondiente licencia para hacer su impresión. Concedióla este magistrado en virtud de auto proveído en 26 de Mayo de 1758, durante cuyo año se hizo la impresión en San Sebastián por Lorenzo Riesgo y Monteno, impresor de la provincia, con el título de *Suplemento de los fueros, privilegios y ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa*. Su contenido se reduce á insertar bajo la misma numeración de títulos de la recopilación de 1696, y en correspondencia con los mismos, las disposiciones legislativas publicadas posteriormente respecto de algunas materias peculiares al país. Adolece por lo demás de los mismos defectos con que se ordenó dicha recopilación, puesto que comprende igual mezcla de asuntos de naturaleza estable, reglamentaria y variable. Es claro también que como mera colección impresa carece de fuerza y autoridad legislativa, y que las disposiciones insertas en ella en tanto merecen estas cualidades, en cuanto cada una de ellas la tiene de por sí en su original. Su volumen es de 91 páginas de á dos columnas, con más un capítulo añadido de otras dos sin numeración.

De todo lo expuesto precedentemente resulta que la primera impresión que hizo Guipúzcoa de la recopilación de sus fueros, privilegios, leyes y ordenanzas, fué la del año de 1696. Por consiguiente, se han equivocado los que han dicho que estas disposiciones se hallaban impresas y repartidas á los Concejos con mucha anterioridad á la misma época; fundándose para el efecto en el contenido de uno de los capítulos finales de las ordenanzas de la hermandad aprobadas por Su Majestad en 22 de Diciembre de 1529. «A causa de no guardar, dice, ni ejecutar los Corregidores é Alcaldes ordinarios de la dicha provincia las pragmáticas de estos reinos, fechas por los re-

»yes de gloriosa memoria para el buen gobierno é
 »regimiento de los pueblos de la dicha provincia,
 »que están en libros imprimidos en cada Concejo de
 »la dicha provincia, se han seguido é siguen cada
 »día muchos daños é gastos á la dicha provincia: or-
 »denaron que las dichas pragmáticas se observasen
 »é se guardasen en todo tiempo, como en ellas se
 »contiene, y para su observancia las justicias de la
 »dicha provincia, é cada uno en su jurisdicción, ten-
 »gan cuidado de saber quién las quebranta, y ejecu-
 »ten las penas contenidas contra los que en ella in-
 »curriesen.» Este capítulo nada tenía que ver con las
 leyes ú Ordenanzas de la provincia, ó que concierne-
 sen al cuerpo universal de la misma, pues hablaba
 solamente *de las pragmáticas de estos reinos* que los
 monarcas de Castilla expedían para el buen gobier-
 no de los mismos. Aludía, en una palabra, á las leyes
 generales del reino dictadas para el gobierno muni-
 cipal *de los pueblos*, y no al general de la provincia, y
 por eso encarga á *las justicias*, esto es, al corregidor y
 alcaldes ordinarios, que cada uno en su jurisdicción
 cuidase de cumplirlas.

Consiguiente á lo que acabo de manifestar, otro
 capítulo dispone que para que los alcaldes y demás
 cargo-habientes de los pueblos no pretendiesen alegar
 ignorancia de las leyes y Ordenanzas del mismo
 cuaderno de 1529, tuviesen en su poder el *traslado*
 de ellas. De aquí se infiere que lo que en cuanto á
 las leyes de la hermandad prescribe es que dichas
 autoridades conservasen en su poder una copia de
 las mismas, para que estuviesen bien instruídas
 de sus disposiciones. Semejante mandato era á la ver-
 dad inútil y enteramente si estas hubieran estado
 impresas en libros, como se quiere suponer. Por otra
 parte, no habiendo sido admitido por la provincia el
 cuaderno de Ordenanzas de 1529, quedó como no
 dado y sin uso, y mal pudo decretarse su impresión;

siendo precisamente esta no publicación y no admisión la causa de no haberse insertado sus importantes disposiciones en la recopilación de 1696. La circunstancia de no aparecer ningún ejemplar de la pretendida colección impresa, la de no haber la menor noticia de su existencia en el archivo de la provincia, la de no descubrirse ningún acuerdo tomado para solicitar permiso para la impresión, ni la consejería para hacerla, deben convencer plenamente á cualquiera de cuanto dejo expuesto. De que en 1529 se hubiese dicho «que los conceptos de la provincia »tenían las pragmáticas de estos reinos en libros im- »primidos», no hay por lo tanto motivo fundado para deducir que Guipúzcoa tuviese impresa su legislación particular. Esto probará únicamente que los pueblos de ella cumplían con lo dispuesto en la Instrucción de los corregidores dada en Sevilla á 9 de Junio de 1500. Se ve que en su capítulo 19 se mandaba que dichos funcionarios hiciesen que «en el »arca de cada Consejo estuviesen las Siete Partidas, »las Leyes del Fuero, este nuestro Libro, y las de- »más leyes y pragmáticas; por que, habiéndolas, me- »jor se puede guardar lo contenido en ellas.» Por último, consta que el mismo D. Miguel de Arámburu, citado poco há, en el descargo de los negocios manejados en la Corte presentado en las Juntas de Tolosa de 1696, dijo lo siguiente: «También se ha conseguido por el exponente la licencia para la impresión de las Ordenanzas de V. S., después de ciento »trece años que la primera vez introdujo esta pretensión con poca felicidad.» Alude, como se ve, á las gestiones hechas para dicho efecto en 1583, sin resultado favorable.



CAPITULO III.

DE LA JUSTICIA EN LA VIA ORDINARIA.

Sección I.

De los merinos y alcaldes mayores.



PARACE que la autoridad real más antigua de Guipúzcoa para la administración de justicia fué la de los merinos mayores, razón por la que esta provincia fué conocida con el nombre de merindad, ó sea, territorio presidido por un merino. Según la opinión más acreditada, estos funcionarios se extendieron en los reinos de Castilla y León en el reinado de San Fernando, que fué de 1217 al 1257; y si es cierto que existían en Alava á principios del siglo XIII, es de presumir que por el mismo tiempo se introducirían en Guipúzcoa. El merino mayor fué por consiguiente el funcionario permanente más antiguo del orden civil que se conoció en esta provincia para la administración de justicia con respecto á la generalidad ó comunidad de los pueblos de la misma.

Sus atribuciones parece fueron análogas á las que en la misma clase desempeñaron los adelantados mayores. La principal y la más distinguida de ellas era indudablemente la administración de justicia; por lo que es claro que en Guipúzcoa entendieron de todas las alzadas de las sentencias de los alcaldes ordinarios. Además perseguían á los malhechores; ejecutaban las sentencias de muerte y demás; recaudaban los pechos y tributos debidos al rey; en fin, hacían los llamamientos de las Juntas provinciales. De aquí puede inferirse cuán importante era la autoridad que los merinos mayores ejercieron en esta provincia; autoridad tanto más respetable, cuanto por lo común la desempeñaban caballeros de la primera categoría y nobleza. Por eso no pocas veces abusaron de ella, cometiendo extorsiones de clases varias en el país, que más bien debían amparar y proteger. Consta justificada esta verdad del contexto de una acta de la junta de procuradores de diferentes villas de la misma provincia, la cual tuvo lugar en la Iglesia parroquial de Santa María de la de Tolosa el día 10 de Agosto de 1391. Acordaron allí entre otras cosas «que »atento que los merinos mayores de Guipúzcoa y sus »tenientes acostumbraban andar con muy grandes »gentes, haciendo desafueros en la tierra en deservicio del rey, y de sus leyes y libertades antiguas de »los pueblos; que el caballero ó escudero fuesen acogidos como caballero y escudero, pero no como merinos, y con tantas compañías que el poder de la »tal villa siempre fuese mayor que la de ellos, y que »si los tales merinos ó gentes de su compañía hiciesen alguna prenda ó desafuero por cualquiera causa ó razón, que el tal pueblo apellidase á todas las »dichas villas suyos, etc.» Esto da bastante idea de cómo se conducían los expresados caballeros.

La noticia positiva más antigua que yo he encontrado de la existencia de los merinos mayores en

Guipúzcoa, es la relativa al año de 1315. De la Real cédula de confirmación de un privilegio dado á la villa de Segura, hecha por el rey D. Alonso XI, la cual se halla inserta en una ejecutoria que tiene la de Legazpia en pleito seguido contra aquella sobre división de montes comunes, se ve, en efecto, que Gómez Carrillo era merino mayor de Guipúzcoa en el expresado año. Que D. Ladrón de Guevara tenía este oficio en el de 1337, consta también del privilegio de exención de la fonsadera, concedido á favor de la villa de Tolosa en 14 de Agosto del mismo. La continuación de aquel en la posesión de este empleo en 1338 resulta de otro privilegio de concesión de términos, hecha á la de Elgueta en 20 de Agosto del propio año. D. Beltrán Vélez de Guevara era igualmente merino mayor de esta provincia en 1343, según aparece de los privilegios de las fundaciones de las villas de Deva y Placencia, que son de este año; y que en el siguiente continuaba en este empleo, resulta justificado de la merced de la extensión del fuero de la de Vergara, hecha á favor de sus vecindades. La ley 7.^a, título 20, del ordenamiento de Alcalá, que es del año de 1348, supone también la existencia de este funcionario de Guipúzcoa, al disputar que lo dispuesto precedentemente sobre los alcaldes y alguaciles «guarden los nuestros merinos mayores de »Castilla, León, Galicia, Asturias, Guipúzcoa y Alava.» Que Lope Díaz de Rojas obtenía dicho cargo en 1349, se descubre así bien de un privilegio de confirmación de la exención de la fonsadera, que gozaba la villa de Tolosa, que es de 11 de Agosto del mismo año. En igual forma aparece que Ruiz Díaz de Rojasera merino mayor de Guipúzcoa en 1371, 1372 y 1374, según se deduce del privilegio de fueros de la villa de Salinas, que es de 30 de Enero de este último año. Para el de 1379 ya estaba en posesión de esta judicatura D. Pedro López de Ayala, como

se ve de la carta-puebla de la villa de Orio; y desde esta época en adelante por muchos años estuvo radicada en su casa y mayorazgo. En la crónica de D. Juan I, al hablar del año de 1381, su editor dice, en efecto, por nota que con motivo de la muerte del rey de Francia, aquel envió al sucesor de esta por embajadores á D. Pedro López de Ayala, merino mayor de Guipúzcoa y á Fernando Alfonso de Aldana, doctor en decretos. Conservaba aquel dicho empleo en 1383, como resulta de la carta-puebla de la villa de Villarreal de Urrechua, y también en el siguiente año, según se ve de la concesión de términos de la de Cestona, que es de esta última fecha. También lo poseía D. Pedro López en 1389, por lo que expresa una nota que trae la mencionada crónica, referente á los sucesos de este año, en la cual se dice que fué uno de los diputados conservadores de las treguas hechas con el rey de Inglaterra, y le titula merino mayor de Guipúzcoa. Fernán Pérez de Ayala, que regularmente sería hijo de D. Pedro López, figura con este cargo en un privilegio dado en Tordesillas á 30 de Marzo de 1401, haciéndole merced de los montes de Alzania; y con igual título aparece en la escritura de venta de estos, otorgada por él á favor de la villa de Segura en 22 de Junio del propio año. De la Real cédula de confirmación de las Ordenanzas de la hermandad del año 1415 resulta igualmente que Fernán Pérez de Ayala era entonces merino mayor de esta Provincia, puesto se expresa que se hallaba á la sazón en Fuenterrabía, á donde el doctor Juan Velázquez, nuevo Corregidor, fué á tomar la posesión del cargo. Que en los años de 1420 y 1425 conservaba dicho empleo resulta de la misma manera de las confirmaciones de los fueros de la villa de Bilbao, donde subscribe con aquel título. En el de 1444 aparece en posesión del mismo D. Pedro López de Ayala en un privile-

gio librado por el rey D. Juan II sobre los maravedís destinados á los vizcaínos para lanzas mareantes; hecho que confirma Esteban de Garibay al hablar de los sucesos de aquel año, señaladamente del levantamiento de las hermandades de Alava. De otra Real cédula del año de 1456, mandando que no usase de su oficio mientras el rey no dispusiese otra cosa, resulta igualmente que el propio D. Pedro lo desempeñaba á la sazón. García López de Ayala, mariscal de Castilla, era por fin merino mayor de Guipúzcoa en 1466, según se descubre de una Real cédula de 19 de Febrero del mismo año. Se expresa en ella que este caballero andaba en deservicio de Su Majestad con otros grandes del reino, quienes se habían apoderado del infante D. Alonso, su hermano; motivo por el que se mandó secuestrar su oficio de merindad, con las rentas y derechos pertenecientes, para hacer de todo ello lo que fuese su real voluntad. Continúa la cédula mandando que durante este secuestro cada villa y lugar de la provincia pusiese una persona idónea y suficiente, que tuviese dicho oficio, y llevase los derechos correspondientes á él por inventario de escribano público. Después de esto no se encuentra noticia de que ninguno hubiese ejercido en esta provincia el expresado oficio de merino mayor de ella; y por consiguiente, hay razón fundada para creer que quedó de hecho extinguido en virtud de la mencionada Real determinación.

Otra clase de magistrados hubo igualmente en Guipúzcoa en los tiempos antiguos, que fué la de los alcaldes mayores, cuyo primer establecimiento se ignora. La Real cédula librada en 20 de Diciembre de 1375 para la confirmación de las Ordenanzas de la hermandad de esta provincia denomina á García Pérez de Camargo *nuestro alcalde*; de que se infiere con bastante claridad que antes de dicha época existía ya este funcionario de la administración de jus-

ticia. Varios capítulos de las Ordenanzas de la hermandad de esta provincia del año de 1397 confirman plenamente la permanencia de este juez de letras. El 5.^o establecía que «cualquier que en la Junta de Guipúzcoa, que los procuradores hicieron delante del Corregidor ó del alcalde que anduviere en la dicha tierra, riñiere con otro, etc.» Tratando el 56 de los jueces de la provincia, disponía que «el Corregidor ó alcalde que de aquí adelante anduviere en esa merindad, usen de sus oficios según que más cumplidamente usaron en los tiempos pasados, etc.» Finalmente el 59 ocupándose de los llamamientos de Juntas, ordenaba que «cualquier Corregidor ó alcalde que de aquí adelante anduviere por nuestro señor el rey, lanzare apellido ó ficiere llamamiento á las villas, lugares é alcaldías de la dicha hermandad é merindad, etc.» Que el año de 1426 Diego Pérez de Sarmiento era justicia y alcalde mayor de Guipúzcoa por el rey, consta de un instrumento que existe en el archivo de la villa de Vergara, referente á una recusación que hizo de su delegado ó teniente. Su encabezamiento es del tenor siguiente: «en la villa de Vergara, á 10 de Mayo año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1426 años, estando presente Juan López de Amaga, justicia é alcalde mayor de Guipúzcoa por Diego Pérez de Sarmiento, justicia é alcalde mayor de la dicha tierra por nuestro señor el rey, etc.» Consta también que en una cédula dirigida por este en 13 de Agosto de 1438 á Pedro Sarmiento le denomina *mi alcalde mayor en la provincia de Guipúzcoa*. En las Ordenanzas de la hermandad del año 1453 se expresa así bien al disponer que en los asuntos de la jurisdicción ordinaria «hubiese lugar apelación de todos los alcaldes é jueces, así de las villas y lugares de la tierra llamada de Guipúzcoa é del nuestro alcalde mayor é corregidor, etc.» Las mismas Or-

denanzas, hablando más adelante del procedimiento de los alcaldes de la hermandad, dice: «pero por esto »non entiendo perjudicar nin sea perjudicado en »cosa alguna á la jurisdicción del mi alcalde mayor, ni al merino mayor de la dicha provincia, etc.» La subsistencia del alcalde mayor en esta también se comprueba por medio de las Ordenanzas de la hermandad del año de 1463, que se citan en varios capítulos. En el 5.º se dispone que «cuatquiera que »en la Junta de Guipúzcoa que los procuradores ficieren, delante de los tales procuradores estando así »juntos en su Junta, ó delante del corregidor ó alcalde, que la dicha tierra anduviere, etc.» Hablando el 50 de las Juntas provinciales, dice: cuando hubieren de celebrarse estas «llamen siempre al Corregidor del rey, si anduviere en la tierra, ó al alcalde »que ande por él etc.» El 51 hablando del modo de proceder de los alcaldes de la hermandad dispone que si estos no convinieren en la sentencia, «hayan »recursos al Corregidor ó alcalde del rey, que al »tiempo anduviere, é si aquí non anduviere corregidor ó alcalde, por el Rey, etc.» Igualmente el 53 manda que los alcaldes de hermandad que fueren negligente en su oficio «podían ser castigados por el »Corregidor ó alcalde que por nuestro señor el Rey »anduviere en la dicha merindad.» Finalmente el 186, al tratar de la manera de hacer las derramas y repartimientos en las Juntas, dice: se ejecuten «con el mi Corregidor de la dicha »hermandad, de la dicha provincia, ó su alcalde ó lugar teniente, é con su acuerdo »é deliberación, si hubiese el tal Corregidor ó alcalde, é si no lo hubiere, que sean fechas en uno con »los alcaldes ordinarios, etc.» Hallamos todavía rastros de la existencia del alcalde mayor de Guipúzcoa en una Real cédula de fecha 21 de Agosto de 1466. En ella se expresa que para en cuenta de los gastos que había hecho la provincia en la toma del

Castillo de Fuenterrabía, ocupado por el mariscal García López de Ayala, había pedido al rey le aplicase las rentas y derechos que pertenecían á este caballero, *así de la alcaldía mayor* de la misma, como de cualquiera otra manera.

Las atribuciones principales del Alcalde mayor de Guipúzcoa consistían en la administración de justicia, así en lo civil como en lo criminal, pero al mismo tiempo, según se ha visto por lo copiado, en falta del Corregidor asistía también á las Juntas, y debía intervenir en las derramas que hiciesen estas. Su residencia en la provincia no era, sin embargo, continuada ó fija, sino que más bien era un juez de comisión temporal. Por otra parte, parece que cuando el Rey enviaba algún Corregidor, se le consideraba como un teniente de este, quien reasumía en la provincia toda la autoridad Real, con arreglo á las leyes generales del reino, que no permitían tal duplicidad de funcionarios. No tenemos noticia de los sujetos que desempeñaron la alcaldía mayor antes del año de 1426, en que la ejercía Diego Pérez de Sarmiento, según se ha indicado. Consta que en 1456 la obtenía Pedro de Sarmiento, y que á este substituyó D. Diego Gómez de Sarmiento, Conde de Salinas. Este caballero, después de haber conservado por muchos años el oficio en su casa, hizo renuncia de él á favor de su nieto, de los propios nombre y apellidos y título; renuncia que fué aprobada por la Reina D.^a Juana en virtud de la Real cédula expedida en Segovia á 22 de Agosto de 1505. Notificóse esta á la provincia en el lugar de Basarte, hallándose congregada en Junta general de procuradores de las villas con asistencia del licenciado Rodrigo Velanúñez de Avila, Corregidor de la misma, para que fuese obedecida y guardada. La provincia dijo que obedecía el contenido de Real determinación, como emanada de su Reina y Señora natural; pero que al mismo tiempo suplicaba

de su ejecución ante Su Majestad y Señores de su Consejo. Presentó, en efecto, la oportuna petición por medio de los bachilleres Murguía y Jáuregui, comisionados especiales para el efecto. Representaron estos: que la merced de la alcaldía mayor era en perjuicio de la provincia, de sus privilegios y libertades: que desde tiempo inmemorial se hallaba Guipúzcoa exenta de semejante judicatura: que si alguna vez se había usado de ella, era en tiempos de revueltas y bandos del reino: que según las leyes generales, las alcaldías mayores estaban suspendidas donde había corregidores. Añadieron, que la provincia tenía Corregidor, siete alcaldes de hermandad, merinos prebostes y alcaldes ordinarios á su costa, y que así no sería posible tolerar semejante Alcalde mayor, ni se debía dar lugar á que los naturales fuesen fatigados, y el país destruido con tanto funcionario. La parte del conde de Salinas contestó hallarse desde tiempo inmemorial en posesión de la alcaldía mayor de Guipúzcoa. Expuso por lo demás que el ejercicio de esta judicatura no era opuesta á los privilegios de la provincia, ni perjudicial á sus habitantes; por todo lo cual pidió se despachara la sobre-carta de la merced que se le tenía aprobada, para su cumplimiento. Visto el negocio en el Consejo Real, y consultada la resolución con el Rey D. Fernando el Católico, se declaró: «que el dicho oficio de la alcaldía desde entonces para después de la vida del dicho conde »D. Diego Gómez Sarmiento de Villandrando se »consumiese, sin que se pudiese hacer merced de él »á persona alguna.» Pero al propio tiempo, respetando la que se le tenía hecha, se mandó que el mismo Conde en sus días pudiese usar de la alcaldía mayor en los lugares y casos en que su abuelo lo ejerció; pudiéndolo hacer, ya por su misma persona, ya por medio de teniente, que no fuese natural de esta provincia. Esta resolución quedó ejecutoriada, y

en su virtud se libró la competente Real provisión fechada en Salamanca á 28 de Febrero de 1506, inserta en el capítulo 9.º, título 2.º, de la recopilación foral. Con tanto quedó extinguida la antigua alcaldía mayor de Guipúzcoa, sin que después se hubiese restablecido.

SECCIÓN II.

Del Corregidor como juez.

Como los Corregidores de Guipúzcoa ejercieron atribuciones judiciales y administrativas, al tratar del gobierno provincial fué preciso explicar la época en que se introdujeron, cómo se arraigaron, y cuál fué la extensión de su autoridad respecto de la provincia y de los pueblos. Me limitaré por lo mismo en este lugar á hablar acerca de la intervención que tuvieron en la administración de la justicia en la vía ordinaria, sea en el orden civil, sea en el criminal. Hablando en resumen, puede decirse que la autoridad judicial de los Corregidores de esta provincia tenía dos caracteres diferentes. Eran jueces de la primera instancia en los negocios y causas que prevenían, y además, de alzada respecto de las providencias que en materia civil dictasen los alcaldes ordinarios, á voluntad de las partes apelantes. Quiere decir, que los litigantes de esta provincia eran arbitrios de entablar las demandas, sea ante el Corregidor, sea ante los alcaldes ordinarios competentes. Si lo hacían en el juzgado del primero, él mismo era entonces el juez de la primera instancia con las apelaciones á la Real Chancillería de Valladolid; pero si las partes ponían el pleito ante los alcaldes ordinarios, las alzadas podían llevarse, bien fuese para ante el Corregidor, bien á dicho tribunal superior, según quisiese el apelante. Bajo este sistema, cuando el Corregidor entendía como juez de alzada, resultaba una tercera ins-

tancia para ante la expresada Chancillería. Esto producía, como se ve, nuevos gastos, dilaciones y entorpecimientos, que prolongaban los negocios y fatigaban á los litigantes bajo todos conceptos; motivo por el que los apelantes de las providencias de los alcaldes, interponían comunmente la alzada ante la chancillería, abandonando el recurso al Corregidor. Por lo que mira á la materia criminal, si es cierto que este magistrado estaba autorizado para conocer de toda clase de causas criminales por delitos que se cometiesen en el territorio de la provincia, solo lo era á prevención con los alcaldes ordinarios. Las consultas de las que estos formasen correspondían exclusivamente á la misma Real Chancillería, sin que los Corregidores tuviesen la menor intervención en el procedimiento criminal, que hubiesen prevenido los mismos por medio de la sumaria principiada de oficio, ó á querrela de parte.

Las cualidades de que debían estar adornados los que hubiesen de servir el corregimiento de Guipúzcoa no estaban determinadas por las ordenanzas, ni por otras disposiciones particulares de la misma. Es indudable sí que esta judicatura fué considerada desde su origen por de mucha importancia, y así es que el primero que la desempeñó en su territorio fué el distinguido doctor Gonzalo Moro, del Consejo del Rey D. Enrique III. Vese también que los monarcas posteriores, conforme á lo establecido en las leyes generales del reino, elegían por lo común para el desempeño de este cargo á letrados de reconocido mérito y de práctica para administrar justicia, si es que no enviaban á oidores de tribunales superiores. Así es que los Reyes Católicos, en vista de una representación de la provincia sobre el particular, en Real cédula librada en 5 de Abril de 1497 la expresaron que se la enviaría Corregidor de ciencia y conciencia. Cumplieron aquellos monarcas esta promesa,

nombrando comunmente para el desempeño de este cargo á juristas de nombradía. Sus sucesores, siguiendo el mismo principio, enviaron por Corregidores á letrados de nota, reputación y práctica en el despacho de los negocios, al mismo tiempo que caracterizados en su carrera jurídica. De modo que se fué estableciendo sucesivamente la costumbre de echar mano para el servicio de este destino en comisión de oidores efectivos de la Real Chancillería de Valladolid, quienes por consiguiente gozaban de doble sueldo.

En tal estado la provincia fué informada en 1771 de que se trataba de elegir para dicho empleo á un abogado que no era ministro de dicho tribunal superior. Consideró ella que semejante medida, si se llevaba á efecto, hubiera rebajado su dignidad y reputación; por lo cual, en cumplimiento de un acuerdo de las Juntas del mismo año, la diputación gestionó en la Corte para que tal novedad no se llegase á realizar. A su consecuencia, consiguió la suspensión del expresado nombramiento. Después por Real decreto de 23 de Marzo de 1783 se hizo el nuevo arreglo de los juzgados de letras de todo el reino, con la oportuna división de ellos en clases ó categorías, señalamiento de los respectivos sueldos, etc. Su artículo 9.º disponía que los corregimientos de Vizcaya y Guipúzcoa se proveerían, como de la tercera y superior clase, en personas beneméritas que estuviesen condecoradas, ó que se hubiesen de condecorar con los honores de oidores de las Reales Chancillerías. La provincia se creyó perjudicada con semejante disposición, ya por que se trataba de que no estuviese servida por un ministro efectivo de alguno de dichos tribunales superiores, ya también porque debería pagársele un doble sueldo del que acostumbraba. Consiguiente á esta inteligencia, preparó una exposición para el gobierno, haciendo ver los perjui-

cios que se la seguían de la ejecución de aquella medida; pero, habiendo consultado el asunto en la Corte, en conformidad al Consejo que la dieron en ella, suspendió al pronto de presentarla. Más adelante, en virtud del Real decreto de 22 de Octubre de 1797, alcanzó se restableciera el método anterior, y en su cumplimiento, vinieron por Corregidores de la provincia ministros efectivos del Consejo Real de Navarra, así como á Vizcaya los de la Chancillería de Valladolid. Tal fué el orden establecido para los nombramientos sucesivos, y que fué observado.

Pero esta antigua práctica se alteró el año de 1824 con el nombramiento hecho por el Rey en D. Rafael Ayuart y Sala, oidor honorario de la Real Chancillería de Granada. Aunque la provincia le admitió y reconoció como su Corregidor sin haber una oposición á su nombramiento, fué no obstante sin perjuicio del derecho que tenía para que recayese en uno de los ministros efectivos de alguno de los tribunales superiores, y á reserva de gestionar en este sentido cerca del gobierno de Su Majestad. Más adelante ocurrió el caso de haber pretendido este un aumento de dotación á título de compensación de los derechos de arancel, que no cobraba en la cuantía determinada por Reales disposiciones. De aquí nació el que la provincia, haciendo uso de aquella reserva, hubiese representado al Rey la separación de aquel funcionario en el concepto de no ser oidor efectivo de ninguna Real Chancillería ni Audiencia, con algunas otras quejas sobre su proceder. A pesar de esto, se ve que por Real orden de 22 de Octubre de 1828 se desestimó la pretensión de la provincia, quedando así este asunto.

He dicho poco há que tanto en el tiempo de los Reyes Católicos, como en el de sus sucesores, vinieron á Guipúzcoa corregidores que comunmente eran juristas. Esta regla tuvo, sin embargo, algunas excep-

ciones, ó sea de nombramientos de corregidores no letrados, por razón de las circunstancias extraordinarias de guerras en que se ha hallado el país en que se ha prescindido de aquella cualidad tan necesaria para administrar de por sí la justicia. Así sucedió respecto de D. Juan de Ribera, capitán general de la frontera de Navarra, á quien por Real cédula de 23 de Agosto de 1487 se le confirió el corregimiento y juzgado de esta provincia. «Entendiendo, decía, ser »así cumplidero á nuestro servicio, é ejecución de la »nuestra justicia, é á la par y sosiego de esa dicha »provincia» Ribera continuó desempeñando dicho cargo á consecuencia de las prórogas que se le fueron haciendo sucesivamente; de manera que se halla que conservaba todavía aquel destino el año de 1493, en que parece cesó de ejercer. Se ve también que D. Sancho Martínez de Leira fué nombrado en 1515 Capitán general y Corregidor de esta provincia, cuyos dos cargos desempeñó con motivo de la guerra de Francia. No aparece que respecto de los sucesos de este jefe militar hubiese sucedido esta agregación de cargos. Resulta al contrario que ambos empleos estuvieron desempeñados por personas diferentes del respectivo ramo ó profesión, según se justifica con los títulos expedidos por el rey, que existen en el archivo de la provincia. Desentendiéndose otra vez el gobierno de Su Majestad de semejante práctica, confirió en 1635 el corregimiento de la provincia en D. Alonso de Idiáñez, duque de Ciudad-Real, virrey de Navarra y Capitán general de la misma. Reunida con otro motivo Junta particular en la ermita de Olás por el mes de Julio del año inmediato, se representaron á Su Majestad los inconvenientes de semejante acumulación de funciones; pidiendo en su consecuencia se dignase nombrar Corregidor letrado separado, súplica que se volvió á hacer por las del año inmediato. A pesar de esto, no

se halla que la provincia hubiese alcanzado resultado alguno favorable á sus deseos. Se ve que por el contrario, D. Juan Chacón Ponce de León fué agraciado en 1637 con el ejercicio de ambos cargos, y que otro tanto sucedió en 1643 respecto de D. Alvaro de Vivero, nombrado vocal del Consejo de la Guerra de Cantabria y Corregidor de esta provincia. La Junta particular que á su consecuencia se celebró en Vidania por el mes de Junio del mismo año, volvió á representar al gobierno de Su Majestad contra semejante acumulación de cargos tan diferentes. Por consecuencia de estas gestiones mandó Felipe IV en 7 de Agosto del propio año que el que desempeñaba las funciones judiciales de Corregidor continuase usando de este oficio como propietario, y que el general Vivero fuese propuesto para otro destino militar, con lo cual quedaron separados ambos cargos. No se descubre que con posterioridad se hubiesen vuelto á reunir y ejercerse por un mismo sugeto. Si es cierto que en 1840 por orden del regente del reino el comandante general de la provincia D. Francisco de Paula Alcalá fué encargado del corregimiento político de la misma, no puede alegarse semejante hecho como ejemplar de acumulación de aquellos dos cargos. Aquel jefe no desempeñó, una parte funciones algunas judiciales del orden civil, y aun respecto de las políticas concurrían circunstancias extraordinarias, que en concepto del gobierno del regente hicieron necesaria tal medida.

Las Juntas de la provincia se han ocupado algunas veces de reducir las atribuciones judiciales del Corregidor en la primera instancia. Así es que se halla que los procuradores de ella en las Cortes celebradas en Valladolid el año de 1555 por su petición 113 suplicaron á Su Majestad que el Corregidor no conociese en primera instancia de causas civiles y criminales, saber los alcaldes é justicias ordinarias

de las villas y alcaldías de la misma provincia, para lo cual tenían jurisdicción. «Otrosí, dijeron, que á causa de conocer en primera instancia el Corregidor de la dicha provincia de Guipúzcoa de todas cualquier causas, así civiles como criminales, so color de prevención, se siguen muchos inconvenientes en daño é perjuicio de los vecinos de la dicha provincia; especialmente que sobre palabras y cosas livianas, é deudas é demandas de cualquier cantidad que sean, son vejados y molestados los vecinos de la dicha provincia, llevándolos en primera instancia cuatro, cinco y más leguas ante el dicho Corregidor, sacándolos de las villas y lugares donde viven, etc.» La respuesta de Su Majestad se redujo á mandar á los de su Consejo se informasen de lo que pasaba en esto, y en vista, proveería lo que conviniese. No se descubre, sin embargo, que este negocio hubiese tenido resultado alguno. Por esta razón las Juntas celebradas en la villa de Mondragón en el mes de Noviembre de 1559 acordaron por vía de ordenanza que el Corregidor no tuviese la primera instancia en las causas civiles y criminales, solo sí la alzada en aquellas. Solicitada la confirmación de este decreto en el Consejo Real, no se alcanzó este requisito, según resulta de la correspondencia del agente en Corte.

Guipúzcoa, fundada en el principio de que no podía haber en su territorio Corregidor sino á petición de la misma, trató también alguna vez de extinguir esta judicatura. Moviéronla á intentar en 1759 semejante resultado ciertas desavenencias ocurridas con aquel funcionario, en especial la circunstancia de suponerse á los subalternos del mismo por promovedores del proyecto de su fijación en un pueblo. Esto contribuyó poderosamente á formar una idea desfavorable de su existencia y á desear su desaparición como un estorbo. Imbuída en semejante idea, la

diputación extraordinaria de verano del citado año acordó levantar punto para las Juntas generales que debían celebrarse en la villa de Cestona por el mes de Julio del mismo sobre la existencia del corregimiento. El que servía este cargo dió conocimiento de tan grave determinación al Gobernador del Consejo Real, quien á su consecuencia dirigió á la provincia en..... de Junio del mismo año una comunicación, mandando que no se tratase de semejante asunto en aquellas Juntas. Obedecieron y cumplieron estas aquel precepto con toda exactitud, según resulta del registro de sus actas. Cuando la diputación dió cuenta de este asunto, dijeron, en efecto, que considerando que la novedad de extinción del corregimiento, lejos de producir utilidad alguna al país, podía ocasionar muchos perjuicios, no se tratase de tal punto. De esta resolución se dió conocimiento por medio de posta al Gobernador del Consejo, y quedó terminado con tanto.

Por causa de nuevas diferencias tenidas con el Corregidor, se trató en las Juntas de Hernani de 1790 de hacer reducir su jurisdicción en la primera instancia al pueblo de tanda de su residencia. El acuerdo disponía además que quedasen suprimidos los merinos del Corregidor, y que este se valiese para el cumplimiento de sus despachos, y la práctica de las demás diligencias, de los alguaciles, de los alcaldes ordinarios de los expresados pueblos de tandas. También en esta ocasión elevó el Corregidor á noticia del Rey este proyecto de la provincia por medio de una difusa exposición, en la que trató de demostrar los inconvenientes que se seguirían al Real servicio de su adopción. El Consejo de Castilla, á cuya resolución pasó el Rey este asunto, pidió informe á la diputación; y aunque esta Corporación en el que evacuó procuró justificar la conducta y acuerdo de las citadas Juntas, al fin el deseo de estas no tuvo

efecto. Consiguientemente el Tribunal del Corregidor de Guipúzcoa continuó organizado en el mismo pie antiguo hasta que se verificó su supresión mediante decreto del regente del reino de 12 de Junio de 1841. Motivóla el establecimiento de los juzgados de primera instancia y el sistema general de procedimientos, con el cual no estaba en armonía.

Los Corregidores de Guipúzcoa, conforme á la legislación general del reino, estaban autorizados para nombrar un teniente, que en concepto de delegado suyo ejerciese la Real jurisdicción. En las vacantes de aquella magistratura, sea por muerte del propietario, sea por ausencia de la provincia, sea por la no presentación suya á tomar posesión, las Juntas ó diputación acostumbraron nombrar un interino hasta que el Rey dispusiese otra cosa. Semejante derecho de la provincia no procedía de fuero ó privilegio expreso, sino más bien de la legislación general del reino, fundada en la necesidad de atender de algún modo á la administración de justicia, para que no faltase quien la desempeñase. A la verdad, según manifiesta Bobadilla en su *Política para sus Corregidores*, en los reinos de Castilla el Ayuntamiento de la cabeza del corregimiento nombraba interinamente al que hubiese de administrar, cuando el propietario moría sin dejar teniente. El corregimiento de Guipúzcoa no tenía residencia fija: su jurisdicción se extendía al territorio de toda la provincia, y la única corporación en quien podía refundirse semejante derecho era las Juntas ó diputación de la misma. Téngase presente además que en el antiguo régimen esta última Corporación se componía del Ayuntamiento pleno del pueblo de tanda, asociado á un solo Diputado general; y se comprenderá como pudo adquirir la representación provincial el derecho de nombrar Corregidor interino, á semejanza de lo que se usaba en Castilla,

Pero, sea cual fuese el origen de esta facultad respecto de Guipúzcoa, lo que no tiene duda es que ella estuvo en una constante posesión de su ejercicio con consentimiento á lo menos tácito de los monarcas y sus Tribunales. La multitud de ejemplares de nombramientos de Corregidores interinos hechos por la provincia en los casos que quedan mencionados justifican plenamente en posesión y su derecho. El más antiguo que hemos podido descubrir es el verificado por la Diputación el año de 1598 á consecuencia del fallecimiento del propietario D. Alonso Pereira de Castro en la villa de Azcoitia, donde residía de tanta. Aquella corporación se apresuró á nombrar por Corregidor interino al licenciado D. Antonio de Iriarte, abogado de Tolosa. En la acta expresó que procedía en ello «conforme al uso y costumbre en que »ha estado y está la provincia de nombrar Corregidor interino hasta que Su Majestad ponga á otro.» De estas palabras se viene en claro conocimiento de la gran antigüedad de la posesión en que se hallaba la provincia de este derecho. Iriarte se hizo cargo desde luego del corregimiento, y habiendo el Consejo de Castilla aprobado su nombramiento, la legitimidad con que se realizó quedó virtualmente reconocida para lo sucesivo. Así es que hallamos otro nombramiento de igual clase verificado por la Junta particular celebrada *ad hoc* en la ermita de Olás en el mes de Marzo de 1610 á consecuencia de la muerte del Corregidor D. Juan Bautista Peña, que también fué aprobado por una Real provisión del Consejo. En su consecuencia, las Juntas generales celebradas en Villafranca por el mes de Mayo del mismo año decretaron se pusiese en el archivo de la provincia un traslado de dicha Real provisión, para que constase que la provincia tenía un derecho adquirido para dicho efecto. Consta igualmente que en 1660 el fiscal de Su Majestad en el mismo supremo tribu-

nal, tratándose de otro caso análogo, manifestó que si bien la provincia no tenía privilegio para hacer semejante nombramiento, era legítimo el que había realizado, á la manera que sucedía en los demás puntos donde ocurría el fallecimiento del Corregidor, sin que hubiese alcalde mayor. Este derecho de la provincia quedó confirmado por medio del nombramiento verificado el año de 1816 en el licenciado D. José Joaquín de Garmendia, abogado de Tolosa. Desempeñó, en efecto, el cargo en el largo periodo de cuatro años cumplidos, con conocimiento del gobierno de Su Majestad, que no se movió á nombrar propietario; siendo agraciado después por estos servicios con los honores de oidor de la audiencia territorial de Pamplona.

El Juzgado del Corregidor de esta provincia en su último estado se hallaba servido, además de la persona de este, por cuatro tenientes de los escribanos mayores y seis procuradores de número. No tenía promotor fiscal, pues estaba prohibida la creación de semejante funcionario de una manera permanente, ó sea, para todas las causas, en virtud de una Real provisión de 20 de Diciembre de 1491; pero en los casos en que hubiese necesidad de su intervención, el Corregidor estaba autorizado para nombrar promotor fiscal particular en cada causa. Parece que en su origen no había en el corregimiento más que dos tenientes de escribanos, nombrados por otros tantos propietarios de estos oficios, que se titulaban escribanos mayores. Con el tiempo fué aumentado el número de pleitos y negocios, y esto obligó á que cada uno de dichos propietarios nombrase á dos personas para cada oficio, no sin haber litigado antes sobre el particular con la provincia, y obtenido esta dos Reales ejecutorias, una en 4 de Octubre de 1530, otra en 2 de Septiembre de 1552. Tampoco había en su principio procuradores de número, sino que las partes se

valían para sus negocios de las personas que tenían por más conveniente. Estableciélos, sin embargo, el Corregidor el año de 1521, por considerarlos necesarios para el mejor servicio público; pero, habiendo representado la provincia contra semejante hecho, por Real provisión de 2 de Julio del mismo año se mandó los quitase. En 1570 el Corregidor volvió á poner cuatro procuradores de número, y en virtud de otra Real provisión de 12 de Julio de 1571 librada á instancias de la provincia, se declaró que cualquiera persona pudiese seguir los pleitos por sí, por lo cual tuvo que suspenderlos otra vez. Su establecimiento bajo el pie en que últimamente se hallaban data por consiguiente desde el año de 1613, en que Felipe III hizo á la provincia la merced de elegirlos, según se manifestó en el libro IV, capítulo VI, sección II. Por una Real provisión librada á solicitud de la provincia en 24 de Abril de 1555 estaba mandado que los procuradores no alojasen en su casa á los litigantes, por los daños que se seguían de ello.

Se halla que por una Ordenanza hecha en las Juntas de Azcoitia de 1502, confirmada por Real provisión de 28 de Febrero de 1503, se arregló el número de merinos que debía haber para el cumplimiento de las providencias del Corregidor. Disponía que no pudiese haber en toda la provincia más de un merino mayor y seis sotamerinos, cuales pusiese el Corregidor, pero que no fuesen estos de los que hubiese tenido el antecesor de este en el cargo, sino del todo nuevos. En virtud de otra Ordenanza hecha por la provincia y confirmada por Real provisión de 30 de Junio 1518, se autorizó á los Corregidores para poner hasta doce tenientes de merino, además del principal. Por lo regular este solía ser algún dependiente del Corregidor, con residencia cerca del mismo, y aquellos estaban distribuídos en los puntos más acomodados de la provincia. Si la citada orde-

nanza se observó en tiempos posteriores con exactitud en esta parte, no así respecto de la prohibición de desempeñar estos cargos los que los hubiesen servido con el Corregidor predecesor, al ver que los inconvenientes que se habían figurado del método contrario no existían en realidad. Al contrario, es evidente que hombres prácticos en el oficio podrán servirlos mejor que los novicios, y que el verdadero inconveniente está en la continua movilidad de los empleados.

Con arreglo á una Real provisión de 30 de Abril de 1494, el salario del Corregidor de esta provincia consistía en 300 maravedís diarios, además de los derechos de arancel y las décimas de las ejecuciones. Aquella dotación era evidentemente mezquina para las circunstancias de los tiempos modernos, y las décimas de las ejecuciones, sobre ser indecorosas, causaban á los Corregidores no pocas molestias en su cobranza, y no menores extorsiones á los naturales. Por estas razones, el Corregidor propuso á las Juntas de Fuenterrabía en 1748 la extinción de las décimas, señalando en su equivalencia una cantidad determinada, pagable por la provincia. Aunque se tomó en consideración esta proposición, no pudo concluirse por entonces una avenencia sobre el tanto de aumento de dotación que hubiese de hacerse. Renovada por los sucesores de aquel magistrado, se llegó á hacer un arreglo sobre el particular en las Juntas celebradas en la villa de Hernani el año de 1754, en cuya virtud el sueldo del Corregidor quedó fijado en once mil reales anuales pagaderos del producto del donativo, y se le duplicaron los derechos del arancel. Consiguiente á estos aumentos, las décimas de las ejecuciones que se habían exigido como en Castilla quedaron enteramente extinguidas. Las Juntas celebradas en Mondragón el año de 1788 acordaron aumentar aquella dotación á veinte mil reales anuales; y

aunque se solicitó la aprobación del Consejo de Castilla, solo se concedió la facultad del aumento hasta diez y seis mil reales. Tal es la asignación que tuvo el Corregidor de parte de la provincia en lo sucesivo, con más doscientos ducados como juez conservador de las minas de Aralar, pagables por los interesados en estas. Pero este último agregado cesó en 1802 por disposición de la Junta general de comercio, moneda y minas; y cumpliendo la provincia las ordenes del gobierno de Su Majestad, se vió precisada á contribuir á sus Corregidores con los doscientos ducados desde el año inmediato. Así, pues, la dotación que la provincia acostumbró satisfacer á los que sirvieron esta magistratura desde el año de 18.... consistió en diez y ocho mil reales anuales, además de los cortos derechos del arancel particular de la misma.

Desde tiempo muy antiguo se acostumbró recibir al nuevo Corregidor en las Juntas generales ó particulares de la provincia, ante las cuales prestaba el juramento de guardar y observar los fueros, ordenanzas y leyes de la misma. En la época moderna, en que la celebración de las Juntas particulares no se frecuentaba, la toma de posesión del cargo se hizo ante la Diputación, si la de las Juntas generales no era inmediata, á fin de no dilatarse aquel acto. Pero ya se verificase en una forma ó en otra, era preciso que el Corregidor entrante diese fianzas legales llanas y abonados, igualmente que su teniente y merino mayor, de estar á la residencia al tiempo de su cesación, y de pagarlo que fuese juzgado y sentenciado contra él. Así lo determinaba una Real provisión librada en Córdoba á 2 de Abril de 1492, cuya parte dispositiva se halla inserta en la recopilación foral. Su cargo en los primeros tiempos solo duraba un año cumplido, desde el cual tenían que cesar, si no se les prorogaba por medio de una nueva Real cédula;

después se extendió á tres, más adelante á seis, y en los últimos tiempos este servicio era por tiempo indeterminado á voluntad del monarca. Cosa muy frecuente era el que las Juntas, fuese por un motivo ó por otro, dirigiesen al gobierno del rey una súplica, para que al Corregidor existente se le prorogase su oficio, y así sucedía comunmente. Vióse con el tiempo que semejante práctica, de la cual se había hecho no poco abuso, había producido grandes inconvenientes; para cuyo remedio se prohibió estrechamente en las Juntas de.....de 154.....pedir semejantes prorrogaciones, y aun el hacer proposiciones en este sentido. Solicitada la confirmación de este acuerdo, se obtuvo tal requisito mediante Real provisión de 15 de Marzo de 1542. A pesar de su texto terminante y de las penas impuestas en él, algunos procuradores junteros volvieron á empezar á hacer proposiciones sobre dirigir súplicas al Rey para la prorogación de los oficios de los Corregidores. Fué por lo mismo preciso que las Juntas de.....de 156.....renovaran la prohibición anterior, que fué confirmada por la Real provisión de 13 de Marzo de 1566.

Los Corregidores de Guipúzcoa en el ejercicio de sus funciones judiciales no debían dirigir á los alcal-des ordinarios los despachos ó comunicaciones de otra clase, con las voces imperativas ó de mando, como de superior á inferior. A la verdad, siendo los segundos jueces de la primera instancia á prevención con los primeros, y en este concepto iguales en categoría, no toleraron aquel tratamiento de que algunas veces hicieron uso estos, asunto que motivó contestaciones y diferencias. Esta cuestión se suscitó en 1657 á consecuencia de haber librado el Corregidor al alcalde de Fuenterrabía cierto despacho en el estilo ya indicado. Los abogados á quienes la Diputación consultó el punto, en medio de un difuso informe que dieron sobre él, no manifestaron una opinión decisi-

va ó terminante, por lo que hubo que volver á consultarlo con letrados de más nombradía de Valladolid. Su parecer fué favorable á la práctica observada en esta parte por los Corregidores, y no se adelantó en la materia. A pesar de esto, se ve que la Diputación acordó en 1699 que en el caso de que los Corregidores no usasen en sus despachos de términos decentes y cortesés, según se habían estilado en otros tiempos, y se deben usar entre jueces iguales, ó contuviesen voces imperativas, que arguyesen superioridad, los devolviesen sin ejecutar. De aquí nuevas cuestiones sobre el mismo tratamiento en los años de 1709 y 1786 entre algunos alcaldes y los Corregidores, que no tuvieron consecuencia; habiendo manifestado estos que la expresión de *mando* no se dirigía á los primeros, sino á que se cumpliese y ejecutase lo providenciado.

Por lo demás, si para prender algún malhechor, ó para cercar alguna casa, tenían los Corregidos necesidad de ayuda de gente, todos los vecinos de la provincia que fuesen requeridos debían concurrir, salvo el pagárseles la costa. Así lo disponía la ley 21 del cuaderno de las Ordenanzas de la hermandad del año de 1457. Sus merinos podían igualmente entrar con vara alta de justicia en todos los pueblos de la provincia, sin exceptuar las plazas de armas de la misma. Se dictó esta medida por una Real cédula de 9 de Julio de 1581, á consecuencia de una controversia ocurrida con el gobernador de Fuenterrabía, que se opuso á la entrada de dicho ministro comisionado para el cumplimiento de un despacho de justicia criminal. Al contrario de lo que estaba determinado por la ley 53 por el cuaderno de las Ordenanzas de 1463, los Corregidores no podían llevar la llamada *pena de sangre* por la que resultase en las pendencias que ocurriesen entre los vecinos y moradores de la provincia. Finalmente, los Corre-

gidores estaban sujetos á sufrir la residencia, cuando cesaban en el desempeño de sus cargos con arreglo á las leyes generales del reino. Esto no obstante, se vió que algunos procuradores junteros, por congraciarse con el Corregidor existente, hacían proposiciones en las Juntas generales, para que no se pudiese pedir su residencia en vez de Guipúzcoa hasta la Junta en que hubiese de dejar la Real vara. La provincia trató de cortar este abuso, y obtuvo una Real provisión fechada en 14 de Abril de 1589, por la cual se prohibió hacer tales proposiciones, declarando inhábiles para poder ser en adelante procuradores á los que las presentasen.

LISTA

De los Corregidores de Guipúzcoa.

	Años.
Doctor Gonzalo Moro.	1397
Doctor Juan de Velázquez.	1415
Gonzalo Muñoz de Castañeda.	1442
D. Juan Hurtado de Mendoza.	1457 á 1459
García Franco.	1463 á 1464
Juan de Supúlveda.	1476 á 1477
Juan de Supúlveda.	1481 á 1483
Diego Rodríguez de Baeza.	1483 á 1484
D. Juan de Ribera.	1487 á 1493
Francisco de Vargas.	1493 á 1494
Alvaro Ruiz de Porras.	1494 á 1497
Francisco de Vargas.	1498
Rodrigo Velanúñez.	1499 á 1501
D. Carlos de Cisneros.	1502
Rodrigo Velanúñez.	1503 á 1505
Jerónimo Franco.	1506
Téllez de Ontiveros.	1507

	Años.
Cristóbal Vázquez de Acuña.	1508
Fernán Tellez.	1510 á 1511
Juan Fernández de la Gama.	1511 á 1512
Antonio Luzón.	1512
Rodrigo Velanúñez.	1513
Sancho Martínez de Leyva.	1515 á 1517
Doctor Pedro de Nava.	1518 á 1520
Licenciado Acuña.	1520 á 1521
D. Pedro de Sarmiento.	1521
Licenciado Calderón.	1522 á 1524
Doctor D. Pedro de Nava.	1526 á 1529
Diego Ruiz de Lugo.	1530 á 1533
Doctor Barco.	1534 á 1536
Alonso Suárez Sedeño.	1537
Antonio Saavedra.	1537 á 1539
Alvar Pérez de Navia.	1539 á 1542
Alonso Suárez Sedeño.	1542 á 1544
Alonso Arias de Herrera.	1545 á 1547
Francisco Castilla.	1547 á 1549
D. Pedro de Mercado.	1549 á 1551
Juan de Vargas.	1551 á 1553
Hernando Becerra.	1553 á 1554
Hernando de Zúñiga.	1554 á 1557
Pedro López de Mesa.	1557 á 1559
Alvaro Maldonado.	1559 á 1561
Lope García de Varela.	1561 á 1564
Maldonado de Salazar.	1564 á 1566
Pedro Carrillo de Morales.	1566 á 1568
Lara de Buiza.	1568 á 1571
Doctor Peralta.	1571 á 1574
Juan Francisco Tedaldi.	1574 á 1577
José del Castillo.	1577 á 1579
Gómez de la Puerta.	1579 á 1583
D. Blasco de Acuña.	1583 á 1586
D. Francisco Mandojana.	1586 á 1590

	Años.
D. Antonio Vergara.	1590 á 1595
Diego Fernández de Arteaga.	1595 á 1598
Alonso Pereyra de Castro.	1598
D. Antonio de Iriarte, int.º	1598 á 1599
Pedro Gonzalo de Castillo.	1599 á 1602
Juan del Espinar.	1602 á 1608
Juan Bautista de la Peña.	1608 á 1610
D. Juan de Iturgoyen, int.º	1610 á 1613
D. Bernardo Valcárcel.	1613
D. Martín Ibáñez de Ubaya, int.º	1613
Licenciado Moreno y Moreda.	1614
Lic. Arriola Lasalde, int.º	1614
Juan de Larrea y Zurbano.	1614 á 1618
Jerónimo de Ribera.	1618 á 1621
D. Juan Méndez de Ochoa.	1621 á 1625
Juan de Larrea y Zurbano.	1625 á 1629
D. Enrique de Salinas.	1629 á 1632
D. Luis de Castilla y Villagutierre.	1632 á 1635
Duque de Ciudad Real.	1635 á 1637
D. Juan Chacón Ponce de León.	1637 á 1639
D. Pedro Barrera Ceballos.	1639 á 1642
D. Juan Cedecero Albear.	1642 á 1643
D. Pedro Barrera Ceballos.	1643 á 1647
D. Francisco Vigil de Quiñones.	1647 á 1652
D. Diego Atredondo Alvarado.	1652 á 1655
D. Luis Quiñones.	1655 á 1656
D. Lope de los Ríos y Guzmán.	1656 á 1659
D. Juan del Aguila y Eguilur.	1659 á 1660
D. Antonio de Aguirre, int.º	1660
D. José Beltrán de Arnedo.	1660 á 1663
D. Martín José Badarán de Osinalde.	1663 á 1667
D. Manuel Bernardo Quirós.	1667 á 1672
D. Bernardo de Otalora Guevara.	1672 á 1676
D. José Portocarrero y Silva.	1676 á 1677
D. Juan de Saloguen, int.º	1677 á 1678

	Años.
D. Manuel de Arce y Astete.	1678 á 1682
D. García de Mendrano y Mendizábal.	1682 á 1684
D. Iñigo de Aztina, int.º	1684
D. Joaquín Francisco de Aguirre y Santa María.	1684 á 1687
D. Miguel Artazcos, int.º	1687
D. Juan Antonio de Torres.	1691 á 1695
D. Francisco Trelles.	1687 á 1691
D. Pedro de Aróstegui, int.º	1697
D. Juan López de Cuéllar.	1697 á 1699
D. Juan Riomol y Quiroga.	1699 á 1706
D. Alvaro de Villegas.	1707 á 1714
D. Carlos Joaquín Aztiria, int.º	1714
D. José de Arce y Arrieta.	1714 á 1718
D. Bartolomé de Henao y Larriategui.	1718 á 1719
D. Martín de Saloguen, int.º	1725
D. Manuel de Junco y Cisneros.	1725 á 1728
D. Miguel de Isunzay Quintanadueñas.	1729 á 1733
D. Enrique Antonio Machain, int.º	1733
D. Diego Sierra.	1733 á 1736
D. Francisco José de Herrera.	1736 á 1739
D. Diego de Sierra.	1739 á 1741
D. Santos Muñiz.	1741 á 1745
D. Manuel Arredondo.	1745 á 1748
D. Joaquín Hurtado de Mendoza.	1748 á 1751
D. Manuel Bernardo Quirós.	1752 á 1753
D. Pedro Cano y Mucientes.	1754 á 1758
D. Juan Javier Cubero.	1758 á 1760
D. Francisco Antonio Olave, int.º	1760
D. Ignacio de Azcona.	1760 á 1763
D. Benito Antonio de Barreda.	1763 á 1766
D. Francisco Javier Folch de Cardona.	1766 á 1771
D. Miguel de Barreda.	1771 á 1774
D. Vicente de Oro Miota, int.º	1774
D. Francisco García de la Cruz.	1774 á 1778

Años

D. Francisco Javier de Iriarte Artano int.º	1778
D. Gaspar Delgado y Llano.	1778 á 1780
D. Joaquín Antonio de Mendizábal int.º	1780
D. Pedro Flores Manzano.	1781 á 1785
D. Vicente de Oro Miota, int.º	1785
D. Bernardo de Luque y Mundana.	1785 á 1787
D. Vicente de Oro Miota, int.º	1788
D. José Ronger.	1788 á 1794
D. Miguel de Mendinueta.	1794 á 1796
D. Manuel de Arizabalo, int.º	1796
D. Alfonso Durán y Barazábal.	1798 á 1802
D. Pascual Rodríguez y Arellano.	1802 á 1808
D. Miguel Sainz de Ortiz.	1808 á 1810
D. José María Galín, int.º	1813
D. José Manuel de Aizpuru, int.º	1814
D. Ramón Macía Lleopart.	1815 á 1816
D. José Joaquín de Garmendia, int.º	1816 á 1820
D. Martín Javier Múzquiz.	1820
D. Antonio Taboada.	1823 á 1824
D. Martín Javier Múzquiz.	1824
D. Rafael Ayunt y Sala.	1824 á 1831
D. Martín Javier de Múzquiz.	1831 á 1833
D. Pascual Feliz de Puy.	1833 á 1834
D. Pedro García del Valle.	1834 á 1835
D. Pablo de Gorosábel, int.º	1835
D. José Saturnino Sosaaga, int.º	1835 á 1837
D. Pablo de Gorosábel, int.º para la judicial.	1840 á 1841

SECCIÓN III.

De la judicatura de los Alcaldes.

La autoridad judicial de los alcaldes ordinarios de los pueblos de Guipúzcoa es, con respecto á la mayor parte de ellos, coetánea á la fundación de los mismos como villas. Se halla, en efecto, que sus cartas-pueblas, si no la declararon explícitamente, á lo menos la dieron por supuesta y establecida. Así lo hizo el memorable fuero antiguo de San Sebastián, con arreglo al cual se exigieron varias poblaciones de la costa de esta provincia; y no menos explícito fué el de Vitoria, matriz de otras de la misma, al determinar que no hubiese merino, ni sagón, sino un alcalde elegido por sus vecinos. Diferentes villas obtuvieron además con posterioridad declaraciones reales ó cartas ejecutorias sobre la jurisdicción ordinaria de sus alcaldes, y las ordenanzas municipales de cada pueblo aprobadas por la Corona confirmaron y regularizaron esta atribución judicial.

Una de las villas que la alcanzaron fué la de Segura, á cuyo favor D. Fernando IV expidió en Toledo á 20 de Marzo de 1312 un privilegio, para que sus vecinos y moradores no pudiesen ser demandados sino ante la justicia ordinaria de la misma villa. La de Azcoitia obtuvo así bien igual merced á virtud del privilegio dado por D. Enrique II en Valladolid á 12 de Julio de 1369, del cual resulta que desde el tiempo de D. Alonso XI estaba en uso y costumbre nombrar cada año de entre sus vecinos un Alcalde que conociese de sus pleitos. Quiso que su jurisdicción se extendiese á la población de todo su término municipal, súplica á que accedió Su Majestad. «Hayades é pongades, dijo, de aquí adelante el »dicho Alcalde en la dicha villa de cada año de los

»vecinos y moradores dende, para que vos libre é
»juzgue los pleitos que acaecieren entre vos é los
»dichos vuestros bienes, casas, caserías, heredades,
»é devisas, que habedes é hubieredes en el dicho tér-
»mino é parroquia.» Igual declaración hizo el Rey
D. Juan II á favor de la villa de Tolosa por su albalá
librada á 15 de Mayo de 1442. Vese, en efecto, que
mandó por este documento «que sus vecinos y mo-
»radores, y los de sus vecindades, no fuesen deman-
»dados, ni acusados, ni juzgados, ni presos, ni pren-
»dados, ni ejecutados, sino es por el Alcalde ordina-
»rio de la misma villa, por sus jurados y ejecutores.»
El privilegio en forma de esta merced se expidió por
el mismo monarca en Cantalapiedra á 7 de Junio de
1443, así que una sobre-carta para su puntual eje-
cución en Estadillo á 28 de Junio de 1451. Consta
igualmente que D. Alonso XI por otro privilegio
dado á 6 de Junio de 1372 mandó que á la villa de
Mondragón se le guardase el fuero que gozaba de
Vitoria respecto de poner por alcalde con jurisdic-
ción contenciosa á un vecino suyo. Se ve finalmente
que por el privilegio de execución otorgado al valle
de Oyarzun en Escalona á 26 de Junio de 1453 se
dió facultad para nombrar cada año alcalde con ju-
risdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto
imperio, por quien fuesen juzgados los pleitos de sus
vecinos y moradores, y no por otro alguno, fuera de
los casos de apelación. En conformidad á todas estas
disposiciones, se ve que las ordenanzas de la herman-
dad de la provincia suponen la existencia de los al-
caldes ordinarios en los pueblos de ella, revestidos de
la competente autoridad judicial.

Esta judicatura de los alcaldes de las villas que
acabo de expresar, así como de las demás considera-
das de antigua fundación, no se limitaba al término
municipal propio de las mismas, sino que se exten-
día al territorio de las aldeas de su dependencia,

Cuáles eran estas en lo antiguo queda expresado en la Sección II, Capítulo II, Parte III, y por consiguiente es claro que los alcaldes de las villas de Tolosa, Segura y Villafranca, cabezas de las jurisdicciones á que se agregaron aquellas, ejercieron la autoridad judicial en un territorio de grande extensión. Por el contrario, aunque dichas aldeas conservaron su administración económica, los alcaldes carecieron del concepto de jueces propios, así en lo civil como criminal, y cuando más, desempeñaron en calidad de pedáneos de algunas funciones de justicia por delegación de los propietarios. De aquí se ve que los alcaldes ordinarios de la provincia revestidos de autoridad judicial en los tiempos antiguos eran veinte y seis. En este número estaban: Azcoitia, Azpeitia, Cestona, Deva, Eibar, Elgóibar, Elgueta, Fuenterrabía, Guetaria, Hernani, Valle de Léniz, Mondragón, Motrico, Orio, Placencia, Rentería, Salinas, San Sebastián, Segura, Tolosa, Usúrbil, Vergara, Villafranca, Villarreal, Zarauz y Zumaya. Las tres alcaldías mayores de Areria, Aiztondo y Sayaz componían otras tantas jurisdicciones, y el Señor de la villa de Oñate ejercía también la autoridad judicial en todo el territorio de la misma por sí ó por medio de delegado. Así las cosas, diferentes pueblos dependientes de las citadas villas, á medida que fueron aumentándose y adquiriendo importancia, pretendieron su completa emancipación con el ejercicio de la judicatura propia é independiente por sus respectivos alcaldes. Consiguieron al fin sus deseos, no obstante la fuerte oposición que hicieron á semejante separación las villas de que dependían, como se expresó en el lugar antes citado; de manera que en los siglos últimos y principios del presente se crearon con Real autorización treinta y ocho nuevos alcaldes ó jueces de primera instancia. En su virtud, puede decirse que todos los pueblos de alguna importancia quedaron

regidos con autoridad judicial local independiente.

Por lo que se ha manifestado antes se ve que la jurisdicción contenciosa de los alcaldes ordinarios de Guipúzcoa, tanto los antiguos como los modernos, era civil y criminal en la primera instancia. No era, sin embargo, privativa ó exclusiva de todo otro juez, sino acumulativa ó á prevención con el Corregidor de la misma provincia; de manera que, siendo en negocio civil ó de aquella criminal, la parte podía entablar la demanda ante el Alcalde correspondiente, ó bien en el juzgado del Corregidor. Si era en causa criminal formada de oficio de justicia, su conocimiento competía á aquel de ambos jueces que lo previniese con arreglo á las leyes generales del reino. Pero esta regla tenía una excepción respecto del Valle Real de Léniz, compuesto del lugar de Arechavaleta y villa de Escoriaza, á cuyo Alcalde correspondía privativamente en primera instancia el conocimiento de los negocios civiles y causas criminales de sus vecinos y moradores. Consiguientemente, el Corregidor solo podía ejercer jurisdicción en aquel territorio en primera instancia, cuando hallándose personalmente en él, hubiese prevenido el conocimiento, ó que el Alcalde le hiciese la remisión voluntaria del negocio. El valle de Léniz alcanzó este privilegio en virtud de una Real provisión librada por el Concejo á 21 de Diciembre de 1558, á consecuencia de haber solicitado su incorporación al corregimiento de la provincia después de su reversión á la Corona. Semejante particularidad, no conforme seguramente con las condiciones con que el valle se había agregado á la hermandad de la provincia, dió ocasión á diferentes cuestiones, ya con esta misma, ya también con los Corregidores que se fueron sucediendo. Una de las más notables fué la causa criminal que el Corregidor Lope García de Varela formó en 1560 contra el Alcalde del valle Lope Ibáñez de Uribe, por haber im-

pedido al merino practicar cierta ejecución de que había sido encargado. A pesar de esto, el Consejo con vista de autos libró en 19 de Diciembre de 1561 una sobre-carta, mandando que dicho Corregidor y sus sucesores en el oficio guardasen y cumpliesen al valle el privilegio de la primera instancia.

Tal era la organización judicial de esta provincia hasta el establecimiento de los juzgados de partido, ó sea, de primera instancia, verificado en ella el año de 1841. En cambio de la desmembración de atribuciones que los alcaldes experimentaron á consecuencia de esta medida, fueron revestidos por las disposiciones modernas de la facultad de presidir los juicios de conciliación. Fueron autorizados también por ellas para conocer á prevención con el juez del partido, donde le hubiese, en juicio verbal y sin recurso á apelación de las demandas hasta la cuantía de doscientos reales. Hasta la publicación del Código penal en 1848 conservaron igualmente la atribución de conocer en igual forma de los negocios criminales sobre injurias y faltas livianas, así que, después de verificada aquella, de entender en primera instancia de los juicios de faltas en la forma prescripta por la ley provisional dictada para su ejecución. Pero esta última atribución ha cesado del mismo modo á consecuencia de haberse trasladado á los jueces de paz en virtud de una ley reciente. Resulta, pues, de todo que los alcaldes de esta provincia, como sucede con los demás del reino, no ejercen en el día función alguna del orden judicial, conforme al precepto constitucional.

Los juzgados de los alcaldes de esta provincia, cuando existían en el estado antiguo, eran servidos por los escribanos de número de los respectivos pueblos, de cierto número de procuradores en alguno de más importancia, y los alguaciles, prebostes ó jurados. No tenían promotor fiscal permanente, sino que

en cada causa criminal que se siguiese de oficio nombraba el alcalde por tal á uno de los procuradores, y en falta de estos á un vecino de su confianza. Además, como generalmente los alcaldes no eran letrados, se veían precisados á elegir en cada pleito ó causa criminal un asesor de esta profesión; elección que comunmente ocasionaba cuestiones diversas, ya sobre su aceptación, ya sobre su recusación, ya sobre la fuerza obligatoria de los fallos que propusiesen. De aquí los entorpecimientos para la pronta administración de justicia, el aumento de costas procesales, y la falta de aquella confianza de imparcialidad en el procedimiento, que tan necesaria es en todo juicio. Por otra parte, los abogados que en las causas criminales y pleitos de pobres fuesen nombrados para dicho cargo, era natural se excusasen de aceptarlo, al considerar que su desempeño no les iba á producir sino ocupación, responsabilidad, y tal vez enemistad. Obligarles, pues, á que, abandonando los trabajos lucrativos de su profesión, admitiesen con tales peligros la asesoria, era ciertamente una cosa bastante dura; pero de todos modos, semejante obligación, por más justa que pareciese, nunca podía tener efecto sino es en los pueblos de su habitual residencia ó domicilio. ¿Qué habían de hacer por consiguiente los alcaldes de aquellos donde no hubiese tales letrados, como sucedía en la mayor parte de la provincia? No había en estos fondos destinados ni medios para el pago de las costas procesales, y la provincia no hacía su abono sino en determinados y especiales casos, que después se expresarán. La consecuencia de todas estas dificultades y de tanto embarazo para proporcionar asesor no podía por lo mismo menos de ser la ocultación de muchos delitos, particularmente en las aldeas y otros pueblos de poca importancia, la impunidad de los malhechores, y el estado de perturbación permanente en la sociedad. En vista de estos males,

hay que confesar que el sistema antiguo de alcaldes legos con asesores letrados era poco conveniente para la pronta administración de justicia. Cualesquiera persona imparcial debe reconocer que su buen desempeño requiere grandes conocimientos del derecho civil y criminal, mucha práctica de los negocios, y una acción propia y desembarazada en el encargado de estas delicadas funciones.

De los antecedentes que existen en el archivo de la provincia se descubre la multitud de competencias de jurisdicción que tuvieron los alcaldes de ella con los demás jueces de su territorio, en especial con los corregidores. Las cuestiones suscitadas con estos procedían principalmente del doble carácter que tenían los mismos de jueces de primera instancia á prevención con los alcaldes, y dealzada al mismo tiempo de las providencias que dictasen estos últimos en los negocios de naturaleza civil. A esta complicación natural de organización judicial se agregaba la falta de una jurisprudencia bien definida á que poder atenerse en las dudas. De aquí resultaba la advocación de los negocios por los corregidores, con retención de los expedientes que iban á su tribunal en apelación de autos interlocutorios para su continuación en primera instancia, después de resuelto el punto que había motivado este recurso. Tampoco faltaron casos de presentación personal de reos procesados por los alcaldes, ante los mismos corregidores ó en sus cárceles, á pretexto de injustos procedimientos de parte de los primeros, con la consiguiente advocación de las causas pendientes en los juzgados de estos. Semejante conducta de los corregidores era á todas luces improcedente, como lo declaró la Real Chancillería de Valladolid por medio de diferentes resoluciones, cuyas ejecutorias conserva la provincia. Citaré algunas de ellas como las más notables, y que formaron en cierta manera la jurisprudencia de esta

materia en la provincia, libradas todas en expedientes formales de competencias. 1.^a Una á favor del alcalde de Usúrbil, á 7 de Octubre de 1588. 2.^a Otra á 30 de Julio de 1600, al de Salinas. 3.^a La de 20 de Noviembre de 1649, al de Zumaya. 4.^a Por último otra en 10 de Junio de 1672, al de Ormaíztegui. Consiguiente á estas y otras varias Reales declaraciones unánimes, quedó establecido que los corregidores no pudiesen dar para los alcaldes ninguna inhibición perpetua ni temporal, sin que por apelación se llevase el proceso á su juzgado, alegasen y concluyesen conforme á derecho.

No fueron menos frecuentes las cuestiones que tuvieron los alcaldes de la provincia con los corregidores sobre la forma en que aquellos debían remitir al juzgado de estos los expedientes en apelación de los autos interlocutorios. A la verdad los alcaldes se resistieron constantemente á hacer semejante remesa originalmente, por el doble motivo de evitar la pérdida ó extravíos de los documentos presentados y de no dar lugar á la advocación de las causas por los corregidores. Por el contrario, estos propendieron en cada ocasión á separar á los alcaldes de la prosecución de los negocios que habían prevenido, apremiándolos con multas al envío de los autos originales. Las controversias que ocurrieron en esta diversidad de miras parece se hicieron notables par los años de 1730, siendo Corregidor de la provincia D. Miguel de Isunza y Quintanadueñas. De aquí las contestaciones que tuvo este con las Juntas generales de los años inmediatos, los requerimientos que se hicieron por acuerdo de las mismas sobre la observancia de la jurisdicción de los alcaldes, y las gestiones que se hicieron en la Corte contra las intrusiones de aquel funcionario. Su resultado fué una concordia celebrada entre el sucesor de este y la provincia en 1737, dirigida á determinar los casos en que debían remi-

tirse los autos en compulsa y los en que hubiese de hacerse originalmente.

Esta concordia consta de nueve capítulos, por medio de los cuales se trató de evitar para lo sucesivo disputas y litigios como los que hasta entonces habían ocurrido. Al mismo tiempo se quiso conciliar por ella el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal, que por fuero y Reales resoluciones correspondía á los alcal-des en primera instancia, con el del grado de alzada, que por iguales títulos competía á los Corregidores. Su texto se halla inserto al final del suplemento de la recopilación foral, formando un capítulo añadido, con la aprobación dada por el Consejo de Castilla mediante Real provisión expedida á 19 de Octubre de 1745. Una de sus disposiciones era concerniente á la admisión de los reos ó procesados que por vía de apelación se presentasen personalmente ante el Corregidor, con la consiguiente remesa de autos originales ó en compulsa á su tribunal, según la distinción de ser ejecutivos ó no. Parece que esta disposición produjo en muchos casos efectos enteramente contrarios á los que se habían propuesto sus autores. La práctica introducida en el juzgado del Corregidor fué á la verdad de admitir á los reos en presentación personal, y expedir despacho para la remesa de autos con la cláusula de *según concordia*. Al fin, si la providencia de los Corregidores se hubiese concretado á esta medida, no hubiera habido motivos fundados de agravios y quejas de parte de los alcal-des; pero no pudieron mirar con indiferencia el que á los presuntos reos se señalase villa y arrabales por cárcel, y que aun se les diese permiso para volver á sus pueblos libremente. La provincia trató de evitar semejante escándalo, así que el descredito de sus alcal-des, y aunque para su remedio se celebró en 1781 con el Corregidor interino una concordia adicional á la anterior, no obtuvo la aprobación del Consejo Real.

SECCIÓN IV.

De los Juzgados de partido.

La institución de los juzgados de partido ó de primera instancia, determinada por uno de los artículos de la constitución política de la monarquía de 1812, empezó á plantificarse en Guipúzcoa después de la expulsión de los franceses del territorio español. Se halla, en efecto, que D. Francisco Javier Castaños, General en jefe del 4.º ejército, en uso de las facultades de que estaba revestido por el gobierno supremo, nombró en 4 de Agosto de 1813 por juez de primera instancia interino de toda la provincia, con residencia en la villa de Tolosa, á D. José Joaquín de Garmendia. Consta así bien que por causa de una indisposición de este letrado, el nuevo juzgado fué instalado y desempeñado por el alcalde de la misma villa hasta el mes de Septiembre siguiente, en que la regencia del reino nombró en lugar de aquél á D. Pablo Antonio Arizpe, con residencia también en Tolosa. Resulta del propio modo que por traslación de Arizpe á otra parte en 1814, fué elegido con igual calidad de interino y residencia en la misma villa D. José Manuel de Aizpuru, á quien el Rey D. Fernando VII, después de la vuelta de su cautiverio en Francia, confirmó en 8 de Junio de 1814 el nombramiento hecho en su favor por el gobierno Constitucional. Pero restablecido en esta provincia por el mes de Agosto del mismo año todo su antiguo sistema de gobierno, el nuevo juzgado de primera instancia quedó suprimido.

Una vez promulgada de nuevo en el mes de Marzo de 1820 la citada Constitución, fué consiguiendo el establecimiento de los juzgados de primera instancia en esta provincia. Cuando aquel acontecimien-

to tuvo lugar, el Corregidor y diputación foral residían por tanda en la villa de Azcoitia, cuyo alcalde quedó encargado de la judicatura de la provincia á consecuencia de la traslación de aquel funcionario á su plaza de magistrado de la audiencia de Pamplona. Así las cosas, por disposición de este mismo tribunal superior, la Diputación provincial hubo de formar el oportuno expediente para la conveniente división de la provincia en partidos judiciales. Para este efecto se pidió su parecer á todos los pueblos de la misma, señaladamente sobre si el número de partidos que convendría establecer había de ser cuatro ó dos; parecer que la generalidad de ellos emitió, opinando por razones de economía que solo fuesen dos, siendo sus capitales Tolosa y Vergara. Hay que tener presente para esto que en aquella época los sueldos de los jueces, promotores fiscales y alguaciles, así que los demás gastos de los juzgados, debían satisfacerse por los pueblos. Fundada en las mismas razones de economía, la Diputación provincial adoptó por informe el voto emitido por la gran mayoría de los pueblos, y en su consecuencia, propuso á la audiencia territorial la erección de solo aquellos dos juzgados, no sin acompañarla al mismo tiempo otro proyecto de división de la provincia en tres, siendo sus capitales San Sebastián, Tolosa y Vergara. A propuesta de dicho tribunal superior, el gobierno adoptó este último plan, y en su consecuencia quedaron establecidos en toda forma los mismos tres juzgados con los respectivos jueces de letras, promotores fiscales, escribanos, procuradores, alcaides y alguaciles. Según lo expresado, el juzgado de San Sebastián comprendía 35187 almas en los diez y nueve pueblos siguientes: Aduna, Andoáin, Astigarraga, Aya, Fuenterrabía, Guetaria, Hernani, Irún, Lezo, Orio, Oyarzun, Pasajes, Rentería, San Sebastián, Urnieta, Usúrbil, Zarauz, Zubieta y y Zumaya. Al de Tolosa

se asignaron 39513 almas en los cincuenta y un pueblos que se van á expresar: Abalcízqueta, Albíz-tur, Alegría, Alquiza, Alzaga, Alzo, Amézqueta, Anoeta, Arama, Asteasu, Astigarreta, Atáun, Azpeitia, Baliarráin, Beasáin, Beizama, Belaunza, Berástegui, Berrobi, Cegama, Ceráin, Cestona, Cizúrquil, Eldua-yen, Gainza, Gaztelu, Goyaz, Gudugarreta, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Idiazábal; Irura, Isasondo, Larraul, Lazcano, Leaburu, Legorreta, Lizarza, Muti-loa, Oaverría, Oreja, Orendáin, Régil, Segura, Soravilla, Tolosa, Vidania, Villabona, Villafranca y Zaldivia. Contenía el de Vergara 37583 almas en los veinte y dos pueblos siguientes: Anzuola, Arechavaleta, Azcoitia, Deva, Eibar, Elgóibar, Elgueta, Escoriaza, Ezquioga, Gaviria, Ichaso, Arriarán, Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate, Ormaiztegui, Placencia, Salinas, Vergara, Villarreal y Zumarraga. Los sueldos que tenían los funcionarios de estos tres juzgados eran, el juez 11000 rs., con más los derechos de arancel: el promotor fiscal, 4400; el alcaide, 3300: cada uno de los tres alguaciles, 1100. Ya se sabe por lo demás que habiéndose restablecido en todo el reino el antiguo sistema de gobierno á consecuencia de la invasión francesa, verificada por el mes de Abril de 1823, desapareció también en esta provincia la organización judicial de que acabo de hablar.

Habiéndose proclamado de nuevo en 1836 la Constitución política de la nación, era consiguiente á sus prescripciones el establecimiento de los juzgados de primera instancia en Guipúzcoa, como sucedió en el resto del reino. Las circunstancias de la guerra civil en que se hallaba por entonces la provincia impidieron, sin embargo, llevar á efecto esta importante medida, la cual por otra parte no estaba en consonancia con la organización establecida por los fueros, en cuya plena posesión se hallaba todavía. Pero sus ventajas eran tan notorias, que los Diputados á Cor-

tes la propusieron, y fué adoptada en principio por la ley de 16 de Setiembre de 1837. Su artículo 4.º se hallaba concebido en estos términos: «el gobierno »establecerá en los puntos en que las circunstancias »lo permitiesen jueces de primera instancia para la »administración de justicia conforme á las leyes.» A su virtud el gobierno de la reina, tomando en consideración una exposición dirigida por la Diputación provincial, por Real orden de 12 de Noviembre del mismo año determinó se diese principio á su ejecución. «El Corregidor, dijo, continúe, en calidad »de juez de primera instancia del partido de San Sebastián, ejerciendo las funciones que como á tal le »competen con arreglo á las leyes y reglamento de »26 de Septiembre de 1835 en todos los pueblos de »Guipúzcoa que están y vayan quedando libres de la »dominación enemiga, reservándose Su Majestad »determinar lo conveniente para que con oportunidad y en la forma debida se arreglen los demás partidos judiciales de esa provincia, y proveerlos de »jueces y demás empleados de justicia.»

La precedente Real disposición se fué ejecutando en todas sus partes después que se hizo la paz mediante el célebre convenio de Vergara del año de 1839. Así es que por orden de la regencia provisional del reino de 23 de Febrero de 1841 se nombró un juez de primera instancia para el partido de Vergara, según estuvo constituido en la época anterior constitucional, quedando instalado en 30 de Marzo siguiente. En 15 de este mismo mes y año fué así bien nombrado otro juez para el antiguo juzgado de Tolosa, el cual quedó igualmente instalado el día 17 de Abril. Se ve, pues, que con estos dos nuevos y el de San Sebastián, que ya existía desde 1837, quedó completada la organización judicial de esta provincia. Esto no obstante, la villa de Azpeitia, que había sido una de las cuatro de tanda del antiguo

corregimiento, promovió en el dicho año de 1841 la erección de un cuarto juzgado de primera instancia, cuya cabeza fuese ella misma, idea á que se asociaron algunos otros pueblos comarcanos. Accedióse á su solicitud por el Regente del reino por medio de un decreto expedido en 12 de Junio del propio año. Se dispuso además por él que hasta el arreglo definitivo de los fueros los cuatro juzgados de la provincia tuviesen exclusivamente el conocimiento de las causas criminales, y acumulativamente, ó sea, á prevención con los alcaldes, el de las civiles. Las Juntas generales de Segura del propio año acordaron el cumplimiento del precedente decreto, considerando sus disposiciones como transitorias, solamente para calmar la agitación en que este negocio tenía á los pueblos, según se expresa en la acta.

Pero este arreglo provisional de juzgados perdió semejante concepto, adquiriendo en virtud de disposiciones posteriores el de establecimiento permanente, con todas las atribuciones de las leyes generales del reino. El gobierno del Regente se valió para ello de las circunstancias en que quedó el país después del malogrado pronunciamiento de Octubre de 1841. Se halla, en efecto, que por el decreto que dió en Vitoria en 29 de los mismos mes y año se determinó que la organización judicial de las tres provincias Vascongadas se nivelaría al resto de la monarquía, determinación que las disposiciones posteriores no alteraron. En resumen, Guipúzcoa tiene en el día cuatro juzgados de primera instancia con todas las atribuciones que les corresponden por ley. Conforme á lo mandado en la orden del Regente del reino de 20 de Octubre de 1841, el de San Sebastián debe ser de término, y los otros tres, de entrada; disposición que tiene entero cumplimiento respecto de los juzgados de la misma ciudad y de los de las villas de Vergara y Azpeitia. Pero el de la de Tolosa, ya

por su mayor importancia, ya por el mucho número de pueblos que corresponde, ya por ser la residencia de la Diputación foral, fue elevado á la clase de ascenso en virtud de una Real orden de 1.º de Mayo de 1855. El territorio jurisdiccional de los cuatro partidos judiciales es el siguiente:

Partido de San Sebastián. Se compone de los pueblos de Aduna, Alza, Astigarraga, Fuenterrabía Hernani, Igueldo, Irún, Lasarte, Lezo, Orio, Oyarzun, Pasajes, Rentería, San Sebastián, Urnieta, Usúrbil y Zubieta. Con arreglo al censo de población formado el año de 1860, su territorio tiene 43395 habitantes.

Partido de Tolosa. Pertenecen á él los pueblos de Abalcízqueta, Albítur, Alegría, Alquiza, Alzaga, Alzo, Amasa, Amézqueta, Andoáin, Anoeta, Arama, Asteasu, Atáun, Baliarráin, Beasáin, Belaunza, Berástegui, Berrobi, Cizúrquil, Elduayen, Gainza, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Idiazábal, Iruira, Isasondo, Larraul, Lazcano, Leaburu, Legorreta, Lizarza, Olaberria, Oreja, Orendáin, Soravilla, Tolosa, Villabona, Villafranca y Zaldivia. Conforme á dicho censo de población, tiene 40685 habitantes.

Partido de Vergara. Comprende los pueblos de Anzuola, Arechavaleta, Eibar, Elgueta, Escoriaza, Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate, Placencia, Salinas, Vergara, Villarreal, y Zumarraga. Según el mismo censo de población, tiene 39732 habitantes.

Partido de Azpeitia. Le estan asignados los pueblos de Aya, Azcoitia, Azpeitia, Baizama, Cegama, Ceráin, Cestona, Deva, Ezquioga, Gaviria, Goyaz, Gudugarreta, Guetaria, Ichaso con Arriarán, Mutiolo, Ormaiztegui, Régil, Segura, Vidania, Zarauz, y Zumaya. En el citado censo de población se le computaron 36697 habitantes.

LISTA

De los jueces de 1.ª instancia de Guipúzcoa.

1.ª época Constitucional.

TOLOSA.

D. Pablo Antonio de Arizpe. 1813 á 1814
D. José Manuel de Atzpuru. 1814

2.ª época Constitucional.

SAN SEBASTIAN.

D.
D. Claudio Antón de Luzuriaga . . . 182... á 1823

TOLOSA.

D. José Aquilino de Sabando. 182... á 1825

VERGARA.

D. José de Churruca. 182... á 1823

3.ª época Constitucional.

SAN SEBASTIAN.

D. José Saturnino de Sosoaga. 1837 á 18....
D.
D.
D.
D.
D.

TOLOSA.

D. José Manuel de Aguirre-Miramón. 1841 á 185....

D.

D.

D.

D.

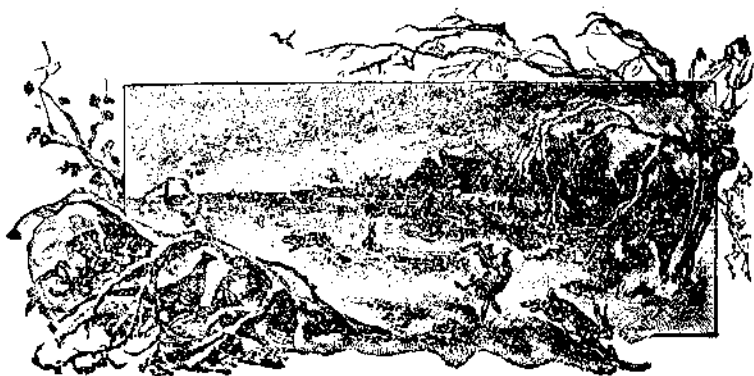
D.

VERGARA.

D. José Pérez del Notario. 1841 á 184...

D.





CAPITULO IV.

DE LA JURISDICCIÓN DE LA HERMANDAD.

Sección I.

Idea general de esta jurisdicción.



La jurisdicción de la Hermandad de Guipúzcoa, así como la de los pueblos de los antiguos reinos de Castilla, se fundó en el triste estado social en que se halló toda la monarquía, y en especial esta provincia, durante los siglos XIV y XV. Afligíanla los bandos de los parientes mayores con sus asonadas, guerras y excesos de toda clase: los ladrones, asesinos, incendiarios y otros malhechores dominaban en todo su territorio: la justicia no era cumplida en manera alguna, y los hombres de bien carecían de seguridad personal y real. Puede decirse por consiguiente que la fuerza brutal de los malos y revoltosos, y todavía mejor la anarquía, prevalecía impunemente por doquiera en esta provincia. Su misma calidad natural, así que su distancia de la residencia más ordinaria de la Corte, se prestaban poderosamente á ello, y así

lo reconocieron los comisarios que los monarcas enviaron con el fin de poner remedio á tanto desorden por medio de las Ordenanzas de la hermandad que formaron. Guipúzcoa es tierra montañosa y apartada, dijeron, y es necesario acudir á disposiciones fuertes y excepcionales para obtener su pacificación y la represión de los malhechores. Hacíalas en verdad indispensables y urgentes el triste estado social, cuya viva pintura se hace en los preámbulos de los cuadernos de las Ordenanzas de la hermandad, de que se dió una idea al tratar de esta institución en el libro V, capítulo I, sección II, á donde remito al lector.

Por lo que se deja manifestado es indudable que la sociedad guipuzcoana, constituida en un estado tan extraordinario de circunstancias, necesitaba para su morigeración y reposo de remedios acomodados á los males que padecía. De aquí las rigurosas penas señaladas á los delincuentes, cuyo solo recuerdo nos aterra á los vivientes: de aquí un procedimiento tan breve y sumario como el establecido en las Ordenanzas de la hermandad: de aquí los indicios y presunciones por prueba bastante para la aplicación de las penas en ciertos casos. Verdad es que, atendida la disposición de las expresadas Ordenanzas, los delitos castigados por estas eran los reputados por los más graves. Lo es también que como ejecutados ya en despoblado, ya de noche, ya por medio de asechanzas ó á traición, su plena justificación legal se hacía generalmente difícil, y que como tan frecuentes y alarmantes urgía su represión. Sin embargo, es preciso convenir que tanta precipitación en el procedimiento, el defecto de la necesaria defensa de los supuestos reos, la denegación de todo recurso de apelación, y la falta de la consulta de las sentencias con el tribunal superior, formaban una grave imperfección legislativa. Ella indudablemente dejaba expuesta la vida, los bienes, la libertad, la honra, y lo de-

más que más estima el hombre, á la merced y arbitrariedad de los alcaldes de hermandad, peligrosa siempre, y más todavía en tiempos de pasiones y revueltas. ¿Y qué no se dirá respecto de semejante orden de proceder, si se tiene presente que estos alcaldes á quienes se encomendaba tan terrible autoridad eran comunmente hombres legos, sin instrucción en las leyes, sin práctica en la sustanciación de las causas? Espanta á la verdad la consideración del abuso ó uso indebido que podía hacerse de ella, sobre todo en aquellos tiempos antiguos en que dominaban las enemistades personales y de familias.

No se puede negar con justicia que los que trabajaron en la obra de la reparación del país por los medios ya indicados fueron guiados de las intensiones más puras del acierto. A pesar de esto, la experiencia demostró que no produjeron los efectos que se habían propuesto y deseado; y si la razón sola no bastara para convencer que el rigorismo de las leyes no es el mejor medio de represión de los delitos, lo demostraría la multitud de las que con posterioridad fué preciso hacer. Lo que obtuvo la pacificación del país, su morigeración y la disminución de aquellos crímenes atroces que antes se habían experimentado, no fué seguramente el señalamiento de las terribles penas de las antiguas Ordenanzas. Es indudable que lo que contribuyó á ello principalmente fué la regularización del gobierno supremo de la nación, su mayor fuerza, respeto y consideración con la sujeción de los poderosos que se resistían á su obediencia. A su amparo los encarnizados bandos oñacino y gamboino quedaron destruidos, los parientes mayores humillados, y la hermandad se hizo fuerte y poderosa para contener y castigar á los malhechores de toda clase. Mediante este feliz resultado, y merced á la civilización gradual de la sociedad, á la mejora de las costumbres, en fin, á los adelantos he-

chos en la legislación criminal, la contenida en nuestras antiguas Ordenanzas de la hermandad debe considerarse por enteramente abolida. En una palabra, aquellas leyes fueron dictadas para ciertas y determinadas circunstancias, cuyo tiempo pasó sin que su recuerdo sirva más que para la historia. Otro tanto sucedió con las hermandades de los antiguos reinos de Castilla, donde existieron iguales juntas, alcaldes, cuadrilleros, procedimientos y leyes; instituciones todas que desaparecieron del todo en virtud y fuerza de otras nuevas fundadas en principios de más humanidad, y más conformes al estado posterior de la sociedad.

Según lo que se deja indicado, los casos de la competencia criminal de la jurisdicción de la hermandad, arreglada á sus primitivas Ordenanzas, eran cinco. 1.º Hurto ó robo cometido en camino ó fuera de él en despoblado. 2.º Fuerza empleada para obtener algún objeto contra la voluntad de otro. 3.º Quebrantamiento ó incendio causado deliberadamente en casa, mies, viña, manzanal ú otros frutales ajenos. 4.º Corte ó tala de árboles de llevar fruto, y destrucción de barquines de ferrería. 5.º Asechanzas puestas para matar ó herir á otro en monte ó en yermo de esta provincia, fuera de las villas cercadas, entre no vecinos de un lugar y alcaldía, ó bien de noche. Tan extensa como terrible jurisdicción, cuyo uso pudo ser en su tiempo saludable, se hizo inconveniente con el cambio del estado de la sociedad, de sus costumbres y necesidades. Parecía por lo tanto que la provincia, colocándose á la altura de las mismas, debía haber tratado de hacer desaparecer sucesiva y gradualmente aquellas instituciones hijas de una época que ya pasó, y cuya aplicación repugnaba y generalmente por inconveniente. Su tendencia posterior fué, no obstante, de resucitarlas bajo una forma ú otra, guiada indudablemente de un sentimiento del

bien público. Así es que se halla que, en virtud de una Real provisión de 13 de Diciembre de 1688 librada á instancias de la provincia en Juntas, la jurisdicción de que los alcaldes de la hermandad estaban revestidos, para conocer de los cinco casos mencionados, se extendió á todas los alcaldes ordinarios de la misma. La razón que se ve presentó para alcanzar semejante disposición fué el deseo de evitar las discusiones y competencias que se suscitaban entre los alcaldes de una y otra categoría. Pero no parece fuese esta la causa real y verdadera que movió á la provincia á solicitarla, porque á serlo tal, lo natural y lógico hubiera sido, ó bien deslindar mejor ambas jurisdicciones, ó bien acordar la extinción de los alcaldes de la hermandad. Sin determinar lo uno ni lo otro, lo que solamente se hizo fué aumentar considerablemente el número de jueces revestidos de la terrible y arbitraria potestad del procedimiento de la hermandad, con todos los inconvenientes de las competencias de jurisdicción.

La provincia, no satisfecha con que el curso de hermandad se aplicara en los cinco casos señalados por las Ordenanzas, trató de hacer extensivo este procedimiento á algunos otros. Tal fué el decretado principalmente respecto de los robos de alhajas de plata que se cometiesen en las Iglesias, cuya frecuencia se había experimentado con mucho escándalo público. Para dicho efecto las Juntas celebradas en Fuenterrabía el año de 1694 hicieron un acuerdo, por el cual se disponía que las justicias ordinarias tuviesen en adelante la competente jurisdicción para entender, según el curso de hermandad, de aquella clase de delitos. Solicitada su confirmación en el Consejo de Castilla, le fué denegada por decreto dado en 20 de Febrero de 1698, y este asunto quedó por entonces en tal estado. La provincia en 1709 volvió á suplicar á aquel supremo Tribunal la confirmación del

mismo acuerdo, y la obtuvo mediante Real provisión librada en 21 de Enero de 1710, que se halla en el suplemento de la recopilación legislativa, formando su capítulo II, título III. Mándase por ella «que el »Corregidor y demás justicias de los pueblos de esta »provincia puedan conocer de los robos de Iglesias »por curso de hermandad, determinando y ejecutando las sentencias, sin embargo de apelación, de la »misma manera que procedían y ejecutaban en los »cinco casos de hermandad prevenidos en la ley 4.^a, »título 13.»

Quedaba todavía en pie en este asunto una dificultad, que la necesidad de la defensa de los procesados por curso de hermandad obligó á discurrir á los abogados encargados de hacerla. Tal era la de formar un artículo ó incidente de previo pronunciamiento sobre que el delito que se perseguía no estaba comprendido entre los cinco casos de la hermandad á que hubiese de aplicarse esta legislación extraordinaria. A la verdad, era un recurso cuyo objeto era, ó bien obtener una declaración favorable en el sentido expresado, ó bien, en el caso contrario, sacar el expediente de manos del juez de la causa, elevándolo en grado de apelación de la misma declaración á la Real Chancillería de Valladolid. Se hicieron, pues, gestiones por parte de la provincia en el Consejo de Castilla para que laalzada de semejantes providencias se limitara al Corregidor; pero mediante la oposición que hizo aquel Tribunal territorial, no se pudo alcanzar lo que se deseaba, que era que las causas principiadas como de hermandad se terminasen sin salir del país. Tan buena como era la intención que promovía semejante medida, su resultado hubiera sido perjudicial á los procesados á haberse alcanzado la confirmación.

A pesar de los esfuerzos que hacía la provincia congregada en Juntas para conservar entodo su vi-

gor el curso de la hermandad, y aun para extender su jurisdicción, se ve que esta institución fué decayendo cada vez. Las justicias ordinarias, en cuyas solas manos quedó el ejercicio de esta potestad después de la suspensión del nombramiento de los alcaldes de la hermandad, reconociendo cuán imperfecto era un procedimiento en que se atendía tan poco á los acusados, siguieron usando de la vía ordinaria. Seguramente en todo producía algún aumento de costas á la provincia, en cuya vista las Juntas celebradas en la villa de Azpeitia en 1779 trataron de poner algún remedio. No fué este el que naturalmente se podía esperar, cual era de evitar, ó á lo menos de moderar, los excesos que se habían notado en la exacción de aquellas; sino que sin tomar providencia alguna sobre este particular, se pensó restablecer el curso de hermandad, que ya había desaparecido de hecho, extendiéndolo todavía á nuevos casos. Acordaron, en una palabra, recurrir á la superioridad por sobre carta para la práctica de los primitivos cinco casos de hermandad y del sexto de robo de Iglesias, y la confirmación de otros cualesquiera que la Diputación juzgase se debiesen seguir por igual método. Esta corporación, cumpliendo aquel acuerdo, formó por medio de sus consultores letrados un reglamento comprensivo de seis nuevos casos de hermandad, cuya confirmación, así que la sobre-carta de los seis anteriores, solicitó en el Consejo de Castilla, recurso que fué desestimado por este Supremo Tribunal. Igual resultado tuvieron las gestiones que hizo la provincia en los años de 1798 y siguientes para el restablecimiento de la jurisdicción de la hermandad y nombramiento de los alcaldes de esta institución. Con motivo de la multiplicación de ladrones en el país, se intentó también en 1817 poner en planta aquel procedimiento antiguo; pero habiéndose informado la Diputación de que el Consejo Real no pro-

pendia á semejante método de substanciación de causas, desistió de formalizar el recurso correspondiente al efecto. Puede decirse, pues, que el curso de hermandad y la jurisdiccional criminal de la misma establecida en las antiguas Ordenanzas desapareció por completo en Guipúzcoa durante el siglo XVIII.

SECCIÓN II.

De la autoridad judicial de las Juntas.

Las Juntas generales de procuradores de Guipúzcoa tuvieron atribuciones, no solo gubernativas, sino también judiciales, en virtud de concesiones hechas por los reyes de Castilla. Semejante autoridad no debe confundirse con la jurisdicción natural de los alcaldes de la hermandad, que eran los verdaderos jueces encargados de conocer en los cinco casos de que se ha hecho mérito en la sección precedente. Aquellas podían, sí, remover á los segundos, y aun castigarlos, cuando no procedían bien en el desempeño de sus oficios, por cualquier motivo que fuese. También estaban autorizadas para corregir y enmendar las sentencias que los alcaldes de la hermandad hubiesen dado indebidamente razón por ruego, dádiva, promesa ó amistad sobre querellas de parte ú otros pleitos ó actos de que los interesados se considerasen agraviados. Pero no por eso era un recurso de alzada ni de revisión de las sentencias de los alcaldes de la hermandad, sino el uso de una inspección superior sobre sus actos en los casos extraordinarios de abusos que hubiesen cometido en el ejercicio de los oficios. En lo demás la autoridad judicial ordinaria de las Juntas, según las Ordenanzas antiguas, estaba concretada al conocimiento de los asuntos contenidos en los cuadernos de las mismas, sus emergencias, incidencias y conexidades. No podían

ellas, por consiguiente, entremeterse en actos judicia-
rios ni extrajudicia-rios, cuyo conocimiento correspon-
diese á otros cualesquiera jueces, salvo en los nego-
cios ó pleitos tocantes á los parientes mayores, y así
los mandamientos que diesen contra aquellos en lo
que era de su competencia carecían de efecto legal.

Por otra parte la jurisdicción de las Juntas en los
negocios y causas de su verdadera incumbencia con
sus incidencias y cosas anejas era al mismo tiempo
privativa. Declarado estaba, en efecto, por diferentes
Reales cédulas y provisiones que ni las chancillerías
ó audiencias, ni el Corregidor, ni ningún otro juez
de este reino, pudiese conocer de ellos, sea en prime-
ra ó segunda instancia, salvo la persona real, ó los de
su Consejo en su nombre. Esta antigua jurisprudencia
quedó confirmada por una Real provisión expe-
dida por el Consejo en 7 de Noviembre de 1732 á
solicitud de la provincia. Tuvo lugar á consecuencia
de haber la sala del crimen de la Chancillería de Va-
lladolid dictado cierta providencia en una causa de
que estaba entendiendo el alcalde de Escoriaza por
comisión de las Juntas; mandando á dicha sala «que
»no se entremetiese á conocer en causas de herman-
»dad en que entendiese la provincia, sus comisarios
»y delegados.» Los cuadernos de las Ordenanzas pri-
mitivas no habían determinado, sin embargo, la for-
ma en que las Juntas hubiesen de proceder en los
pleitos y causas correspondientes á su jurisdicción
contenciosa. Hízose esto, aunque de una manera muy
imperfecta, por las que se formaron el año de 1470,
según las cuales el procedimiento, tanto civil como
criminal, debía ser sumamente breve, y tal, que no
debía observarse en él la solemnidad del derecho co-
mun. Dispusieron al contrario para su seguimiento
las reglas siguientes: 1.^a Que el demandado por ne-
gocio civil, ó el procesado por causa criminal en que
no hubiese efusión de sangre, tuviesen que contestar

á la demanda ó acusación dentro de tercero día. 2.º Que no se admitiesen más de dos escritos de cada parte. 3.º Que con sola la presentación de estos se diese la sentencia ó declaración competente según el curso de hermandad. Después por otra Real cédula de 27 de Noviembre de 1473 se dijo «que las Juntas de la hermandad tuviesen facultad y jurisdicción de hacer sus procesos é de los cerrar en términos de nueve días, de tres en tres, contra los rebeldes, sus valedores y favorecedores.» Las sentencias dictadas en esta forma eran ejecutorias por su naturaleza, y solamente podía apelarse de ellas en el efecto devolutivo para ante Su Majestad ó su Consejo. Previas estas generalidades, voy á recopilar los casos ó negocios que los monarcas encomendaron á la resolución de las Juntas de la provincia en concepto de tribunal de justicia, que son los siguientes:

1.º D. Enrique IV autorizó á los procuradores de las villas y lugares de la hermandad de Guipúzcoa en virtud de cédula librada en Madrid á 30 de Septiembre de 1461 para conocer de las causas de muertes, robos, fuerzas, males y daños, que los vecinos y hermanos de la misma provincia cometiesen en la mar fuera de los puertos y jurisdicciones de sus pueblos, los unos á los otros. Por otra Real cédula de 8 de Julio de 1470 esta jurisdicción de las Juntas se extendió á los delitos que cometiesen los vecinos de la provincia en cualquiera parte fuera de sus límites, ya fuese contra otros vecinos de la misma, ya de fuera de ella.

2.º El mismo monarca por otra cédula dada en Valladolid á 15 de Septiembre de 1466 facultó á las Juntas de la provincia para hacer salir del territorio de ella á los vecinos y moradores que anduviesen en deservicio de Su Majestad, ó pareciesen sospechosos y de poca seguridad. Semejante atribución se fundó en las revueltas políticas que afligían entonces á la

monarquía, y que, por consiguiente, debe considerarse transitoria, no como medida permanente de gobierno.

3.º Por otra Real cédula despachada por el propio soberano en Segovia á 25 de Septiembre de 1468, conforme con el capítulo 192 de las Ordenanzas de 1463, se concedió á las Juntas de procuradores de la provincia otra atribución notable. Tal era la de conocer de todos y cualesquiera pleitos, debates y cuestiones civiles y criminales, así que sus incidencias, que tuviesen un concejo con otro, una parroquia ó colación con otra, una persona singular con algún concejo, colación ó universidad, ó con muchas personas. Añadía que las Juntas procediesen en estos casos con audiencia de la partes interesadas en el asunto, según lo podían hacer en los otros contenidos en el cuaderno de las Ordenanzas. No obstante la generalidad con que se halla redactada esta Real cédula, se halla otra librada en Ocaña á 30 de Enero de 1469, cuyo contexto no está al parecer en consonancia con la anterior. Dícese en ella, en efecto, que Su Majestad había dado á la provincia igual facultad para tiempo de dos años; y que estando al cumplirse estos, la Junta celebrada en la villa de Motrico había suplicado la prorogación de aquella jurisdicción. Bajo este supuesto, D. Enrique IV, accediendo á esta petición, la renovó por otros cuatro años. Por más que se detenga uno en estudiar el contenido de las precedentes dos Reales cédulas, hallará dificultad en conciliarlas entre sí, pues no se comprende cómo la segunda pudo conceder aquella facultad para solos cuatro años, cuando por la primera estaba dada sin limitación de tiempo. Advierto por otra parte que la Real cédula del año de 1466 á 1467, que en la de 1469 se supone haberse expedido, no existe en el archivo de la provincia, ni se encuentra otra noticia de ella.

4.º D. Enrique IV expidió también otra cédula en Ocaña á 30 de Enero de 1469, mediante la cual facultó á las Juntas de la provincia para entender en las causas de tratos que algunos hacían con Francia en deservicio del rey.

5.º El mismo monarca despachó en 15 de Agosto de 1466 otra Real cédula autorizando á las Juntas de la provincia y alcaldes de su hermandad para conocer de todas las causas concernientes á brujas.

6.º Por otra Real cédula librada en Segovia á 18 de Marzo de 1471 se facultó á las Juntas de la provincia para entender de las causas contra los que otorgaron escrituras falsas, y también contra los que hiciesen á los testigos deponer algunos dichos falsamente.

7.º Con arreglo á las leyes contenidas en los cuadernos de las Ordenanzas de los años de 1457 y 1463, correspondía igualmente á las Juntas conocer de cualesquiera causas ó negocios tocantes á los parientes mayores, sus mujeres, hijos y paniaguados, y también contra cualquier letrado de ella. La razón que dan para este último es «por que con los letrados no podrían tan brevemente alcanzar justicia, é son así parientes mayores.»

8.º Según un capítulo de las Ordenanzas del año de 1462, en las muertes ó heridas cometidas de noche, y si fuese con ballesta ó sino de pólvora, de día ó de noche, en ruido no trabado, la provincia y sus alcaldes debían ser jueces, aunque fuese entre vecinos ó en villa cercada.

9.º Otro capítulo del cuaderno de las Ordenanzas de la hermandad del año 1457 prescribe igualmente que la provincia en sus Juntas sea juez contra los que cometiesen algún delito contra los alcaldes de aquella ó secretario de la misma, hallándose en el ejercicio de sus oficios, ó por haber usado de ellos antes. Igualmente contra los que hiriesen ó mataren

á cualquiera persona que fuese ó viniese á hacer alguna declaración en las Juntas, ó á los procuradores ú oficiales de la hermandad al tiempo que fuesen á ellas, á que regresasen de las mismas á sus casas.

10.º Con arreglo á otro capítulo de las Ordenanzas del año de 1463, corresponde del mismo modo á las Juntas conocer de las riñas, amenazas ó insultos que ocurriesen entre los procuradores de ellas estando congregados en sesión, imponiendo la oportuna corrección, según su albedrío.

11.º Según otro capítulo de las mismas Ordenanzas, las Juntas estaban facultadas para proceder criminalmente contra los escribanos que hiciesen escrituras falsas, así que otros actos de esta clase.

12.º Finalmente, por una Real cédula dada por el Rey Católico en Zaragoza á 30 de Junio de 1493 se dispone que las Juntas determinen los pleitos, debates y diferencias que se suscitasen entre las villas y lugares sobre los asientos y votos que hayan de tener sus procuradores en las mismas. Añade que lo que acerca de ello resolviesen estas se cumpla, ejecute y lleve á debido efecto, sin embargo de cualquiera apelación ó súplica.

Con arreglo á una Real cédula de 8 de Julio de 1470, la autoridad de las Juntas en los negocios de su competencia se extendía á todos los vecinos y moradores de la provincia, cualquiera que fuese su clase y categoría. Nadie, por consiguiente, estaba exento de su jurisdicción. Además, para la ejecución de las providencias que dictasen en el ejercicio de esta era tan poderosa que en caso de resistencia á sus mandatos podían hacer apellido á la hermandad, esto es, levantar á la provincia, talar los manzanales, viñas y heredades de los rebeldes, quemar sus casas, aposentos, fortificaciones, etc. Tan terrible facultad, de que alguna vez hicieron uso, les fué concedida por el rey D. Enrique IV, en virtud de Real cédula expedida

en Toledo á 27 de Noviembre de 1473 á petición de una junta particular celebrada en el punto de Usarraga. Fuera de esto, apenas se encuentra otra disposición relativa á las penas que las Juntas podían aplicar á los delitos sometidos á su jurisdicción que la contenida en uno de los capítulos de las Ordenanzas de 1470. Dice que ellas podían poner «aquellas» penas que les pareciese, según los casos é maleficios que se obrasen.» Esta genérica y vaga expresión podía hacer creer que las penas imponibles por las Juntas eran nuevamente prudenciales, ó más bien arbitrarias; pero, interpretándolas racionalmente, se debe juzgar que debían atenerse á las prescripciones hechas para cada caso en las Ordenanzas de la hermandad. El conjunto de la legislación criminal establecida por ellas no se encuentra, en efecto, derogado ni modificado en su aplicación por las Juntas.

La inteligencia del capítulo 4.º, título 10, de la recopilación foral, comprendido en el número 3.º de los precedentemente señalados, no dejó de producir con el tiempo algunos conflictos con los Corregidores. Es, en efecto, indudable que las Juntas hicieron uso en muchas ocasiones de la jurisdicción concedida por aquel capítulo, nombrando comisionados para decidir las cuestiones pendientes entre dos ó más concejos, parroquias ó colaciones, ó las promovidas por particulares contra estas corporaciones. No es tampoco menos cierto que los Corregidores estuvieron en constante posesión de entender de esta misma clase de negocios contenciosos, como lo prueban los muchos miles de expedientes que existen en los archivos de su tribunal, á vista y ciencia de las Juntas y Diputaciones, que no reclamaron su conocimiento. Parece, pues, que ambas jurisdicciones se respetaban mutuamente; á saber, la ordinaria que desempeñaban los Corregidores, y la especial de la hermandad atribuida á las Juntas. Ninguna de ellas manifestó em-

peño de ingerirse en el asunto de aquella naturaleza, cuyo conocimiento previniesen respectivamente, y así, no descubro competencia alguna que hubiesen suscitado entre sí en tiempos antiguos.

Seguíanse en tal estado las cosas, cuando entre los pueblos que componían la alcaldía de Sayaz ocurrió un pleito sobre ciertos términos y plantaciones de montes en el tribunal del Corregidor. Pendiente todavía de su resolución, los procuradores de la misma alcaldía representaron en las Juntas celebradas en Tolosa en 1663 la conveniencia de que tomasen conocimiento de dicho asunto con arreglo á los fueros y Ordenanzas de la hermandad; petición á que desde luego accedieron ellas, nombrando á dos caballeros para que dicidiesen aquellas diferencias en la forma ordinaria, y tercero en discordia. Aunque el Corregidor expuso y protestó que semejante comisión debía entenderse limitada para un arreglo ó convenio amigable, las Juntas mandaron que se ejecutase según lo acordado. Hé aquí, pues, el motivo de una desavenencia apenas conocida hasta entonces en esta provincia. Consiguientemente, el Corregidor dirigió á la Reina Gobernadora una extensa exposición, en la cual trató de demostrar el agravio que se infería á la real jurisdicción ordinaria que ejercía en privársele del conocimiento de un negocio que tenía prevenido legalmente. Para su remedio concluyó pidiendo una declaración explícita del sentido del citado capítulo 4.º, título 10, de la recopilación foral. El mismo, e-forzando todavía los argumentos en defensa de su jurisdicción, representó á la Diputación la constante posesión en que todos los Corregidores habían estado de conocer de pleitos de aquella clase, y que en todo caso la atribución de las Juntas no debía ser privativa, sino acumulativa y á prevención. Hállase que con motivo de estas diferencias la provincia celebró aquel mismo año dos Juntas paracu-

lares, la una en Basarte, la otra en Vidania. Consta del registro de actas de la primera que se acordó dar poder al agente de la provincia en Corte, para sostener en el Consejo de Castilla los derechos que creía esta tener en virtud del citado capítulo 4.º, título 10. Pero el de la segunda descubre que, por causa de ofrecerse algunas razones diferentes, se había determinado revocar y dejar sin efecto el poder que para ello se había otorgado al expresado agente en Corte. La oposición que la provincia hizo al Corregidor sobre el mencionado asunto quedó por lo tanto retirada y sobreseída, á consecuencia de las noticias que se tenían de la disposición contraria de aquel Supremo Tribunal á sus intentos. No aparece, sin embargo, la resolución definitiva, que hubiese dictado este.

SECCIÓN III.

De los alcaldes de la hermandad.

La institución de los alcaldes de la hermandad data desde el establecimiento de esta misma, cuyos ejecutores y jueces eran bajo la inspección superior de las Juntas generales de la provincia. Así es que las primeras Ordenanzas de ella, que fueron las acordadas en 1375, dijeron que «por cuanto por los alcaldes ordinarios de las villas é lugares non se podían facer las obras que á la dicha tierra de Guipúzcoa convenía tan complidamente para nuestro servicio é pro de la dicha tierra, ordenaron que pusiesen siete alcaldes de la hermandad en toda la tierra.» Uno de los capítulos de las formadas en 1397 por el doctor Gonzalo Moro, confirmó esta institución. «En esta hermandad, dijo, serán siete alcaldes, porque se libren los maleficios contenidos en los capítulos de la hermandad, y los partidos que para su elec-

ción estableció fueron los siguientes: 1.º Segura con sus vecindades, Villarreal, Aleria, Villafranca con sus aldeas: de manera que Segura ponga el alcalde dos años, y Villafranca el tercero, y así en adelante. 2.º Tolosa con sus vecindades, Aiztondo y Hernani; á saber, la primera en tres años, y la última el cuarto, siguiendo después este mismo orden. 3.º San Sebastián, Fuenterrabía, Rentería, Oyarzun, Astigarraga y Usúrbil con su vecindad; haciendo la elección la primera en dos años, Fuenterrabía el tercero, Rentería el cuarto, y así en lo sucesivo. 4.º Mondragón, Vergara, Salinas, Elgueta, Placencia y Eibar con sus vecindades: de manera que la primera ponga el alcalde en dos años, Vergara en el tercero, y en igual forma en adelante. 5.º Elgóibar con el valle de Mendaro, Motrico, Deva y Zumaya con sus vecindades; á saber, Motrico pondrá en los dos primeros años, Elgóibar el tercero, Deva el cuarto, y así en lo sucesivo. 6.º Guetaria, Cestona, Zarauz y Orio con sus vecindades de esta manera: Guetaria en los dos primeros años, Cestona en el tercero, y lo mismo en adelante. 7.º Azcoitia y Azpeitia con sus vecindades y la alcaldía de Sayaz, alternando siempre aquellas cada año. Este orden de elección de alcaldes de la hermandad tuvo una modificación en las Ordenanzas de 1457, según las cuales San Sebastián y Tolosa en los primeros doce años debían poner el suyo, aun en los que no les tocase hacer la elección. Pero en las Ordenanzas del año de 1463 se restableció la primitiva disposición, cuyo contexto se observó posteriormente sin alteración.

Ya se sabe que el actual valle de Oyarzun dependió en lo antiguo de la villa de Rentería, cuyo alcalde de la hermandad en su turno ejercía la jurisdicción aun en el territorio de aquel pueblo. Oyarzun alcanzó empero con el tiempo el Real privilegio de exención, ó sea, el de su separación de la dependen-

cia de dicha villa, así como también la jurisdicción ordinaria civil y criminal de sus alcaldes; y de aquí su pretensión de que los de la hermandad de aquel partido no pudiesen entrar en el valle á ejercerla, según prescribían las Ordenanzas. Pasando todavía más adelante en su empeño, Oyarzun opuso una resistencia armada á los mandatos de la hermandad en cumplimiento de la justicia: hecho que obligó á la misma á proceder criminalmente contra los que aparecían promovedores de semejantes delitos. Llegó á hacerse por fin una transacción en las Juntas generales celebradas en la villa de Guetaria por el mes de Noviembre de 1481. A su virtud el valle reconoció el derecho de la hermandad de la provincia para ejercer la jurisdicción de su territorio con arreglo á las Ordenanzas, consignando al mismo tiempo que los alcaldes de la hermandad de Rentería no pudiesen proceder contra los ordinarios de Oyarzun, ni fatigarlos con llamamientos y emplazamientos. Presentada desde luego á Su Majestad, esta concordia fué confirmada mediante Real provisión expedida en Valladolid á 20 de Abril de 1482, de que se dió conocimiento á la provincia en Juntas.

Los habitantes de dicho valle no quedaron satisfechos seguramente con la precedente transacción, que á la verdad en nada les deshonraba, por someterlos á la ley común. Se halla, en efecto, que acudieron á las Juntas generales celebradas en la villa de Villafranca el año de 1520 con la solicitud de que se les concediera la facultad de tener un alcalde de la hermandad propio é independiente de los siete mencionados de la provincia. Añadióse á esta pretensión por la mayoría de votos de aquel congreso, no sin que los pueblos del partido de San Sebastián apelasen de semejante acuerdo para ante el rey. La Real chancillería de Valladolid, á cuyo Tribunal se pasó el conocimiento de este asunto, decretó en 1526 que

mediante se trataba de la creación de un oficio, se remitiese su resolución á Su Majestad; en cuya consecuencia, el Consejo de Castilla por auto proveído en 19 de Enero de 1540 dijo que confirmaba el acuerdo hecho por las Juntas de Villafranca de 1520, y libró la competente Real provisión á 29 de los mismos mes y año. Se ve, pues, patente la inexactitud con que se produce el preámbulo del capítulo 25, título 13, de la recopilación foral legislativa, al expresar que «en el valle de Oyarzun hubo siempre un alcalde de hermandad particular fuera de los siete que ha de haber en todo el territorio; de la provincia.» Los hechos relatados demuestran que su establecimiento no tuvo principio hasta el año de 1540, con jurisdicción limitada á su propio territorio y así con su aumento hubo en la provincia ocho alcaldes de la hermandad. Creáronse más adelante otros muchos á consecuencia de la exención obtenida por diferentes lugares que dependían de la jurisdicción de algunas villas; de manera que puede decirse que la existencia de los alcaldes de la hermandad fué ya general en toda la provincia, alterándose de esta manera el primitivo plan de su institución, reducida á los siete indicados.

En conformidad á las Ordenanzas de la hermandad, los alcaldes de ella manifestaban estar adornados de circunstancias particulares y relevantes. Debían ser de los mejores de toda la tierra, hombres buenos, arraigados en más de cincuenta mil maravedís, bien abonados, de buena fama y conciencia, no parientes mayores, ni adheridos á sus bandos ó asonadas, no allegados á personas poderosas, y tales, que guardasen el servicio del rey y el bien del país. Su elección debía hacerse el día de San Juan Bautista de cada año por el Concejo á quien correspondiese, congregándose á este efecto sus vecinos á campana repicada en el lugar acostumbrado. Verificada que

fuese por mayoría de los concurrentes, los elegidos debían jurar delante del altar mayor de la Iglesia parroquial puestos de rodillas, estando presente el Concejo, que no eran allegados á parientes mayores, ni á personas poderosas, ni aficionados á ellas. También que en el desempeño de su cargo guardarían el servicio de Dios, la justicia, las leyes y cuadernos de las Ordenanzas de la hermandad de la provincia. Cualquiera de ellos que hiciese justicia de algún malhechor, azotándolo, desorejándolo, etc., tenía por salario de aquel año treinta florines corrientes, además de los mil maravedís de Ordenanza; pero si no ejecutaba semejante acto de justicia, solo debía tener los diez florines acostumbrados, además de los derechos que estaban señalados en el arancel. También percibían la décima de las ejecuciones de las entregas y daños que fuesen juzgados por ellos por sentencia pronunciada contra algún reo. De su parte, en el cumplimiento de sus oficios debían ser diligentes; pero si dejasen por negligencia de administrar la justicia, podían ser apremiados á ello por el Corregidor ó el alcalde mayor con pena corporal, de cadena, ó de dinero, según entendiesen que correspondía.

La jurisdicción de los alcaldes de la hermandad, como dirigida á castigar los delitos comprendidos en las Ordenanzas de la misma, no se extendía á los considerados por comunes. Reducíanse, por consiguiente, aquellos á los cinco casos cuya enumeración se hizo en la sección I de este mismo capítulo; casos no de privativo conocimiento del alcalde de la villa ó partido donde ocurriese el delito, sino de acumulativo y preventivo con todos los de la hermandad de la provincia. «E todos estos alcaldes, decía una Ordenanza del año de 1375, é cualquier de ellos, hayan la »jurisdicción común, aunque sean fuera del territorio de la jurisdicción donde son moradores en cualquier parte de Guipúzcoa.» Otra de las de 1397 es-

tableció lo mismo con estas palabras: «estos alcaldes» habrán jurisdicción comunmente cada uno de ellos» en toda la merindad de Guipúzcoa y usarán todos» por toda la tierra:» disposición que se conservó en los cuadernos de las Ordenanzas posteriores, observada constantemente en la práctica.

Su orden de proceder en las causas criminales que ocurriesen, ya de oficio de justicia, ya en virtud de querrela de parte, estaba también determinado por las mismas ordenanzas. Reducíase á que el alcalde de la hermandad, á cuya noticia llegase haberse cometido en su distrito algún robo, muerte, herida, fuerza, ú otro delito de la competencia del curso de hermandad, se constituyese en el sitio con su merino, hiciese la oportuna pesquisa del hecho, prendiese al delincuente, etc. Fuera de esto, no hablan de diligencia alguna posterior á la información sumaria: tampoco expresan quién había de formalizar la acusación, ni si debía tener lugar la defensa del supuesto reo y dentro de qué término. Este silencio en puntos tan importantes, y el establecer como regla general que los procesos debían ser breves y sumarios, da á entender que sin más tramitación se debía pasar á fallarlos. Las ordenanzas de 1397 dijeron que para este efecto el alcalde instructor de la sumaria llamase al otro más cercano: que en caso de no avenirse ambos en la sentencia, hiciesen venir como tercero á otro alcalde de la hermandad, también más inmediato: que reunidos así los tres, prevaleciese lo que acordasen dos votos conformes. Pero semejante método de sentenciar las causas tuvo alguna modificación en virtud de uno de los capítulos de las establecidas el año de 1463. Según estas, siempre que el delito que se perseguiese no tuviese en el cuaderno de las mismas pena expresa, debían juntarse para dar el fallo en la mejor manera que pudiesen ó entendiesen los tres alcaldes más cercanos del lugar en

que se hubiese cometido el delito. Añade que, si estos tres no pudiesen convenir entre sí, llamasen al Corregidor que anduviese en la provincia, en falta de este al alcalde del Rey, y no existiendo tampoco semejante funcionario, al alcalde ordinario de la villa, ejecutándose lo que la mayor parte de ellos resolviese.

Como queda ya expresado, de la sentencia que pronunciasen los alcaldes de la hermandad, ya fuese en una forma, ya en otra, no había apelación ni súplica á ningún tribunal bajo concepto alguno. Solo quedaba al agraviado el derecho de querellarse al Rey contra el proceder de los que hubiesen dictado: triste é inútil recurso en verdad, después de ejecutada la sentencia, sobre todo si era la capital, de mutilación de miembro, ú otra de efectos irreparables. Pero aun semejante facultad se trató de embarazar al disponer que «si alguno los emplazase para ante la »merced de nuestro señor el Rey, todos los de la dicha hermandad sean tenidos de sobrellevar al tal »alcalde ó alcaldes las costas y daños que por la dicha razón les vinieren.» Quiere decir que por más injusta y arbitraria que fuese una sentencia, los ofendidos y atropellados por ella, si recurrían al Rey contra las personas de los alcaldes, tenían que luchar con todo el poder de la provincia, la cual salía á la causa librando del pago de las costas á los causantes de los agravios. Así se ve en todo que el deseo de hacer y cumplida en los delinquentes, muy justo seguramente, ahogó en el ánimo de nuestros antiguos legisladores aquellas consideraciones que la misma justicia y la humanidad recomiendan hacia los procesados, que no siempre son verdaderos delinquentes, y aun cuando lo sean, harta desgracia tienen en ello.

Tan omnímoda autoridad de los alcaldes de la hermandad dió sin duda ocasión con alguna frecuencia á abusos notables, que llamaron la atención de

las Juntas de la provincia. «Por cuanto los alcaldes de la hermandad, dicen las Ordenanzas del año de 1470, que debieran ser ministros de la justicia, usan de sus oficios mala é cautelosamente, é facen muchas cosas desaguizadas, y usan mal de sus oficios, unos fatigando por prisiones fasta que pase su año, otros emplazando ante sí, so color de testigos, sobre casos que non son ni pueden ser de su jurisdicción, y en los que pertenezcan á ella deteniéndolos, cohechándolos y fatigándolos, etc.» Los tales alcaldes se preválían para estas arbitrariedades de la falta de autoridad de las Juntas, según los cuadernos de las ordenanzas de la hermandad, para tomar conocimiento de las causas pendientes en sus juzgados hasta que pronunciasen las sentencias. Consiguientemente se dispuso que en adelante las Juntas tuviesen poder y jurisdicción sobre los dichos alcaldes que cometiesen semejantes injusticias, así antes de dictar las sentencias, como después de pronunciadas, cuando llegasen á su noticia, para hacerlos comparecer, corregirlos y castigarlos, según la gravedad de los casos. El Capítulo II de las mismas ordenanzas establecía con el propio objeto otra providencia también algo notable para aquellos tiempos. Tal era la de que ningún alcalde de la hermandad pudiese condenar á muerte ni á destierro á persona alguna de esta provincia, hermano de ella, sin Consejo y firma de letrado conocido hermano de la misma hermandad, bajo la pena de muerte y perdimiento de sus bienes para las costas y necesidades de la provincia. Sin iguales circunstancias tampoco les era lícito dar tormento á ningún hermano de la hermandad, con arreglo á una Real cédula de 30 de Enero de 1469.

La inutilidad de la conservación de los alcaldes de la hermandad se empezó á reconocer desde principios del siglo XVII. A la verdad, ningún beneficio

real y positivo se experimentaba ya de su ejercicio, cuando las condiciones de la justicia ordinaria, así que el estado de las costumbres y de la misma sociedad, habían cambiado y mejorado notablemente. Por otra parte, las competencias de jurisdicción que á cada paso se suscitaban, al mismo tiempo que producían dilaciones, y eran un mal para la buena y pronta sustanciación de las causas, no servían sino para aumentar las costas y gastos. Reducidos además los dos alcaldes de la hermandad más cercanos, que según ordenanzas debían asistir á las Juntas generales, á hacer el oficio de alguaciles, las personas principales de los pueblos huían de estos cargos. Consiguiendo á todo esto, las Juntas de Zumaya de Abril de 1611 decretaron que en adelante no hubiese semejantes alcaldes, acuerdo cuya confirmación se solicitó al Rey. Las dos del año de 1615 ratificaron esta determinación, como lo hicieron las de los años inmediatos. Estas dieron además encargos al agente en Corte para que activase las diligencias pendientes, á fin de alcanzar la extinción de semejante judicatura, cuya ninguna necesidad era más notoria desde que diferentes lugares obtuvieron los villazgos con el ejercicio de la jurisdicción ordinaria por sus alcaldes. A pesar de esto, no aparece que la provincia hubiese conseguido en esta parte sus deseos, y de aquí la variedad posterior de los acuerdos de Juntas sobre este asunto. Se ve que, por último, las Juntas de Rentería de 1684 decretaron que las villas podían conservar ó suprimir los alcaldes de la hermandad, según cada una de ellas tuviese por conveniente. De todos modos su nombramiento cesó completamente en toda la provincia desde el año de 1688 á consecuencia de la Real provisión de 13 de Diciembre del mismo, en cuya virtud los alcaldes ordinarios fueron autorizados para conocer de los cinco casos de hermandad. Así se decretó en las Juntas generales cele-

bradas en la villa de Zarauz por el mes de Mayo del año inmediato, que tuvo puntual cumplimiento en toda la provincia. Sin embargo, las de Azcoitia de 1800 acordaron su restablecimiento, aunque bajo distinta forma; pero el plan que se adoptó entonces sobre este asunto no mereció la Real aprobación, y quedaron las cosas en el estado anterior.





CAPITULO V.

DE LA JURISDICCION DEL RESGUARDO.

Sección I.

De la alcalalía de Sacas.



EN el antiguo sistema prohibitivo apenas se conocieron otros jueces del resguardo nacional que los alcaldes de Sacas instituídos para impedir la extracción de ciertas cosas, tales como el dinero, el oro y plata en pasta ó en alhajas, los caballos, las mulas, el azogue, la grana, etc. Nuestros legisladores de aquella época temían sin duda que faltasen estos objetos en el reino, y por eso prohibieron su exportación severamente. Por otra parte, no habían establecido todavía los aranceles de introducción de los géneros comerciales; y antes bien permitieron por regla general la de todos los artículos que la necesidad exigía, sin ninguna restricción. De aquí vino el nombre de alcaldes de Sacas y cosas vedadas á los encargados de cuidar el que no se llevasen fuera del reino las que quedan

indicadas. Difícil es, si no imposible, el averiguar si en la época inmediata á la anexión de Guipúzcoa á la Corona de Castilla existió ó no en esta frontera algún funcionario de esta clase; pero es indudable que ya se le conoció en el reinado de D. Juan II, 1407 á 1454, según se deduce del privilegio de la alcaldía de Sacas, al expresar que este monarca hizo merced de este oficio á Martín López de Yeribar, vecino de la villa de Tolosa, y por su fin á Domenjón González de Andía y á Sebastián de Aguinaga. Como quiera que sea esto, no es menos cierto que mediante dicha merced, cuya parte dispositiva se insertó en el libro III, capítulo V, sección III, la provincia quedó en posesión de la alcaldía de Sacas de su frontera. Resta por consiguiente que para el debido complemento de esta materia explique aquí la manera de elegirse el sugeto destinado al ejercicio de esta autoridad, cuáles eran sus funciones principales, cuál la extensión de su jurisdicción, y lo demás concerniente á este asunto. Lo haré, procurando no cansar al lector.

Desde que los Reyes Católicos otorgaron á la provincia la merced de la propiedad de la alcaldía de Sacas, que fué el año de 1475, se halla que cada Junta general hacía el nombramiento de la persona que debía desempeñarla. Ya se sabe que estos Congresos se celebraban dos veces al año, el uno por el mes de Abril ó Mayo, el otro por el de Noviembre; y de aquí se ve que, como su autoridad duraba de Junta á Junta, puede decirse que cada alcalde de Sacas se renovaba de seis en seis meses próximamente. Conociendo la provincia cuán corto era este periodo en las Juntas celebradas en la villa de Mondragón, el año de 1679 dispuso que las tandas de los alcaldes de Sacas fuesen anuales, como lo eran ya las de las mismas Juntas. Este acuerdo obtuvo en confirmación mediante Real provisión librada en 11 de Mayo de

1680, con la cláusula de que la elección se hiciese por ellas en la forma dispuesta por las Ordenanzas, y que los así nombrados llevasen el salario acostumbrado hasta entonces para los dos, que consistía en sesenta ducados. Para su nombramiento se observaron en lo antiguo las reglas siguientes: 1.^a Distribución de toda la provincia en diez distritos. 2.^a Sorteo de estos cada diez años para fijar el nuevo turno de elección. 3.^a Sorteo fogueral del pueblo elector dentro de cada distrito en su turno. 4.^a Elección de personas de las más principales, llanas y abonadas por el Ayuntamiento del pueblo en quien recayese la elección. 5.^a Sorteo de los dos propuestos ante la Junta siempre que fuesen de las cualidades convenientes al servicio del Rey y bien común, de manera que el uno quedase de propietario y el otro de teniente suyo. 6.^a Juramento del buen desempeño por los electos ante las Juntas.

Este antiguo método de elección de Alcalde de Sacas sufrió alguna alteración en virtud de una Ordenanza dispuesta en las Juntas de Fuenterrabía de 1748, confirmada por Real provisión de 10 de Enero de 1750. Según ella, al mismo tiempo de conservarse los diez distritos y el sorteo de ellos cada diez años, la elección del Alcalde de Sacas debía hacerse por el Ayuntamiento del pueblo en que se celebraban las Juntas generales entre los vecinos concejantes de aquel que estuviese en turno. Fundado en esto, el Concejo de Castilla por auto dictado en 13 de Febrero de 1764 declaró nula la elección de Alcalde de Sacas hecha en las Juntas de 1760 en D. Ignacio de Aranza, vecino de la villa de Tolosa. Mandó además que «en lo sucesivo se ejecutase la elección con arreglo á los capítulos del Fuero y acuerdos del año de 1748 en vecinos precisamente domiciliados y con residencia fija en las repúblicas á quienes tocase la suerte con casa poblada la mayor parte del año.»

Más adelante por una Real provisión de 24 de Mayo 1765 se declaró que se pudiese nombrar por alcalde de Sacas no solamente á sujetos residentes en el pueblo á quienes tocase la suerte, sino también á los que, siendo vecinos arraigados en él, tuviesen su residencia en otros pueblos de la provincia. Por último, las Juntas que se celebraron en la villa de Castona el año de 1777 variaron de nuevo esta forma de elección, y bajo la base de los sorteos de turnos decenales establecieron lo siguiente: 1.º Que después de anotarse por registro el pueblo á quien tocó la suerte de la alcaldía de Sacas se formasen tantas cédulas como quintos de fuegos de todos los pueblos y uniones de la provincia con sus nombres. 2.º Que de todas estas cédulas colocadas en un cántaro se entregasen diez y seis, de las que una sola pudiese servir á cada procurador juntero. 3.º Que estas diez y seis cédulas se volbiesen á echar en el cántaro y se sacasen ocho, y de estas, otra vez cuatro. 4.º Que estos cuatro electores, después de prestar el juramento correspondiente, escribiesen en secreto sin salir de la sala de sesiones de las Juntas, cada uno el nombre de la persona que creyese más apta de entre los vecinos concejantes del pueblo á quien tocó la suerte, cuya lista se tendría presente. 5.º Que estas cuatro cédulas puestas en el mismo cántaro se sacasen una en pos de otra, quedando de Alcalde de Sacas propietario el que saliese primero, y los otros tres, de tenientes suyos, por su orden. 6.º Que todas las precedentes extracciones de cédulas se hiciesen por el Corregidor. 7.º Que el Alcalde de Sacas electo hubiese de ofrecer y dar fianza suficiente para el fiel desempeño de su empleo. 8.º Que la elección del escribano de Sacas pendiese del arbitrio del nuevo alcalde, con exclusión de los escribanos que concurriesen á aquellas Juntas como procuradores. Esta Ordenanza fué confirmada mediante Real provisión expedida en 13 de Enero de

1780. Con tal motivo las Juntas del mismo año hicieron algunas aclaraciones sobre el modo de justificar en los pueblos la posesión de la nobleza y arraigo de bienes por parte de los aspirantes á la calidad de vecinos concejantes elegibles para el cargo de alcalde de Sacas.

La residencia de este funcionario era en la villa de Irún, como fronteriza con el territorio francés. Su jurisdicción dirigida á impedir la extracción de las cosas, que en virtud de las leyes y disposiciones del gobierno estaba prohibida, era privativa de su autoridad; de manera que ningún otro funcionario podía entremeterse á conocer de los descaminos que se tratasen hacer por aquel punto. Multitud de reales cartas ejecutorias obtenidas por la provincia en contradictorio juicio dejaron confirmada plenamente esta exclusiva judicatura de sus alcaldes de Sacas, de las que las más notables son las que paso á expresar:

- 1.^a La competencia suscitada con el Capitán general sobre una causa de aprehensión de una partida de dinero, resulta á favor del alcalde de Sacas por reales provisiones de 20 de Mayo y 19 de Julio de 1553.
- 2.^a Otra competencia ocurrida con el Capitán general con igual motivo, y la misma declaración dictada por el Consejo Real en 12 de Octubre de 1593.
- 3.^a La Real provisión expedida en 31 de Octubre de 1602, mandando remitir al alcalde de Sacas el conocimiento de una causa de denuncia de dinero de que estaba entendiendo el Corregidor.
- 4.^a Otra Real orden de 5 de Octubre de 1750 dictada en una competencia promovida con el alcalde de Fuenterrabía sobre el conocimiento de una causa de aprehensión de una partida de dinero hecha en el paso de Beobia al correo de Bilbao, con la declaración de que la jurisdicción que el de Sacas ejercía en aquel punto debía ser privativa, y en lo que se intentase extraer por mar ó por otra frontera, acumulativa con la jus-

ticia ordinaria. 5.^a Nueva Real orden de 8 de Octubre de 1752 á consecuencia de haberse intentado por el superintendente general de rentas establecer en Irún una ronda compuesta de un cabo, un escribano y cuatro guardas; con la declaración de ser privativa la jurisdicción del alcalde de Sacas en el territorio de Irún, y tocarle por ley el poner los guardas, mandando retirar la ronda acordada establecer. 6.^a Así bien la Real cédula dada en Araujuez á 30 de Mayo de 1761 con motivo de las cuestiones ocurridas con el juez del contrabando de San Sebastián sobre el conocimiento de las causas de extracciones de moneda. Se declaró por ella que el alcalde de Sacas debía conocer y determinar en primera instancia las causas de comisos ó descaminos de moneda de oro y plata, con obligación de remitir al superintendente general de la Real hacienda, siempre que se los pidiere, y otorgar para el Consejo de ella las apelaciones en los casos de gravamen de las partes ó del Real fisco. Finalmente, la resolución dictada por la suprema Junta de competencias del reino en 27 de Junio de 1825, declarando que correspondía al alcalde de Sacas y no al juez del contrabando el conocimiento de una causa de aprehensión de dos barcos en que se conducía al extranjero dinero, barras y plata labrada hecha por el primero.

A pesar de la posesión en que se mantuvo la provincia del uso de la expresada judicatura, no por eso dejó de ocurrir diferentes veces la venida de jueces particulares de Sacas. Destinábaseles de Real orden para hacer pesquisas secretas de extracciones de dinero, residenciar al alcalde de Sacas, en fin, para reasumir en esta frontera toda la jurisdicción tocante á su resguardo con amplias facultades en su ejercicio. Es indudable que semejante judicatura, por más extraordinaria y temporal que fuese, estaba en oposición con el privilegio de la alcaldía de Sacas

otorgado á la provincia. Por lo mismo jamás consintió esta en que los que venían revestidos de ella hiciesen uso del oficio, antes bien lo contradijo; representó á los monarcas el contrafuero que envolvían semejantes comisiones, y alcanzó que los que las traían sobreseyesen en su desempeño. Así sucedió con Pedro Flores, nombrado en 1517 con encargo de que residiese en el paso de Beobia para ver qué recado ponía la provincia en la guarda de los puertos y pasos de ella; pues á consecuencia de las reclamaciones que hizo la provincia, se mandó por Real provisión de 15 de Julio del mismo año se guardase en esto lo que se había usado hasta entonces. El segundo hecho de esta naturaleza fué el del Licenciado Herrera, que trajo en 1555 igual comisión; pues enterado del privilegio que tenía la provincia, sobreseyó en ella, y se retiró de Guipúzcoa. Lo propio hizo el Licenciado Rado en 1572, así como D. Pedro Vivero en 1580, revestidos ambos de las mismas facultades. Consta también que en 1602 el Licenciado Gonzalo Pérez de Valenzuela, alcalde del crimen de la Real Chancillería de Valladolid, se presentó en comisión de Su Majestad para proceder contra los que sacaban oro y plata. Pero no es menos cierto que en vista de las gestiones hechas por la provincia, por Real provisión del Consejo de 31 de Octubre del mismo año se le mandó remitiese las causas al alcalde de Sacas, por tocarle privativamente su conocimiento. Se halla igualmente que en 1644 vino con idéntica autoridad el Licenciado D. Alonso de Castro y Pareja, y que requerido por la provincia, sobreseyó en su ejercicio. De otros documentos resulta así bien que el Licenciado D. Miguel López de Dicastillo, oidor del Consejo de Navarra, vino en 1669 en comisión de Su Majestad para hacer pesquisas de las sacas de dinero y caballos; pero que la provincia no dió uso á su título, fundada en el mismo privilegio y su posesión. D. Je-

rónimo José Carbonell, que obtuvo igual encargo en 1712, tuvo que cesar por el mismo motivo, como sucedió en 1725 á D. Isidro Palomino y Velasco.

La jurisdicción del alcalde de Sacas, limitada por su institución á cuidar de las extracciones de las cosas vedadas, se extendió en algunas ocasiones á las introducciones de mercaderías de ilícito comercio. Así es que se halla que en 4 de Junio de 1558 Su Majestad encargó á la provincia el resguardo del paso de Beobia en lo tocante á los géneros prohibidos, como lo eran las armas y municiones procedentes de las naciones en guerra con España. En su cumplimiento aquella cometió está judicatura á los alcaldes de Sacas y á los ordinarios en sus respectivos territorios. Después de esto se ve que por Real orden de 27 de Marzo de 1608 se mandó que no obstante la comisión que estaba dada al veedor D. Martín de Aróstegui para el conocimiento de las causas de introducción de mercaderías en ausencia del Corregidor de San Sebastián, se guardase al alcalde de Sacas el privilegio que tenía para ello. Consta también que por Real orden de 5 de Marzo de 1652 D. Pedro de Arriola, alcalde de Sacas á la sazón, tuvo comisión del consejo de la guerra para conocer de una causa de denuncia de dinero en concepto de juez delegado. Del mismo modo se halla que por otra de 9 de Septiembre de 1654 se confirió á Pascual de Iriarte, alcalde igualmente de Sacas, la judicatura del contrabando de la frontera á prevención el veedor del almirantazgo, ofreciendo Su Majestad hacer lo propio con los alcaldes de Sacas sucesores, cuyos nombres encargó se le avisasen. Idéntica comisión dió el rey á D. Francisco Ignacio de Sorarráin y Emparan, alcalde de Sacas así bien de la provincia en 1692. Es preciso tener presente, sin embargo, que todas estas comisiones no eran sino meras delegaciones personales, temporales, y dadas por efecto de las circuns-

taucias de guerras con el extranjero. De todos modos, la provincia quería evitar el establecimiento de nuevos empleados reales en su territorio, y por esta razón solicitó al rey que la judicatura del contrabando en la frontera francesa estuviese adherente al empleo de alcalde de Sacas en los casos que se ofreciesen. Consta que esta gestión fué desestimada por Su Majestad en 1697 con repetición. Si, pues, los alcaldes de Sacas han procedido después alguna vez contra las introducciones de mercaderías consideradas por de ilícito comercio, no ha sido sin duda por atribución propia de su judicatura.

Como bien se sabe, la villa de Irún con todo su territorio actual dependió en lo antiguo del término jurisdiccional de la ciudad de Fuenterrabía, cuya aldea era. El paso de Beobia se halla en quel territorio, y fundada en esta circunstancia, dicha ciudad tuvo la pretensión de ejercer por medio de sus alcaldes ordinarios la judicatura del resguardo de las cosas vedadas extraer á prevención con los de Sacas de nombramiento de la provincia. Para este efecto quería ademas mantener á su disposición una gabarra particular en el paraje llamado Puntal, abriendo en este un nuevo paso. Semejante empeño, descubierto por la primera vez al parecer por los años de 1560, era indudablemente contrario al privilegio de la alcaldía de Sacas concedido por los Reyes Católicos á la provincia. Visto su contexto, y examinado el espíritu con que fué redactado, no se puede á la verdad desconocer que la jurisdicción de toda la frontera, en la que dependía de las cosas que estaban prohibidas de extraer, pertenecía privativa y exclusivamente al alcalde de Sacas puesto por la misma provincia en concepto de delegado suyo. Queda además visto que esta jurisdicción fué confirmada por medio de diferentes delaraciones hechas por los monarcas y sus supremos tribunales, corroborada, en fin, por una larga

y constante posesión de su ejercicio. A pesar de todo esto, la expresada ciudad recurrió en queja sobre el particular al Consejo de Castilla, ante el cual formalizó la demanda contra la provincia; la cual resentida de semejante hecho, la privó del turno que se acostumbraba sortear cada diez años para la elección del alcalde de Sacas, cuya legítima jurisdicción desconocía. En este estado anómalo se conservó por espacio de más de sesenta años, por no haber aquel supremo tribunal resuelto definitiva y ejecutoriamente la cuestión.

Fuenterrabía propuso en las Juntas celebradas en la villa de Vergara en 1621 una composición sobre este largo y desagradable asunto. Habiendo sido aceptada la idea, se llegó á otorgar por los respectivos apoderados la competente escritura de concordia en 2 de Mayo del mismo año. De su contexto se ve que dicha ciudad desistió de sus pretensiones y pleitos, reconociendo explícitamente la privativa jurisdicción del alcalde de Sacas en todo el paso de Beobia, de modo que no hubiese en todo el río Vidasoa más gabarra que la de este. Por su parte la provincia, en consideración á este reconocimiento ó sumisión de Fuenterrabía y de haber estado excluida de la suerte de aquella judicatura en tan largo tiempo, le concedió dos turnos extraordinarios. No obstante esta transacción, se halla que dicha ciudad pretendió por los años de 1660 embarazar las funciones del alcalde de Sacas, entreteniéndose á hacer descaminos que correspondían á la autoridad de este. Por esto las Juntas de San Sebastián de 1661 declararon que los alcaldes de aquella no pudiesen tener gabarra para el paso, ni poner guardas, ni admitir manifestaciones, ni dar pasaportes, por ser todo esto privativo de la alcaldía de Sacas. La misma ciudad renovó en 1675 sus antiguas pretensiones con el empeño de que sus vecinos no fuesen registrados por

los guardas de la alcaldía de Sacas en su tránsito á Francia. También intentó posteriormente en varias ocasiones mantener la gabarra del paso en el Puntal de la misma ciudad; y sus alcaldes no dejaron de apropiarse el conocimiento de las causas de denuncias de dinero hechas por sus alguaciles y vecinos. Como era natural, la provincia se opuso constantemente á semejantes pretensiones, y de aquí el que los alcaldes ordinarios de Fuenterrabía y el de Sacas formalizasen diferentes competencias. El resultado de ellas fué que el Consejo de Castilla, ante el cual pendieron, declarase por auto dictado en 11 de Marzo de 1813 que la jurisdicción que correspondía al alcalde de Sacas era acumulativa y preventiva con los ordinarios de Fuenterrabía en el territorio de esta ciudad. La privativa que tenía aquel en el término municipal de Irún no por eso tuvo menoscabo alguno respecto del antiguo estado.

Para la actuación de las causas de denuncias el alcalde de Sacas estaba asistido de un escribano: tenía además á sus órdenes el competente número de guardas armados, nombrados por la provincia, y sostenidos por la misma.

Conservaba también en el paso á su disposición, hasta que se hizo el nuevo puente, una gabarra, única que estaba permitida en todo el río Vidasoa, según declaración del Consejo Real de 9 de Junio de 1543, confirmada por el príncipe D. Carlos en 13 de Septiembre del mismo año, y por Felipe II en 3 de Julio de 1566. Sus derechos por el tránsito de las personas y caballerías eran en la proporción siguiente: por cada persona cuatro maravedís; por cada bestia cargada, con su mulatero, un real; por cada hombre de á caballo, con su mozo, otro real. Tenía para su habitación una casa situada fuera del cuerpo de la villa construída por la provincia entre los años de 1593 y 1595, dentro de la cual existía una cárcel ejecutada

en el de 1605. El alcalde de Sacas debía presentarse personalmente ante las Juntas generales á una con el escribano actuario llevando las Reales cédulas y cualesquiera otros papeles que tuviese, así que una razón de los procesos que hubiese formado para su aprobación por las mismas. Las denuncias del dinero y demás cosas cuya extracción se hallaba prohibida, se distribuían en esta forma. Un quinto íntegro de todo su montamiento para la provincia: de los cuatro quintos restantes se sacaba primero las costas: después el tercio para el denunciador, si lo había, aprehensor ó aprehensores: el resto quedaba aplicado para el alcalde de Sacas. Percibía además los derechos correspondientes señalados en un arancel por los permisos que daba para la extracción de las lanas y demás mercaderías, para las que estaba autorizado.

SECCIÓN II.

Del juzgado del contrabando.

Antiguamente no se conoció en ningún punto de Guipúzcoa juez alguno del ramo de contrabando, ó sea, funcionario real destinado á celar de la introducción de géneros extranjeros. La razón de esto consistía en que gozando sus naturales del privilegio de traer libremente cuantos necesitasen para su uso y consumo, y hallándose situadas en los confines de Castilla y Navarra las aduanas, carecía de objeto aquella judicatura en esta provincia. Esto no obstó para que en tiempos de guerra extranjera los monarcas hiciesen poner alguna vigilancia, así en el paso de Beobia como en los puertos marítimos, particularmente en el de San Sebastián. Pero aun entonces la prohibición de la introducción y consiguiente veeduría no era general, ó sea, extensiva á toda clase

de mercaderías, sino más bien limitada á las armas, municiones y demás pertrechos concernientes á la guerra; y si también se extendió á otras mercaderías, fué como un medio de hostilidad. Así es que los títulos que traían estas comisiones solían despacharse por el Consejo Supremo de la guerra, y á este mismo se elevaban las apelaciones de las sentencias de dichos jueces. De todos modos, eran unas medidas extraordinarias y de circunstancias, que no pueden ser alegadas como establecimientos de verdadero resguardo del contrabando de la provincia.

No hallo noticia de que se hubiese creado en ella judicatura alguna del mismo ramo hasta el año de 1558, en que Su Majestad encargó á la misma provincia el resguardo del paso de Beobia. Igual encargo la dió en 1586, recomendándola tuviese mucho cuidado de que no se introdujesen en el reino mercaderías inglesas prohibidas. Esta vigilancia y consiguiente judicatura fué delegada por la provincia al alcalde de Sacas en la frontera y á los alcaldes ordinarios en los pueblos, cada cual en su respectiva jurisdicción, y por consiguiente, ningún funcionario extraño fué introducido por entonces para el desempeño de tal comisión. Verificóse esta novedad el año de 1603 en que el Rey puso á cargo de D. Martín de Aróstegui, veedor de la gente de guerra de San Sebastián, el cuidado de las mercaderías extranjeras; cuidado que en 1608 se declaró debía entenderse, guardando al alcalde de Sacas el privilegio que tenía para el resguardo de la frontera. Aróstegui cesó sin duda en el desempeño de las funciones que se le habían cometido luego que pasaron las circunstancias que motivaron su nombramiento. No se descubre en verdad que hubiese continuado por mucho tiempo ejerciéndolas, y solo, sí, que en 1628 obtuvo la misma judicatura Francisco de Retama con el título de veedor del comercio. Consta así bien que por

los años de 1640 y siguientes sirvieron otros sugetos esta comisión con iguales facultades que los dos ya citados: que con motivo de la sublevación de Portugal fué nombrado para la misma en 1663 D. Cristóbal de Olazábal y Acorda: que D. Juan de Landaeta obtuvo esta judicatura en 1689, y que habiendo presentado su título á la Diputación, se le dió uso con la limitación de que no pudiese conocer sobre extracción de género alguno, por tocar esto privativamente al alcalde de Sacas. Impúsosele además la restricción de que no pudiese tampoco impedir la entrada de bastimentos, cuyo comercio era libre á los naturales de esta provincia por sus fueros.

El establecimiento del juzgado de la dependencia del contrabando no se limitó al puerto de la ciudad de San Sebastián. Se ve en efecto que el citado D. Juan de Landaeta nombró subveedores para los puntos de Irún, Fuenterrabía y Guetaria, como lo hizo su sucesor: que D. Francisco Ladrón de Guevara obtuvo la misma judicatura para Fuenterrabía en 1691 para tiempo de un año. Consta que al título que trajo este último se le dió uso por la Diputación con las mismas cláusulas ó restricciones que á Landaeta, y que continuaba desempeñando el cargo por disposición del Supremo Consejo de la guerra el año de 1697, sin que se descubra cuándo cesó en él. Hállase, sí, que D. Martín de Aguirre fué nombrado en 1706 por veedor del contrabando en la misma ciudad para las ausencias y enfermedades del propietario, y que presentado el título en la Diputación, le dió el pase con las mismas salvedades que se han indicado. Aparece del mismo modo que el año inmediato se nombró otro veedor del contrabando para el puerto de Guetaria, que lo fué Domingo de Mendía, quien fué admitido con iguales restricciones. La provincia representó al mismo tiempo contra semejante judicatura, exponiendo que nunca se había conocido

en los puertos marítimos fuera de San Sebastián y Fuenterrabía: que en aquella villa no había comercio, y por consiguiente, que era inútil, etc. En vista de estas gestiones, mandó el Rey que en lo sucesivo el Consejo no preveyese semejante empleo sin previa consulta del mismo. Más adelante, ó sea, en 1758, el juez del contrabando de San Sebastián intentó establecer iguales funcionarios en los puertos de Pasajes y Rentería; pero la Diputación le negó toda jurisdicción fuera del de aquella ciudad, y semejante creación tampoco llegó á realizarse.

Si la veeduría del ramo del contrabando no fué en su origen más que una judicatura temporal por circunstancias de las guerras, se ve que en el siglo XVIII había adquirido el carácter de permanente. A lo menos la continuación apenas interrumpida de nombramientos que los gobiernos hacían, da á entender que sobre este particular había un plan determinado ó fijo. Que se quería ir introduciendo de esta manera indirecta en Guipúzcoa un subdelegado de rentas reales, se deduce también de la circunstancia de que sus títulos no eran ya expedidos por el Consejo de la guerra, sino por el superintendente general de la Real hacienda. En esta conformidad, se halla que D. Manuel de las Casas y la Cuadra, Comisario ordenado de marina en San Sebastián, presentó en 1740 á la Diputación el nombramiento de juez de contrabando; como lo hizo D. Manuel José de Echeverría en 1741, dicho Casas otra vez en 1748, D. Manuel Diego Escobedo en 1758, y D. Francisco Núñez Ibáñez en 1763. La provincia no negó el uso á estos nombramientos y su ejercicio, aunque siempre á este las salvedades preservativas de sus fueros, de que ya se ha hablado; consiguientemente la provincia siempre entendió que la autoridad de estos jueces del contrabando era limitada al puerto y muelle de San Sebastián, y se

opuso constantemente con firmeza al ejercicio de sus funciones fuera de estos límites. En una palabra, en su concepto eran otras tantas intrusiones en las atribuciones correspondientes á los alcaldes ordinarios y al de Sacas en sus respectivos casos. Parece que por la primera vez en 1758 se establecieron dos guardas en el muelle de San Sebastián, con motivo de las muchas estracciones de dinero que se hacían; habiendo precedido para el efecto una Real orden dictada á solicitud del juez del contrabando de la misma ciudad, dicho Escobedo. La misión de estos dependientes; según su contexto, era la de celar las introducciones y estracciones fraudulentas. Este segundo extremo se consideró como opuesto al privilegio de la alcaldía de Sacas y á la autoridad de los alcaldes ordinarios; y por lo mismo reclamó inmediatamente contra la extensión que se trataba de dar á la jurisdicción del juez del contrabando en estas materias. Sobre el punto de los guardas no recayó, sin embargo, resolución alguna, á lo menos no se encuentra en las actas de aquel año, ni en las de los inmediatos. Dictóse solamente la ya indicada de 30 de Mayo de 1761, mandando genéricamente que se mantuviese á la provincia en el goce de sus fueros y privilegios, y declarando en observancia de ellos que el alcalde de Sacas debía conocer y determinar en primera instancia las causas, decomisos ó descaminos de moneda de oro y plata.

Los jueces del contrabando de San Sebastián no desistieron por eso de ingerirse en los denuncios de dinero, y en el conocimiento de sus causas. D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, que desempeñaba aquel cargo en 1775, se mezcló en efecto en una aprehensión de gruesa suma verificada por sus guardas en la calzada de entre aquella ciudad y Pasajes; suceso contra el que gestionó la provincia enérgicamente como opuesto á la jurisdicción de la alcaldía de Sacas y al-

caldes de San Sebastián. A su consecuencia se dictó en 20 de Enero de 1776; por la cual, mediante las circunstancias particulares del caso, se tuvo por conveniente retener en el juzgado de la superintendencia general de rentas su conocimiento. «Entendiéndose esto, añadió la misma, sin perjuicio de los privilegios y fueros de la provincia, y quedando en su fuerza y vigor las reales resoluciones anteriormente acordadas.» Semejante lenguaje, en buenos términos, equivalía á declarar que el alcalde de Sacas y los ordinarios de la provincia en sus respectivos casos eran los jueces competentes de los denuncios de estracciones de oro, plata y demás cosas vedadas, y no el veedor del contrabando de San Sebastián.

Tan terminante declaración no fué bastante poderosa para contener á este dentro de los límites de su autoridad, que cuando más, podía extenderse al cuerpo de dicha ciudad. Así, pues, sus guardas continuaron molestando á los viajeros con registros y decomisos de dinero que llevaban en dirección á Francia fuera de los muros de San Sebastián; como sucedió por el mes de Marzo de 1784, deteniendo en el monte de Ulía, término municipal de la misma, una partida considerable de pesos duros. El juez del contrabando dió parte de este suceso al gobierno de Su Majestad, el cual por Real orden de 5 de Abril siguiente aprobó el decomiso. No era esto solo, sino que la misma soberana resolución disponía que los jueces del contrabando conociesen en lo sucesivo privativamente de las causas de aprehensión de la moneda, que se verificasen en el puerto de San Sebastián y costa. Añadía que debía caer en decomiso todo lo que fuese en despoblado é inmediación á la costa marítima, y que si los alcaldes de San Sebastián hiciesen alguna en esta, remitiesen el conocimiento de la causa á dichos jueces, salva la aplicación de la parte correspondiente al comiso. En vista de esta de-

claración, los guardas del juzgado del contrabando procedieron á hacer nuevas aprehensiones de dinero en los territorios de Lezo, Hernani, Zumaya, etc., en tiempo en que desempeñaba aquel cargo D. Juan Antonio Euriquez. A virtud de otra Real orden se estableció en Irún en 1781 una partida de tropa destinada á cuidar de las estracciones de dinero; y el mismo juez procedió además en 1789 al registro de algunas casas de San Sebastián, á pretexto de hallarse en ellas géneros de fábrica extranjera. La provincia representó enérgicamente contra semejantes procedimientos y extorsiones al gobierno de Su Majestad. A sus results, por una Real orden dada en San Lorenzo á 14 de Noviembre de 1789 se mandó que una Junta compuesta de seis consejeros de Castilla, con asistencia de los dos fiscales y previa audiencia de ambas partes, consultase la providencia que estimase conveniente. En su consecuencia, tanto la provincia como Euriquez alegaron extensamente cuanto consideraron del caso, cuyo resultado definitivo no aparece.

Ya se dijo en otra parte cómo en 1691 se estableció en San Sebastián un funcionario de real nombramiento denominado juez de arribadas de Indias. Siendo su objeto el vigilar que los navíos que desde aquellos parajes venían registrados á los puertos de las provincias contribuyentes, no desembarcasen en Guipúzcoa mercaderías, desempeñaba realmente en este sentido las funciones de un juez de contrabando, que después se cometieron á los comisarios de marina. A esto se refirió la Real orden de 7 de Febrero de 1793, disponiendo que la judicatura del contrabando volviese al sugeto que ejercía la de arribadas de Indias, desempeñada á la sazón por D. Bernardino de Corbera. Pero no duró por mucho tiempo semejante método de servicio de aquella judicatura; por que se halla que en Real orden de 3 de Octubre de 1796 se mandó que el Capitán general fuese juez

nato del contrabando. El juzgado de arribadas de Indias, suspendido el año de 1808 con motivo de las novedades políticas del reino, se restableció en el de 1815 con el título de contaduría de reglamentos. D. José Antonio de Erro, nombrado para su desempeño, no se concretó á ejercer las atribuciones propias de su destino, conforme á su primitiva creación en tiempo de la Compañía de Caracas, sino que pretendió tener las de subdelegado del contrabando en ausencia del Capitán general, que lo era en propiedad, con exclusión de los alcaldes de San Sebastián. Semejantes exigencias fueron motivo de algunas ruidosas diferencias entre el citado Erro y estos últimos, que se creyeron perjudicados en su jurisdicción. La provincia se interesó en el asunto en favor de los mismos, apoyada en la reciente confirmación de los fueros y privilegios; pero, no obstante sus esfuerzos, no consiguió el que dicho contador de reglamentos cesara en el desempeño de las funciones judiciales del ramo del contrabando. Continuó en su ser este destino hasta el establecimiento de la aduana en San Sebastián, que se verificó el año de 1836. Desde entonces, y sobre todo desde la traslación definitiva de las aduanas á la frontera y toda la costa marítima en el año de 1841, el ramo del contrabando se ha arreglado en un todo en esta provincia á las leyes y disposiciones generales del gobierno de Su Majestad. En esta conformidad, el único juez de este ramo al principio era el intendente de la provincia, y ahora lo es el juez de primera instancia de San Sebastián, como de la Hacienda pública.

SECCIÓN III.

De la autoridad de las justicias ordinarias en el resguardo.

Es indudable que los jueces primitivos del ramo del resguardo de la frontera terrestre, así que de los puertos marítimos, fueron los alcaldes ordinarios de la provincia, cada uno en su respectivo término municipal. No se halla, en efecto, noticia alguna de que en los tiempos antiguos existiesen funcionarios especiales de real nombramiento para vigilar é impedir las extracciones de las cosas vedadas por las leyes generales del reino. A la verdad, la autoridad de los merinos era más propiamente dirigida respecto de los delitos comunes ó que afectasen al orden público; y tampoco se habían establecido todavía de una manera permanente los Corregidores, cuya residencia solo había sido temporal y en concepto de pesquisidores. Consiguientemente, apenas podían ejercer aquella judicatura más que los alcaldes ordinarios, revestidos de una autoridad contenciosa general, salvas las jurisdicciones especiales. Después del establecimiento de los Corregidores con la jurisdicción real ordinaria universal en toda la provincia, acumulativamente y á prevención con los alcaldes ordinarios, la autoridad judicial de los mismos no es menos cierta. Sin embargo, como su asistencia era indispensable al despacho diario de los negocios del tribunal, á las Juntas y diputaciones de la provincia, así que á la administración económica de los pueblos, apenas les quedaba tiempo para ocuparse del resguardo de las cosas vedadas. Puede decirse por lo tanto que además de los alcaldes de Sacas y los veedores ó jueces del contrabando, los alcaldes ordinarios fueron unos poderosos ejecutores de las leyes y órdenes del gobierno

de dicha materia. Su autoridad, como bien puede conocerse, estaba limitada á impedir la extracción de las cosas que estaban vedadas de hacerlo, ejerciéndola á prevención con los alcaldes de Sacas. A la verdad, la pobreza natural del terreno de la provincia exigía la libre introducción de toda clase de mantenimientos, y aun de las demás cosas necesarias para el uso y consumo de los habitantes de la misma. Por esta razón sus propias autoridades no podían tener la misión de perseguir y de proceder contra actos que se dirigían á su misma conservación ó existencia.

Varias fueron las reales ejecutorias obtenidas por la provincia en contradictorio juicio en favor de la jurisdicción de los alcaldes ordinarios en materia de resguardo de las cosas, cuya extracción estaba prohibida. Como ellas formaron la jurisprudencia legislativa provincial, corresponde citarlas aquí, si no todas, algunas de las más notables. La primera que ocurre es la expedida en 17 de Mayo de 1572 en una competencia de jurisdicción suscitada entre el alcalde de la villa de Deva y el Capitán general sobre el conocimiento de una causa de aprehensión de dinero hecha por un comisionado de este, la cual fué decidida á favor del primero. Otra librada en 17 de Septiembre de 1603 en una competencia ocurrida entre el Capitán general y el alcalde de Fuenterrabía con motivo de cierta detención de dinero, resuelta á favor del segundo. Lo es también la declaración hecha por el Consejo de Castilla en 11 de Marzo de 1713 sobre que la jurisdicción del alcalde de Sacas era acumulativa y á prevención los ordinarios de Fuenterrabía. En igual caso que estos se hallaban los demás de la provincia, por no diferenciarse en autoridad, y así lo entendieron. Semejante concepto quedó confirmado por otra resolución del mismo Supremo Tribunal de 10 de Enero de 1728 en una competencia suscitada

entre el alcalde de la villa de Motrico y el de Sacas sobre el conocimiento de un decomiso de dinero hecho por un guarda del segundo con el auxilio del primero. Declaróse que la jurisdicción de los alcaldes ordinarios de la provincia era acumulativa con el de Sacas, y que en consecuencia el conocimiento de dicha causa tocaba al de Motrico. Lo es así mismo la Real orden de 5 de Octubre de 1750, de que se habló en la sección I, en cuanto declara que la jurisdicción de las justicias ordinarias y la del alcalde de Sacas era acumulativa con respecto á la extracción de dinero, que se intentasen hacer por mar, ó por otra frontera que no fuese el paso de Beobia.

La autoridad de las justicias ordinarias de la provincia respecto del resguardo no se limitó, andando el tiempo, á las extracciones de oro, plata y demás cosas vedadas, sino que se extendió á las del tabaco para Navarra y Castilla. Esta jurisdicción quedó terminantemente declarada á su favor en el capitulado celebrado entre la provincia y el gobierno de Su Majestad en San Lorenzo á 8 de Noviembre de 1727, inserto en el suplemento de la recopilación de los fueros. Su artículo 2.º expresa «que la provincia »ordenase á las justicias y vecinos de los pueblos de »sus confines el celar con la mayor vigilancia á impedir el curso de los contrabandistas en el tabaco y »demás géneros.» El 3.º disponía así bien «que de »los denuncios del tabaco y demás géneros que hicieren los naturales en los pueblos ó territorios de »sus confines, ó fuera de ellos, siguiendo á los contrabandistas, hubiesen de conocer en primera instancia las justicias ordinarias de la provincia, con »apelación á la Real Junta del tabaco.» También se estableció por el 9.º que los guardas de las tres aduanillas de la provincia tuviesen que dar auxilio á las justicias ordinarias, si se lo pidiesen, para la persecución de los contrabandistas del tabaco, fuera del te-

territorio de aquellas casas; así como las mismas justicias debían darlo á los expresados dependientes del resguardo, cuando estos siguiesen al contrabando, guardando de esta manera la reciprocidad. En esta conformidad, la Junta particular celebrada en la villa de Tolosa por el mes de Enero de 1728, en uso de la autoridad concedida por el Rey á la provincia, dictó varias providencias para reprimir el contrabando del tabaco. Por la primera se estableció que todas las justicias, vecinos y moradores de la provincia, cada uno en la parte que le tocase, guardase y cumpliese enteramente el expresado capitulado. Otra disponía que se hiciese encargo especial á las justicias de Rentería y Oyarzun, para que atendiesen con la mayor vigilancia á impedir la extracción del tabaco y géneros diezmeros por su territorio á Navarra. En otro capítulo se determinaba que los denuncios que hiciesen las justicias de los confines, pasado el territorio de las aduanillas, así que las de Rentería y Oyarzun, se repartiesen en la forma prevenida por las reales cédulas. Se prescribía igualmente por otro que cualesquiera cantidades que se intentasen extraer de la provincia, sin guardar las formalidades de guías que disponía el capitulado, se denunciasen por las justicias de los pueblos confinantes con Navarra, Vizcaya y Alava, ó por las de otros que los siguiesen. Algunas otras disposiciones adoptadas por la provincia, especialmente en los años de 1743, 1752 y 1762 con el mismo fin expresado, suponen así bien en vigor la judicatura de las justicias ordinarias para proceder criminalmente contra los defraudadores de dicha renta.

Es cosa constante que los alcaldes ordinarios de la provincia, en uso de la misma autoridad judicial, estuvieron en la posesión de conocer de las causas de aprehensiones de tabaco. Los mismos instruyeron por consiguiente, con acuerdo de asesor, las correspon-

dientes sumarias, arrestando á los conductores de este género, y practicando las demás diligencias prevenidas por las leyes y Reales órdenes hasta dictar sentencia definitiva, que debían consultar con la expresada Real Junta. Semejante jurisdicción de los alcaldes no era, sin embargo, privativa ó exclusiva. Era más bien á prevención con el subdelegado de rentas establecido en la ciudad de Vitoria, cuando las aprehensiones se hiciesen después de haber pasado los conductores los límites de las aduanillas de Tolosa, Atáun y Segura. Los guardas de estas, ni los de dicha subdelegación, no podían, en efecto, según el citado capitulado, internarse en la provincia. Su acción estaba por consiguiente limitada á los confines de la misma con Navarra, Vizcaya y Alava, en que á ambas clases de autoridades era permitido funcionar, y donde solamente procedía la competencia de jurisdicción. Pero, como la tendencia natural del hombre es de extender la esfera regular de sus facultades, así sucedió también en la materia de que voy hablando; pues se vió que los guardas aduaneros internándose con frecuencia en el país, registraron con frecuencia á los traginantes, caseríos y casas de pueblos. Si las partidas de tabaco así decomisados unas veces eran destinadas para fuera del territorio de la provincia, otras eran para el uso de sus habitantes. La provincia se opuso con firmeza á semejantes intrusiones y extorsiones de dichos ministros del resguardo; motivo perenne de contestaciones con su jefe el mencionado subdelegado de rentas, propenso generalmente á favorecer los actos de sus dependientes. De igual espíritu se hallaba animada la Real Junta del tabaco, así que la superintendencia general de la Real Hacienda en las competencias que se elevaban á su resolución. Observábase en efecto que estas cuestiones por lo regular se determinaban en favor de la jurisdicción de la subdelegación de las rentas

reales; lo cual por una parte alentaba á los guardas aduaneros á extralimitarse de sus puestos, y contribuía por otra á entibiar el celo de de las autoridades del país.

Pero este antiguo estado de cosas sobre la materia de que me ocupo cambió completamente desde que cesó la primera intancia de los alcaldes con el establecimiento de los jueces de partido. Agrégase á esto la traslación posterior de las aduanas á la frontera y costa, creando al mismo tiempo un juzgado especial de hacienda pública. Por consecuencia, se puede decir que la autoridad judicial de los alcaldes ordinarios en materia de extracción fraudulenta del tabaco á las provincias contribuyentes desapareció igualmente. Ellos en el día, con arreglo á la legislación vigente, cuando más, podrían proceder á la instrucción de las primeras diligencias del proceso.





CAPITULO VI.

DE OTRAS COSAS DEL RAMO JUDICIAL.

Sección I.

De las cárceles y casas de corrección.



TAMBIEN se ha solido ocupar la provincia en lo concerniente al arreglo de cárceles, ó sea, en la construcción, seguridad y policía interior de las mismas. En esta conformidad, se halla que las Juntas generales de Zarauz de 1564 acordaron que todas las villas de la provincia hiciesen á costa de los propios de las mismas cárceles y picotas donde no las hubiese, enviando testimonio de haberlas ejecutado para la primera Junta, pena de veinte mil maravedís. Así bien las de Hernani de 1569 decretaron que las villas de San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Azcoitia, como de tanda del corregimiento, hiciesen cárceles con aposentos separados para personas particulares y los presos por causas leves, para que no estuviesen con infames. Se repitió este acuerdo en las Juntas de Elgóibar

del año inmediato, y parece se cumplió por dichas villas, aunque no con todas las circunstancias convenientes. Por esta razón sin duda en las celebradas en Azcoitia en 1574 representó el Corregidor la necesidad de que hubiese en aquellos edificios departamentos separados para hombres y mujeres, para gente principal y la que no lo fuese, y así se mandó y se ejecutó.

Las de 1710 no limitaron sus providencias á las cárceles de los cuatro pueblos de tanda, sino que las extendieron á todos los de la provincia. Dijeron que siendo muy conforme á toda buena policía y á la disposición de las leyes del reino, el que cada pueblo que gozase de jurisdicción ordinaria tuviese cárcel segura y acomodada para la custodia de los presos mientras se substanciasen y determinasen sus causas, cada uno de ellos tratase de componer y fabricar la suya. Para el reconocimiento del estado en que se hallaban estos establecimientos se nombró á un caballero. Se autorizó al mismo tiempo á la Diputación para que en vista del informe que diese este, tomase las medidas convenientes, á fin de que estuviesen bien reparados y arreglados. El expresado comisionado verificó la visita que se le había encargado, y presentó en las Juntas de 1713 su descargo poco satisfactorio respecto del estado de las cárceles de diferentes pueblos. Los que se consideraron agraviados con este informe representaron contra su contexto, en cuya consecuencia el mismo Congreso tomó la determinación de someter al Corregidor y Diputado general la decisión de las quejas producidas, sin que se admitiesen otros recursos en esta materia. Desde esta época data la mejora que tuvieron las cárceles de esta provincia, si bien hay que advertir que las de la mayor parte de los pueblos pequeños careció de las condiciones necesarias de luz, ventilación, desahogo, separación de presos, según la naturaleza de las cau-

sas, y otras que la humanidad y moralidad reclamau. Nosotros mismos hemos conocido en muchos pueblos los llamados calabozos, que eran aposentos contruidos á piso llano, húmedos, oscuros, estrechos y sin ventilación. Se encerraba en ellos á los presos por causas graves sin miramiento ni consideración alguna, no solo durante el sumario del proceso, sino aun después en el estado de plenario hasta que la sala de la Real Chancillería fallase la causa en consulta. Y lo que todavía era peor, durante las noches se acostumbraba asegurar los pies á los tales procesados, de modo que no pudiesen moverse, en un cepo ó madero, impidiéndoles con esta tortura dormir ó descansar. Crueldad era esta muy propia de los tiempos pasados y que apenas se hace creíble en el día en vista de las consideraciones que se guardan á los presos, sin perjuicio de atender á su seguridad.

Después que se establecieron en la provincia los cuatro juzgados de primera instancia, se hizo necesaria la ampliación y mejora de las respectivas cárceles de los mismos. Los pueblos donde residen, creyeron que no debía pesar exclusivamente sobre ellos la obligación de la construcción de obras de tanta consideración, y empezaron á pedir el auxilio de la provincia y de los demás del partido judicial. Así es que en 1842 la villa de Tolosa fué autorizada por la Diputación provincial para ejecutar las de sus cárceles y repartir su importe entre todos los pueblos del partido, como se verificó, habiéndose rematado en 15922 reales. La de Vergara introdujo igual solicitud el propio año, en cuya vista, la Diputación provincial le pagó la tercera parte de los 14514 reales á que ascendió el coste de sus reparaciones. A consecuencia de haberse trasladado en 1844 á la villa de Tolosa la capitalidad de la provincia, se vió la misma en el caso de pensar en aumentar y mejorar sus cárceles; para cuyo efecto los pueblos del partido judi-

cial se prestaron á contribuir con las respectivas cuotas proporcionales y la Diputación con veinte mil reales. Estas ofertas no llegaron, sin embargo, á realizarse, por no haberse ejecutado por entonces las obras proyectadas. También la villa de Azpeitia y ciudad de San Sebastián obtuvieron en las Juntas del año de 1848 análogos auxilios de la provincia para la mejora de sus cárceles, habiendo ascendido á 22300 reales lo que se pagó á la segunda. Azpeitia no hizo uso por entonces de semejante concesión, por haber pensado en construir nuevas cárceles; para cuyo efecto las Juntas del año de 1864 ofrecieron pagar la octava parte, siempre que su coste no excediese de los 166983 del presupuesto. Después del acuerdo antes indicado, la villa de Tolosa determinó construir una casa de nueva planta y en distinto paraje para cárceles, salas del juzgado de primera instancia, departamentos para abogados, escribanos y procuradores. A su consecuencia por nuevo acuerdo de la provincia en sus Juntas del año de 1850 se ofreció abonar á la villa la octava parte del coste presupuestado en 455658 reales, y los pueblos del partido judicial se comprometieron á contribuir con otra tanta cantidad, con cuyos auxilios se concluyeron las obras durante el año de 1853.

En vista de los ejemplares que se acaban de citar, puede considerarse como establecida cierta jurisprudencia moderna en la manera de costear las obras de nueva construcción de cárceles de los juzgados de partido. Tal es la de que la provincia abone una octava parte de la cantidad en que se regularen facultativamente, los pueblos del respectivo partido otra tanta cantidad, y el resto los que son cabezas de los mismos. Por lo demás, los alimentos de los presos ha sido constantemente de cargo exclusivo de la provincia, en el concepto de que la administración de justicia es de interés general de todos sus habitantes;

pero semejante obligación se hizo todavía más rigurosa en virtud de una Real provisión de 26 de Febrero de 1744, que la autorizó para pagarlos del arbitrio llamado donativo. No sucede así con el pago de los utensilios de los presos pobres que existan en las cárceles de los juzgados de primera instancia de los partidos. Esta atención, según acuerdos de las Juntas generales de los años de 1853, 1857 y 1863, debe ser de cuenta exclusiva de los pueblos cabezas de los mismos juzgados, por más que semejante determinación no sea muy justa en concepto del que esto escribe.

Se ha tratado por la provincia en diferentes ocasiones de establecer una casa de corrección, ya para mujeres solas, ya también indistintamente para estas y los hombres. Semejante pensamiento era aparentemente muy bueno, muy loable y muy digno de las consideraciones de la autoridad administrativa de la provincia; pero, hablando francamente, no se puede menos de decir que sobre ser irrealizable, hubiera sido su ejecución de peligrosas consecuencias. No estaba en efecto de manos de las Juntas, diputaciones, ayuntamientos, ni de los alcaldes de los pueblos, el hacer que tales ó cuales procesados fuesen destinados á semejante casa por el Tribunal que hubiese de sentenciarles. Restaba, por consiguiente, la potestad gubernativa del Corregidor y alcaldes para arrestar sin formación de causa á las personas que se creyesen de mal modo de vivir, y para tenerlos encerrados en igual forma en aquel establecimiento á título de corrección. Hé aquí autorizada la arbitrariedad de los funcionarios inferiores del orden civil, que como hombres no son perfectos, ni siempre desapasionados, justos, entendidos, bien apreciadores del que verdaderamente es de mal vivir, ó del que carece de semejante tacha. A los que son acreedores á una corrección, que al fin es un castigo, ¿por qué no proce-

sarlos en la forma legal, é imponerles en igual manera el que merezcan? Si este castigo era un trabajo penoso, el aislamiento, la disminución de alimentos, el encierro en locales incómodos, ú otro semejante, se comprenderá su gravedad para que se pudiese autorizar á unos meros alcaldes para su imposición gubernativa. Hoy día sobre esto, en virtud de lo que dispone la constitución del estado, así que las leyes generales protectoras de la libertad individual; ahora, por otra parte, que el Código penal señala los establecimientos penales y la manera en que los reos deben sufrir las condenas, no es dado pensar en casas de corrección gubernativa. Es negocio solamente de los tribunales encargados de la imposición de las penas así que de las autoridades del gobierno de quienes dependen los presidios. No será, sin embargo, fuera del caso el que se tenga una idea de los proyectos que la provincia ha concebido en esta parte, guiada indudablemente de su celo por la moralidad.

Hallo que por la primera vez se trató de este asunto en las Juntas generales celebradas el año de 1737. A propuesta del Corregidor se acordó entonces que ínterin se hiciese el hospital general de pobres, de cuya construcción se ocupaba la provincia, se dispusiese en el hospital de la villa de Tolosa una cuadra para la reclusión de las mujeres de mala conducta. Consta también que para este mismo objeto las Juntas celebradas el año de 1798 adoptaron un reglamento para la policía general de las mujeres á quienes las justicias de los pueblos condenasen á igual clase de encierro. Su artículo primero prescribía que las reos á quienes se impusiese semejante pena por amancebamiento ó prostitución escandalosa, fuesen destinadas á la Casa de Misericordia de San Sebastián: las alcahuetas, á la de Tolosa: las contrabandistas, á la de Mondragón: las ladronas ó rateras,

á la de Azpeitia: las indiciadas de homicidios, ó de otros delitos atroces, á la de Azcoitia. El segundo disponía que pronunciada la sentencia ó auto definitivo, y pasado este en autoridad de cosa juzgada, se procediese inmediatamente á su ejecución, haciendo la entrega de las reos en sus respectivos destinos. Para la imposición de la corrección de que se trata debfa por consiguiente, según estas disposiciones reglamentarias, formarse un proceso criminal, y recaer una sentencia judicial por la que se decretase semejante pena. Sin embargo, esto no era todavía suficiente garantía de la justicia del procedimiento, puesto que inmediatamente dictada por un alcalde cualquiera, se había de ejecutar sin consulta del tribunal superior. Los demás artículos tratan de la policía interior de los establecimientos respecto del cumplimiento de las correcciones, locales en que habían de estar las reos, etc. Querían también que la mujer que se escogiese para su vigilancia cuidase de enseñar á las reclusas la doctrina cristiana, inspirarlas sentimientos de religión, moralidad y honradez; que en caso necesario las reprendiese y amonestase con caritativo celo, y si esto no bastaba para su enmienda, las acortase la ración, las tuviese á pan y agua, ó las impusiese mayor castigo. Este proyecto no se puso en planta por entonces, y aunque se reprodujo el año de 1803, tuvo el mismo resultado ora por que fuese de suyo impracticable ora por razón de la guerra que sobrevino. Quedó pues completamente olvidado este negocio, considerado por los inteligentes como un buen deseo de sus autores y nada más.

A pesar de eso, vemos que se volvió á tomar en consideración por las Juntas generales celebradas en la villa de Segura el año de 1841, por las ventajas que reportaría el país de la ejecución de este pensamiento. Llevadas por lo tanto de semejante ilusión, cuya tendencia era sin duda muy plausible, acorda-

ron los artículos siguientes: 1.º Que para su establecimiento se solicitasen al gobierno de la Reina los conventos suprimidos necesarios. 2.º Que la Diputación reuniese noticias, ya fuese de los países extranjeros, ya de la capital del reino, ya de los demás puntos que le pareciesen, acerca de los métodos que se observaban para la plantificación y dirección de tales casas. 3.º Que se formasen con la debida separación los presupuestos de gastos del primer establecimiento, y de los de sostenimiento de ellas. 4.º Que todos estos trabajos, acompañados de un proyecto de decreto, se presentasen por la Diputación á las primeras Juntas generales. No llegó esto á verificarse á consecuencia de haberse suspendido el régimen foral mediante los sucesos políticos posteriores del mismo año. Así las cosas, la representación de la villa de Rentería llamó la atención de las Juntas generales de 1854 sobre la conveniencia de establecer una casa de Corrección; recordando al mismo tiempo la existencia de semejante pensamiento, que se hallaba consignado en varios registros de Juntas generales de la provincia. Estimando la idea, se encargó á la Diputación para que formando expediente, y reuniendo todos los antecedentes que hubiese en la materia, formulase un proyecto, y lo remitiese á las inmediatas Juntas. Pero tampoco se verificó esto por entonces, sea por no haber aquella corporación reunido los datos necesarios al efecto, sea por haberse reconocido los grandes gastos que semejante establecimiento acarrearía, sea por algunas otras dificultades.

Se volvió á tomar conocimiento de este proyecto de erección de casa de Corrección en las Juntas generales celebradas el año de 1858. El registro de sus actas nos hace ver, en efecto, que estas recomendaron á la Diputación viese si era posible hallar algún medio para llevar á ejecución tan ventajoso pensamiento

en el territorio de la provincia Tampoco se adelantó por entonces, y otro tanto sucedió respecto de igual acuerdo tomado en las Juntas celebradas el año de 1862, recomendando á la Diputación el asunto. Más reflexivas y prudentes las de 1864, aplazaron indefinidamente la resolución de este proyecto para época en que semejantes establecimientos penales puedan ser útiles, lo que equivale en buenas términos á una repulsa absoluta. La comisión de estas últimas Juntas se colocó juiciosamente en el verdadero terreno de la cuestión, que ante todo era el de la legalidad de su erección, y secundariamente el de su utilidad ó conveniencia. «Según las leyes actuales, dijo, no »puede encerrarse en casas de reclusión forzosa á »mujeres de mal vivir, sin sentencia judicial, y sería »muy difícil reducirlas por su propia voluntad, aun- »que tuviésemos un establecimiento de esta natura- »leza, que sería muy costoso para solo una provincia, »no concurriendo las otras. De todos modos, como »solo podría ser provechoso tal establecimiento »cuando las autoridades gubernativas estuviesen »autorizadas para proceder gubernativamente á la »reclusión de tales mujeres, ó los tribunales correc- »cionales, sobre cuyo arreglo se espera una nueva »ley, opina que debe aplazarse la resolución de este »negocio, etc.» Las Juntas adoptaron este descargo de la comisión.

Considerada la administración de justicia como de interés común, la provincia acostumbró desde lo antiguo pagar los alimentos de los presos pobres existentes en las cárceles de su territorio por causas pendientes ó determinadas en los juzgados del Corregidor y de los alcaldes. Su suministro se ha solido, sin embargo, hacer por los mismos pueblos en cuyas cárceles existían, salvo el presentar la correspondiente cuenta justificativa de ellos á la Diputación. La cuota abonable por la provincia en este concepto

quedó fijada en las Juntas de Fuenterrabía del año de 1748 al respecto de un real diario por cada estancia; cuota que con posterioridad se aumentó á real y medio, y por último en las de Elgóibar de 1856, en atención á la carestía de víveres, se extendió á sesenta maravedís. Como el motivo que impulsó aquel aumento no ha desaparecido por entonces, la misma cuota continúa abonándose en la actualidad. Antiguamente esta atención se satisfacía de la caja de la foguera, ó sea, por repartimiento vecinal por cocinas, única contribución conocida entonces. Después que se estableció el arbitrio llamado Donativo, á virtud de una Real cédula de 20 de Noviembre de 1729 se cubría con el tercio de su producto; pero por otra Real provisión de 26 de Febrero de 1744 la provincia fué autorizada para destinar á estos gastos, así como á otros, aun los restantes, dos tercios de aquel impuesto.

No se encuentra noticia respecto de quien satisfacía el suministro de los utensilios necesarios en las cárceles, tales como los gergones ó paja donde acostarse los presos, la luz que alumbrase sus moradas, el fuego con que hubiesen de cocer sus ranchos, etc. Este silencio hace presumir que semejantes gastos serían de cuenta de los mismos pueblos en cuyas cárceles permaneciesen aquellos, gastos cuyo abono en época moderna tomó sobre sí la provincia, aunque solamente en cuanto al importe de la paja. Cuando se establecieron los juzgados de primera instancia, como el número de presos se aumentó en las cárceles de ellos, por acuerdo de la Diputación provincial el importe de todos los utensilios se pagó por mitad entre la provincia y los pueblos cabezas de los partidos. Así las cosas, los apoderados de la villa de Tolosa llamaron la atención de las Juntas generales celebradas en la villa de Mondragón el año de 1853 sobre no ser justo que las cabezas de los

partidos judiciales contribuyesen exclusivamente con dicha mitad de gastos. Propusieron por lo tanto que ó bien se distribuyese esta cuota entre todos los pueblos del partido proporcionalmente, ó bien quedase su abono de cargo de la provincia. Las Juntas, sin embargo, lejos de acceder á esta proposición, declararon que así como la provincia abonaba el importe de los alimentos de los presos, los pueblos cabezas de partido debían satisfacer el gasto del utensilio de ellos. Renovóse este asunto en las Juntas celebradas en la villa de Zarauz el año de 1863 á consecuencia de una comunicación pasada á la Diputación por el Ayuntamiento de San Sebastián. Solicitaba esta corporación que se diese á conocer á los pueblos de aquel partido la obligación en que se hallaban de concurrir en una proporción equitativa á los gastos del personal y material de las cárceles de aquel juzgado de primera instancia. Como la gran mayoría de aquellas estaba interesada en que semejante atención pesase exclusivamente sobre las cabezas de partido, por resultado de dicha petición quedó ratificado el acuerdo tomado en las de Mondragón.

SECCIÓN II

De las costas procesales.

Otro de los suplementos que hacía la provincia en los tiempos anteriores en obsequio á la administración de la justicia era el de las costas procesales en las causas criminales seguidas, ya de oficio, ya á instancia fiscal, en los juzgados de los alcaldes. Su satisfacción con el producto del donativo fué autorizada por la Real provisión de 26 de Febrero de 1744, de que se tiene hablado anteriormente, solicitada en vista de la morosidad que se advertía en algunos al-

caldes en la persecución de los delitos por falta de medios para pagar los honorarios del asesor, derechos del escribano, etc. El estado de la tesorería general de la provincia no permitía, sin embargo, corresponder con regularidad á esta importante atención del servicio público, según se deduce de un descargo dado en las Juntas de 1790. Reconocióse, sí, en estas la necesidad de su pago: se propusieron también en las mismas algunos medios para minorar las costas, tanto del juicio, como los gastos de la conducción de los reos á sus destinos: se trató igualmente de imponer un arbitrio especial sobre el vino con aplicación á este objeto. No habiéndose aprobado por la mayoría este último medio, el mal quedó en el estado anterior, ó sea, la impunidad de muchos delitos por falta de medios con que satisfacer las costas y gastos de las causas. Por eso las Juntas de Azcoitia de 1800, al paso de reconocer la obligación de la provincia de corresponder á esta atención, acordaron solicitar la Real facultad para exigir un maravedí de sisa en cada azumbre de vino que se consumiese en su territorio. Sin embargo, no se halla que la hubiese alcanzado, por lo que continuaron abonándose de la tesorería general en cuanto su penuria habitual lo permitía.

En vista de las muchas reclamaciones que hacían los pueblos sobre el pago de dichas costas, las Juntas celebradas en la villa de Vergara el año de 1803 trataron de determinar los casos en que la provincia debía hacer su abono. «En todos tiempos, dijeron los asesores en un informe, ha considerado la provincia este asunto por de tanta gravedad é importancia, como que puede contribuir mucho á la quietud, tranquilidad y seguridad de las haciendas y vidas de sus naturales, etc.» Conforme á esta opinión, se acordó que la provincia pagase las costas procesales en todos aquellos casos en que para la formación de

las causas hubiese delito público, más ó menos grave, cuya ejecución estuviere comprobada en el proceso, ó cuando no habiendo semejante justificación, hubiese una prueba semiplena ó indicios vehementísimos del delito. También era requisito indispensable para este abono el que el juez de la causa diese parte del procedimiento á la provincia, la cual en su caso acostumbró valerse de persona de su confianza para hacer la tasación. Se acordó además en dichas Juntas activar los recursos pendientes sobre la facultad de imponer la sisa del maravedí en cada azumbre de vino; añadiendo que entre tanto se valiese la Diputación del primer repartimiento de la Compañía de Filipinas, cuyo pago ya estaba anunciado. Pero la imposición de aquella sisa no se consiguió, ni parece haberse realizado el dividendo de la citada Compañía, motivo por el que esta atención se conservó en descubierto. Del registro de las Juntas celebradas en la villa de Hernani el año de 1807 resulta, en efecto, que la deuda que tenía la provincia á favor de los pueblos por costas procesales ascendía á la considerable suma de 244908 reales. En su vista, se acordó pagar desde luego su mitad con los fondos de las dos cajas del Donativo, y que el resto se realizase el año inmediato, arbitrándose para el efecto por la primera Junta los medios que la pareciesen más convenientes.

Los sucesos político-militares que ocurrieron en la nación después de tomado el precedente acuerdo, impidieron el que se llevase á debida ejecución, y el que la provincia se ocupase de estos asuntos hasta que se hizo la paz. Después de este acontecimiento los caminos de la provincia se llenaron de ladrones y asesinos, para cuya persecución y exterminio las Juntas celebradas en la villa de Guetaria el año de 1815 se vieron precisadas á adoptar algunas disposiciones que estaban á su alcance. Una de ellas fué la

de imponer una contribución directa anual por familias, cuyo producto se destinase al pago de los gastos de este ramo, contribución para cuya exacción se solicitó la competente Real autorización, porque no se pudo obtener, á pesar de las gestiones hechas al efecto. Por esta razón las Juntas de Azpeitia de 1818, vista la urgencia de reunir los fondos necesarios para tan importante objeto, decretaron repartir desde luego treinta reales por cada fuego en todos los pueblos de la provincia, como se verificó.

No obstante todas estas medidas, se ve que se debían cantidades considerables por las costas de las causas criminales fenecidas. Así lo declararon las Juntas generales celebradas en la villa de Azcoitia, el año de 1824, como también que este mismo atraso contribuía en mucha parte á que no se alterase el curso de ellas. Era ciertamente un resultado muy natural, porque se necesita no poca virtud en los hombres que tienen que vivir de su oficio, para trabajar con celo, cuando saben que no se han de remunerar sus servicios. Reconociéndolo así aquel Congreso, queriendo adoptar medios efectivos con que poder atender en lo posible á la administración de justicia, señalaron 40000 reales para alimentos de presos, su traslación y pago de curiales, en falta de penas de Cámara y de sobrantes de propios y arbitrios de los pueblos. Pero por más plausible que fuese semejante determinación, no producía al fin sino efectos transitorios ó del momento. Consiguientemente, como el estado de la Tesorería general de la provincia continuó en aquella muy agoviado, sin contar con fondos bastantes para atender á los objetos precisos del servicio público, el pago de las costas procesales apenas tuvo lugar sino en algunas causas notables por su gravedad ó alarma. De todos modos, cesó su abono por parte de la provincia desde el establecimiento de los cuatro juzgados de primera ins-

taucia verificado el año de 1841. Ya se sabe por lo demás que en el día, según el Código penal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley á los autores de todo delito ó falta, y á sus cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables. Tampoco se ignora que bajo este nombre solamente se comprenden los derechos é indemnizaciones que consistan en cantidades fijas é inalterables, anticipadamente determinadas por las leyes, decretos ó reales órdenes. Su indemnización por los reos con sus bienes procede, pues, todas las causas; pero en falta de ellos, no tiene lugar la prisión correccional, ni existe medio alguno de satisfacerlas á los que las devenguen.

SECCIÓN III.

De la moralidad antigua comparada con la presente.

Uno de los fines principales de la administración de la justicia es sin duda el de mejorar la moral social, evitando, reprimiendo y castigando los delitos, las malas acciones y los vicios de los particulares. Por esta razón, he creído que al tratarse de aquella materia por conclusión de la misma, no estaría de más comparar, aunque sea de manera rápida, el estado de la moralidad antigua de los guipuzcoanos con el que tiene en la actualidad. Esto conducirá, á mi ver, poderosamente á deducir las consecuencias de si debemos estar satisfechos de lo que existe hoy día, ó si, al contrario, hay motivos fundados para envidiar lo que ya pasó. A la verdad, con frecuencia vemos á ciertas personas lamentarse amargamente de la irreligión, de la corrupción y liviandades del sexo femenino, de la ambición, discordia y dolo de las gentes, en una palabra, de la perversión general de las costumbres de la presente generación. No es

mi ánimo defender el estado social y moral de esta, por, que ciertamente no carece de defectos, ni es posible que lo fuera así. ¿Pero acaso la sociedad antigua estuvo exenta de ellos? ¿Los de esta ó los de aquella deben considerarse como más graves, como más escandalosos, y los que merecen una censura más amarga? Hé aquí el verdadero modo de plantear la cuestión, y el punto que el hombre imparcial debe examinar.

Las personas á quienes me refiero, al expresarse de la manera indicada, manifiestan una completa ignorancia de lo que fué la vieja sociedad. Suponen, en efecto, que las costumbres de esta fueron enteramente puras, honestas, inocentes y patriarcales, y como á tales quieren honrarlas con todas las frases discurrebles de respeto, veneración y de cierta manera de culto, lo cual es un gran error. Ellos tachan y censuran, por otra, del modo más cruel el modo de ser de la generación viviente en todo y por todo, sin reconocer sus ventajas positivas, y antes bien exagerando los defectos de que pueda adolocer. Pero los que tal dicen y hacen no se hacen cargo de que injurian gravemente á sus semejantes y á sus propios deudos, y no es más que censurar por censurar, venga ó no al caso, como si ellos mismos fuesen impecables. Reduciré por lo tanto á los dos puntos indicados la materia de la presente sección: esto es, al examen de lo que era la sociedad antigua, y de lo que es la presente.

Que el estado moral general de la antigua España tenía muy poco de envidiable, y mucho de reprehensible, nadie que haya saludado la historia nacional puede negarlo. Sin engolfarnos en ella, hallaremos como cosa corriente el robo, el asesinato, la vagancia, el dolo, la falsedad, la rebelión, el soborno, la traición, el adulterio, la deshonestidad, el desafío, la enemistad entre familias, el incendio, etc. Los mo-

monarcas mismos no estaban exentos de excesos escandalosos, y para convencerse de ello, basta fijarla consideración en el reinado de D. Pedro, por sobrenombre el Cruel. No es para nadie secreto las hijas que tuvo fuera del matrimonio: menos, que á los dos días de casado con D.^a Blanca de Borbón la abandonó, para reunirse con su querida D.^a María de Padilla. Tampoco se ignora su nuevo casamiento con D.^a Juana de Castro en vida de aquella, para poseerla por sola una noche, aunque dos obispos tuvieron la debilidad de declarar nulo el celebrado con la misma D.^a Blanca. ¿Quién no sabe, por otra parte, las horrorosas muertes que dió á esta su propia esposa, á la Reina de Aragón D.^a Leonor, á D.^a Isabel de Lara, nuera de esta, á sus propios hermanos D. Fadrique, D. Juan y D. Pedro, á su primo D. Juan, infante de Aragón, y á otras personas de estirpe real? ¿Es posible siquiera enumerar la multitud de dignatarios del Estado, de prelados de la iglesia, de ilustres caballeros y otros personajes que inmoló á sus iras? ¿Se creerá que esto tuviese lugar sin formación de causa, solamente en virtud de mandato verbal y á golpes de maza en presencia del mismo, tirando algunas veces sus cadáveres desde los balcones á las calles? Horroriza nuestros corazones su solo recuerdo. Ni los encomiadores de las costumbres antiguas quieren cohonestar estos espectáculos de ferocidad sanguinaria, suponiendo como una escepción el reinado de aquel príncipe. A la verdad, si no es fácil hallar un monstruo semejante en la humanidad, cuyo nombre ha sido transmitido á la posteridad con el dictado de Cruel, no deja de ser menos cierto que algunos monarcas predecesores y sucesores adolecieron de no pocos defectos de aquel, aunque no en tanto grado. Esto presta motivo á deducir que el estado mismo social antiguo contribuía poderosamente á la ejecución de semejantes escándalos. Pues bien; cuando los príncipes eran

tan poco morigerados, no es difícil calcular lo que sería de las personas particulares y el común de las gentes.

Descendiendo de estas consideraciones generales á examinar en particular el estado moral y social de Guipúzcoa en tiempos anteriores, no lo hallaremos en verdad muy satisfactorio. Que los bandos Oñacino y Gamboino destrozaban cruelmente el país con sus enemistades, desafíos, guerras, robos, muertes, incendios de casas, montes arbolados, etc., queda expresado en otra parte de esta obra con referencia á diferentes documentos auténticos. Basta recordar lo que dice uno de estos, á saber, que la guerra que se hacían los bandos era de fuego y de sangre, más cruel que si fuera de cristianos á moros: que se incendiaban pueblos, moría mucha gente á traición y mala ley, los robos eran infinitos, etc. Por otra parte, la justicia no era ejecutada, los mandatos del rey no se obedecían, ni aun se atrevían á publicar: en fin, la fuerza brutal y una espantosa anarquía dominaban impunemente por todas partes. Este exceso de mal es lo que precisamente produjo la confederación de los hombres pacíficos con título de hermandad. Se quiso por este medio librarse de la sahyugación de los turbulentos parientes mayores, promovedores de aquel desorden, de sus secuaces y adheridos; y, en efecto, se consiguió reprimir sus violencias, estableciendo leyes fuertes, hasta el extremo de privarles de la obtención de toda clase de cargos provinciales y municipales. No satisfecha todavía la hermandad con estas medidas respecto de los parientes mayores, derribó sus casas torres, á cuyo abrigo cometían aquellos excesos, sin permitirles su reedificación.

Iguales enemistades y guerras que entre particulares ocurrían en tiempos anteriores entre dos ó más pueblos por motivos muchas veces frívolos de interés local, de rivalidad y deseo de preponderancia. Así es

que San Sebastián y Tolosa tuvieron grandes reyertas sobre la posesión de las entonces colaciones de Andoáin, Aduna y Alquiza, reyertas que se arreglaron el año de 1479 por medio de una escritura de concordia. No fueron menos graves las desavenencias que Rentería y Oyarzun tuvieron entre sí en el mismo siglo hasta la separación de este último pueblo de la dependencia del primero. Bien ruidosas fueron así bien las discordias que los mismos dos pueblos tuvieron con el de San Sebastián sobre la jurisdicción y uso del puerto de Pasajes, con el escándalo de peleas, robos, incendios y devastación de los respectivos territorios. Larga y permanente fué del mismo modo la enemistad que mantuvieron entre sí los habitantes de Fuenterrabía é Irún, suscitada por diferentes motivos, y principalmente por la aspiración constante de esta última población de sustraerse de la dependencia de aquella. Oñate y el valle de Léniz tuvieron así bien algunas discusiones sobre términos, pastos, etc., y, á su consecuencia, sus habitantes se arman, levantan y pelean entre sí. En otra ocasión el valle de Oyarzun desconoce la autoridad de la hermandad de la provincia, la desobedece abiertamente, hace resistencia á sus mandatos, mata á los enviados por ella á cumplimentarlos, y aquella se ve obligada á levantarse armada para sujetar semejante rebelión. Fuenterrabía imita también otras veces la conducta desobediente de Oyarzun: desobedece las órdenes de la provincia: resiste por medio de la fuerza al abrigo de sus murallas á los comisionados de la misma, y los clérigos mismos, armados de trabucos y puñales, cometen increíbles desacatos en sus personas. Triste pintura de la moralidad guipuzcoana ofrece, pues, la rápida relación que se acaba de hacer de los hechos precedentes, que forman un conjunto poco satisfactorio. Si no hubiera otra prueba de esta verdad, la justificarían plenamente las duras penas determinadas

en las ordenanzas de la hermandad á los diferentes delitos, muchos de ellos hoy día desconocidos, comprendidos en los cuadernos de las mismas.

Hállase que en las Juntas generales celebradas el año de 1524 en la entonces villa de San Sebastián se decretó comprar un verdugo, para que ejecutase la justicia en la provincia. Repitióse igual acuerdo en las de los años de 1534 y siguientes, comisionando á Juan Sáenz de Aramburu para comprar en Sevilla un negro, que sirviese este oficio, como sin duda se verificó. La existencia permanente de semejante funcionario en una provincia tan reducida ¿qué prueba, sino que se cometían muchos y muy graves delitos, esto es, una grande desmoralización? Continuó sin duda esta sin ninguna mejoría, puesto que vemos que en las Juntas de Villafranca de 1646 el Corregidor hizo presente la necesidad que había de un verdugo, para cuya subsistencia ofreció contribuir con cincuenta ducados cada año. En vista de esta proposición, las mismas Juntas acordaron que se proporcionase dicho funcionario, á quien señalaron la dotación de siete reales diarios, con la obligación de que asistiese á las justicias ordinarias de los pueblos que le llamasen, donde se le diese la comida y doce reales diarios. La necesidad de la existencia permanente del verdugo no desapareció seguramente durante el siglo XVII, porque las costumbres no se reformaron. Así es que se ve que todavía en las Juntas celebradas en 1700 se determinó uno de residencia fija con el competente salario; aunque se le despidió el año inmediato, decretando que en los casos que se ofreciesen por causas seguidas en curso de hermandad se trajese á costa de la provincia. Sus llamamientos no por eso dejaron de ser en lo sucesivo harto frecuentes; tanto, que llegó el caso de que el año de 1713 hubo que valerse de su medio para dar tormento en la cárcel de Azcoitia á ocho presos.

Yase ha visto por lo que queda expuesto cuán poco moral era la conducta de los parientes mayores, que eran los que constituían la clase más elevada de la sociedad. Sigamos examinándola en las demás categorías sociales, para calcular lo que sería el estado común ó menor de la provincia: á cuyo efecto nada es más propio que el tomar en consideración las leyes dictadas en la materia, verdadero reflejo de las costumbres de la respectiva época. El soborno debía ser un delito bastante frecuente en los funcionarios de la provincia, cuando el capítulo 64 de las Ordenanzas del año de 1457, con el conocimiento de su existencia, trató de refrenarlo y castigarlo. «Porque »por otra se ve, dice, que los oficiales, así alcaldes »como procuradores, de la dicha provincia se corrompen con dádivas que les son dadas ó prometidas; »por ende, por evitar el escándalo é daño que podría »recrecer entre los de la dicha provincia, porque la »justicia por esta causa non reciba punto de mengua »por esta razón: por refrenar lo tal, cualquier alcalde »ó alcaldes de la dicha hermandad que ficieren alguna sobornación, ó tomaren algún dinero, ó cualquier otra dádiva, por evitar ó menguar la ejecución »de la justicia, etc.» La ley inmediata á la precedente dice igualmente lo siguiente: «Cualquier ó »cualesquier procurador ó procuradores que vinieren »á las Juntas generales ó llamamientos de la dicha »provincia ó lugares singulares de ella, si en los tales »Juntas ó llamamientos el tal procurador ó procuradores tomaren alguna dádiva de dinero ó de otra »cosa cualquier por causa de sobornación, tomando »cargos de los negocios ajenos ó extraños, salvo de »su lugar, etc.» Otro capítulo de las mismas Ordenanzas habla en igual sentido respecto de los abogados que asistían á las Juntas en calidad de asesores. Una Ordenanza de las del año de 1480 prohíbe y castiga así bien los sobornos que hiciesen ó intenta-

sen hacer los abogados con los procuradores de Juntas, pervirtiendo ó estorbando la administración de la justicia por medio de dádivas de dinero ú otra cualquiera cosa, sea directa ó indirectamente. Semejantes leyes penales hubieran sido en verdad del todo excusadas, á no experimentarse con alguna frecuencia los males á cuyo remedio se dirigían: luego hay lugar á concluir que el soborno y la corrupción eran vicios que aquejaban á la antigua sociedad guipuzcoana. El juramento que debía preceder á la instalación de aquellos cargos de su recto y fiel desempeño no siempre era bastante freno para contenerlos.

Frecuentes debían ser también los excesos de mesa con motivo de bodas, bautizos, mortuorios, entráticas y profesiones de monjas y frailes, celebración de misas nuevas y otros actos semejantes. Esta verdad no necesita tampoco otra prueba que la existencia de la multitud de leyes, ordenanzas, edictos de los obispos y acuerdos de Juntas, que en diferentes tiempos se tomaron para contener tanto lujo y gasto inútil, ruina de las familias de mediano pasar. Lo extraño es que una gran parte del clero de la provincia, lejos de concurrir á la extirpación ó minoración de estas vanidades, hubiese sido una rémora á los plausibles intentos de las autoridades civil y eclesiástica, según se vió en otro lugar de esta obra. Pero, aun fuera de aquellas ocasiones de fiesta, la costumbre de las merendolas estaba generalizada en todo el país, y los no artesanos empleaban mucha parte del día en jugar de diversas maneras, ya sea en las calles ó plazas públicas. Apenas había paseos regulares aun en los pueblos de alguna consideración, y menos existía el hábito de pasear los particulares. Los estudios de noche estaban reservados á algún cura que otro, y á algún particular, á quienes por su retiro en casa se les conceptuaba de raros,

pues la generalidad de personas de algunos medios asistía á tertulias de botella, sin cuyo auxilio no se comprendía la existencia de semejantes reuniones. No exagero este tan poco recomendable cuadro de las costumbres antiguas: nosotros mismos, que ya somos de alguna edad, las hemos alcanzado, aunque no en tanto grado.

La moralidad de las generaciones pasadas no parece tampoco fuese muy ejemplar en punto á la honestidad ó continencia de los sexos. Ello es que en un expediente de empadronamiento de forasteros hecho en la villa de Azcoitia el año de 1567 se dice que existían en ella veinte y siete hijos de mujeres solteras; lo cual autoriza á pensar que en los demás pueblos ocurriría proporcionalmente lo mismo, por deber considerarse por idénticas las costumbres é inclinaciones. Quien haya tenido motivo de leer algunostestamentos antiguos, ha podido ver además que en muchos de ellos declaran los testadores sin el menor rebozo tener tantos ó cuantos hijos naturales, señalándoles sus porciones hereditarias á una con los legítimos.

Los tantos públicos que hacían las mancebas en los eneros de sus queridos, y la ostentación con que se celebraban los bautizos de los hijos ilegítimos, según queda dicho en el libro 2.º, ¿no son también una prueba de que la incontinencia era un hecho común y nada recatado? El clero mismo, cuya honestidad actual es ejemplar, participó en otro tiempo de esta fragilidad de la naturaleza humana. De una Real cédula de 10 de Marzo de 1484 se deduce, en efecto, que la provincia había representado á los Reyes Católicos que en ella «muchos elérigos en »deservicio de Dios, é non guardando la honestidad »que deben, tienen públicamente mancebas, é que »ellos y ellas facen muy deshonesta vida, etc.» Otra Real cédula de 10 de Agosto de 1490 nos descubre

que los clérigos de la provincia se quejaron á los mismos monarcas, exponiendo que las justicias ordinarias, «por fatigar y deshonrarlos, entraban en sus casas y las cataban, y estaban en asechanzas, diciendo que tenían mancebas públicas, no siendo así, y viviendo ellos casta y honestamente como debían.»

Vemos también que en las Juntas de Segura de 1536 se trató de los insultos que cometían ciertos clérigos de Villafranca. No solamente sacaron una monja del convento en que se hallaba, sino que hicieron que robase la casa de su padre; hechos para cuyo castigo dispusieron que el asesor ordenase lo conveniente en nombre y á voz de la provincia. El registro de las celebradas en la villa de Vergara el año de 1540 revela otro hecho no menos escandaloso. Se lee en él que el Corregidor había expuesto que el día de Viernes Santo último había ido un teniente de merino por comisión del mismo á Réjil á hacer pesquisas contra mancebas de clérigos, que vivían en gran escándalo. Añadió que había hallado culpante á una moza á quien prendió, y la trafa presa á la cárcel; pero que habiéndole salido en el camino ciertos clérigos del mismo pueblo, le dieron de cuchilladas y le quitaron dicha moza, etc. Que en 1653 había en la provincia hasta treinta y ocho hijos de clérigo, consta igualmente de una Real carta ejecutoria ganada por la provincia el mismo año contra ellos en pleito seguido en la Chancillería de Valladolid, por la cual se les declaró incapaces de obtener los cargos públicos á causa de dicha impureza de nacimiento. Cuando los clérigos incurriesen en semejantes debilidades, ¿qué sería de las demás clases de la sociedad? Lo dejo á la consideración del lector.

Después de haber examinado el estado antiguo de la moralidad, detengamos un poco la consideración sobre el que tiene en la época presente. Es un hecho notorio á todos la gran seguridad de los caminos

para el viajero. Apenas se oye, en efecto, que se cometa en ellos el menor robo, ni de día, ni de noche, y si alguna vez ocurre esto, se considera como una novedad y motivo de alarma. No sucedía así en tiempos anteriores en que esta clase de delitos, aun en cuadrilla, eran tan frecuentes, que apenas se podía pasar en ciertos puntos sin ser robado; y así es que los altos de Descarga, Arlabán, San Adrián, Berranoa y Mauria, así que las ventas de Rentería, Elosua, Marulanda y Zárate, eran memorables en este sentido. Cierto es que en lo antiguo no había una fuerza armada destinada especialmente á la persecución de los malhechores, como sucede hoy día con la Guardia civil y miqueletes. Si es cierto que semejante actitud de las autoridades, unida al celo de los jueces de primera instancia, debe contribuir mucho á imponer á aquellos, tampoco se puede desconocer que si la desmoralización estuviese tan generalizada, como algunos suponen, no dejarían de eludirse cuantas medidas preventivas se empleasen. Y sino, ¿no se ha visto que partidas de tropa ocupadas constantemente en aquel servicio apenas han conseguido en otros tiempos resultado alguno favorable? La permanencia del verdugo tampoco les imponía: el tormento no les espantaba: el procedimiento rápido por curso de hermandad no era bastante eficaz: en fin, las durísimas penas señaladas en la antigua legislación no servían para contener tanto atroz delito. ¿Qué prueba todo esto sino la relajación de costumbres de la misma sociedad? A la verdad, no debía contribuir poco á ella la falta de medios de subsistir, cuando no había fábricas, y apenas se conocía otra industria que la de las ferrerías; falta á la que era consiguiente la ociosidad y la vagancia, origen reconocido de muchos vicios y delitos. En la época moderna la clase menesterosa ha tenido más medios de subsistencia, ocupándose en las obras de carreteras, camino de hierro,

edificios públicos y de particulares, en las de puertos, puentes, etc. Fuera de estas obras de primera construcción, los trabajos constantes de las muchas fábricas construídas en el segundo tercio del presente siglo prestan modo de vivir honestamente á multitud de familias.

Claro es por lo dicho que el bienestar material de la generalidad de los habitantes de esta provincia se ha aumentado notablemente. No es menos cierto por otra parte que la cultura actual aventaja á la de los tiempos pasados, y las costumbres son más suaves; y considerando todo esto, no se ofrece razón alguna para suponer ahora la existencia de una criminalidad mayor que antes, sino todo lo contrario. De contado, aquellos grandes crímenes y hechos escandalosos que tan frecuentes eran en un tiempo, son muy raros en el día. Hay que confesar, en efecto, que los sobornos de los representantes en Juntas desaparecieron enteramente; y no es menos cierto que la condición de las clases principales de la sociedad ha mejorado considerablemente en sus costumbres. Tampoco se puede negar que los industriales y artesanos se contienen en general de las comilonas, borracheras y otros excesos; que, en fin, la vagancia se ha reducido notablemente, y puede considerarse limitada á los gitanos. Si, por lo demás, se advierte cierta liviandad en alguna parte de la juventud, este es un mal que siempre ha existido y existirá aún en adelante, con más ó menos desenvoltura. Lo atribuyo principalmente al lujo, que se ha generalizado en las clases algún tanto acomodadas de la sociedad, y que las que son menos quisieran imitar en lo posible; á cuyo efecto se oponen sus moderadas ganancias, al mismo tiempo que han duplicado de precio todos los artículos de comestibles y demás. Pero, como quiera que sea de este punto, creo que el estado moral actual, con todos los defectos que pueda tener, es mu-

cho mejor que el antiguo. ¡No plazca á Dios se restauren entre nosotros la inseguridad general de las personas y propiedades, las costumbres bárbaras, la tiranía civil y religiosa y el misticismo, que fueron el patrimonio de los siglos pasados! Dígnese antes bien concedernos, así que á nuestros descendientes, un porvenir dichoso con una moralidad verdadera, no ficticia ni hipócrita, al paso que reinen la libertad individual y el orden público: que, en fin, la justicia prevalezca en todas las determinaciones, para dar á cada uno su merecido, así en el orden civil como en el criminal. *Suum cuique.*

FIN DEL TOMO QUINTO.

Índice

*de los libros, capítulos y secciones contenidos en este
quinto tomo de la Historia de Guipúzcoa.*

Pág.

LIBRO VIII.

De las cosas de guerra y marina.

CAPITULO I.

Del estado militar en Guipúzcoa.

SECCIÓN I.—Del Capitán general.	7
SECCIÓN II.—De los tránsitos de tropas, bagajes y suministros.	17
SECCIÓN III.—Del alojamiento y refacción.	24

CAPITULO II.

De los castillos y plazas fuertes.

SECCIÓN I.—De los antiguos castillos.	37
SECCIÓN II.—De la plaza de San Sebastián.	45
SECCIÓN III.—De la plaza de Fuenterrabía.	56
SECCIÓN IV.—De las plazas de Guetaria y Motrico.	64

CAPITULO III.

De las levantadas de gentes.

SECCIÓN I.—Del servicio militar en general.	74
SECCIÓN II.—De armamento foral.	82

CAPITULO IV.

De los asuntos de mar.

SECCIÓN I.—De las autoridades marítimas.	98
SECCIÓN II.—De la navegación y pesca.	103

SECCIÓN III.—De las arribadas, varadas y naufragios.	112
SECCIÓN IV.—Del uso de los puertos.	120

CAPITULO V.

De los servicios marítimos.

SECCIÓN I.—De las levas de marinos.	126
SECCIÓN II.—Del corso y presas.	140
SECCIÓN III.—De los servicios de buques.	153

CAPITULO VI.

De los generales de tierra y mar.

SECCIÓN I.—De los generales de tierra.	164
SECCIÓN II.—De los generales de mar.	176

LIBRO IX.

Del ramo legislativo y judicial.

CAPITULO I.

Del derecho constituido.

SECCIÓN I.—Del derecho en general.	185
SECCIÓN II.—Del derecho civil.	196
SECCIÓN III.—Del derecho criminal.	208

CAPITULO II.

De los cuadernos de ordenanzas.

SECCIÓN I.—De los cuadernos de ordenanzas.	220
SECCIÓN II.—De la compilación de los fueros, ordenanzas y leyes.	242

CAPITULO III.

De la Justicia en la via ordinaria.

SECCIÓN I.—De los merinos y alcaldes mayores. . .	254
SECCIÓN II.—Del Corregidor como juez.	263
SECCIÓN III.—De la judicatura de los Alcaldes. . .	284
SECCIÓN IV.—De los Juzgados de partido.	293

CAPITULO IV.

De la jurisdicción de la hermandad.

SECCIÓN I.—Idea general de esta jurisdicción. . .	301
SECCIÓN II.—De la autoridad judicial de las Juntas. .	308
SECCIÓN III.—De los alcaldes de la hermandad. . .	316

CAPITULO V.

De la jurisdicción del resguardo.

SECCIÓN I.—De la alcaldia de Sacas.	326
SECCIÓN II.—Del juzgado del contrabando.	337
SECCIÓN III.—De la autoridad de las justicias ordinarias en el resguardo.	346

CAPITULO VI.

De otras cosas del ramo judicial.

SECCIÓN I.—De las cárceles y casas de corrección. .	351
SECCIÓN II.—De las costas procesales.	361
SECCIÓN III.—De la moralidad antigua comparada con la presente.	365